

TOMO VIII

La Iglesia como lugar de contienda en los mundos colonial y nacional

Capítulo I

Introducción. Los Conflictos entre el Clero y el Estado

Producida la transición de la dominación dinástica Habsburga a la Borbónica con la Paz de Utrecht (1713), y reforzado el estado colonial, a partir de las estrategias recolonizadoras implementadas por las denominadas Reformas Borbónicas, entre las cuales descolló la Expulsión de la Compañía de Jesús, se puede concebir un mayor desarrollo de las políticas regalistas y de las tesis ascendentes del gobierno y del derecho, en perjuicio de la independencia relativa del aparato eclesiástico y de las tesis descendentes.¹ La mayor conflictividad eclesiástica se habría manifestado en los pleitos entre el clero y el Estado, en las desigualdades inherentes a la concesión de Patronatos y Capellanías; y en la animosidad de los hijos no clérigos, de los clérigos de ordenes menores, y de los descendientes clérigos de menor "calidad", antigüedad y proximidad con los fundadores de capellanías, y con el alto clero de origen peninsular. La conducta observada por la corona en el ejercicio que hacía del Patronato Real, en especial la designación de los Obispos; y la conducta de los Examinadores Sinodales,² y los Comisarios del Santo Oficio en los juicios capellánicos,³ serían en gran medida responsables de dichos conflictos.

Para estudiar el grado de inestabilidad y conflictividad no clasista o pre-moderna vigente en la sociedad colonial indagaremos entonces el rol que le cupo a la lucha del comercio y los Tribunales del Consulado con la Iglesia, manifestada en los conflictos producidos por el fuero eclesiástico, que se expresaban en el ejercicio de los actos de administración o jurisdicción,⁴ y en los actos de honor o representación;⁵ y a las contradicciones entre el fuero eclesiástico y el Patronato Real.

En el sentido apuntado por las tesis arriba expuestas, cabe entonces preguntarse si la velocidad de circulación de la elite estaba o no relacionada con la intensidad de los privilegios forales y las fracturas corporativas; y si los conflictos en el seno de las instituciones mercantiles (Tribunales y Diputaciones del Real Consulado), y entre estas últimas y la Iglesia, se hallaban o no relacionados con los procesos de estamentalización y movilidad de la sociedad colonial. Asimismo, en este tomo nos preguntamos si estas luchas se acrecentaron durante las bonanzas comerciales, por cuanto fué durante las mismas que la metrópoli arreció con reformas destinadas a secularizar o desacralizar y reducir el margen de autonomía de los patriciados locales.

A los efectos de estudiar todos estos casos, hemos recogido docenas de textos de época hallados en litigios judiciales del siglo XVIII, depositados en el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires, en el Archivo Histórico de Córdoba (AHC), y en el Archivo Municipal de Córdoba (AMC).

En el capítulo 2, analizo las fracturas internas del campo eclesiástico en el Buenos Aires del siglo XVII. En el capítulo 3, estudiamos el nepotismo y el etno-centrismo clerical como instrumentos congeladores de la movilidad eclesial, en especial la endogamia en la Iglesia del Río de la Plata (1760-1810). Las fracturas familiares en la sociedad colonial tales como la primogenitura y la varonía en las pautas hereditarias del régimen capellánico Rioplatense las analizamos en el capítulo 4. Estas pautas hereditarias se aplicaban en los litigios por el derecho de retracto; la herencia de las sucesiones intestadas; y la sucesión de los patronatos capellánicos. La importancia de quien había de ser el Patrono de las capellanías obedecía a su rol crítico en el control de los bienes pertenecientes a las mismas; y en la elección de quién habría resultado el beneficiario de la capellanía.⁶ Las estrictas cláusulas acerca de la sucesión de los patronatos de las capellanías legas, que privilegiaban a unas ramas familiares en detrimento de otras; a los hijos mayores en detrimento de los menores; a los hijos clérigos en detrimento de los hijos militares o letrados no clérigos; a los clérigos de ordenes mayores en detrimento de los clérigos de ordenes menores; a los clérigos con congrua o propietarios en detrimento de los clérigos interinos; a los descendientes clérigos de mayor "calidad", antigüedad y proximidad con el fundador, en perjuicio de los descendientes clérigos de menor "calidad", antigüedad y proximidad; y a los varones en detrimento de las mujeres, contribuyeron a fortalecer un régimen político y social nepótico, racista, patrimonialista, patriarcal, clerical, y estamental o corporativo.

En el capítulo 5, analizamos los conflictos entre el clero y el estado en el mundo colonial, en especial las contradicciones entre el fuero eclesiástico y el Patronato Real. En el capítulo 6, estudiamos el reclutamiento y promoción en la carrera eclesiástica en el Río de la Plata colonial (Siglo XVIII). En el capítulo 7, estudio la lucha interna del clero en el régimen capellánico Rioplatense. Y en el capítulo 8, analizo la religión como fractura pre-moderna en la Argentina del siglo XIX, específicamente el poder eclesiástico como mecanismo de dominación populista.

NOTAS

¹ ver Ullmann, 1985, 249, 252 y 254.

² eclesiásticos nombrados en los sínodos diocesanos a propuesta de los obispos, para calificar la ciencia y demás cualidades de los concurrentes a curatos e intervenir en la remoción de párrocos. No podían ser menos de 4 ni más de 12 y debían tener grado de maestro, doctor o licenciado en Teología o Derecho Canónico (Enciclopedia Espasa, t.56, p.650).

³ tenían facultad para dispensar irregularidades en materia de Limpieza de Sangre y revalidar beneficios mal adquiridos.

⁴ designación de autoridades eclesiásticas, laudo de litigios eclesiásticos, y supervisión y control de la educación superior.

⁵ privilegios, precedencias o prerrogativas del ceremonial religioso.

⁶ Schwaller, 1985, 121.

TOMO VIII

Capítulo 2:

Las fracturas internas de la Iglesia.

(publicado en 1984 en el *Journal of Church and State* [Waco, Texas], v.26, n.3, 491-515; bajo el título: "Church and State in Buenos Aires in the Seventeenth Century", registrado en el HLAS, v.48, 1986, ítem 2829);

El sistema de frenos y contrapesos.

La administración colonial de la iglesia se volvió no tanto una cuestión de comando vertical del rey, el papa, o el arzobispo, sino como un sistema de frenos y contrapesos de las instituciones burocráticas autogobernadas. Cuanto más tiempo el funcionario eclesiástico permanecía en su cargo, más obvias se volvían las tendencias contradictorias de la Iglesia. Cuando el equilibrio de poder era alterado, estallaba un conflicto. Este conflicto era estimulado por la naturaleza contradictoria de la iglesia colonial, porque comprendía una subordinación antagónica a las autoridades metropolitanas (el papa, el rey, y el arzobispo), una división heterogénea del poder eclesiástico (ejecutivo, legislativo y judicial), una relación inconsistente con el estado colonial, una circulación ambivalente de una burocracia eclesiástica (la forzosa alternativa de los cargos más importantes en una provincia, entre frailes criollos y españoles), y una distribución contradictoria de los derechos de protocolo o ceremonial.¹

A pesar de las políticas regalistas, la iglesia diocesana retenía el control sobre un número de importantes funciones que pertenecían a la "sociedad civil": los registros de población, las actividades civiles, las capellanías, la administración de justicia, la caridad y, último en el orden pero no en su importancia, la sanción de cambios de estado civil (matrimonio), que se convirtió en la fuente de varios conflictos.² La educación fue delegada formalmente por el obispo a principios de la década de 1620 al colegio jesuita.³ Además, algunos eclesiásticos se comportaban como intelectuales tradicionales, vinculados orgánicamente con los intereses orientados hacia el mercado interno, que expresaban una ideología neo-feudal y obstaculizaban el crecimiento de una burguesía orientada hacia el mercado externo. A despecho de la afirmación de Ingenieros y de Rojas, la iglesia católica en Buenos Aires apenas pudo monopolizar la ideología o controlar la importación y circulación de libros,⁴ debido al extendido contrabando que se encontraba en el corazón de la economía porteña.⁵

Mas aun, a pesar de las políticas regalistas expresadas a través de la legislación real concerniente al patronato, la Iglesia nunca perdió su autonomía institucional. La mayoría de las normas para la Iglesia Rioplatense fueron provistas por el derecho canónico y el Concilio de Trento. La Iglesia

en el virreinato Peruano, al cual la diócesis del Río de la Plata pertenecía, sin embargo, también decretó su propia legislación. El primer Concilio de Lima celebrado en 1552 contenía cuarenta constituciones relacionadas con los indígenas. La preocupación por la vida de los indios continuaron en ambos el segundo y el tercer Concilio de Lima celebrados en 1567 y 1583 --el primero convocado por el Arzobispo Loaiza y el segundo y el tercero por Santo Toribio de Mogrovejo.⁶ Esta legislación conciliar, sin embargo, no excluía la elaboración de normas diocesanas. La diócesis del Río de la Plata decretó también su propia legislación. El sínodo de 1603 reflejaba en su carácter una copia casi exacta del primer sínodo celebrado en Tucumán en 1597, consistente principalmente en la explicitación de los decretos del Tercer Concilio de Lima.⁷ De aquí que, la razón por la cual la autonomía institucional de la Iglesia Católica en América Latina era extremadamente relativa se debía principalmente al poder de decretar su propia legislación.

A diferencia de las sedes virreinales donde la iglesia mantenía una independencia bastante fuerte de las autoridades civiles, en las regiones periféricas, como la provincia de Tucumán donde la burocracia estatal y la sociedad civil eran más débiles, cada vez que la iglesia convocaba concilios eclesiásticos, los gobernadores (representando a la sociedad civil) eran habitualmente invitados a participar.⁸ En la presencia que el gobernador hacía en los sínodos eclesiásticos, uno puede encontrar la razón del porqué las ordenanzas de los Gobernadores y lo producido en los sínodos se asemejaban entre sí. El sínodo del Río de la Plata de 1603 era a las Ordenanzas de Ramírez de Velasco lo que el Tercer Concilio de Lima fue para las Ordenanzas del Virrey Toledo. La complementariedad de ambas la legislación secular y eclesiástica era casi completa. El sínodo de 1603 contenía tres partes: la primera lidiaba con el adoctrinamiento de los indios, la segunda parte concernía a la administración de los sacramentos, y la tercera parte con los ayunos y fiestas. El sínodo estuvo hondamente preocupado con las cuestiones de los indios y el sacramento del matrimonio. Especificaba la necesidad de enseñar la doctrina en la lengua Guaraní, la obligación del encomendero de pagar al cura un peso por cada indio adoctrinado, y del residente no-encomendero a pagar medio peso.⁹ Más luego, en 1629, un nuevo Sínodo fue celebrado en Charcas convocado por el Arzobispo Fernando Arias de Ugarte. Este particular sínodo resultó en cinco libros distribuido en 140 decretos. El primer libro lidió con el adoctrinamiento de los indios; el segundo con rituales tales como el ayuno y las fiestas; el tercero y cuarto con la burocracia eclesiástica consistente en las hermandades, los capítulos eclesiásticos, los curas regulares, seminarios, visitadores, y examinadores; y el quinto libro lidió con los crímenes tales como la idolatría, la brujería, la blasfemia y la usura.¹⁰

El control secular de funciones religiosas.

Debido al así llamado Patronato Real, los funcionarios civiles también retenían, el control de un número de funciones religiosas cruciales que se volverían también la fuente de numerosos conflictos. Por ejemplo, la sociedad política (gobernadores y cabildos) era responsable de erigir iglesias, capillas, y hospitales, de autorizar el establecimiento de órdenes religiosas y la celebración de concilios provinciales, de expulsar a sacerdotes escandalosos, de recaudar los diezmos, de disponer de los espolios del obispo y de seleccionar santos particulares como patrones religiosos (los mediadores entre el pueblo y dios).¹¹ Asimismo, los residentes laicos también retenían el control de los cargos eclesiásticos, como el notario del Santo Oficio (Inquisición) o los funcionarios de la Santa Cruzada. Los principales funcionarios del Tribunal de la Santa Cruzada consistieron en el subdelegado, el oidor más antiguo de la Audiencia de Charcas, y un fiscal civil o asesor, quién era también el Tesorero, que retenía el control monopolístico de la venta de las Bulas de composición.¹²

Aquellos pobladores civiles que adquirirían oficios eclesiásticos aceptaban su acceso a los privilegios eclesiásticos. Este proceso de secularización de los oficios eclesiásticos de Buenos Aires también llevó a un creciente uso de los fueros eclesiásticos (inmunidades legales). El derecho al fuero era un privilegio consistente en una inmunidad con respecto al poder y la jurisdicción del fuero secular.¹³ Tan temprano como en 1627, Juan de Vergara, notario del Santo Oficio y Tesorero de la Santa Cruzada, cuando fue arrestado por el Gobernador Céspedes, buscó asilo en los fueros eclesiásticos.¹⁴ Más luego, en 1649, el Gobernador Lariz impuso un edicto ordenando que a partir de entonces "los curas no deben ser admitidos en el Fuero Real (jurisdicción secular), ni por jueces ni por Cabildos; debiendo librar, en caso de tener que intervenir en juicios, poderes a vecinos laicos sujetos al fuero real, y de ocurrir lo contrario correr el riesgo que el gobernador los declare nulos."¹⁵

Las normas para el gobierno hispano-americano colonial estaban provistas por la legislación real (las Partidas, Leyes de Toro, Fuero Real, Fuero Juzgo, cédulas reales, pragmáticas, provisiones, y asientos). El gobierno en el virreinato Peruano, sin embargo, al cual pertenecía el Río de la Plata, decretó su propia legislación. Las Ordenanzas del Virrey Toledo de 1574 fueron los primeros exponentes de la legislación Hispano-Americana.¹⁶ Igualmente, en la jurisdicción del Río de la Plata, a la cual Buenos Aires pertenecía, también decretó sus propias leyes tomándolas prestado de las Ordenanzas de Toledo. Las Ordenanzas de Ramírez de Velazco en 1597, las de Hernandarias en 1603, y las de Alfaro en 1612, fueron las primeras muestras de una legislación Rioplatense.

Las Ordenanzas de los Gobernadores Ramírez de Velazco y Hernandarias prescribían los deberes de los encomenderos para construir iglesias en cada pueblo de indios; para comprar vestimenta sagrada, cera y vino, y dar la misa; emplazar una cruz alta a la entrada de cada pueblo de indios; para tener especial cuidado que sus indios tengan confesión al menos una vez al año, para ir a misa al menos cada quince días, y para ofrecer rezos cada noche; darles a sus indios adoctrinamiento, pagar al cura el estipendio estipulado por el Obispo; y no hacer trabajar a sus indios en días sábados, domingos o durante las fiestas religiosas.¹⁷ Más aún, estas Ordenanzas eran para los sínodos eclesiásticos lo que las Ordenanzas del Virrey Toledo lo fueron para los Concilios de Lima. El refuerzo y solapamiento mutuo de ambas legislaciones secular y eclesiástica fue asombroso.

Sin embargo, a pesar de la complementariedad legislativa y del Patronato Real, los obispos y gobernadores no se comportaban, en una forma homogénea. Las leyes originales sobre la deportación de eclesiásticos de las Indias fueron promulgadas por primera vez con el ostensible propósito de proteger a los colonos y a los indios de los abusos que traían consigo los sacerdotes.¹⁸ Ya en 1589, el Cabildo de Buenos Aires expulsó a Francisco Romano, un clérigo Franciscano, sobre la base de que había dado un mal ejemplo.¹⁹ Esta represalia, sin embargo, pronto devino una de las herramientas más importantes de la sociedad civil. Por ejemplo, en 1590, el Cabildo expulsó al Obispo Alonso Guerra fundado en sus excesivas demandas con respecto a la recaudación del diezmo.²⁰

Mientras los sacerdotes, en coalición con los corregidores, podían engañar a los indios a través de la extracción de toda suerte de diezmos eclesiásticos fraudulentos, no podían hacer lo mismo con la población blanca y mestiza. Penetrados también por lo que algunos historiadores Revisionistas atribuyeron a la influencia hebrea, los colonos de Buenos Aires, incluyendo los productores orientados hacia el mercado interno, soportaban un plan diocesano de cargas impositivas a la producción y a la propiedad. Ya en 1586, los vecinos y los Oficiales Reales se opusieron a que el Obispo Alonso Guerra impusiera el diezmo.²¹ En forma similar, en 1617 el Cabildo se opuso al cura vicario Francisco Caballero Bazán, originario del Paraguay, por tratar de imponer un impuesto anual denominado

doctrina, que consistía en cuatro reales por cada esclavo poseído.²² Asimismo, el Cabildo se opuso a que la Iglesia gravara al poverío con excesivas limosnas para entierros durante la epidemia que golpeó a Buenos Aires en 1621.²³ Dieciseis años mas tarde, en 1637, el Cabildo entero se opuso al nuevo Obispo Cristóbal de Aresti, del Paraguay, por tratar de decretar un tributo eclesiástico denominado **primicias** (primeros frutos) que habría gravado vacas, yeguas pollinos, lechones, y semillas.²⁴

Cuestiones de ceremonia y protocolo.

La sociedad política y la civil también luchaban a través de gobernadores y obispos sobre de cuestiones de ceremonia y protocolo. Los gobernadores luchaban por preservar los derechos acordados a ellos por el Patronato Real y para que se les reconociera su rol en la designación de los sacerdotes.²⁵ En 1635, un conflicto surgió sobre la localización de un maderamen o enrejado dentro de la catedral. Cuando la catedral fue oficialmente fundada en 1620, durante el tiempo cuando el primer Obispo Fray Pedro de Carranza fue elegido, la reja formaba algo como una capilla cerca del altar mayor. Entre la reja y el altar anteriormente se sentaba el gobernador, representando al Rey y usando de las prerrogativas del Patronato Real. Desde que la reja fue removida y llevada al presbiterio, el gobernador y los funcionarios públicos restantes se entraron a sentar sin discriminación alguna del resto del vecindario. Estas circunstancias ofendieron las sensibilidades elitistas del Gobernador Pedro Estéban Dávila, que respondió boicoteando la misa celebrada en la catedral. Más aún, las autoridades seculares tomaron sus respectivas sillas y se mudaron a la Iglesia Franciscana.²⁶ Dos años mas tarde, en 1637, el conflicto que estalló por los tributos eclesiásticos resultaron en la excomunión del Gobernador Mendo de la Cueva y Benavidez por el Obispo Cristóbal de Aresti.²⁷ Para defender sus prerrogativas del Patronato Real ahora amenazadas por la excomunión que debilitaba su poder para hacer cumplir la administración de justicia y llevar adelante las responsabilidades ejecutivas, el Gobernador Cueva y Benavidez amenazó con renunciar. Tres años más tarde, en 1640, el Obispo Aresti, ahora tomándose revancha de sus previos fracasos, desafió al Gobernador Cueva y Benavidez sobre la base de que estaba tratando de enlistar a los vecinos de Buenos Aires, contra su voluntad y a su propia costa, en expediciones militares que fueron principalmente usadas para cazar ganado salvaje.²⁸

Finalmente, la sociedad civil, a través de las autoridades eclesiásticas, estuvo en desacuerdo sobre políticas económicas desempeñadas por la sociedad política. Por ejemplo, en 1606, Cristóbal de Loyola, el Obispo del Río de la Plata (tanto del Paraguay como de Buenos Aires), discrepó con el Gobernador Hernandarias sobre la correcta interpretación de la Real Orden que prohibía el tráfico con Brasil. Loyola creía que las Ordenes Reales que no respetaban el bienestar del vecindario debían ser **obedecidas pero no cumplidas**. De aquí que Loyola dedujo que Hernandarias estaba obligado a revocar la Real Orden. Loyola consideraba que la prohibición del comercio era equivalente a la ruina de la nueva ciudad.²⁹ Veinte años más tarde, en 1626, el Obispo Fray Pedro de Carranza, debido al encarcelamiento de Juan de Vergara --el líder Confederado y el mayor contrabandista y traficante de esclavos-- desafío al Gobernador Francisco de Céspedes.³⁰

Los desacuerdos de la iglesia colonial hispanoamericana también alcanzaron el área de las relaciones iglesia diocesana/clero regular. A pesar de la frecuencia formal de la legislación eclesiástica, los funcionarios seculares y eclesiásticos generalmente se encontraban en esta época bajo la influencia de una suerte de anticlericalismo erasmiano, la ideología orgánica de cualquier burguesía mercantil moderna. Esta sátira erasmiana estaba dirigida contra vicios y abusos clericales, y hasta incluía ataques subrepticios contra varias instituciones, ceremonias y rituales de la iglesia, no deteniéndose siquiera en el dogma mismo.³¹

Otro reflejo de esta lucha interna era la política pública seguida por los gobernadores con respecto a la inmigración de sacerdotes extranjeros. Cuando las fuerzas orientadas hacia el mercado interno gobernaban Buenos Aires, la facción Benemérita intentaba impedir que la iglesia fuera invadida por sacerdotes españoles.³² El Gobernador Hernandarias le escribió al Rey en 1617 pidiéndole que ahorrara los gastos de enviar curas españoles, que el no estimaba, y tratara de imponer curas nativos, que había traído de Asunción del Paraguay.³³

Las principales fuentes de conflicto.

Las principales fuentes de conflicto entre el obispo y el capítulo catedralicio residían en el poder de establecer prebendas y de distribuir los ingresos de la iglesia.³⁴ Estas dos fuentes principales de la controversia, como Schwaller (1981) detallo para el caso de México, tuvieron fuertes implicaciones para la balanza del poder entre el Obispo y el Capítulo catedralicio".³⁵ Ya en 1621, mientras el Obispo Carranza estaba ausente, el Dean Zaldivar --que representaba al capítulo catedralicio-- tomó posesión de su prebenda antes de que Carranza pudiera decidir acerca del asunto, lo que creó en este último una imagen negativa. Al actuar adelantándose a la decisión de Carranza, Zaldivar socavó el poder del Obispo para designar prebendados.³⁶ Con relación a la distribución del principal ingreso de la Iglesia (el diezmo), de acuerdo con la Real Cédula de Febrero de 1541, éste debía dividirse en cuatro partes iguales, una porción para el Obispo, otra para el capítulo catedralicio, y las otras dos partes debían ser separadas mas adelante en novenos, de los cuales dos debían ser reservados para la corona, tres para la construcción de iglesias y hospitales, dos para salarios de los curas, y las dos porciones restantes debían ser separadas para pagar a los dignatarios y subalternos de la diócesis.³⁷ La Bula de Erección promulgada por el Obispo Carranza, sin embargo, estableció la distribución del diezmo en tres partes --una parte para el Obispo, otra para el Capítulo, y la última tercera parte para la corona.³⁸ Considerando que el Capítulo Catedralicio de Buenos Aires estaba compuesto por cuatro prebendados, se puede concluir que cada uno de estos miembros recibía una doceava parte del diezmo total. En otras palabras, la Bula de Erección de Carranza significó que el Obispo ganaba cuatro veces lo que recibía cada uno de los otros miembros del Capítulo Catedralicio. No cabe asombrarse, esta desigual distribución del ingreso eclesiástico, a pesar de las intenciones de la Real Cédula de 1541, se transformó en una seria fuente de conflicto. Ésto se debía obviamente a la corrupción del Obispo en su defensa del código establecido para la división apropiada del ingreso eclesiástico. Debido a esta voluntaria violación de la Real Cédula, el Obispo recibió \$1.838 de un total recaudado de \$6.000, en lugar de \$1.500, la cuarta porción tal como estaba previsto en la Real Cédula.³⁹

El conflicto también afectaba las relaciones entre el clero regular y el secular. La principal fuente de conflicto entre ellos yacía en el control de las jurisdicciones eclesiásticas y la administración de sacramentos. A pesar del hecho de que los dos últimos concilios celebrados en Lima en 1583 y 1591 reforzaban el poder de los obispos, el Papa Gregorio XIV reconoció la autonomía jurisdiccional del clero regular por medio de la Bula *Quantum Animarum Cura*, decretada en 1591.⁴⁰ En el área del Río de la Plata, sin embargo, debido a la escasez de población indígena, y consecuentemente, la falta de incentivo económico, el clero secular, que controlaba principalmente las poblaciones de españoles (blancos), continuó ejerciendo una suerte de hegemonía jurisdiccional. No obstante la escasez de curas en el área del Río de la Plata, el Obispo Carranza levantó objeciones a la administración de sacramentos por los clérigos Franciscanos. Específicamente, el sínodo de 1629 decretó que los curas regulares no podían administrar el bautismo.⁴¹ Este decreto beneficiaba a los Jesuitas, que luego de ese año extendieron su área de influencia de una manera drástica. En este conflicto en particular, el clero

regular, debido a su rol como intelectuales tradicionales, encontraron apoyo en el estamento encomendero y su facción Benemérita. Éste último necesitaba desesperadamente contrabalancear el poder del Obispo, el principal intelectual orgánico de los intereses orientados hacia el mercado externo, así como su desesperada demanda de diezmos por medio del escudo protector de las ordenes religiosas.⁴²

Por razones similares, el principal conflicto entre órdenes religiosas ocurría entre dominicos y franciscanos. Por un lado, los dominicos, una orden religiosa que no poseía ninguna misión entre los indios, favorecía al Cabildo o, en otras palabras, a los intereses orientados hacia el mercado externo. Por otro lado, los franciscanos, una orden religiosa enteramente empeñada en las misiones indígenas, favorecía a los productores orientados hacia el mercado interno, centrado alrededor de los pocos encomenderos existentes. Los Franciscanos en Buenos Aires apoyaron al Gobernador Céspedes y a la facción Benemérita. En contraste, los Dominicos y Mercedarios, conjuntamente con el Obispo Fray Pedro de Carranza, un primo de Juan de Vergara, apoyó a la facción Confederada. Curiosamente, los Jesuitas permanecieron aparentemente neutrales.⁴³

Los conflictos también afectaron la vida interna de las Ordenes Religiosas expresada en sus capítulos anuales. Dentro de la orden Franciscana, aquellos clérigos que disentían con el Provincial Juan de Vergara, por su alianza con el Gobernador Céspedes fueron asignados a otros destinos en las reuniones celebradas en 1628. En las reuniones siguientes celebradas en 1629 y 1630, sin embargo, nuevas autoridades Franciscanas arribaron de España y radicalmente cambiaron sus políticas respecto del Gobernador Céspedes.⁴⁴

Finalmente, el conflicto también afectaba las relaciones entre el capítulo eclesiástico y el comisario del Santo Oficio de la Inquisición. El Santo Oficio, junto con los funcionarios aduaneros y los gobernadores portuarios, tenían por deber enviar sus funcionarios (comisario y notario) a inspeccionar las embarcaciones entrantes. Debiendo descubrir pasajeros no católicos (fueran ellos judíos, moros, protestantes o turcos), estos funcionarios se presentaban para obligar a regresar a los extranjeros a España. Al comisario se le pedía que ordenara una serie de preguntas concernientes a libros prohibidos. Si alguna violación de las reglas legales era encontrada, el Comisario debía encarcelar a los pasajeros ilegales y secuestrar sus libros. Cumpliendo esta tarea, el comisario se volvía uno de los más poderosos funcionarios dentro de la burocracia de la iglesia. Cuando el Obispo Carranza murió en 1632, una lucha estalló entre el Comisario del Santo Oficio Martín Martínez de Eulate, apoyado por el Gobernador Dávila, y el Capítulo Eclesiástico. A pesar de la oposición de Martínez de Eulate, el Capítulo Eclesiástico finalmente logró instalar al R.P. Gabriel de Peralta, un criollo, como Obispo provisional.⁴⁵

La noción de orden público en tiempos coloniales tenía tres enemigos que el estado colonial no podía tolerar: herejía, idolatría, y pecado. Todos ellos iban directamente contra el orden Cristiano, que significaba ir también contra el orden social.⁴⁶ A diferencia de los virreinos Mexicanos y Peruanos, sin embargo, no hubo casos de herejía o idolatría en la gobernación del Río de la Plata.⁴⁷ No obstante, hubo casos donde la distribución y propiedad de los escritos de algunos intelectuales Europeos fueron considerados heréticos y, consecuentemente, criminales.

Como resultado del desafío ideológico y del éxito popular de Erasmo, aún en los círculos literarios españoles, las proposiciones erasmianas fueron identificadas con la herejía y acabaron, en 1559, siendo prohibidas por el Papa Pablo IV y, en 1612, por el Índice español. A pesar de esta prohibición, algunos eruditos españoles, como Luis de Granada y Venegas del Busto, tuvieron éxito en

difundir las ideas erasmianas. Ambos, el Obispo Pedro de Carranza, un fraile Carmelita influido por la Reforma Teresiana (un movimiento religioso liderado por Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz), y el cabildante Juan de Vergara, dos de los más influyentes individuos en el entourage político del Río de la Plata (que a propósito eran primos), tenían entre sus libros las obras completas de Fray Luis de Granada, incluida su famosa **Guía de Pecadores** (que de acuerdo con Marcel Bataillon tenía una clara semejanza con el **Enchiridion** de Erasmo), y que antes de ser expurgada en 1561 había sido incluida en el Index.⁴⁸ Además, Juan de Tapia de Vargas, un comerciante, terrateniente y político, era uno de los pocos que tomó partido a favor del Gobernador Céspedes en 1629, así como el único que trató en el siglo XVII de fomentar la manufactura local. También tenía en su biblioteca privada la "Agonía del Tránsito a la Muerte", de Venegas del Busto, que siguiendo a Bataillon, tomaba prestado capítulos enteros de la "Preparación para la Muerte" de Erasmo.⁴⁹ Por un lado, el Obispo Carranza estaba enteramente comprometido durante la década de 1620 con los intereses de la facción Confederada, orientada hacia el mercado externo, con la cual sus intereses burocráticos y personales se hallaban estrechamente ligados. Por otro lado, el Cabildo Eclesiástico, que gobernaba la principal iglesia de la nueva diócesis de Buenos Aires, y muy específicamente su diácono Paraguayo Francisco de Zaldívar, estaba totalmente imbuido de los intereses de la facción Benemérita, orientada hacia el mercado interno.⁵⁰

De una forma similar, los comportamientos pecaminosos eran también castigados por el estado colonial. En cualquier momento en que un padre de familia usaba amenazas pecaminosas, como maldiciones y blasfemias, para intentar oponerse a un matrimonio, los tribunales eclesiásticos avanzaban sobre el mismo. Cuando en 1633, Pedro de Sayas, un encomendero, se opuso al matrimonio de su hija Juana de Sayas y Medrano amenazándola con maldiciones, el tribunal eclesiástico de Buenos Aires consideró inaceptables los medios utilizados para impedir el matrimonio. Más aún, el estado colonial legitimó las restituciones cuando los colonizadores aceptaban haber cometido pecados.

A diferencia del Perú y el Alto Perú, los registros que revelan culpabilidad en los pecados cometidos contra los indios eran muy escasos en Buenos Aires. De hecho, en solo un testamento, aunque uno muy patético, se encontró una huella de tal culpa. Una frenética confesión religiosa fue declarada en una cláusula testamentaria por una anciana mujer criolla, Ana Bautista, ella misma hija del encomendero Juan Bautista Noble. Esta cláusula expresaba su convicción acerca de la ilegitimidad de su riqueza. Doña Ana estaba mentalmente torturada por los pecados cometidos por su padre en la conquista de Tucumán y Córdoba, así como por los excesos que ella misma había tolerado en su propia encomienda. Como resultado, Doña Ana confesó sus pecados en 1635 al Padre Ortensio, quien le aconsejó que restituyera la cantidad de dinero apropiada de acuerdo a los excesos cometidos. Doña Ana evaluó los excesos en \$800, y en 1635, ordenó en su testamento que fueran dados al Cap. Marcos de Sequera, marido de su nieta Ana de Matos, para que ese dinero fuera distribuido entre sus indios.⁵¹ Amén de las restituciones, los sentimientos culposos revelaban que los pecados también se expresaban a través de donaciones, legados, manumisiones, y excepciones tributarias.

En forma similar, a pesar de las políticas regalistas promulgadas por la Corona española, la disciplina canónica era manipulada por algunas instituciones eclesiásticas (por ejemplo, los tribunales eclesiásticos) para contrabalancear el poder de la sociedad política. Entre ellas, las categorías más centrales, del interés de la iglesia, por la disciplina y la obediencia, eran las mayores fuentes de conflicto, y los legados hierocráticos principales de la Iglesia para interferir con la sociedad política, eran los mecanismos de excomunión y absolución.⁵² En tres diferentes oportunidades en una década, Buenos Aires experimentó un intercambio público de medidas punitivas entre funcionarios públicos. El

Obispo Carranza excomulgó al Gobernador Céspedes en 1627, y el Obispo Aresti excomulgó a ambos gobernadores Dávila y Cueva y Benavidez en 1637 y 1640.⁵³

Estas autoridades civiles excomulgadas tenían algo en común: habían desobedecido al obispo y como resultado se los había considerado contumaces. Su expulsión no fue el resultado de denegaciones fiscales (el pago de diezmos) o de violentas actitudes contra clérigos o cómplices heréticos, sino más bien el de situarse en obstinada desobediencia a la iglesia en sus tribunales. Como resultado directo de la orden de excomunión, los gobernadores, como Céspedes, Dávila y Cueva y Benavidez, se encontraron impedidos de administrar justicia, mantener la disciplina en la milicia, retener a los delincuentes en las cárceles, y de presidir las asambleas capitulares anuales donde las nuevas autoridades eran elegidas (por lo común cada primero de enero).⁵⁴

Por un privilegio excepcional, el poder de excomulgar era atributo de algunos prelados debajo del rango de obispo, tales como el diácono y el vicario. A propósito, en 1635, el Gobernador Dávila se quejó de que el Vicario General, Lucas de Sosa, impuso bajo pena de excomunión que "durante los ayunos los notarios no deben escribir, los barberos no deben afeitar, las carretas no deben entrar ni salir de la ciudad, y que las negras e indias no deben lavar la ropa".⁵⁵ El poder de excomulgar, sin embargo, ya sea ejercido por obispos o por prelados inferiores, no podía ser usado indiscriminadamente. Desde que un obispo al excomulgar estaba actuando como una autoridad ordinaria, su poder de excomulgar estaba restringido exclusivamente a personas pertenecientes a su jurisdicción.

Cada vez que los obispos abusaban de su derecho de excomulgar, los gobernadores solicitaban de la Real Audiencia una real provisión **de fuerza**, un mecanismo de atajo para extender la protección real a sujetos que vivían en áreas remotas de las audiencias, con el fin de forzar al obispo la absolución correspondiente, significando esto simplemente la revocación de la sentencia. Si la Audiencia decidía que el gobernador excomulgado no se había excedido en su autoridad, entonces el obispo estaba obligado a absolverlo.⁵⁶ Era esta absolución la que efectivizaba la reconciliación del excomulgado con la Iglesia. Ya en 1586, el Gobernador Torres de Navarrete obtuvo de la Real Audiencia una provisión real para asegurar la absolución de la excomunión del Obispo Guerra.⁵⁷ De igual forma, en 1639, el Gobernador Cueva y Benavidez requirió de la Real Audiencia una provisión real que demandara una absolución del Obispo.⁵⁸ De esta manera, la jurisdicción eclesiástica finalmente permaneció sujeta al poder secular.

Segundo, luego del interés de la iglesia por la disciplina y la obediencia, central para su supervisión de la moralidad individual, venía la administración de sacramentos. Entre ellos, los sacramentos de confesión, bautismo y matrimonio eran cruciales. Para la conducta de la vida privada individual, la influencia más grande del cuidado pastoral era ejercida, de acuerdo a Max Weber, cuando el sacerdocio, facultado para distribuir gracia "divina", "... combinaba casuística ética con el sistema racionalizado de penitencias eclesiásticas".⁵⁹ Entre esas penitencias, administradas por el clero en el otoño de la conquista y la colonización, la restitución (una suerte de indemnización o expiación) ocupaba un lugar central.⁶⁰ Considerando la pequeña cantidad de indios tributarios existentes en el área de Buenos Aires (aproximadamente unos 600 indios), sin embargo, la penitencia de restitución era aquí muy raramente administrada.⁶¹

Luego de la confesión sacramental, central para la preocupación de la Iglesia por la ética y una de las principales fuentes de los conflictos políticos, sociales y morales eran las instituciones del bautismo y del matrimonio. Como los curas se rehusaban a legitimar el fruto de relaciones sexuales con

Indios que no habían sido bautizados, el bautismo devino un requisito esencial para alcanzar la "igualdad" y para incorporar los indios a la colonización española.⁶² Tan extendido fue este requisito que las ordenes religiosas luchaban entre sí esencialmente por el derecho a ejercer este sacramento así como por el derecho de recaudar los correspondientes aranceles. Durante el final de la década de 1620, la Iglesia Diocesana de Buenos Aires levantó los impedimentos para la administración del bautismo por los Franciscanos. En el Sínodo de Charcas, de 1629, el Obispo decretó que los curas regulares no podían administrar el bautismo.⁶³ Al hacer esto, la iglesia secular retenía el control sobre las actividades de las ordenes religiosas.

El sacramento del matrimonio también devino una fuente principal de conflicto, según que la pareja casada fuere india o española.⁶⁴ Aunque la población que era financieramente capaz de oponerse a matrimonio en los tribunales eclesiásticos era en gran medida procedente de la elite colonial, las acciones de los tribunales eclesiásticos vinieron a fomentar la movilidad social, removiendo la tradicional estratificación social estamental. La prevención en la formación de tales constreñimientos sociales o étnicos ayudó a la elite porteña para evitar convertirse en una rígida oligarquía. Virtualmente todas las objeciones fundadas en la distancia social fueron esgrimidas por parientes blancos que se oponían al matrimonio de sus hijos con un criollo, un portugués, un mulato, o un indio. Sólo cinco casos en un total de 120 resumidos por Raúl A. Molina detallan el origen étnico de prometidas y prometidos. Tres casos se referían a varones blancos casando con mujeres indias, un caso estaba ligado a una mujer criolla forzada a casarse con un Portugués, y otro caso estaba relacionado a un varón blanco casando con una mulata.⁶⁵ En este sentido, las decisiones de los tribunales eclesiásticos de Buenos Aires, a diferencia de los tribunales seculares del siglo XVIII, sugieren (a pesar de la ausencia de estadísticas) una más alta contribución a la miscegenación y al matrimonio interracial. En el mismo sentido, la omnipotente presencia del capital comercial puede haber contribuido fuertemente a acelerar el matrimonio interracial. A propósito, ya en 1606, cuando el Gobernador Hernandarias trató de expulsar a los comerciantes Portugueses, el Obispo Loyola instrumentó el sacramento del matrimonio, uniendo aspirantes Portugueses con prometidas criollas para evitar su expulsión. La manipulación de la institución del matrimonio por un intermediario eclesiástico generó un duro conflicto entre la Iglesia y el Gobernador Hernandarias que fue muy pronto superado.⁶⁶

Las objeciones al matrimonio ocurrían también entre indios, negros, artesanos, y miembros de las castas.⁶⁷ Los curas rurales, por ejemplo, tenían a su cargo la responsabilidad para que los indios se casaran dentro de sus encomiendas. Los indios de las encomiendas de Baradero, Bagual o Tubichaminí, sin embargo, casaban con indios tributarios de las provincias interiores, a pesar de las normas municipales en contrario, como la que fue decretada en 1610.⁶⁸ Las Cofradías de artesanos también debían cuidar que las hijas de los maestros artesanos se casaran con integrantes de su mismo oficio. Cuanto más alta la casta de un artesano, sin embargo, más abierta eran las políticas de reclutamiento dentro de un oficio, y actitudes discriminatorias contra forasteros no eran practicadas. Por ejemplo, de acuerdo al testamento de Juan Jurado, emitido en 1638, una de sus hijas casó con Mateo Arnal, un zapatero; otra casó con Manuel Fonseca, un cerrajero; y la mayor caso con Manuel González, un herrero.⁶⁹ En su lugar, entre los miembros de las castas más bajas, era para la ventaja de un oficio artesanal, disminuir el riesgo de fricciones inter-oficios, si el nuevo oficial artesano era conocido de los viejos maestros. Esta es la razón por la cual entre los indios que residían en Buenos Aires, los artesanos trataban de retener los yernos estimulándolos a continuar sus talleres. Por ejemplo, de acuerdo al testamento del indio sastre Miguel, emitido en 1636, su hija casó con Domingo Negreros, también un sastre.⁷⁰

Desde que, de acuerdo a las regulaciones españolas, el padre sobreviviente estaba obligado a

entregar en el momento del matrimonio de sus hijos cualquier herencia del padre fallecido, los padres sobrevivientes que deseaban mantener la supervisión de su herencia combatían el matrimonio de sus hijos con el fin de impedir su pérdida material correspondiente. Con el fin de combatir el matrimonio de sus hijos, los padres recurrían al uso de violencia física, a la renuencia a ceder una herencia, o a las objeciones a las diferencias económicas o étnicas entre la pareja. Cuando tenía lugar una objeción inaceptable al matrimonio, el tribunal eclesiástico juzgaba o bien ordenar el depósito, o bien conceder una dispensación de amonestaciones. El propósito de colocar una mujer, como Catalina de Enciso, Maria Barbosa, Ana Hernandez y Rojas, o Juana de Sayas y Medrano, en depósito era para salvaguardar su derecho a elegir casarse o permanecer soltera, libre de toda coerción de sus padres. Para que un depósito tuviera lugar, Catalina de Enciso, por ejemplo, tenía que ser físicamente despojada de las manos de su padre, Pedro Rodríguez de Cabrera, de manera que pudiera ser colocada en manos de un partido neutral, la casa de Tomás Rosende. La voluntad de los funcionarios eclesiásticos de apartar a una joven de la casa de sus padres para colocarla en depósito simbolizaba, de acuerdo a Patricia Seed, un interés relativo por la libre voluntad matrimonial de la joven.⁷¹

La primer condición bajo la cual se otorgaban dispensas de prohibiciones por un tribunal eclesiástico ocurrían una vez que la joven afirmaba su voluntad de apartarse de la casa de sus padres y casar con el hombre con el cual se había fugado. Esta estrategia era claramente la respuesta a cualquier intento de impedir un matrimonio, por cuanto tenía el efecto de casar inmediatamente a la pareja.⁷² Como consecuencia, las fugas estaban en algunos casos protegidas por las autoridades eclesiásticas. Por ley, las prohibiciones eran tres en número, cada una dispensada durante las festividades religiosas al momento de la misa mayor en un intervalo de tres semanas. Una vez que la tercera prohibición fue dispensada, el compromiso o matrimonio se lo consideraba un hecho. A menudo ocurría, sin embargo, que el novio o la novia renegaban de su promesa antes que la tercer prohibición fuera dispensada. Por ejemplo, en 1618, Luis y Alfonso Carballo, ambos barberos originarios de Lisboa, arribaron a Buenos Aires, donde se comprometieron a casarse, respectivamente, con María Hernández, una hija de Andres Lozano de Saravia, un viejo poblador de Buenos Aires, y con Dominga Barbosa, la viuda de Mendo Alvarez, un comerciante Portugues.⁷³ Ambos Carballos, a pesar de haber obtenido la dispensa de la segunda prohibición, decidieron pedir al tribunal eclesiástico que cancelara la dispensa de la tercer prohibición. Alfonso Carballo argumento en Julio de 1619 que se estaba yendo inmediatamente al Brasil, y Luis Carballo alego, nueve meses después, que estaba enojado y desilusionado, que "...no había mas espacio para negociar", y que deseaba apartarse de su anterior solicitud.⁷⁴ Las negociaciones matrimoniales, en ese tiempo, se parecían en algunos casos a negociaciones financieras donde los sentimientos y la belleza física no jugaban ningún rol y donde un intermediario era necesario para lograr un pacto conveniente. Mientras que los dos Carballos no tenían nada que perder, sin embargo, ese no era el caso para sus exprometidas. Por cuanto, de acuerdo con Gutiérrez, "...ser conocido que una hija había sido seducida o había perdido su virgindad significativamente alteraba su valor simbólico en las negociaciones correspondientes".⁷⁵ Sin embargo, uno encuentra que la amenaza de los hermanos Carballo era sólo una estrategema para lograr elevar la dote, pues más tarde ambos Carballos casaron con sus respectivas prometidas. Alfonso Carballo actuó como padrino de María Barbosa, una hija de Domingo Barbosa, y fue acusado por Juan de Sequeyra de golpear a su hijastra por estar preñada.⁷⁶ En el caso de Luis Carballo, mas luego enviudo de María Hernández y contrajo segundas nupcias con Gerónima Santana.⁷⁷ Una vez enviudado de Gerónima Santana, Luis Carballo se mudó a la vecina Santa Fé donde aún tuvo la energía de casarse más veces, la cuarta y última con María Rodríguez, hija del Cap. Cristóbal de Basualdo y de María de Centurión.⁷⁸

Aparte de ser una fuente de conflicto social, la institucion del matrimonio era tambien una fuente de conflictos morales. El Obispo Fray Pedro de Carranza, el principal intelectual orgánico de la

Iglesia, responsable de administrar el tribunal eclesiástico, conocía perfectamente bien las prescripciones del derecho canónico relativa a la moral en el matrimonio, así como la literatura que lo apoyaba. Carranza mencionó, entre los libros que donó al Prior de la Orden Carmelita, **De Sacramento Matrimoni** (1602), escrito por el Jesuita Tomás Sánchez.⁷⁹ El libro de Sánchez, el cual tomaba prestado del libro de Vives **Institutiones foeminae christiane** (1538), celebraba el valor moral del matrimonio cristiano contra las concupiscencias sugeridas por las novelas como **La Celestina**. El punto de vista de Vives ponía en alta estima la vida conyugal. Este énfasis en la vida conyugal era debido a la influencia de las ideas de Erasmo sobre la libre voluntad en la elección matrimonial por parte de varón y mujer.⁸⁰ La doctrina de Erasmo era una reacción contra la teoría de la predestinación y la responsabilidad estatal en las elecciones matrimoniales elaboradas por Lutero y Calvino.⁸¹

En los libros de Sánchez y de Vives, las objeciones al matrimonio, llamadas impedimentos, fueron extensamente detalladas. De acuerdo a sus trabajos, los impedimentos canónicos consistían en inadecuaciones generales y específicas al matrimonio. Entre las primeras estaban la edad, la impotencia, el sacerdocio, el tener otro esposo vivo, y el no ser católico. Entre las últimas estaba la consanguinidad, la afinidad, el compadrazgo (parentesco espiritual), el crimen y la deshonestidad sexual.⁸² Desde que la coincidencia extrema y las excepciones exactas especificadas por la ley canónica eran necesarias para oponerse a un matrimonio, el número de oportunidades para los parientes de hacer uso de estas objeciones estaba acentuadamente restringido.⁸³ De 120 casos recogidos en los tribunales eclesiásticos de Buenos Aires, correspondientes al periodo 1611-33 y resumidos por Raul A. Molina, solo cuatro casos fueron encontrados en los que fueron empleadas las objeciones para impedir un matrimonio. Un caso estuvo vinculado con la impotencia, otros dos estuvieron relacionados con la edad, y en otro caso, la excusa para la queja fue la promesa de la vocación eclesiástica.⁸⁴

Una manera de casarse contra la oposición de los padres o parientes era por apelación a un tribunal eclesiástico. Durante el transcurso del siglo XVII, uno puede resumir tres principales motivos considerados como razones inaceptables para intentar impedir un matrimonio: 1) uso familiar de la violencia física; 2) rechazo familiar para otorgar una herencia; o 3) las objeciones familiares acerca de diferencias económicas o étnicas entre los eventuales contrayentes. En solo tres casos el uso de la amenaza o la violencia física fue registrado en Buenos Aires. Cuando Isabel de Encinas planeó casar con Juan Bernal en 1616, un pariente cercano se opuso al arreglo y amenazó con cometer un "acto diabólico" si tal matrimonio era consumado.⁸⁵ En forma semejante, en 1629, cuando Pedro Toscano intentó casarse con María Barbosa, Juan de Sequeira acusó al padrastro de María, Alfonso Carballo, de haber maltratado a su hija por estar preñada y de golpearla con un palo.⁸⁶ En el caso de Juana de Sayas y Medrano, que casó con Alonso Ramírez, un viudo de Luisa Villegas, como su padre Pedro de Sayas no pudo imponer su voluntad, la castigó indirectamente al darle a su otra hija la ventaja del tercio y el remanente del quinto de su herencia.⁸⁷ No obstante estos pocos casos, las diferentes características sociales de los victimizadores, uno comerciante (Alfonso Carballo), quien podría haber tenido una actitud más moderna hacia el sexo y el matrimonio, y el otro un encomendero (Pedro de Sayas), ambos reaccionaron de la misma manera. Lograr un balance final para el rol desempeñado por la Iglesia respecto del sacramento del matrimonio no es una tarea sencilla. El desempeño pareciera a primera vista contradictorio. Mientras por un lado los Indios fueron impedidos de mezclarse con negros o indios de otras encomiendas, los criollos y españoles fueron estimulados para quebrar la estratificación social estamental y las normas familiares patriarcales.

En conclusión, este ensayo ha detallado en extenso los diferentes mecanismos por los cuales la burocracia eclesiástica de Buenos Aires devino relativamente independiente del Patronato Real. Al

hacerlo, este ensayo ha verificado como los desacuerdos entre la iglesia diocesana (obispo) y el estado colonial (gobernadores), el clero secular (capítulo catedralicio) y el obispo, los cleros regular y secular, y entre las ordenes religiosas mismas, fueron influídas por la naturaleza contradictoria de la Iglesia colonial. Asimismo, se ha verificado como la implementación de los mecanismos de excomunión, penitencia, y matrimonio se convertían también muy a menudo en fuentes de conflicto político así como en casos de intrusión de la Iglesia dentro de la sociedad política.

NOTAS

¹ Tibesar, 1982, 209.

² Rodríguez Valencia, 1957; Shiels, 1961; y de la Hera, 1963.

³ Isern, 1936, 34-39.

⁴ Medina, 1899, cap. 6; Ingenieros, 19; Rojas, 1948, cap. preliminar, secc. 4; Garretón, 1933, 271-275; y Cervera, 1939, 193.

⁵ Torre Revello, 1948, 107; y Cutolo, 1955, 134-136.

⁶ Armas Medina, 1953, capítulo 9; Bruno, 1967, 180; y Rivera Pizarro, 1971, capítulo 2.

⁷ Levillier, 1926, 9-78.; y Ripodas Ardanaz, 1973.

⁸ Mateos, 1970, 327-328.

⁹ Carbia, 1914, 56.

¹⁰ Velasco, 1964, 88-130; y García Quintanilla, 1964, 156-67.

¹¹ ver Orgaz, 1922, 76; Carbia, 1914, 81-83; y Bruno, 1967, 125-126.

¹² Una bula de composición consistía en la remisión del castigo temporal aun debido al pecado luego de la absolución sacramental, ya sea en este mundo o en el purgatorio. Prácticamente, la bula de composición se manifestaba a sí mismo como un corte en los días del castigo que debían ser cumplidos en el purgatorio (ver Martínez Reyes, 1980, 401; y Romano y Tenenti, 1971, 214. Para más detalles e interpretaciones sobre este extraño y oscuro caso, ver Vainikoff,

¹³ Escriche, 1863, 737.

¹⁴ Sierra, op. cit., 157.

¹⁵ Acuerdos, 10, 147-152; y Peña, 1911, 43 y 47.

¹⁶ Levillier, 1935-42.

¹⁷ Santillán, 1928, capítulo 3.

¹⁸ Acerca de las deportaciones de sacerdotes por el poder secular, ver Farriss, 1968, 48-59.

¹⁹ Carbia, 1914, 283-284.

²⁰ Carbia, 1914, I, 45; Bruno, I, capítulo 6; y Sierra, op. cit., I, 420-423;

²¹ ver Bruno.

²² Acuerdos, 3, 346.

²³ Acuerdos, 4, 205.

²⁴ Acuedros, 5, 254-62.

²⁵ Peña, 1916, 42.

²⁶ Acuerdos, 5, 124.

²⁷ Acuerdos, 5, 283-285.

²⁸ Cervera, 1907, 362-67.

²⁹ Carbia, 1914, I, 60; y Sierra, I, 539-42.

³⁰ Carbia, 1914, I, capítulo 4.

³¹ Mariel de Ibáñez, 1946, 135; ver también Ponce, 1939.

³² Olaechea Lavayén, 1977, 501.

³³ Olaechea Labayen, 1977, 501.

³⁴ Una vez que el primer obispo, Fray Pedro de Carranza, arribó a Buenos Aires en 1620, la Bula de Erección fue promulgada. Este documento proveyó para la formación de un capítulo catedralicio de cuatro miembros llamados prebendados. En Buenos Aires, el capítulo catedralicio consistió en solo dos rangos: las dignidades y los canónigos. Entre los anteriores estaba el diácono y el archidiacono.

³⁵ Schwaller, 1981, 655.

³⁶ Avella Chafer, 1976, 321.

³⁷ Recopilación de Leyes de los Reinos de Indias, libro 1, título 16, ley 23.

³⁸ Carbia, 1914, 132.

³⁹ Torre Revello, El libro como factor, 31.

⁴⁰ Armas Medina, Cristianización del Perú, capítulo 17.

⁴¹ Velasco, El Concilio..., 88-130.

⁴² Bruno, 2, 151-154.

- ⁴³ Peña, Francisco de Cespedes..., 25.
- ⁴⁴ Bruno, 2, 151-152 y 159-160.
- ⁴⁵ Bruno, 3, 28; y Actis, 1943-44, I, 42-43; y Molina, 1961, 112-113.
- ⁴⁶ Ayala y Delgado, 1949, 426.
- ⁴⁷ Medina, 1899; 1887; y 1905.
- ⁴⁸ Kamen, 1965, 94.
- ⁴⁹ Cutolo, 1955, 105-83; y Bataillon, 1937, v.2, capitulo 11, secciones 2 y 4.
- ⁵⁰ Torre Revello, 1944, 32-33; Peña, Francisco de Cespedes, 42; y Carbia, 1914, capitulo 1.
- ⁵¹ AGN, Sala IX, Escribanias Antiguas, v.21, f.77.
- ⁵² Ullman, 1962, 300; y 1983, 109.
- ⁵³ Bruno, v.2, capitulo 8; y 3, 37-40.
- ⁵⁴ Bruno, 3, 19.
- ⁵⁵ Bruno, 3, 30.
- ⁵⁶ Farriss, 1968, 81; y Tibessar, 1982, 210-212.
- ⁵⁷ Bruno, 1, 282.
- ⁵⁸ Bruno, 3, 39.
- ⁵⁹ Weber, 1963, 76.
- ⁶⁰ Sobre la restitucion, ver Lohmann Villena, 1966, 21-89; y Guarda, 1973, capitulo 5, seccion 7.
- ⁶¹ Zinny, 1920-21, I, 109; Torre Revello, 1944, 13; Torre Revello, 1958, 229-40; Marfany, 1940, 33 y 36; y Molina, Hernandarias, 265-71.
- ⁶² Gonzalbo, 1983.
- ⁶³ Velasco, op. cit., 88-130.
- ⁶⁴ Seco Caro, 1958, y Ripodas Ardanaz, 1977.
- ⁶⁵ Molina, 1956, casos 9, 25, 71 y 99.
- ⁶⁶ Carbia, 1914, 1, 60.

⁶⁷ Una casta era una jerarquía dentro de una estratificación racial, la cual contemplaba la proporción de sangre blanca, ver Roscher, 1903, 19-20.

⁶⁸ Acuerdos, 2, 137.

⁶⁹ AGN, v.24, f.221.

⁷⁰ AGN, v.22, 172v.

⁷¹ Seed, 1980, 91.

⁷² Seed, 1980, 97 y 98.

⁷³ Molina, 1956, casos 18 y 28.

⁷⁴ Idem.

⁷⁵ Gutierrez, 1980.

⁷⁶ Molina, 1956.

⁷⁷ AGN, v.27, f.186.

⁷⁸ Zapata Gollan, 1969, 253.

⁷⁹ Cutolo, Bibliotecas Jurídicas, 144. Sobre Tomás Sánchez, SJ, ver Noonan, 1972, 31-41; y Rodríguez Molas, 1984, 38-39 y 64-66. El libro de Sánchez, en latín, tuve oportunidad de consultarlo en la sección de libros antiguos de la Biblioteca de la Universidad de Wisconsin, en Madison.

⁸⁰ Erasmo, 1518; y 1526.

⁸¹ Bennassar, 1975, 148.

⁸² Seed, 1980, 177-178.

⁸³ Seed, 1980, 191.

⁸⁴ Molina, 1956, 163-179.

⁸⁵ Ibidem, caso n.12.

⁸⁶ Ibidem, caso n.71.

⁸⁷ Ibidem, caso n.108; y AGN, v.21, f.399.

TOMO VIII

Capítulo 3

El nepotismo y etno-centrismo clerical, como instrumentos cristalizadores de la movilidad eclesiástica. La endogamia en la Iglesia del Río de la Plata (1760-1790).

presentado en el Primer Convocatoria al Encuentro Internacional "Los Borbones entre dos Mundos y Europa y América en el siglo XVIII", organizada por el Archivo Histórico Municipal de Cochabamba, celebrado entre el 19 y el 23 de Junio de 1995;

A lo largo y ancho de toda la América Española existió al parecer un generalizado nepotismo eclesiástico.¹ Este fenómeno fué comprobado por Guibovich Pérez (1994) en el Perú de fines de las reformas Borbónicas.² En el Río de la Plata en particular, el nepotismo vigente en el clero secular, si bien no podía apartarse de la norma general que se daba en todas las instituciones del Antiguo Régimen, se distinguió del vigente en la milicia y la burocracia civil.

El índice de endogamia.

La designación de los integrantes de los Cabildos Eclesiásticos, al igual que en los Cabildos seculares, estaba afectada por fuertes lazos de solidaridad interna, provocada a su vez por sólidos vínculos de parentesco. De resultas de la incorporación de los hijos del patriciado al clero secular, el clero de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja y San Juan habría generado en su seno un alto índice de parentescos mutuos. Estos vínculos eran combatidos por la institución de la alternativa,³ y por las disposiciones contenidas en la legislación vigente,⁴ que establecían que dos hermanos no podían ser canónigos al mismo tiempo, y que si hubiere un capitular que tuviese parentesco hasta el cuarto grado con algunos de los concursantes en las oposiciones convocadas debía abstenerse de votar.⁵ Tan era así, que cuando en 1804 el Deán de Córdoba Gregorio Funes presentó una terna para cubrir la sede vacante de la Sacristía Catedralicia de Córdoba, al incluir en la misma a su sobrino carnal José Felipe Funes, y eliminar de la nómina al Dr. Pedro Vicente Ferreira, Cura y Vicario de la Primera Sierra y Anejos de Córdoba, el sobrino de este último, el Chantre Juan Justo Rodríguez,⁶ puso el grito en el cielo. Finalmente, prevaleció la voluntad del Chantre Rodríguez, cuya madre era prima en cuarto grado del Dr. Ferreira, pues el Virrey Sobremonte, amigo del Chantre, eligió a este último, haciendo a un lado la terna elevada por el Deán de Córdoba Gregorio Funes.⁷

De la nómina de clérigos seculares beneficiados por capellanías otorgadas en Buenos Aires, muchos resultaron mutuamente parientes, dando lugar así a una endogamia clerical que se manifestaba como una suerte de nepotismo. La Tabla J-I revela 27 casos de curas y frailes que, en Buenos Aires, resultaron hermanos entre sí. Y la Tabla J-II revela una decena de casos donde las relaciones de parentesco era entre curas primos hermanos. Avellá Cháfer (1983) registró dos casos entre

hermanastros, los cuales se dieron en el siglo XVII entre el Cura de la Catedral Juan de Oramas Filiano y el Pbro. Diego de Rosendo y Trigueros, y en el siglo XVIII entre el Cura José Antonio Gutiérrez y Castellanos y el Canónigo Juan José Fernández de Córdoba.⁸ Pero la peculiaridad del nepotismo clerical consistía --al igual que en la antigua Roma papal, pero a diferencia del nepotismo militar-- en darse sólo entre tíos y sobrinos.⁹ La Tabla J-III nos ofrece una treintena de los casos más resonantes de nepotismos clericales ocurridos en Buenos Aires entre tíos, sobrinos y sobrinos-nietos a lo largo de los siglos XVII, XVIII y comienzos del siglo XIX.

El más paradigmático de todos fué sin duda el de los sobrinos y sobrinos-nietos del Dr. Marcos Rodríguez de Figueroa. Este Doctor fué Arcediano de la Catedral de Buenos Aires en la primera mitad del siglo XVIII, habiendo dotado con su fortuna personal y el albaceazgo de sus adinerados parientes una docena de capellanías, algunas a favor de sus sobrinos y sobrinos nietos carnales. Fué tío del Dr. Francisco de Cossio Terán y Figueroa, de Fr. Pedro Pascual Sebicos y Rodríguez de Figueroa, del Dr. Juan Jacinto González de Cossio, y de Sor Teresa de Sebicos; y tío abuelo de los Presbíteros Basilio Millán y Rodríguez de Figueroa, Pablo Pantaleón Romero y Rodríguez de Figueroa, Vicente Arroyo y González de Cossio, José Antonio de Oro y Cossio Terán, y Miguel A. Escudero y Cossio Terán, y del R.P. Pedro Nolasco Stefani y Millán.¹⁰ En una de sus fundaciones, el Arcediano Rodríguez de Figueroa se nombró a sí mismo por Patrono de una Capellanía de \$1.500, estableciendo que para después de sus días nombraba por Patrono a su hermano Domingo Rodríguez de Figueroa; designando para Capellán al Dr. Francisco de Cosio y Therán, y dejando como condición expresa que "...ordenándose de sacerdote mi sobrino Juan Jacinto de Cossio la ha de servir dicha Capellanía", pero "...estando en estado de ordenes sacros los hijos de Doña Ana Margarita de Cosio y Therán [mujer del Tte. Francisco Escudero] gocen el beneficio de antelación en esta capellanía a los demás parientes".¹¹ A su vez, el Dr. Francisco Cossio Terán y Figueroa era tío carnal de los Doctores Miguel A. Escudero y José Antonio de Oro;¹² el Dr. José Antonio de Oro era tío del Dr. Bernardo de la Colina y Oro;¹³ y el Dr. Vicente Arroyo tío del Lic. José Denis y Giles Cossio Terán.¹⁴ Cabe destacar, que el caso opuesto al del Arcediano Rodríguez de Figueroa fué el del Canónigo Juan Baltasar Maciel,¹⁵ quien en su carácter de albacea de la poderosa hacendada María Josefa Bazurco y Herrera,¹⁶ dotó media docena de capellanías a favor de sacerdotes que no tuvieron relación de parentesco alguna con su persona. Las relaciones de parentesco también eran manipuladas por las autoridades de las ordenes religiosas a los efectos de mejorar su posición relativa en el mercado del crédito eclesiástico. Cuando el Cap. Juan Ignacio de Elía pidió a censo \$325 a la Orden Dominicana, el Prior le contestó que sólo accedería si tomaba igualmente a censo \$746 de los bienes concursados de su cuñado, el finado terciario dominico Pedro Mártir García de Zúñiga, en cuyo concurso de acreedores le fué dada a la Orden el último lugar.¹⁷

El clero secular del interior.

También en el clero secular del interior se registró un intenso nepotismo. Efectivamente, lo que hemos podido observar en los libros de Capellanías del Arzobispado de Córdoba y en fuentes secundarias es lo mismo que hemos observado en Buenos Aires, una estrecha relación de parentesco entre algunos eclesiásticos fundadores de capellanías y sus beneficiarios. En Córdoba, el Maestro Bernardo de Reyna Vera fundó en 1699 la Capellanía de Sinsacate a favor de su nieto el Lic. Fernando de Herrera y Velazco;¹⁸ y el Pbro. Dr. José Antonio Moyano Cabrera fundó en 1784 una capellanía denominada de Santa Gertrudis, de \$1.000, sobre unas casas en la ciudad de Córdoba, a favor de su sobrino carnal el Pbro. Leopoldo de Allende Moyano;¹⁹ y el Chantre de la Catedral y ex-Rector del Seminario, Maestro Antonio Suárez de Cabrera, fundó dos capellanías legas, la una para su sobrino-nieto Domingo Coarazas, que a su fallecimiento recayó en su hermano Juan Gualberto Coarazas, y la otra para Juan Gualberto mismo, Rector del Colegio de Loreto, que finalmente legó a los herederos de

su primo Antonio de la Quintana y Sebreros.²⁰

En La Rioja, el Pbro. Miguel del Moral, quien fuera Arcediano de la Catedral de Córdoba, funda en 1803 una capellanía a favor de su sobrino carnal el Mro. Julián Carmona;²¹ y en 1812 el Pbro. Domingo Dávila y Mercado funda una capellanía a favor del Pbro. José Andrés del Moral y Dávila.²² Y en San Juan, Francisco Fernández de Maradona,²³ y José Ortiz de Santibáñez solicitaron en 1782 para sus hijos los Presbíteros José Clemente Fernández de Maradona y Angel Ortiz la capellanía de Santa Bárbara, fundada en 1753 por Don Juan Calzada Alvarez de Miranda y su esposa Bernardina Toranzos y Montenegro,²⁴ vacante por muerte de su primer capellán el Pbro. Francisco Xavier Arias y Jofré, alegando ser sus hijos respectivamente sobrino y sobrino nieto de los instituyentes de la capellanía, Doña Bernardina Toranzos y Montenegro y su marido Don Juan Calzada Alvarez de Miranda, quienes la habían fundado en 1753.²⁵ Por ende, el clero secular sanjuanino quedó dominado por clanes patricios. El Pbro. José Manuel Lima y Cano de Carbajal, heredero de la capellanía fundada en 1785 por Francisco Lima,²⁶ era tío del Pbro. José Manuel Videla Lima.²⁷ Y el R.P. Gabriel José Ignacio de Guardiola y Navarro era tío del Pbro. Pedro Pablo Rufino y Guardiola.²⁸ Asimismo, la familia Hurtado estaba profundamente extendida en el clero Sanjuanino. María Ignacia Hurtado, mujer del peninsular Juan de Castro, era madre del Pbro. José María Castro Hurtado.²⁹ María Antonia Hurtado, mujer de Domingo Flores, era madre de Fr. Manuel Flores Hurtado O.P.³⁰ Y María Teresa Hurtado, mujer de José Videla y Morales de Albornóz, era madre de Fr. Blas Videla O.P., Lector en San Juan.³¹

El reclutamiento y promoción dentro del clero regular.

El reclutamiento y promoción dentro del clero regular estaba también fuertemente condicionado por el monto y cantidad de las capellanías en juego y la extracción familiar de los miembros de las respectivas ordenes religiosas. En Cuyo, las ordenes religiosas estaban dominados por clanes patricios estrechamente vinculados a la vitivinicultura y a la exportación de caldos al Alto Perú y el Litoral. Es preciso recordar, que para este comercio a larga distancia, los miembros del clero solían estar exentos del pago de la sisa.³² En San Juan, por ejemplo, Don Pedro Toranzos y Montenegro solicitó para su nieto Fr. Tomás José Jofré y Toranzos O.P. la misma capellanía de Santa Bárbara citada anteriormente.³³ En cuanto a la composición familiar, la Orden de San Agustín estaba compuesta mayoritariamente por el clan familiar de los Mallea, y la Orden Dominica por el clan de los Albarracín. Los frailes Miguel Albarracín Balmaceda, O.P. y José Justo Albarracín Domínguez O.P. eran tíos carnales de Fr. José Francisco Albarracín Irrazábal y del R.P. Anselmo Remigio Albarracín Irrazábal, y tíos abuelos de Fr. Juan Pascual Albarracín y Fray Justo Santa María de Oro y Albarracín.³⁴

Los casos de ilegitimidad, mestizaje y bastardía.

Amén de los casos de nepotismo, al alto clero lo abrumaban los casos de ilegitimidad, mestizaje y bastardía. Como en la América hispana de mediados del siglo XVIII --debido a la escasez de clérigos-- los exámenes de Limpieza de Sangre habían perdido rigor, la corona debió idear dispensas o excusas legales para obviar los casos de ilegitimidad, arguyendo por información de testigos la nobleza y limpieza de padres o abuelos.³⁵ Más aún, el papado mismo había autorizado ya en el siglo XVI la dispensa o eximición de la legitimidad a los curas mestizos.³⁶ Por el proceso de Limpieza de Sangre cualquier aspirante a cura podía 'aclararse' legalmente, es decir, cambiar una línea de sangre o status racial por otra.³⁷ Mientras hubiere testigos dispuestos a sostener dicho cambio ninguna autoridad eclesiástica se podía atrever a desafiar la voluntad del aspirante a un mejor status.³⁸

En un padrón compuesto en 1777, de un centenar y medio de eclesiásticos seculares de Tucumán, publicado por Larrouy (1927), el Obispo del Tucumán Juan Manuel Moscoso declaró que del Deán Don Antonio González Pabón "...no consta la legitimidad del nacimiento", y que de Pedro de Arias, Francisco Sánchez Bernaldel y José Rosa de Córdoba constaba eran hijos naturales, el primero "hijo de padres nobles" y el último "...de genio inquieto y sedicioso y por apagar el incendio que promovió en Córdoba le destiné de Teniente Cura en la Doctrina de Río Cuarto".³⁹ El Mro. Gabriel de Bracamonte, por ser hijo ilegítimo, necesitó en 1752, en Córdoba, para alcanzar las ordenes de Epístola, de una dispensación especial, consistente de una "información bastante de ser tal expósito". Si bien por ser expósito Bracamonte no podía requerir Información de Limpieza de Sangre, si de las declaraciones de los testigos examinados en su Información de orfandad "...resultare noticia de quienes son o fueren sus padres, sean o no de matrimonio o fuera de él, recibiréis información de la limpieza de los dichos sus Padres y abuelos paternos y maternos".⁴⁰ En Buenos Aires, la prueba de que los Exámenes de Limpieza de Sangre eran relativos, lo ofrece el Gobernador Andonaegui, en el caso del Arcediano Juan Antonio Espinosa, del cual advirtió en 1755 "...alguna nota de menos limpieza en sus Progenitores".⁴¹ Cuando con motivo de proveerse el Curato de la Catedral de Córdoba con Fr. José Ignacio de Mendiola, y luego de haber enrostrado el Dr. José Ignacio Ascasubi al Dr. Bernabé Echenique el suicidio de su padre, este último estigmatizó al Dr. Ascasubi como "descendiente de mulata por línea materna".⁴² Y cuando en 1809, el Obispo Nicolás Videla del Pino, de origen cuyano, dirige un oficio al Virrey del Río de la Plata Baltasar Hidalgo de Cisneros impugnando la autoridad del Deán y Canónigo Dr. José Miguel de Castro,⁴³ para objetar su propio modo de actuar, aduce que este último era "...de una extracción oscurísima, siendo aquí público ser nieto de un mulato zapatero".⁴⁴

El caso de las Ordenes Terceras o Terciarias.

También las Ordenes Terceras o Terciarias estaban dominadas por clanes familiares. En Buenos Aires, a excepción de los Terciarios Betlemitas donde predominaban los peninsulares,⁴⁵ la Tercera Orden de San Francisco se destacó por ser la primera en incorporar a comienzos del siglo XVIII a sectores del patriciado porteño. La Tabla J-IV enumera alfabéticamente el centenar de miembros que integraron sus filas.⁴⁶ Muchos de entre ellos también integraron verdaderos clanes familiares. Las familias de los Cabrera y Bracamonte, Cruz, Fuente y Zeballos, García Ortiz y de la Rosa, Leiva y Roca Vergara, Navarro de Velazco, Ponce y Melo, y Ruiz Sancho de Bolaños pertenecieron a dicha Orden Terciaria. En algunos casos la endogamia Terciaria se combinaba con la afiliación a las mismas Ordenes religiosas. El matrimonio de Francisco Fernández de la Bárcena y Agustina Ruiz de Hinostroza contó con tres hijos frailes.⁴⁷ Paula de Gaete y Bazán de Tejada, viuda de Juan José de la Palma Lobatón, tuvo dos hijos curas y cuatro hijas monjas.⁴⁸ María Martínez de Aberastury y San Martín, viuda de Juan Rodríguez Peñalva y de Nicolás Barragán contó con dos hermanos frailes.⁴⁹ Sebastiana Zenarra y Esparza contó en su haber con dos hermanos frailes.⁵⁰ Y el matrimonio de Juan Francisco Churrua e Isabel de Rocha Colares contó con dos hijos frailes.⁵¹

La Tabla J-V nos brinda la nómina de los frailes franciscanos identificados en la obra de Fernández Burzaco. Posteriormente, a fines del siglo XVIII, la Tercera Orden de Santo Domingo desplazó de la hegemonía Terciaria a la Orden de San Francisco. En la orden Dominicana el peso de la inmigración peninsular fué llamativo. La Tabla J-VI enumera alfabéticamente los 407 miembros que integraron a fines del siglo XVIII las filas Terciarias de la Orden Predicadora, de los cuales 196 eran de origen porteño, y 64 de origen peninsular (26 de Galicia, 7 de Asturias, 8 de Castilla, 11 de Andalucía, 8 de Cataluña, y 4 de Santander). Si consideramos la localidad de origen de los padres de los Terciarios nacidos en Buenos Aires, la importancia de los Hermanos Terciarios de origen peninsular aumentaba considerablemente. De los 196 Terciarios Dominicos de origen porteño, 12 provenían de Galicia, 6 de

Portugal, 4 de Lugo, 3 de Sevilla y Valencia respectivamente, 2 de Guipúzcoa y 1 de Mallorca, Piamonte, Madrid, Bilbao, Burgos, Castilla, Aragón, Ecija, Génova, Pamplona y Andalucía, respectivamente. Muchos de entre ellos integraban verdaderos clanes familiares. María Teresa Barragán y Rodríguez de la Torre, mujer de Plácido Antonio Gallardo, fué Hermana Terciaria de Santo Domingo, así como su hija Francisca de Paula Gallardo, mujer de Gabriel Antonio de Castro.⁵² Gregorio Aráoz y su yerno el Cnel. Andrés Parra, y las familias Barceló, Cabrera Bracamonte, Castrelos y Sotuyo, Correa Lazcano, Duarte Serrano, González de Sosa y Almeyda, Guerra, Hidalgo, Mosqueira y Díaz, Olivera Sotomayor, Parodi y Dulce, Pequeño y González de Salas, Pizarro, Porra, Portela, Sendeza, y Veloso pertenecieron a dicha Orden Terciaria. En algunos casos la endogamia Terciaria se combinaba con la afiliación a las mismas Ordenes religiosas. Los tres hijos varones del matrimonio celebrado en 1760 entre el Capitán Pedro Giménez de Paz y la cordobesa Isabel de Acosta Espinosa fueron frailes Dominicos.⁵³ Las dos hermanas de José Julián Guerra resultaron ser monjas, una capuchina y la otra catalina.⁵⁴ La Tabla J-VII nos brinda la nómina de 40 frailes Domínicos identificados en la obra de Fernández Burzaco. Entre las demás ordenes religiosas también se dieron casos donde estaban presentes ciertos clanes familiares. Pero a diferencia de la Compañía de Jesús, en la Orden Mercedaria y su Cofradía, la del Rosario, se presentaba una pronunciada endogamia de familias patricias venidas a menos. En aquellos tiempos, el hijo de una familia patricia con vocación religiosa, pero que no tenía congrua para ingresar al clero secular, por lo general ingresaba al clero regular.⁵⁵ La Tabla J-VIII revela la nómina de 14 padres Jesuitas y la Tabla J-IX la de medio centenar de frailes Mercedarios.

Podemos concluir entonces, sobre la base del intenso y variado nepotismo comprobado en el Clero de fines del siglo XVIII, aquí relatados, que las estructuras de parentesco fueron en esta institución, de extrema relevancia, aunque finalmente no pudieran sobrevivir la tempestad revolucionaria

NOTAS

¹ Acerca del nepotismo en el clero, ver Michaud-Quantin, 1978, 86. Acerca del nepotismo en el clero inglés, ver Gibson, 1987, 1993. Para Gibson (1993), el debate sobre el nepotismo en la Iglesia ha engendrado puntos de vista opuestos. La interpretación tradicional lo visualiza como un rasgo de la corrupción y el abuso que asoló a la Iglesia en los años posteriores a la sucesión de la dinastía Hanoveriana de 1714. El punto de vista opuesto sugiere que el nepotismo no sólo sirvió una función específica, como lo hizo en el laicado; sino que le fué acordado legitimidad moral por los contemporáneos (Gibson, 1993, 180).

² ver asimismo los comentarios de Varón (1994) y Lavallé (1994).

³ Tiene su antecedente en el siglo XVII, en los Capítulos Conventuales de las Ordenes Religiosas, cuando se elegían peninsulares y criollos por mitades (Tibesar, 1955).

⁴ Auto de erección de la Catedral y Reales Cédulas del 1-IV-1774 y del 5-IX-1803 (Avella Cháfer [en adelante A-Ch], I, 21).

⁵ Altamira, 1949, 71; y A-Ch, 1983, I, 21.

⁶ hermano del Asesor de la Gobernación Victorino Rodríguez. Obtuvo por oposición el curato de Anejos en 1777 y el curato de La Punilla en 1780.

⁷ Altamira, 1949, 58, nota 38.

⁸ A-Ch, 1983, 54; y 119-120.

⁹ El nepotismo militar era escaso por carecer de congrua sustentación y cuando prevalecía lo era en la relación entre suegros y yernos.

¹⁰ Fernández de Burzaco [en adelante FB], I, 231; II, 143 y 173; III, 263; V, 381 y 408; IV, 343; y VI, 149; y A-Ch, 1983, 139, 157 y 205.

¹¹ AGN, Protocolos, Registro 3, año 1739, fs.114v.

¹² FB, V, 77 y 381; y A-Ch, 1983, 139.

¹³ A-Ch, I, 139 y 205.

¹⁴ FB, II, 214.

¹⁵ Bautizado en 1727, hijo del Maestre de Campo Manuel Maziél y de Rosa de Lacoizqueta (Crespo Naón, 1983, 72). Sobre su conocimiento del escritor e historiador Peruano Juan de Peralta y Barnuevo, ver Mariluz Urquijo, 1988, 186. María Josefa Bazurco, hermana del Obispo de Buenos Aires había depositado en Maziél "...una confianza ilimitada encargándole la administración de sus bienes y nombrándole albacea en su testamento" (Probst, 1946, 67).

¹⁶ hija del Capitán Francisco Bazurco y de Juana María de Herrera Labayén; y hermana del Obispo de Buenos Aires Dr. José Antonio Bazurco (FB, I, 252).

¹⁷ Mayo y Peire, 1991, 155.

¹⁸ Levaggi, 1992, 110.

¹⁹ Altamira, 1943, 166; y en el AAC, Expedientes de Ordenes, Leg. 24, t.I; y Libro de Capellanías, Leg.31, t.VIII (Microfilms 2738 y 5633, del Centro de Historia Familiar (CHF), perteneciente a la filial porteña de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que son a su vez copias de los microfilms existentes en la Genealogical Society of Salt Lake City, Utah, de la Granite Mountain Record, también de ahora en más identificado con las siglas CHF). Esta capellanía fué litigada por José María Bejarano, quien logró que el Dr. Gregorio Funes "...declarase el Patronato a mi favor consecuente con las disposiciones del fundador...mas la negra envidia no dejó de oponer obstáculos, saliendo al juicio una parte ilegítima, cual lo fué Don Dalmacio Allende, valido de la prepotencia, séquito y conexiones que disfrutaba en el Pueblo" (AGN, Tribunal-Civil, Leg. B-4).

²⁰ Altamira, 1943, 224.

²¹ AAC, Libros de Capellanías, Leg.31, t.XII (Microfilm 5625, del CHF).

²² AAC, Libros de Capellanías, Leg.31, t.XII (Microfilm 5625, del CHF).

²³ marido de Francisca Arias de Molina y Jofré.

²⁴ Verdaguer, 1931, I, 594, 602, y 626.

²⁵ Verdaguer, 1931, I, 594, 602 y 626.

²⁶ AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.VIII (Microfilm 5633, del CHF).

²⁷ Verdaguer, 1931, I, 636.

²⁸ Idem, I, 610.

²⁹ Idem, I, 598.

³⁰ Idem, I, 592.

³¹ Idem, I, 591.

³² Saguier, 1989, 290.

³³ Verdaguer, 1931, I, 626. En 1813, el Pbro. Vicente Atencio demandó a José María Echegaray y Toranzos, como apoderado de su hermano Manuel, ausente hacia más de quince años, la entrega de la capellanía de Santa Bárbara (AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.XII (Microfilm 5625, del CHF).

³⁴ Verdaguer, 1931, I, 434, 585 y 605.

³⁵ Córdova-Bello, 1975, 304, 307 y 308.

³⁶ Olaechea Labayén, 1975.

³⁷ En el plano civil este proceso se llevaba a cabo mediante las "gracias al sacar" (ver Cortés, 1978).

³⁸ Robinson, 1979, 284, nota 13.

³⁹ Larrouy, 1927, 362, 364 y 366.

⁴⁰ Archivo de la Arquidiócesis de Córdoba, Libro de Capellanías, Leg.31, t.II, correspondiente al Microfilm 2679, depositado en el Centro de Historia Familiar.

⁴¹ A-Ch, I, 108.

⁴² Altamira, 1943, 146.

⁴³ fué designado en 1784 Cura del curato de San Javier, en Traslasierra, y en 1794 fué reemplazado por el Dr. José Agustín Álvarez (Barrionuevo Imposti, 1949, 781).

⁴⁴ Acevedo, 1965, 457.

⁴⁵ ver Mayo (1982).

⁴⁶ FB, II, 185 y 204; III, 21, 35, 61, 101, 102, 123 y 148.

⁴⁷ FB, V, 433.

⁴⁸ Idem, V, 126.

⁴⁹ Idem, IV, 282.

⁵⁰ Idem, VI, 318.

⁵¹ Idem, II, 204.

⁵² FB, I, 225; III, 114; y II, 115.

⁵³ FB, III, 188.

⁵⁴ Idem, III, 287.

⁵⁵ Debo esta reflexión a mi colega Oscar Chamosa.

TOMO VIII

CAPITULO 4

El régimen capellánico y sus pautas hereditarias. La primogenitura y la varonía en el Río de la Plata. El Derecho de Retracto y el Régimen Capellánico.

(publicado en 1995 en *The Americas. A Quarterly Review of Inter-American Cultural History* [W. Bethesda, Maryland], v.LI, n.3, pp.369-392);

La naturaleza de la sociedad colonial fué en nuestra historiografía, desde fines del siglo XVIII, motivo de denodados conflictos. Concolorcorvo (1773), uno de los primeros viajeros en relatar sus impresiones del Río de la Plata, manifestó no saber que en esa región existiere mayorazgo alguno.¹ Casi cuarenta años más tarde, Azara (1809) fué el primer intelectual, conocedor del Río de la Plata, que repitiendo la afirmación de Concolorcorvo, dió fundamento a la posteriormente denominada excepcionalidad argentina, descubriendo la existencia de igualdad en el Río de la Plata.² Sostenía Azara, quien sin duda debía hallarse muy influído por la lectura de Jovellanos (1794),³ que entre los españoles (incluye los criollos blancos) radicados en esta región de la América Española reinaba "...la más perfecta igualdad, sin distinción de nobles ni de plebeyos. No se conocen entre ellos ni feudos, ni sustituciones ni mayorazgos".⁴ También Brackenridge (1927), un diplomático Norteamericano que escribió unas Memorias de Viaje por América del Sur, repite a Azara al afirmar que no había en Buenos Aires "...familias de viejo arraigo" y que "...la igualdad general dominante parecía atraer a los hombres a una unión más estrecha".⁵ Descartada la obvia desigualdad étnica entre blancos y miembros de las castas, marcada por la línea del color, la desigualdad entre los mismos españoles era desconocida tanto por Azara como por Brackenridge. ¿Era esta percepción real o estuvo encubierta por el auge mercantil vigente en los años que Azara y Brackenridge escribieron sus Memorias?. Responder a este interrogante es parte del trabajo de este escrito.

Las afirmaciones de Concolorcorvo, de Azara y de Brackenridge fueron repetidas indistintamente por un sinnúmero de historiadores, ensayistas y políticos, sin beneficio de inventario alguno. A mediados del siglo pasado, apremiados por la necesidad política de manipular ficciones orientadoras,⁶ Berro (1843-51), Mitre (1859) y Alberdi (1886) reiteraron los juicios de Azara y de Brackenridge.⁷ López (1883), sin citar a Azara, pero por intermedio de su padre, el político y poeta Vicente López y Planes,⁸ un testigo de la época, se refiere al grupo dirigente de Buenos Aires en tiempos del Virrey Vértiz, como a una clase de "enriquecidos", sugiriendo con esa generalizada caracterización lo opuesto a una aristocracia, que según el mismo López requería para su formación cuatro o cinco generaciones.⁹ Y a fines del siglo pasado, en plena efervescencia del positivismo y del progreso indefinido, Ramos Mexía (1887) llegó a afirmar, fundado en estas mismas expresiones de

Azara, consagradas por Mitre, López y Alberdi, que merced a que el núcleo de la sociedad Rioplatense fué siempre español, a diferencia de aquellas otras regiones donde hubo que conquistar civilizaciones indígenas como la Incásica, pudo en ella

"...subsistir la igualdad y dar a su sociabilidad ese carácter democrático e industrial que la caracteriza y que tanto diversifica la sociabilidad del país argentino de la del Perú y Chile".¹⁰

Pero la lectura que Mitre, Alberdi y Ramos Mexía no hicieron de Azara es cuando dos páginas más adelante, del mismo escrito, este último autor afirma que en dicha región de América "...muchas personas fundan durante su vida gran número de capellanías eclesiásticas o legas".¹¹ Estas fundaciones, agregaba Azara, "...aumentan [en su número] de manera, que tal carga será pronto inaguantable en aquel país".¹² La carga a que se refería Azara en este profético párrafo era en apariencia puramente financiera. Así como el mayorazgo era según Azara --fuertemente influido por el pensamiento fisiocrático-- un grave obstáculo para el desarrollo agrícola; las capellanías preanunciaban --por analogía-- los obstáculos económicos que significarían para el desarrollo urbano de Buenos Aires.¹³ No obstante esta reflexión, Azara eludió considerar explícitamente en ese extraviado párrafo la carga social que --para el naciente espíritu capitalista-- implicaría la desigualdad generada en la familia rioplatense por los mecanismos gentilicios y dinásticos,¹⁴ vigentes en la designación de los patronos capellánicos, en la aplicación de la legislación matrimonial (Real Pragmática),¹⁵ y en la vigencia del derecho de abolengo (tanteo,¹⁶ y retracto,¹⁷).

Pero es recién a comienzos de este siglo que se reinicia en Buenos Aires una lucha ideológica acerca de la herencia sociológica dejada en la América española por el régimen colonial, entre una corriente crítica hegemonizada primero por García (1900), seguida luego por Rivarola (1905, 1908), Justo (1915), Ingenieros (1918), y Varetto (1922), continuada a mediados de este siglo por Puiggrós (1940), Romero (1946), Bagú (1952) y Peña (1970); y otra corriente de pensamiento oficial liderada por el mismo Ramos Mexía (1887), y autores positivistas como Bunge (1903,1913) y Ayarragaray (1904,1920).

Esta lucha ideológica no cesó en la última post-guerra ni ha cesado aún en la historiografía Rioplatense.¹⁸ En un claro intento por desvirtuar la naturaleza patriarcal, racista, nepótica, clerical, señorial y estamental de la sociedad colonial rioplatense y desvalorizar una hipotética naturaleza radical de la Revolución de Mayo, tanto Palacio (1954,1965) como Zorraquín Becú (1961), aseguraron que los propósitos de los revolucionarios no fueron sociales ni económicos, sino eminentemente políticos. Palacio --fundado en López (1883), y en el testimonio de un funcionario de la corona (Miguel Ignacio Fernández) que no alcanzó a arraigarse-- se refirió a la elite colonial porteña con el desprecio de un "hidalgo" del interior. Ignorando la verdadera base material que sustentaba el prestigio social de su propio antecesor,¹⁹ Palacio caracterizó a esta elite como "aristocracia hortel", y a sus miembros como "...advenedizos en el orden del linaje y de la cultura", sugiriendo con ello, aunque desde una perspectiva ideológica distinta, el mismo igualitarismo que Azara y Brackenridge observaran.²⁰ En tanto que para Zorraquín, influido por Palacio, la Revolución no tuvo el aspecto de una lucha social entre clases diversas y opuestas --tesis sorprendentemente similar a lo que sostuvo antes Heisse (1951) para el caso Chileno-- pues los revolucionarios

"...ni querían perseguir a otras clases, ni aspiraban a implantar reformas fundamentales en el régimen de propiedad, el trabajo, o el comercio. Querían en cambio organizar un gobierno propio --lo cual tenía que conducir tarde o temprano a la independencia-- y orientar a ese gobierno conforme a las ideas que entonces predominaban universalmente".²¹

Romero (1946), Corona Baratech (1951), Mariluz Urquijo (1970) y Molina (1991), este último en forma póstuma, reiteraron las tesis de Azara y de Brackenridge.²² Mariluz Urquijo, sin citar a Azara, pero apoyado en Luque Colombres (1948), concluyó que en el actual territorio argentino, el número de mayorazgos fué aún más exiguo que en México y Chile.²³ Halperín Donghi (1979) es el primero en advertir lúcidamente lo erróneo del cuadro descripto.²⁴ El caso de Socolow (1978) es diferente, pues se contradice. Si bien por un lado Socolow afirma que las capellanías fueron utilizadas en Buenos Aires como sustitutos de los mayorazgos,²⁵ por otro lado niega en la misma obra que los comerciantes Porteños hubiesen establecido vinculaciones.²⁶ Finalmente, Mörner (1980,1989), sin citar a Halperín, llegó a afirmar, sobre la base de Azara, que el espíritu del capitalismo "...sin todo el recargo 'feudal'",²⁷ vió en la región Rioplatense previa a la revolución de Mayo, un campo propicio para su desarrollo, por el hecho de carecer en forma completa de mayorazgos.

No obstante estos argumentos, en la América Hispana, el proceso de diferenciación interna de las clases sociales, y el crecimiento de una burguesía, no habría podido desarrollarse debido principalmente a los obstáculos que le oponían elementos ideológicos e instituciones jurídicas, alimentados a mi criterio por concepciones patriarcales, raciales, clericales, señoriales y estamentales del poder político y social. El pasaje de patriciado a burguesía encontraba en el estado colonial límites difíciles de remontar, que comenzaron a superarse recién durante la crisis revolucionaria de comienzos del siglo pasado. Es nuestra hipótesis, entonces, que al igual que lo sustentado por Colmenares (1975) y Veracoechea (1975) para la Nueva Granada y Venezuela, y por Halperín Donghi (1979) para el Río de la Plata, y a diferencia de lo sostenido para esta última región por Zorraquín Becú (1961), Stoetzer (1966), Mörner (1980) y Chiaramonte (1982,1989), las frecuentes consideraciones acerca de la primogenitura, el grado, la línea sucesoria y el sexo, esgrimidas en los litigios por la sucesión de los Patronatos y las Capellanías, y por los retractos y tanteos, debieron haber contribuído a precipitar como reacción el fenómeno revolucionario. En ese sentido, nos proponemos en este trabajo analizar una serie de casos ocurridos en Buenos Aires y el interior del Virreinato del Río de la Plata, que por la repercusión que en el momento de producirse adquirieron, hoy debiéramos considerarlos ejemplos paradigmáticos, y factores coadyuvantes en la construcción de un imaginario colectivo que precipitó el fenómeno de la independencia. Una vez probado que la independencia fué para la mayoría de la elite criolla no sólo una derivación de la capitulación de la metrópoli frente a la invasión napoleónica sino también una derivación de las luchas internas intra-familiares la cuestión de las "fuentes ideológicas" de la Independencia adquieren un nuevo sentido, que es preciso investigar hoy en las fuentes documentales primarias inéditas existentes en los repertorios judiciales civiles y eclesiásticos de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Salta, Tarija y Sucre.²⁸

Amén de la animadversión contra la Corona y la Iglesia, provocada por el creciente endeudamiento generado por los censos y las capellanías, y la amenaza que se cernió sobre el clero criollo mismo por la aplicación de la Real Cédula de Consolidación de Vales Reales, motivos estudiados en otros trabajos de este autor,²⁹ la animosidad de los criollos segundones no clérigos, o de los clérigos de ordenes menores, o de aquellos sin congrua,³⁰ o de los descendientes clérigos de menor "calidad", antigüedad y proximidad con los fundadores de las capellanías, contra el Antiguo Régimen colonial, habría obedecido también a los innúmeros conflictos generados a causa de los mayorazgos implícitos en los patronatos capellanícos y en el derecho de abolengo (retracto y tanteo). Continuando estas reflexiones, nos preguntamos en este trabajo si en aquellas ciudades con un alto grado de penetración mercantil, que eran nudos del tráfico comercial a larga distancia, las estrictas cláusulas acerca de la sucesión de los patronatos de las capellanías legas, que privilegiaban a unas líneas o ramas familiares en detrimento de otras, a los hijos mayores en detrimento de los menores, a los hijos clérigos en detrimento de los hijos militares o de los letrados no clérigos, y a los varones en detrimento de las

mujeres, contribuyeron o no a generar un profundo resentimiento, a engendrar una creciente lucha interna, y a fortalecer un régimen político y social señorial, patrimonial, patriarcal, clerical, estamental y corporativo. Para ello hemos debido estudiar un par de centenares de litigios de dichos siglos, correspondientes a las series tribunalcias seculares y eclesiásticas, de los períodos colonial y nacional, depositados en el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires, y en el Archivo Histórico de Córdoba (AHC); y en los Libros de Capellanías del Archivo del Arzobispado de Córdoba (AAC).³¹ También nos hemos servido de la información histórico-genealógica que nos proveen que nos proveen diversos tratados,³² y los testamentos protocolizados en Buenos Aires.³³ Lamentablemente, el criminal incendio del Archivo de la Curia Arquidiocesana de Buenos Aires, acontecido en 1955, nos ha privado de invalores fondos judiciales eclesiásticos.³⁴ El intenso endeudamiento contraído en favor de la iglesia y de las ordenes religiosas a través de las capellanías,³⁵ totalizaron en Córdoba cerca de un centenar de fundaciones entre 1643 y 1884; en La Rioja quince; en San Juan media docena; y en Buenos Aires unas 757 fundaciones, registradas notarialmente entre 1600 y 1820.³⁶ Este endeudamiento se complementaba con el contraído a través de los censos (ambas instituciones estudiadas en otros trabajos de este autor), y con la afiliación religiosa a las Ordenes Terceras, lo cual reforzaba aún más el prestigio del deudor, esencialmente derivado de su patrimonio material.³⁷

El marco legal de las capellanías

Las capellanías o fundaciones capellánicas eran una forma puramente española de la vinculación de bienes, pudiendo ser las mismas laicales o eclesiásticas.³⁸ Las laicales, mercenarias o de sangre eran aquellas capellanías erigidas sin intervención de la autoridad eclesiástica, donde sus bienes se consideraban como propiedad familiar y conservaban la calidad de temporales, y en donde el patrono gozaba del usufructo de los bienes con cargo de pagar las misas o cumplir sus obligaciones, y el capellán era meramente depositario de los bienes de la misma.³⁹ Este tipo de capellanías reforzaban el prestigio familiar por cuanto su sucesión se regía por las leyes del mayorazgo (primogenitura), la varonía (patrilinealidad) y la Limpieza de Sangre (alcurnia y legitimidad), y sus frutos se aplicaban para la pensión exclusiva de parientes en la carrera eclesiástica. Los padres pudientes y solventes de hijos que contaban con vocación religiosa preferían que estos se incorporaran al clero secular y no al regular, porque de esa forma garantizaban que su familia pudiera controlar el patronato de las capellanías con que dotaban a aquellos. Por el contrario, las capellanías eclesiásticas o espirituales eran las erigidas por eclesiásticos y se consideraban como propiedad clerical.⁴⁰ Este tipo de capellanía, podía ser colativa o de patronato. Las colativas eran aquellas cuyos capellanes estaban librados a la elección del obispo; y las de patronato, aquellas cuyos patronos tenían el derecho activo de presentar, con anterioridad a la colación,⁴¹ los capellanes que debían servirla, y disfrutar o alimentarse de sus productos. Su rol era consolidar la honra de la Iglesia o de determinadas ordenes religiosas, cofradías o hermandades, por asignar sus réditos para mantener a un capellán que celebrara misas en memoria del alma del fundador. Pero según el Cardenal de Luca (1684), la sólo carga de decir misas no era una condición que las constituyera en sacerdotales.⁴²

En cuanto a la naturaleza del Patronato, hay quienes sostenían que cuando la capellanía era laical, el patronato también era laical, y que cuando era eclesiástica, el patronato dejaba de ser laical. El Dr. Vicente Anastasio de Echevarría replicó en 1857 afirmando que "...sea del carácter que fuese la institución, el Patronato siempre es cosa laical y no tiene que ver nada con que la capellanía sea eclesiástica o lega".⁴³ La capellanía lega o laical, a juzgar por la presentación hecha en 1784 por Joaquín Legal y Córdoba, a nombre de Julián Clemente Rodríguez,⁴⁴ en los autos contra su hermano carnal Pedro Alcántara Rodríguez,⁴⁵ era la única que podía reforzar el prestigio familiar y el "honor y

dignidad temporal", por guardarse en su sucesión el orden de los mayorazgos.⁴⁶ Asimismo, el patronato era un derecho adquirido, del cual no se podía desposeer a aquél a quien se lo hubiere granjeado, sin agravio del derecho de propiedad. Para privar a alguien de este derecho era preciso que hubiere "...incurrido al menos en culpa, que le haga indigno por aquella vez de presentar capellanes".⁴⁷ Luego que en 1836 quedó vacante la capellanía establecida por Francisco Rodríguez, albacea de Juana Rufina Silva, y Lorenzo Rodríguez Conde entró a ejercer los derechos de patrono, para cuatro años después, en 1840, tener que abandonar el país por razones políticas; su parienta Teresa González de Conde aprovechó su ausencia para usurpar el mismo, gozando desde entonces de sus beneficios.⁴⁸ Ocho años después, en 1848, regresado del exilio, Don Lorenzo entabló demanda judicial, de resultas de la cual el Juez Dr. Manuel Antonio Mansilla condenó a la usurpadora y lo reconoció a Don Lorenzo como Patrono.⁴⁹ En cuanto a la institución de los capellanes, para los Obispos era forzoso instituir a aquellos presentados por los Patronos y no a otros, so pena de nulidad.⁵⁰ Para postergar a un capellán presentado por un Patrono era de rigurosa justicia "...juzgar primero con conocimiento de causa y audiencia del patrono, sobre haber perdido el derecho que le concedía la fundadora".⁵¹

Cuando en una causa profana, como era el caso de una sucesión de bienes en que se hallaba afincada una capellanía lega, la participación de un Juez Eclesiástico --a juicio del Dr. Manuel C. Pizarro, fundado en las obras de Fr. Benito Feyjoo (1726-40) y del Conde de la Cañada (1793)-- ocasionaba "fuerza", y en tal caso les cabía a los perjudicados por la intervención eclesiástica el llamado Recurso de Fuerza.⁵² Por el contrario, en la capellanía eclesiástica, al "...aplicarse todos los frutos para la pensión de misas" y ser sus causas "propia y pías", y al no guardarse el orden de los mayorazgos por no "...admitirse mujeres, ni otras muchas personas estólicas e incapaces", se trataría de reforzar "...la honra de la Iglesia y de todo el estado eclesiástico",⁵³ y no les cabría por ende el Recurso de Fuerza.

En algunos casos, los fundadores hacían dos clases de llamamientos distinguiendo en la escritura de fundación los llamamientos de patronos de los llamamientos de capellanes. En Buenos Aires, en 1833, con motivo del testamento otorgado en el siglo XVIII por María Báez de Alpoín y Labayén, viuda del General Alonso de Arce y Arcos,⁵⁴ el Dr. Félix Ignacio Frías, a nombre del Dr. Estéban Agustín Gazcón,⁵⁵ en autos con Agustín Pinedo y Arce,⁵⁶ advirtió que la fundadora había hecho dos clases de llamamientos. Para el de patrono eligió y nombró en primer lugar a su marido el General Arce y Arcos, abuelo de Gazcón y de Pinedo, en segundo lugar a su hijo varón Felipe Santiago de Arce, y por falta de ambos a todos sus nietos. De modo que no podía caber duda que en falta de los dos primeros el Patronato debía corresponder a Agustín Pinedo como nieto mayor de la fundadora. Frías sostenía que faltando Don Alonso y Don Felipe Santiago de Arce, primeros Patronos, resultaba "...de la necesaria conexión que tenía la cláusula 9 con la 10, que el que fuese capellán sería Patrón, y el que Patrón capellán".⁵⁷ La cláusula 9 decía que

"...serán Patronos todos sus nietos, corriendo la escala hasta el último en la forma que a cada uno le corresponda, según la acción y derecho que irá declarado para graduación y goce de dha capellanía y Patronato",

y la cláusula 10 que "...fuese capellán en primer lugar preferido como dueño su nieto Joaquín Mariano Valdés,⁵⁸ y por su falta el primero que fuese de la Iglesia sucesor de sus tres hijos".⁵⁹ Es visto entonces que la graduación y goce señalado para el Patronato era la misma que la señalada para la capellanía, sin que hubiere facultad para dividir estos derechos en diversas personas. De manera que llegado el caso, como sucedió en esta fundación,

"...debió reputarse calidad indispensable para obtenerla la de ser eclesiástico; o según la carrera eclesiástica, sin que puedan gozarla los legos (variación sustancialísima que ha causado el auto en que se declaró que no hacía fuerza el discreto Provisor) es absolutamente incuestionable que el que tiene derecho a suceder al primer Capellán nombrado Don Joaquín [Valdés], lo tiene también al Patronato".⁶⁰

Cuando el patronato de una capellanía quedaba vacante por muerte de su titular y extinción o agotamiento de la línea sucesoria llamada a detentarlo, se citaba o llamaba en términos perentorios a los que se creían con derecho al patronato, por medio de edictos, que en aquel entonces se fijaban en los atrios de las parroquias y en los parajes públicos. De no presentarse ningún postulante, el patronato era declarado vacante, recayendo en el Obispo el rol de patrono. En el caso de la capellanía de Santa Bárbara, fundada en San Juan en 1753 por Doña Bernardina Toranzos y Montenegro y su marido Don Juan Calzada Alvarez de Miranda, el Pbro. Vicente Atencio asimilaba en 1813 la ausencia prolongada a una renuncia tácita. Atencio alegaba contra la opinión de José María de Echegaray y Toranzos,⁶¹ que la actitud de su hermano el Pbro. Manuel de Echegaray, de

"...marcharse sin la venia de su prelado, no dejar disposición alguna sobre su beneficio, no sostituir en su oficio, ni autorizar a un hermano para este especial negocio y ocultarse de un modo que más versímil es su muerte que su existencia",⁶²

equivalía a dejar "...los indicios más claros de su resolución de separarse para siempre".⁶³ En caso de recaer el patronato de una capellanía en menores de edad, el Alférez de Dragones Tomás Alonso,⁶⁴ estableció en Buenos Aires, en la que él fundara, que mientras durara la minoridad cuidará el cumplimiento de sus cargas el representante que "...a la sazón sea el Cura Rector de la Parroquia de la Catedral".⁶⁵

El Derecho de Representación

La comparación entre los derechos a la sucesión de un mayorazgo o a una testamentaria y los derechos a la sucesión de un patronato capellánico, fué tratada extensamente por diversos juristas y canonistas. Para mejor tratar dicha comparación los juristas estudiaron las distintas variantes del derecho de representación. Este derecho era una ficción legal que producía el efecto de "...hacer entrar a los representantes en el lugar, grado y derechos del representado, es decir, en los derechos que el representante tendría si viviese",⁶⁶ y tenía también el efecto de hacer entrar "...a herederos lejanos del causante, que de otra manera serían excluidos, por los que ocupan grados más cercanos".⁶⁷ En las capellanías eclesiásticas, dice García (1618,1735), "...no se sucede por representación como en los Mayorazgos sino cada uno por propia persona".⁶⁸

Entre las producciones de los juristas criollos que analizaron el mismo tema, que hoy queremos rescatar del olvido, se hallan las de los Pbro. José Felipe Funes,⁶⁹ y José León Banegas,⁷⁰ y la del Fiscal de Cámara Ernesto Quesada. En efecto, para Funes, en un dictamen fechado en 1811, mientras que en las capellanías, en especial las capellanías eclesiásticas, no existía derecho de representación,⁷¹ y la proximidad del parentesco que regulaba o daba el derecho era con respecto al fundador; en los mayorazgos, y según algunos en las capellanías legas, había derecho de representación, y la inmediación del parentesco que decidía en juicio era respecto del último poseedor.⁷² En el pleito suscitado en Buenos Aires entre Gregoria Gázquez, viuda de Manuel Cueli, y Antonina Bojórquez, madre de Juan Cueli,⁷³ el apoderado de esta última, Pbro. José León Banegas, había alegado en 1851 que el derecho de representación, se daba sólo en las capellanías legas.⁷⁴ Y en el pleito suscitado en

1853 entre Josefa Muñoz de Arriola,⁷⁵ y su tía paterna Josefa Muñoz y Pérez,⁷⁶ sobre el patronato de la capellanía fundada en 1797 por Ignacia González Bautista,⁷⁷ la primera alegaba con el patrocinio del Dr. Correa que su tía olvidaba a su padre "...hermano de ella, y mayor en edad, y olvida el derecho de representación que me dá la Ley 40 de Toro, para entrar a ponerme en el lugar, sexo y grado de dicho mi finado padre".⁷⁸ Más luego, en la demanda entablada por Petrona F. Echenagucía,⁷⁹ por el patronato de la capellanía fundada a comienzos del siglo XIX por Don Marcos Miguens,⁸⁰ el Fiscal de Cámara Ernesto Quesada ratificó la jurisprudencia sentada por Funes y Banegas emitiendo un dictámen, por el cual los derechos sucesorios a un patronato capellánico no pueden equipararse de modo absoluto con los derechos a una testamentaria o a un mayorazgo.⁸¹ Mientras que esta última

"...implica la transmisión de todos los derechos activos y pasivos de una persona muerta a la persona sobreviviente llamada por la ley o por el testador a recibirlos, donde la personalidad del muerto desaparece por completo y su caudal ingresa y hace parte de aquel que lo sucede",⁸²

aquel otro, el patronato capellánico, estaba constituida por

"...un simple derecho que se trasmite, sobre el cual pesa una carga, y donde la personalidad del instituyente no desaparece por completo y su voluntad subsiste siempre sobre su descendencia, cualquiera que sea la línea y el grado de ésta, a los efectos jurídicos del cumplimiento de la carga impuesta al Patrono: diríase un mandante perpetuo cuyas ordenes acata el mandatario a través de los tiempos y de las generaciones".⁸³

Esta sentencia fué revocada en 1907 por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, con la sólo disidencia del Dr. Luis Méndez Paz.⁸⁴

En la elección del Patrono era donde las fundaciones capellánicas se prestaban a las discusiones más agrias, motivo central de este trabajo. En Córdoba, la crisis desatada en su Cabildo en 1766 obedeció en parte a una causa judicial por el Patronato de una Capellanía de \$2.100 de principal, que servía Fr. Pablo de Allende, afincados en unas casas propiedad de su hermano Santiago de Allende y Loza, y cuyo patronato retenía Catalina de Arrascaeta.⁸⁵ Dicho patronato lo hubo Arrascaeta por herencia de Francisco de las Casas y Manuela Soberón y Salas, sus suegros, y había sido fundado en 1737 por Doña Josefa de Salas, abuela de Manuela Soberón.⁸⁶ Fallecido, Fr. Pablo de Allende, la nueva patrona de la capellanía María Ana Rodríguez, mujer de Francisco Soberon, reclamó la capellanía para su nieto José Ignacio de las Casas.⁸⁷ Pero como el General Tomás de Allende, como apoderado de Santiago Allende, había vendido las casas sobre las cuales estaba impuesta la capellanía, su Patrona insistió hasta lograr el reembolso de la suma correspondiente.⁸⁸ A mediados del siglo XVIII, el Pbro. Juan Ignacio Rodríguez,⁸⁹ debió litigar con el Director de la Real Renta de Tabaco y Naipes de Córdoba Coronel Manuel de Castro,⁹⁰ por el patronato de la capellanía fundada por su bisabuela Gerónima Tineo de Peñaloza, viuda de Diego Gutiérrez Gallegos, sobre la hacienda llamada la Chacra Grande, ubicada en La Rioja.⁹¹ Doña Gerónima llamaba para patronos de dicha capellanía "...a sus consanguíneos desde el primer grado hasta el último procediendo por todos grados y líneas hasta dar con el más ínfimo según la ley de sucesión".⁹² Sólo una vez extinguida su estirpe, la fundadora concedía a los Obispos la facultad "...para que nombren Patronos ad libitum".⁹³ Según Rodríguez, la naturaleza de esta cláusula inhibía a Castro para ser Patrono de dicha capellanía "...por no ser consanguíneo de la fundadora".⁹⁴ La capellanía fundada en 1798 por el Pbro. Ignacio Acosta,⁹⁵ fué reclamada en 1844 en los estrados de Buenos Aires por su sobrino el Pbro. Juan Antonio Martínez.⁹⁶ En Buenos Aires, con posterioridad a la Asamblea de 1813 y a las reformas eclesiásticas de Rivadavia,

en 1836, Anastasia Franco de la Isla litigó con el Dr. Matías Vicente Oliden,⁹⁷ por el patronato de una capellanía.⁹⁸ Y a fines de siglo, en 1881, Emma Artayeta Hurtado,⁹⁹ mujer de Mariano Vásquez, litigó con su hermana Julia acerca del patronato de la capellanía fundada en 1789 por el Dr. José Mariano Jaunzaras y Escobar.¹⁰⁰ Este desalmado pleito fué un triste incidente de los autos testamentarios seguidos para esclarecer el derecho de patronato que se litigaba entre las señoras de Escobar Arzac y la de Artayeta.¹⁰¹

Cuando en la elección de los Patronos de las capellanías laicales debían aplicarse las leyes del Mayorazgo, determinando el grado, la línea y el sexo del eventual sucesor del mismo, las discusiones se volvían aún más agrias. En Buenos Aires, en un litigio por cinco capellanías legas fundadas en 1773 por Domingo Basavilbaso,¹⁰² por valor de \$11.200, entre sus nietos José Ramón de Basavilbaso y Justa Ramona de Basavilbaso, mujer de Miguel de Azcuénaga, el Juez en Primera Instancia Dr. Bartolomé Cueto declaró el Patronato en favor del bisnieto José Miguel de Azcuénaga, hijo de Doña Justa. Pero el Dr. J. Marcos Dongo, abogado de José Ramón, sostuvo en 1824, en la apelación contra la sentencia de primera instancia, fundado en las doctrinas de Rojas de Almansa (1755),¹⁰³ y Molina (1592,1622),¹⁰⁴ que dicha sentencia destruía el vínculo de agnación,¹⁰⁵ y confundía la verdadera agnación establecida en la primer parte del llamamiento del fundador con la sucesión regular o cognación,¹⁰⁶ establecida en la segunda parte del mismo. El vínculo agnaticio excluía

"...según las leyes vigentes, a toda hembra y sus descendientes de la sucesión,...porque la agnación se considera perpetua por derecho, y como la hembra no solo es el fin de ella, sino que por su medio la convierte en cognación, de ay es su justa exclusión y la de sus descendientes, porque el causado, no puede tener más virtud que el causante".¹⁰⁷

A su vez el Dr. Bernardo Vélez, abogado de Miguel de Azcuénaga, sostuvo, fundado en De Roza, Mieres (1533), Rojón, Pitón, el Cardenal de Luca (1684), Ciriaco, Covarrubias (1568,1574), Valenzuela (1607), Vela, Mascardi (1637), Graciano, Castillo de Bovadilla (1597,1649) y Rodríguez de Alvarado (1578), que en el Patronato de la misma "...si se ha de entender conforme al derecho...y al modo ordenatorio de suceder en los mayorazgos...a falta de varón suceden las hembras",¹⁰⁸ y que por lo tanto

"...es necesario considerar estos segundos llamamientos en sentido compuesto con los primeros, porque todos se hallan en una misma cláusula, y mucho más porque en aquellos se hacen referencias a estos",¹⁰⁹

por lo que su mujer Doña Justa Ramona Basavilbaso y Garfias debió suceder a su padre Don Manuel Basavilbaso. En la capellanía fundada por José y Constanza González Cabezas, a nombre de su padre natural Domingo González Cabezas,¹¹⁰ el Pbro. Juan Tomás Rodríguez, aseveraba en 1784 ser hijo de Pedro Alcántara Rodríguez,¹¹¹ un bisnieto de Cabezas, en cuyo caso era "...incontrovertible su preferencia a la pía memoria por deberse observar en esta sucesión el orden de los mayorazgos".¹¹² También Don Ambrosio del Casal y Sanabria, hijo de Don Pedro del Casal y nieto de Pedro del Casal y Sanabria,¹¹³ compareció en 1795 ante el Alcalde de segundo voto y dijo que conforme al testamento instituido por Ana del Casal y Sanabria,¹¹⁴ a comienzos del siglo XVIII, se designó por su albacea a su pariente el Deán de la Catedral de Buenos Aires Francisco de los Ríos y Gutiérrez,¹¹⁵ para que fundara dos capellanías laicas destinadas para clérigos --entendiéndose por estos generalmente a los seculares-- de dos mil pesos de principal cada una.¹¹⁶ Fundadas ambas capellanías en 1768, sobre las casas antigua y nueva de Nicolás de Acha y Juana Tirado, los patronos llamados a éstas lo fueron en el primer caso

los hijos y descendientes de sus legítimos hermanos Pedro y José del Casal y Sanabria,¹¹⁷ vecinos del Paraguay,

"...primero a los de la línea de Don Pedro que a los de la línea de Don José; y por su falta a los hijos y descendientes legítimos de la línea de mi prima hermana Doña Ana [Domínguez] Rabanal y Don Ignacio Bustillo Cevallos; y por la de estos a los hijos y descendientes legítimos de las líneas de mis primas hermanas Doña Francisca Rivarola y Don Pedro Arismendi, y de Doña Rosa Rivarola y Don Lázaro Umeres [y Basauri], vecinos de Santa Fé, entendiéndose primero los de la línea de dicha Doña Francisca que los de la de Doña Rosa".¹¹⁸

Para su puesta en práctica, el albacea estableció que los Patronos entrarán al goce de su Patronato

"...según su orden y clase, siempre el que fuere mayor, y en caso que el mayor fuere mujer, pase al varón aunque sea menor, porque mi mira es que en cada línea se conserve dicho Patronato con la preferencia del varón a la mujer".¹¹⁹

Un cuarto de siglo más tarde, en 1819, el Pbro. Juan Antonio Zamudio,¹²⁰ alegó contra Doña Juana Josefa de Echeverría y Ordóñez, viuda de Juan Estanislado de Zamudio,¹²¹ y su noveno hijo legítimo el Sargento Mayor Floro Zamudio, que el derecho al goce y pertenencia del patronato y capellanía de la buena memoria que había mandado fundar en 1772 su bisabuela Doña María de Arroyo y Ponce de León, viuda de Luis Antonio Home de Pessoa,¹²² le pertenecían a él como hijo legítimo de Ambrosio Zamudio, por ser "...su pariente más cercano en sangre y único sacerdote que hay en la familia".¹²³ Juan Antonio Zamudio demostró con prueba irrefragable ser hijo legítimo de Ambrosio Zamudio, hermano este legítimo de Juan Gregorio de Zamudio, generante de Don Estanislado, marido y padre de los contendores; y que Juan Gregorio y Ambrosio fueron hijos legítimos del Gobernador de Tucumán Juan de Zamudio y de María Josefa Home de Pessoa, hija esta a su vez de la fundadora María de Arroyo. Por la duodécima cláusula de su testamento, María de Arroyo ordenaba a su hija Catalina Home de Pessoa, que del remanente del quinto se impusiere una capellanía.

La Sucesión de los Beneficios

El orden de preferencia en la sucesión de los patronatos recaía por lo general en los varones (patrilinealidad), por cuanto las mujeres poseían el privilegio de ser las beneficiarias --al momento del matrimonio o el ingreso a un convento-- de las llamadas cartas dotalas. De cualquier modo se dieron numerosos casos en que la primogenitura de las capellanías recayera en mujeres (matrilinealidad). Según González Ruiz, podía darse el caso que en los llamamientos se ordenara alternar en el goce de una capellanía a diferentes líneas de una misma familia.¹²⁴ La capellanía fundada en 1827 por Elena de Oro y Cossio Terán,¹²⁵ viuda de Juan Vázquez, de \$800 pesos corrientes, era para que sirvieran de congrua alimenticia o sustentación de su sobrino el Dr. Bernardo José de la Colina y Oro,¹²⁶ pero para el caso de su fallecimiento ordenó que recayera el Patronato de la misma, así como los réditos, es decir la capellanía, en las seis hijas mujeres del matrimonio de Manuel Vicente de la Colina y su hermana Isabel de Oro, por el orden de su nacimiento y mayor edad,

"...y en defecto de estas pasará el Patronato a los descendientes dellas siendo siempre preferidas las mujeres a los varones a no ser que estos sean clérigos ordenados in sacris y en defecto de toda esta familia pasará en iguales términos a los descendientes de mis hermanos Miguel y Diego de Oro".¹²⁷

En la capellanía fundada a comienzos del siglo XIX por el Alférez de Dragones Tomás Alonso,¹²⁸ su sobrina política María Josefa Sosa y Marín declaró en 1823 que por la cláusula sexta del testamento debía entenderse que entrarán al goce del patronato

"...las hijas mujeres de la referida Doña Zandalia [Dorna], como sobrinas políticas de la mujer del testador Da. Francisca Marín y en defecto desta todos los parientes más inmediatos de dicha Sra. prefiriendo siempre las mujeres a los varones".¹²⁹

De manera tal que debía entenderse

"...que el primer Patrono de la expresada capellanía debe ser y es la otorgante Doña María Josefa Sosa y Marín, que a esta ha de seguir Da. María Cirila Sosa y Marín: por falta desta recaerá en Da. Zandalia Dorna Sosa y Marín, por defecto desta en Da. Juana Gualberta Sosa y Casado".¹³⁰

En el dictámen acerca del Patronato de la Capellanía fundada por Juan Agustín Cueli, el Fiscal aclaraba en 1853 que el Fundador de la Capellanía no había expresado, en la cláusula institutiva de ella, "... si el descendiente llamado a su goce debe serlo de línea masculina o femenina".¹³¹ El Pbro. Cayetano Cires y Cueli agregaba que dicha cláusula "...llama promiscuamente a unos y otros sin ninguna distinción a este respecto".¹³² Pero la parte contraria insistía que Cires "...no era pariente más cercano por la línea de Cueli, que es la de varón".¹³³ Pero según Cires, este era un craso error, "...por que en la línea de Cueli entran todos sus descendientes sean varones o hembras, y los hijos de estas, como descendientes de Cueli, forman con los hijos de varones una misma línea".¹³⁴ Cires sostenía que la cláusula testamentaria de su abuelo, institutiva de dicha capellanía, llamaba al goce de ella a cualquiera de sus hijos que se dedicase a la Iglesia "...siguiéndose según sus edades y en defecto de estos a los parientes más cercanos por la línea de Cueli".¹³⁵ Angustiado por el cuestionamiento de la parte contraria, Cires llegó a preguntarse

"...¿soy yo excluído del llamamiento general que hace dicha cláusula a sus hijos y descendientes? Claro es que no; que soy incluso en ella. Es así que solo lo son los consanguíneos o procedentes por la línea de Cueli; luego yo pertenezco a dicha línea, y procedo de ella, siendo nada menos que nieto de Juan Agustín Cueli fundador, segunda rama de esta raíz, y tronco común, y un punto segundo de la línea que nace de Cueli, y se llama de Cueli".¹³⁶

En otros casos no se hacía lugar al sexo, ni a la generación, ni a su derivación, y se nombraba en cambio a personas específicas previamente señaladas en el testamento. Ello daba lugar a la discusión acerca de si había o no líneas sucesorias que respetar. En la capellanía fundada en 1772 por Doña María de Arroyo y Ponce de León, viuda de Luis Antonio Home de Pessoa, la hija y albacea Catalina Home Pessoa nombró por patrono de la misma en primer lugar a su misma persona, sin hacer lugar a "...su generación, ni derivación", por cuanto por su fallecimiento llama en segundo lugar a su segundo albacea, que lo fué Juan Gregorio Zamudio.¹³⁷ De igual forma, sin que tenga derecho alguno la legítima descendencia de Juan Gregorio, manda que muerto éste, pase el patronato a su tercer nieto y albacea, cual lo fué el Dr. Pedro Zamudio. Por cuanto la fundadora "...no designa generaciones, sino llama expresamente a personas señaladas", razón por la cual, para el Dr. Miguel García de la Huerta,¹³⁸ en su alegato fechado en 1816, "...no hay ni puede haber líneas y mucho menos posesorias y privilegiadas".¹³⁹ En la capellanía fundada en 1793 por el Dr. Diego Estanislao de Zavaleta e Indá,¹⁴⁰ se designó por primer Patrono a su hermana María Josefa de Zavaleta, por segundo Patrono a su hermano Clemente Zavaleta, y por terceros a los legítimos descendientes de su prima hermana carnal

María Magdalena de Solá e Indá, mujer de Ramón de Anchoris.¹⁴¹ Pero un siglo después, en 1870, Victoria Gutiérrez Zavaleta,¹⁴² suscitó un litigio por el orden de descendencia de dicho patronato con el Dr. Benajmín Zavaleta, hijo de Clemente Zavaleta, recayendo el fallo del Juez Dr. Casares en favor de este último.¹⁴³

Cuando un fundador de capellanía laical elegía para la sucesión de la misma a una línea sucesoria específica, esta debía agotarse o extinguirse antes de pasar su sucesión a otra línea. En la capellanía mandada fundar en Córdoba, en 1736, por Francisco Gerónimo de la Fuente,¹⁴⁴ su fundador estableció que los descendientes de sus tías maternas Manuela y Antonia Luján de Medina solo habrían de entrar al beneficio "...en caso de que la descendencia de la dicha mi hermana [Josefa de la Fuente] se acaue del todo, de suerte que no quede barón ni hembra de ella".¹⁴⁵ De igual forma, en la capellanía mandada fundar en Mendoza en 1738 por el General Manuel Zapata de Mayorga,¹⁴⁶ y cuestionada por Juan Manuel Paiva,¹⁴⁷ el bisnieto del primero, Pbro. José Lorenzo Güiráldez y Zapata,¹⁴⁸ alegaba que

"...de nada le sirve a Paiva que sus hijos estén en el mismo grado que yo estoy porque el instrumento de fundación no llama a los descendientes de Don Ramón [Zapata] y no pueden entrar estos a gozar de la capellanía y patronatos mientras exista un solo descendiente de Don Ignacio [Zapata], aunque este estuviese en el último grado de parentesco de su línea y aquellos en el primero de la suia".¹⁴⁹

La exclusión sufrida por Paiva y los descendientes de Don Ramón, no debía --según lo expresaba Güiráldez-- formar agravio porque a Manuel Zapata y Cecilia Pintos, como fundadores, les correspondía

"...escoger la línea que quisieren para las sucesiones del beneficio eligiendo si hubiesen querido la línea de mujer sin agravio de la de los varones, como también pudieran haber dexado determinado las de los extraños sin quexa ni derecho alguno de los propios hijos".¹⁵⁰

La conversión de una fundación capellánica de eclesiástica a laical afectaba el orden sucesorio de sus patronos y capellanes. Había quienes sostenían que producida dicha conversión las fundaciones entraban a regirse por la ley de los mayorazgos. En el pleito suscitado por la capellanía fundada por María Báez de Alpoin y Labayén, viuda del General Alonso de Arce y Arcos, a la decisión del Tribunal que adjudicó en 1833 los derechos del Patronato al nieto mayor Don Agustín Pinedo y Arce, y el goce de la capellanía al bisnieto Juan Pinedo, el Dr. Félix Ignacio Frías, apoderado del Dr. Estéban Agustín Gazcón, alegaba

"...¿no es cierto que una vez convertida en laical la fundación, las sucesiones han de reglarse por los Mayorazgos; que el primer llamado al goce de la fundación es el que hace cabeza y forma la línea actual y efectiva hasta el infinito: que no puede hacerse el tránsito de una línea a otra, sin quebrantar las leyes y cometer una injusticia horrible".¹⁵¹

No es cierto, insistía Frías,

"...que el primer llamado por la fundadora el único que ha poseído y disfrutado la capellanía y a quien se le debe tener y clasificar por cabeza de la línea actual y efectiva en el supuesto de laical ha sido Don Joaquín Mariano Valdés, hermano uterino de Gazcón, nieto de la fundadora, elegido y nombrado con preferencia y predilección a Don Agustín Pinedo, nieto igualmente que vivía entonces, que era de una edad o poco mayor que Don Joaquín que andaban juntos en la

Escuela y estudios, pero que no le mereció igual cariño y preferencia a la abuela, o por que ya entonces manifestaba inclinaciones militares, o por otros principios?".¹⁵²

Porqué principio, o cual era la razón, se preguntaba entonces Frías, para privar a Gazcón del goce de la capellanía

"...arrancándola de la línea efectiva actual y trasladándola a otra diversa; postergando al más inmediato del último poseedor, mayor en edad, y con consideraciones no despreciables para trasladarla a otra línea distinta, no estando concluída la poseedora, y a otra persona mucho mas remota y distante, tanto de la fundadora, cuatno del último poseedor, como lo es Dn Juan Pinedo?".¹⁵³

Cuando el patrono era un clérigo secular, y por su fallecimiento se extinguía su línea sucesoria, el patronato solía pasar a un sobrino. En la capellanía fundada en Buenos Aires en 1732 por Eusebio Espinosa y María Martínez de Tirado,¹⁵⁴ de su tronco común se derivaban dos líneas sucesorias, la de Francisco y la de Bernardo Espinosa, ambos hermanos.¹⁵⁵ Según la cláusula quinta del testamento del último poseedor del patronato, Santiago Solano Espinosa, el primer patrono había sido Francisco Espinosa,¹⁵⁶ y el segundo Bernardo Espinosa; y por falta de este último el patronato pasó al hijo del primero, el Pbro. Juan Antonio Espinosa Zapata, entrando después la línea sucesoria de Doña María Espinosa, hermana de aquellos, en el caso de no haber línea de varón. Pero en la cláusula sexta del mismo testamento se observa que el Pbro. Juan Antonio Espinosa, quien poseyó el patronato, no lo pudo transmitir a su línea sucesoria, "...pues como era presbítero no podía haber o suponersele descendencia para que hubiera seguido el goce o posesión en ella".¹⁵⁷ De ahí entonces resultaba comprobado que el patronato tenía que pasar a la línea sucesoria preferida de Don Bernardo Espinosa; y como los hijos de éste eran el Pbro. Santiago Solano Espinosa y D. Baltasar Espinosa entró aquél en el goce de la capellanía. Extinguida también en él la línea sucesoria por ser presbítero, pasaba la herencia a Don Baltasar, y por su fallecimiento a sus hijos; de modo que siendo Don Máximo y Doña Hermenegilda Espinosa los únicos hijos, "...el goce no puede ser de otro sino de dicho D. Máximo".¹⁵⁸

En el método para asignar el orden de preferencia o prelación de los postulantes a capellanes que se presentaban en los concursos y litigios regían distintos criterios. Cuando el criterio que prevalecía era el del parentesco, regían las leyes del mayorazgo, a saber: a) la primogenitura, y b) la varonía. Para aclarar en sede eclesiástica las diversas sucesiones de los opositores a una capellanía, los Asesores y Fiscales Eclesiásticos estimaban conveniente, fundados en Castro (1765), entre otras medidas procesales: a) formar las genealogías; b) calificar las generaciones; y c) computar canónica o civilmente los grados de parentesco.¹⁵⁹ Las genealogías debían formarse por "...estirpe, tronco, o padre común, en quien primeramente se unen los colaterales"; y el cómputo de los grados de parentesco debía practicarse sobre la base "...que tantos grados distan estos entre sí, quantos el más remoto dista del tronco y estirpe".¹⁶⁰ No ya para alimentar vanidades, sino para justificar intereses muy concretos, diversos descendientes de fundadores de capellanías llegaron a dibujar frondosos árboles genealógicos de numerosas sucesiones para acreditar sus derechos a las mismas. En Córdoba, en 1791, los Dres. José Gabriel Echenique, Juan Gerónimo Moyano, Tadeo Salguero de Cabrera,¹⁶¹ y Leopoldo de Allende y Moyano, litigaron entre sí por la capellanía fundada en 1645 por Antonia de Cabrera,¹⁶² viuda de Miguel de Ardiles, llegando a dibujar en el expediente tres árboles de ocho sucesiones para probar sus respectivas conexiones con el fundador de Córdoba Gerónimo Luis de Cabrera.¹⁶³ En el litigio celebrado a instancias de los descendientes de Catalina Arrascaeta, por los derechos a la capellanía mandada fundar en 1763 por Pedro de Salas se llegó a dibujar en el expediente un árbol de diez sucesiones para probar su conexión con el fundador.¹⁶⁴ Asimismo, en Córdoba, en 1774, los primos

Pbros. Pedro Patricio Bazán y Pedraza,¹⁶⁵ y Juan Ignacio Rodríguez; y los Maestros José Tablado y Otáñez Bazán, y Luis Dávila Gutiérrez,¹⁶⁶ litigaron entre sí por la capellanía fundada en 1746 por su bisabuela Gerónima Tineo de Peñaloza, viuda de Diego Gutiérrez Gallegos.¹⁶⁷

En Buenos Aires, en 1781, el R.P. Felipe Reynal,¹⁶⁸ reclamó que la capellanía fundada cuarenta años atrás, en 1742, por su bisabuelo Andrés Dávila,¹⁶⁹ le fuera otorgada a él, en razón de llenar las condición de heredero.¹⁷⁰ Cuatro años después, en 1785, disputaron cuatro capellanías fundadas por Domingo González Cabezas, su nieto Julián Clemente Rodríguez,¹⁷¹ que era el patrono de las capellanías, y el sobrino carnal de este último el Pbro. Juan Tomás Rodríguez,¹⁷² dirimiéndose por un auto de enero de 1786 en que el Deán y el Cabildo Eclesiástico en sede vacante, como juez originario, adjudicó dos capellanías de a mil pesos cada una a Julián y otras dos que componían \$2.095 de principal a su sobrino Juan Tomás.¹⁷³ Siete años después, en 1793, Julián cedió y renunció en su sobrino dichas dos capellanías, quedando reunidos en éste el principal de cuatro capellanías, equivalente a \$4.095.¹⁷⁴ Otros quince años después, en 1809, Luis Antonio de Lahitte, marido de María Toribia de Elía,¹⁷⁵ siguió una instancia en la Curia Eclesiástica contra su cuñado Manuel José de Elía solicitando se declarase en favor de su hijo Juan José de Lahitte, el derecho al goce de una capellanía fundada por su tío abuelo político el Regidor Perpetuo Juan de Benito y González.¹⁷⁶ El Dr. Agustín Pío de Elía había sido el primer poseedor de la capellanía, merced a cuyos réditos había podido estudiar en la Universidad de Córdoba, habiendo pasado luego a su hermano Angel Mariano, quien también había estudiado en Córdoba, y de éste a sus otros hermanos Pedro José y José María, este último marido de Genara Warnes, viuda de su hermano mayor,¹⁷⁷ y finalmente de estos a su hermano menor Manuel José de Elía.¹⁷⁸ Y en 1821, a mérito del Auto del Juzgado se le otorgó el Patronato de una Capellanía laical, fundada en 1783 por el Dr. Juan Baltasar Maciel, albacea y fideicomisario de Doña María Josefa Basurco y Herrera,¹⁷⁹ primero a Fabían Aldao,¹⁸⁰ el cual la disfrutó hasta su fallecimiento, sucediéndole Don Matías, mayor entre los restantes hermanos,

"...premuertos ya Don Agustín y Don Francisco Antonio que le precedían, como Don Mariano, quien se halla establecido en el Reino de España, adonde pasó después de haber abdicado los derechos que aquí le podían corresponder".¹⁸¹

Muerto Don Matías en Agosto de 1820, le sobrevino Don Luis José Aldao, el sexto de los hermanos varones. En San Juan, Francisco Fernández de Maradona,¹⁸² y José Ortiz de Santibáñez solicitaron en 1782 para sus hijos los Presbíteros José Clemente Fernández de Maradona y Angel Ortiz la capellanía de Santa Bárbara,¹⁸³ vacante por muerte de su primer capellán el Pbro. Francisco Xavier Arias y Jofré, alegando ser sus hijos respectivamente sobrino y sobrino nieto de los instituyentes de la capellanía.¹⁸⁴ La misma capellanía fué solicitada más luego por Don Pedro Toranzos y Montenegro para su nieto Fr. Tomás José Jofré y Toranzos O.P., alegando el mismo argumento.¹⁸⁵ Y los Pbros. José Domingo Videla,¹⁸⁶ Miguel Sánchez, Juan Gualberto Echegaray,¹⁸⁷ y Pedro Pascasio Albarracín,¹⁸⁸ y Fr. Remigio Albarracín,¹⁸⁹ litigaron entre sí en 1793 por la capellanía de Santa Lucía, también ubicada en San Juan, fundada por su tía y tía abuela, respectivamente, María Antonia Irrazábal,¹⁹⁰ viuda de Francisco Alfonso Pereyra.¹⁹¹ En Salta, en la fundación que impuso en 1769 por cláusula testamentaria Pedro Díaz de Loria, como albacea de Hernando Hervas, sobre la estancia y potreros de la Alemania, litigaron entre sí el Pbro. Dr. José Gabriel de Hoyos, el Pbro. Mro. José Domingo de Hoyos, el Dr. Mariano Gordaliza y Don Manuel Fernando Aramburú.¹⁹²

Y en la fundación que el Mro. Juan José Arias Renjel impuso en Salta a favor de su medio hermano seminarista Pedro Arias Torino, sobre el Potrero y Estancias que llamaban de la Silleta e

Incahuasi, que heredó de su padre el Cap. Tomás Arias Rengel,¹⁹³ litigaron entre sí a comienzos del siglo XIX el R.P. Hermenegildo Arias Renjel y Don Mateo Fernández, como apoderado de su hijo el Cura de Rosario de Lerma, Pbro. Isidro Fernández.¹⁹⁴ En Santa Fé, en la capellanía impuesta en 1808 por Juan Bautista Iguen a favor de Pedro José Crespo, sus titulares debieron litigar con Agustín de Yriondo por los réditos de la misma.¹⁹⁵ Y en el Alto Perú, y luego en la Real Audiencia de Lima, se siguió en 1780 un dilatado pleito entre Marcelina de las Cuentas y Sayas y el Lic. Fernando Valverde de Contreras y Ampuero sobre la propiedad del Patronato de las memorias pías, que por \$26.000 fundó en el siglo XVII el Deán de la Catedral de La Paz Don Pedro de las Cuentas y Valverde, tío abuelo de Marcelina.¹⁹⁶ El Patronato de dichas capellanías quedó en manos del Obispo de Popayán Don Basco de Valverde, con facultad de nombrar a quienes lo sucediesen, para lo cual nombró al Maestre de Campo y Caballero de Santiago Francisco de Balverde Contreras y Solórzano, y este a su vez nombró a sus cuatro hijos. Habiéndose extinguido la línea correspondiente a los dos primeros hijos José y Sebastián, pasó la sucesión a la línea que al momento del pleito se hizo primera, que era la de Francisca de Balverde y Contreras, quien tuvo por hijo mayor a Francisco de Balverde y Ampuero, quien casó en el Cuzco con María Teresa de Balverde y Costilla, padres del Lic. Fernando de Valverde y Ampuero.¹⁹⁷ De resultas del pleito, el Tribunal de Lima declaró que el Patronato pertenecía al Lic. Fernando Valverde y mandó que a Doña Marcelina se le enterasen \$3.000 con descuento de lo que había percibido.¹⁹⁸

En conclusión, del estudio del patronato de las capellanías vigentes en Buenos Aires y el interior, surge a las claras a lo largo de los siglos XVIII y XIX una inestabilidad muy pronunciada en la composición de su elite, y en la consistencia de status de sus miembros, que hacía del estigma del segundón y de las herederas mujeres, o de los descendientes clérigos de menor "calidad", antigüedad, y proximidad con los fundadores de las capellanías, un instrumento apasionante de lucha política. Para ello las elites hicieron uso y abuso de un instrumento envidiable, el derecho de representación. El derecho de representación, a diferencia del derecho de sucesión, revelaba no solo cargas o gravámenes sobre un derecho previo que, como el Patronato capellanico, se transmitía de generación en generación, materializando una concepción dinástica de la vida propia del Antiguo Régimen; sino también un fundador cuyos objetivos se perpetuaban en el tiempo y que por haber sido sus llamados o destinatarios exclusivos o particulares y no universales marcaban para siempre a sus descendientes, fueren o no sus beneficiarios. De la compulsión practicada con numerosos casos, pareciera ser que por encima de la primogenitura y el sexo primaban la proximidad o lejanía de los parentescos involucrados. Es indudable que los estigmas arriba mencionados, manipulados por los estamentos colonialistas, deben haber alimentado profundos resentimientos, no siempre expresos, que al acumularse no hicieron mas que madurar la conciencia social de aquellos miembros marginados del patriciado y a su vez presionar la inevitable crisis revolucionaria de comienzos y mediados del siglo XIX.

NOTAS

¹ Concolorcorvo, 1942, capítulo II, 47. Su verdadera identidad era Alonso Carrió de la Vandra. Acerca de este descubrimiento ver Real Díaz (1956), Vargas Ugarte (1961-63), Borello (1982), y Díaz-Jove Blanco (1993).

² Con respecto al igualitarismo vigente en la Revolución de Independencia de los Estados Unidos, para Zuckerman (1994), la obra de Wood (1992), acerca del radicalismo de dicha Revolución, subestima el rol jugado por las opresiones sufridas por las minorías raciales y de género (Zuckerman, 1994, 698). Sin embargo, Wood ha replicado sosteniendo que en el mundo pre-moderno existió una

opresión general que subsumía las opresiones sufridas por los esclavos y las mujeres, que comprendía no solo a estos últimos sino también a la gran mayoría de los varones blancos, y que su eliminación debía necesariamente preceder a la sufrida por los negros y las mujeres (Wood, 1994, 706-707). Debo esta referencia a la gentileza de mi colega Carlos A. Mayo. Más aún, Huston (1993) refiere que la teoría acerca de la distribución de la riqueza prevaleciente en la era revolucionaria norteamericana estaba fundada en cuatro axiomas: 1) la teoría de la propiedad o valor del trabajo; 2) la política económica de la aristocracia; 3) las leyes de la primogenitura; y 4) la proporción de población por superficie de tierra. De acuerdo con el segundo axioma acerca de la distribución de la riqueza prevaleciente en la era revolucionaria norteamericana, las políticas económicas de la aristocracia culpables de distorsionar dicha distribución de riqueza fueron los gravámenes fiscales sin la correspondiente representación política, el establecimiento de una burocracia corrupta repleta de militares y clérigos parásitos, el favoritismo gubernamental, la erección de una iglesia oficial, y la emisión inflacionaria de papel moneda (Huston, 1993, 1083-1087).

³ La causa principal del desprestigio de la nobleza la veía Jovellanos en los mayorazgos y en las Leyes de Toro, cuya Ley 40 incorporaba el derecho de representación. Puesto que para fundar un mayorazgo no se requirió mas la calidad de noble, cualquier familia de mediana fortuna encontró en esta liberalidad una puerta para incorporarse a la hidalguía (Millar, 1978, 86). Esta tesis, Millar la confirma con la lectura de Vicens Vives, 1969, 307; Clavero, 1974, 126-128 y 136; y Domínguez Ortiz 1973, 118. Sorprende que no cite a González (1945).

⁴ Azara, 1982, t.II, cap.XV, p.272, citado por Ramos Mexía, 1915, 198.

⁵ Brackenridge, 1927, 182 y 283.

⁶ En el sentido señalado por Shumway (1992).

⁷ Mitre, 1940, VI, 58-60; y Alberdi, 1886, volumen IV, II Parte, Capítulo II, p.262.

⁸ si bien por matrimonio con Doña Lucía Petrona Riera y Merlo pertenecía a la élite política y mercantil porteña, por sus padres no lo era. En efecto, era hijo de Domingo López, natural del Valle de Bedoya, Obispado de Palencia, sobrino de Alejo, Pascual y Miguel Planes, este último dueño de una casa-panadería, y nieto materno de José Planes y Francisca Javiera Espinosa. Esta última, su abuela materna, natural de Buenos Aires, habría sido hija natural de Andrés Espinosa y Antonia de Melo. Esta sospecha la infiero del hecho que su partida matrimonial no menciona a sus padres (JR, items 4591 y 5766; y FB, IV, 312).

⁹ López, 1913, I, 425.

¹⁰ Ramos Mexía, 1915, 194.

¹¹ Azara, 1982, 274.

¹² *Ibídem*.

¹³ Debo esta reflexión al diálogo que mantuve con mi amigo poeta José González Ledo, asiduo lector de Augusto Barcia Trelles.

¹⁴ estos podían ser agnáticos o cognáticos, siendo los primeros un sistema de descendencia unilineal simple, donde las obligaciones y los deberes para con los parientes del padre eran distintos a los mantenidos para con los parientes de la madre; y los segundos un sistema de descendencia unilineal doble, donde las obligaciones y los deberes para con los parientes del padre o de la madre son muy similares.

¹⁵ ver Lavrin, 1985, 46; y Socolow, 1991.

¹⁶ facultad que por ley o costumbre jurídica tiene una persona para adquirir algo con preferencia a los compradores y por el mismo precio. Se distingue del retracto por el momento de su ejercicio, que en el tanteo es previo a la enajenación de la cosa (Ossorio y Florit, 1968, XXV, 1055).

¹⁷ Derecho establecido en favor de los parientes colaterales para que en el caso de venderse una finca familiar o un esclavo de la familia a una persona extraña, pudiesen retraer esa finca o ese esclavo. Estas instituciones trabaron la formación de la renta y el salario, fuente material de la gestación de la burguesía (debo esta reflexión a mi amigo y colega Ezequiel Raggio).

¹⁸ Permítaseme citar mis propios trabajos publicados en 1990 y 1992.

¹⁹ descendiente del comerciante español Manuel de Palacio y Amavíscar, afincado en Santiago del Estero, que lucró a comienzos del siglo pasado con el comercio a larga distancia con Buenos Aires. Manuel Palacio y Amavíscar mantuvo entre 1777 y 1793 reiterados vínculos comerciales con el comerciante porteño Juan Antonio de Lezica:

Monto	Reg.	Año	folio
4.057	6	1777	383v.
13.744	6	1784	89v.
9.632	6	1787	284
9.834	6	1789	204
2.167	3	1790	36
20.516	6	1793	12v.

(Fuente: AGN, Protocolos).

²⁰ Palacio, 1965, I, 138.

²¹ Zorraquín Becú, 1961, 63. Según Heisse, "la independencia fué una revolución puramente política: reemplazó la monarquía por la república y la burocracia metropolitana por la criolla. No produjo cambio alguno en la estructura social, ni en la vida económica, ni en la mentalidad del chileno" (Heisse, 1951, 44).

²² Romero, 1946, 1956, 50; Corona Baratech, 1951, 120; y Molina, 1991, 48.

²³ Mariluz Urquijo, 1970, 62.

²⁴ Halperín Donghi, 1979, 64.

²⁵ Socolow, 1978, 102.

²⁶ Socolow, 1978, 32.

²⁷ Mörner, 1989, 122.

²⁸ este nuevo sentido ha sido subestimado por Chiaramonte en sus sucesivos trabajos.

²⁹ Saguier, 1992d, 1992e, y 1992f.

³⁰ Congrua era la porción de renta o frutos que se consideraba necesaria para la decorosa sustentación de un ordenado in sacris. Para ser ordenado era necesario acreditar que se poseía la congrua pertinente.

³¹ De ahora en más identificado con las siglas AAC, sus copias en microfilm se hallan en el Centro de Historia Familiar (CHF), perteneciente a la filial porteña de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que son a su vez copias de los microfilms existentes en la Genealogical Society of Salt Lake City, Utah, de la Granite Mountain Record, también de ahora en más identificado con las siglas CHF. Debo el conocimiento de la existencia de esta invalorable fuente documental a la generosidad del esforzado investigador Carlos Jáuregui Rueda. Desgraciadamente dicho Centro no ha podido microfilmear aún los Libros de Capellanías de los obispados de Tucumán, Mendoza y Santa Fé. Los Libros de Capellanías proveen de valiosa información acerca de la edad, estado civil e identidad de parientes próximos y remotos de los fundadores, los patronos y los capellanes, incluídos los grados de parentesco. Asimismo, nos provee de información acerca de los bienes incorporados a la fundación, la capilla o iglesia elegida como sede de la capellanía, la festividad elegida para celebrar misas en homenaje del alma del fundador, los valores de casas y tierras, y los precios de insumos gastados en celebraciones.

³² entre ellos los trabajos de Calvo, Cornejo, Luque Colombres, Crespo Naón, Jáuregui Rueda, Vásquez Mansilla y Avellá-Cháfer, estos últimos identificados de ahora en más con las siglas VM y A-CH.

³³ El fichaje de los testamentos porteños de los siglos XVII y XVIII fueron facilitados por mí al Sr. Hugo Fernández de Burzaco, por intermedio del investigador y colega Jorge Zenarruza, quien los aprovechara con mi autorización para su valiosa obra denominada Aportes Biogenealógicos para un Padrón de habitantes del Río de la Plata, de ahora en más identificado con las siglas FB.

³⁴ En el incendio se perdieron definitivamente los Libros de Capellanías (parcialmente sustituibles por la información existente en los archivos civiles notariales y judiciales); las Cartas y Notas de los Curas Párrocos a los Obispos; los Juicios Eclesiásticos; los Libros de Concursos a Curatos y Oposiciones; las Dimisorias para Ordenes; las Informaciones Matrimoniales; los Divorcios y Nulidades de Matrimonios, parcialmente reproducidos en Molina (1991); y los Juicios por Esponsales. Si tenemos en cuenta que en Buenos Aires se registraron notarialmente en los siglos XVII y XVIII 757 capellanías, los Libros de Capellanías deben haber sido numerosísimos. A propósito de dicho crimen, el Profesor Néstor Tomás Auza nos informó que en aquellos meses aciagos de 1955, cuando la posterior agresión se veía venir, jóvenes de la Acción Católica se ofrecieron al Cardenal Copello para clandestinamente sacar los legajos del Archivo de la Curia y ponerlos así a buen recaudo, propuesta a la

cual el Cardenal Primado se negó.

³⁵ cada una de ellas conllevaba promedio un capital de \$2.000 y una renta anual de \$100.

³⁶ Saguier, 1992d.

³⁷ En Buenos Aires, la afiliación a las ordenes terceras o religiosas por parte de los comerciantes locales estaba a la orden del día. Socolow (1978) cuenta que al menos un 40% de los comerciantes porteños pertenecían a las "terceras ordenes".

³⁸ Enciclopedia Universal Ilustrada (Madrid: Espasa-Calpe), t.68, p.1669.

³⁹ Bazant, 1984, 198.

⁴⁰ Id., p.199.

⁴¹ La colación es la libre concesión de un beneficio vacante hecho por autoridad eclesiástica. Es una de las cuatro formas de proveer beneficios eclesiásticos. Las otras tres son la elección o llamamiento, la nominación y la presentación.

⁴² "...Capellania non est sacerdotales etiam si habeat annexum omis Missarum, nisi ex voluntate fundatoris contrarium constet" [Cardenal de Luca, Libro 12, De Benefice, Discurso 61, n.3 y 4] (AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.VI, fs.101 [Microfilm 2677, del CHF].

⁴³ AGN, Tribunal Civil, Leg. C-72, "Cueli, Agustín c/Cueli, Fabián", fs.123.

⁴⁴ hijo de Pedro Antonio Clemente Rodríguez y de Ana María Martínez Pantoja, hija a su vez de Antonio Martínez Pantoja y de Mariana González Cabezas (FB, IV, 289; y V, 364).

⁴⁵ padre del Pbro. Juan Tomás Rodríguez.

⁴⁶ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. C-12, Exp. 28, fs. 97v.; y Tribunal Civil, Leg.R, N.3, "Julián Clemente Rodríguez c/Igareda, Nicolás".

⁴⁷ AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.VI, fs.78 (Microfilm 2677, del CHF).

⁴⁸ AGN, Tribunal Civil, Leg.R-51, "Lorenzo Rodríguez Conde s/redención de capellanía lega".

⁴⁹ Ibídem.

⁵⁰ "A dev est necessaria presentatio in beneficio Patronato est si collatio fiat ab Episcopo patrono reclamante nula omnino sit" (Murillo, 1765, Vib 3, Decretal n.337, citado en AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.VI, fs.78 [Microfilm 2677, del CHF]). Los libros de Murillo los poseyeron las bibliotecas de los Protectores de Indios de la Audiencia de Charcas Antonio Porlier, y Miguel Martínez de Escobar y Coronado, y la del Fiscal de la Real Audiencia de Charcas Miguel Lápez Andreu (Ripodas Ardanaz, 1975, 530).

⁵¹ AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.VI, fs.78 (Microfilm 2677, del CHF).

⁵² AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.I, fs.16 (Microfilm 2680, del CHF).

⁵³ *Ibídem*.

⁵⁴ FB, I, 140.

⁵⁵ Hijo del Oficial de las Reales Cajas de la Villa de Oruro Blas Gascón Cervellón de Arze y de Tomasa de Arce y Báez de Alpoin (FB, III, 164).

⁵⁶ Hijo del Brigadier Agustín Fernando de Pinedo y de María Bartola de Arce y Báez de Alpoin (FB, V, 206).

⁵⁷ AGN, Tribunal Civil, Leg. A-36, "Albizuri, Juana c/Gascón, Estéban"; y Archivo Histórico de la Provincia, Catálogo de la Real Audiencia, Recurso de Fuerza, Leg.12, 7.5.12.16.

⁵⁸ Hijo del Oficial de Marina Pablo de Valdéz y de María Tomasa de Arce y Báez de Alpoin (FB, VI, 224).

⁵⁹ AGN, Tribunal Civil, Leg. A-36, "Albizuri, Juana c/Gascón, Estéban".

⁶⁰ *Idem*.

⁶¹ sobrino-nieto de Bernardina Toranzos y Montenegro.

⁶² AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.XII (Microfilm 5625, del CHF).

⁶³ *Ibídem*.

⁶⁴ marido de Francisca Marín, hija de Joaquín Marín y de Isabel Calleros (AGN, Tribunal Civil, Leg. C, N.101, fs.4).

⁶⁵ AGN, Tribunal Civil, Leg. C, N.101, "Caviedes, Dámaso s/redimir en fondos públicos una capellanía", fs.4.

⁶⁶ Escriche, 1863, 95.

⁶⁷ Diccionario Jurídico Omeba, t.XXIV, 706.

⁶⁸ "...In Capellani enim nom est sucedendum per representationem, sed quilibet ex sua persona" (AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.I, fs.43v. [Microfilm 2680, del CHF]).

⁶⁹ hijo de Ambrosio Funes, y sobrino carnal del Deán Gregorio Funes (Altamira, 1947).

⁷⁰ nacido en Buenos Aires, 1777; se graduó de Bachiller en Teología en Santiago de Chile; Profesor titular de Derecho Canónico en la Universidad de Buenos Aires, hijo de Juan José Andrés Banegas y de Justa Bartola Lobo, y cuñado del escribano Mariano García de Echaburu (FB, I, 217;

Fuenzalida Grandón, 1972, 623; y Avellá-Cháfer, I, 195).

⁷¹ ficción legal que "...produce el efecto de hacer entrar a los representantes en el lugar, grado y derechos del representado, es decir, en los derechos que el representante tendría si viviese" (Escriche, 1863, 95).

⁷² AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.X, fs.123 (Microfilm 5620, del CHF).

⁷³ AGN, Tribunal Civil, Leg. C-72, "Cueli, Agustín c/Cueli, Fabián", fs.123.

⁷⁴ AGN, Tribunal Civil, Leg. C-72, "Cueli, Agustín c/Cueli, Fabián", fs.123.

⁷⁵ hija de Manuel Muñoz y Pérez.

⁷⁶ hija de Francisco Muñoz y Pérez y de Ana Lorenza Giménez de Paz, y hermana del Pbro. Justo Muñoz y Pérez y de Manuel, Margarita y Angela Muñoz y Pérez (FB, IV, 410; ver Fandiño, 1992, 165).

⁷⁷ AGN, Protocolos, Registro 3, año 1797, fs.377.

⁷⁸ AGN, Tribunales Civiles, Leg. M-8, fs.24.

⁷⁹ hija de Ezequiel Echenagucía, y nieta de Florencia Miguens (datos proporcionados por nuestro colega Porfirio Rodríguez Miguens).

⁸⁰ natural de Galicia, y marido de Juana Paula Reynoso, hija de José Reynoso y de Engracia Barragán (FB, IV, 342).

⁸¹ Miguens, 1907, 38. Debo el conocimiento de este folleto al nieto del autor del mismo, el investigador Porfirio Rodríguez Miguens. Posteriormente, tomé conocimiento que Levaggi hace alusión a este fallo (Levaggi, 1992, 377). Al Fiscal Quesada se le hallaron irregularidades en el desempeño de la Fiscalía a su cargo (Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 1924, II, 591).

⁸² Idem, 39.

⁸³ Ibídem.

⁸⁴ integrada por los Dres. Juan Gelly, Carlos Molina Arrotea y Luis Méndez Paz.

⁸⁵ hija de Martín de Arrascaeta y de Urbana de las Casas; mujer de Pedro Ramos; hermana de Manuel, Mateo, Matías, Dámaso y Manuela Arrascaeta, mujer de Juan Gutiérrez; y madre de José Isaac de la Trinidad Ramos. Martín de Arrascaeta era el escribano de Córdoba hasta 1771, natural de Guipúzcoa, hijo de Francisco Arrascaeta y Manuela Soberón; marido de Urbana de las Casas y Soberón, hija de José Francisco de las Casas y Funes, y de Manuela Soberón y Rodríguez; y primo hermano del Regidor Gregorio Arrascaeta (Romero Cabrera, 1973, 27; y Lazcano, II, 143). Martín de Arrascaeta hizo entrega del Registro de escribano a Clemente Guerrero en 1771 (AHC, Escribanía N.2, Leg.41, Exp.5).

⁸⁶ AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.1, Sala IX, 5-9-3; citado en Saguier, 1992, nota 48. Josefa Salas era hija de Tomás Salas y Catalina Maldonado; nieta del fundador de la Capellanía Pedro de Salas; y mujer de Pascual Juan Rodríguez (AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.I [Microfilm 2680, del CHF]).

⁸⁷ hijo de Francisco de las Casas y de Manuela Soberon y Salas.

⁸⁸ AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.I, fs.28 [Microfilm 2680, del CHF].

⁸⁹ hijo de Pedro Rodríguez y Bárbara Otáñez y Bazán (AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.IV, fs.18 [Microfilm 2668, del CHF]).

⁹⁰ marido de María Dominga Carreño Bazán, y padre de Juan Manuel de Castro Carreño, colegial en el Seminario de Monserrat.

⁹¹ AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.IV (Microfilm 2668, del CHF).

⁹² Idem, fs.18.

⁹³ Ibídem.

⁹⁴ Ibídem.

⁹⁵ natural de la Colonia del Sacramento; hijo de Eufrasia María de la Concepción Fernández; marido de María Gregoria Ortiz; y hermano de Micaela y Ana de Acosta (AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.XI [Microfilm 5621, del CHF]).

⁹⁶ AGN, Tribunal Civil, Leg.M, N.57, "Martínez, Juan Antonio s/patrón de capellanía eclesiástica".

⁹⁷ hijo de Francisco Ignacio Oliden y de María Teresa Renniell e Illescas; y marido de Ida Chavarría (FB, V, 59).

⁹⁸ AGN, Tribunal Civil, Leg.F, N.15, "Franco de la Isla, Anastasia c/Matías Oliden s/patronato".

⁹⁹ hija de Cayetano Artayeta y de Dolores Hurtado Zuloaga, viuda del Teniente Coronel Francisco Bermúdez (FB, IV, 44; y VM, 1988, ítem 4450),

¹⁰⁰ hijo de Francisco Javier de Jaunzaras, nacido en Guipúzcoa, y de Inés de Escobar y Ruiloba (FB, II, 292; y IV, 81); primo de María Cristina San Martín, a quien dona el usufructo de todos sus bienes; y padrino de Petrona Catalina Martínez, natural de Santiago del Estero, hija legítima de Juan Mateo Martínez y de Teodora de Paz, y mujer de Martín Muñoz y Perales, natural de Córdoba la Llana (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. S-11, Exp.3, fs.20; y JR, 1989, ítem 5818).

¹⁰¹ AGN, Tribunal Civil, Leg.A, N.226, "Artayeta Hurtado, Emma c/Artayeta Hurtado, Julia s/patronato de una capellanía", fs.30.

¹⁰² fundó las capellanías "...con créditos que dejaba a cobrar, uno de ellos, de \$600 pagado por D.

Bartolomé del Cano en 1794 y otro de \$6.387 adeudado por el Cabildo de Buenos Aires, más sus intereses que ascendían a \$6.001. A este crédito de principal e intereses de \$12.339 pesos se le dió el premio de \$6.194, haciendo el todo \$18.583 pesos que se pagaron en fondos del 4%. Esos dineros entretanto no se pudieron cobrar por Don Manuel Basavilbaso, y vino recién a recibirlo en 1801 el Brigadier Azcuénaga según un ligero apunte hecho en sus papeles" (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.A-17, Exp.10, fs.254).

¹⁰³ Disposit. 9, 1a. @ 1o., n.2 y 3, 70, y 101.

¹⁰⁴ De primogeniis, Libro 1o., Cuaderno 6o., n.38. Este libro lo poseyó Don Manuel Cipriano de Melo (Sébat Pébet, 1958, 152).

¹⁰⁵ sistema de parentesco unilineal simple donde los deberes y obligaciones para con los parientes del padre son privilegiados respecto del de la madre.

¹⁰⁶ por sucesión regular se entendía el vínculo cognativo, que no excluía a las hembras y sus descendientes.

¹⁰⁷ AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.A-17, Exp.10, fs.35.

¹⁰⁸ AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.A-17, Exp.10, fs.54v.

¹⁰⁹ *Ibíd.*, fs.55.

¹¹⁰ hijo natural del Capitan Simón González de Acosta y de Catalina Cabezas; marido de María Espinosa; y padre natural de Mariana, Marcos, Constanza y José González Cabezas (FB, III, 260).

¹¹¹ hijo de Pedro Antonio Clemente Rodríguez y de Ana María Martínez Pantoja, hija a su vez de Antonio Martínez Pantoja y de Mariana González Cabezas (FB, IV, 289; y V, 364).

¹¹² AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.C-12, Exp.28.

¹¹³ Familia de origen santafesino.

¹¹⁴ hija de Pedro del Casal Verón y Andrada y de Maria Gómez de Sanabria, viuda del Teniente de Rey Baltasar García Ros, y Abadesa del Monasterio de Santa Teresa de Jesús de Carmelitas Descalzas de la ciudad de Córdoba.

¹¹⁵ hijo del Capitán Juan de los Ríos y Gutiérrez, burgalés, y de Ana Delgadillo y Atienza, natural de Santa Fé (Avellá-Cháfer, I, 153).

¹¹⁶ AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.L-10, Exp.7, fs.8.

¹¹⁷ Para su descendencia ver Alvarenga Caballero, 1978.

¹¹⁸ AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.L-10, Exp.7, fs.8. Para la descendencia de Lázaro Umeres ver Crespo Naón, 1983.

¹¹⁹ Idem.

¹²⁰ Hijo de Ambrosio Zamudio y de María Francisca Díaz (FB, VI, 307).

¹²¹ hijo de Juan Gregorio de Zamudio y de Juana Josefa de Sarria y Gutiérrez (FB, VI, 308).

¹²² hija de Francisco de Arroyo y Arteaga y de Gregoria Ponce de León (FB, IV, 34).

¹²³ AGN, Tribunal Civil, Leg.Z-2, "Zamudio, Juan Antonio de c/Echeverría, Juana", fs.96.

¹²⁴ González Ruiz, 1950, 480.

¹²⁵ hija de Bernardino de Oro y Bustamante, nacido en San Juan, y de Petrona Josefa de Cossio y Terán (FB, V, 77).

¹²⁶ Hijo de Manuel Vicente de la Colina y Prado y de María Isabel de Oro (Avellá-Cháfer, I, 205-206).

¹²⁷ AGN, Tribunal Civil, Leg.C, N.45 "Colina, Tomás de la p/patronato de capellanía".

¹²⁸ marido de Francisca Marín, hija de Joaquín Marín y de Isabel Calleros (AGN, Tribunal Civil, Leg. C, N.101, fs.4).

¹²⁹ AGN, Tribunal Civil, Leg. C, N.101, fs.4.

¹³⁰ Idem.

¹³¹ AGN, Tribunal Civil, Leg.C-72, "Cueli, Agustín c/ Cueli, Fabián".

¹³² Ibídem.

¹³³ Idem.

¹³⁴ Idem.

¹³⁵ Idem, fs.98.

¹³⁶ Ibídem.

¹³⁷ AGN, Tribunal Civil, Leg.Z-2, "Zamudio, Juan Antonio de c/Echeverría, Juana", fs.97.

¹³⁸ marido de Manuela Basavilbaso (FB, III, 145).

¹³⁹ AGN, Tribunal Civil, Leg.Z-2, "Zamudio, Juan Antonio de c/Echeverría, Juana", fs.96.

¹⁴⁰ Hijo de Prudencio Zavaleta, nacido en Guipúzcoa, y de María Agustina de Indá y Martínez de Tirado (FB, VI, 315).

¹⁴¹ AGN, Protocolos, Registro 6, año 1793, fs.291v.; y FB, I, 115; y VI, 117.

¹⁴² hija de Atanasio Gutiérrez y María Josefa Zavaleta.

¹⁴³ AGN, Tribunal Civil, Leg.A, N.249, "Arzobispo de Buenos Aires, solicitando el patronato de una capellanía", fs.1.

¹⁴⁴ hijo del Capitán Francisco de la Fuente y de Petronila Luján de Medina; hermano de Josefa de la Fuente, mujer de Gabriel Baygorri; y sobrino de Manuela y Antonia de Luján.

¹⁴⁵ AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.II (Microfilm 2679, del CHF).

¹⁴⁶ Corregidor de Mendoza entre 1730 y 1731, hijo del Capitán Manuel Zapata de Mayorga y de Damiana de Molina Basconcelos; marido de Cecilia Pintos y Almada; cuñado de Juan de Oro Lizarraburu; y suegro de Sebastián Pérez de Asiain, Francisco de Espinoza y Ventura Ladrón de Gueara (AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.III, fs.5 [Microfilm 2664, del CHF]; y Morales Guinazú, 1939, 351).

¹⁴⁷ descendiente de Ramón Zapata, hijo de Manuel Zapata.

¹⁴⁸ hijo de Fernando Güiráldez y de Isabel Zapata, y nieto del Capitán José Ignacio Zapata y de Josefa Yepes Castellanos (AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.III, fs.5 [Microfilm 2664, del CHF]; y Morales Guinazú, 1939, 354).

¹⁴⁹ AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.III, fs.5 (Microfilm 2664, del CHF).

¹⁵⁰ *Ibidem*.

¹⁵¹ AGN, Tribunal Civil, Leg. A-36, "Albizuri, Juana c/Gazcón, Estéban".

¹⁵² *Idem*.

¹⁵³ *Idem*.

¹⁵⁴ hija del Capitán Diego Martínez Tirado y de María Gutiérrez de Vargas y Agüero (FB, IV, 291).

¹⁵⁵ AGN, Tribunal Civil, Leg.E-21, Autos de D. Máximo Espinosa, fs.66.

¹⁵⁶ Hijo de Eusebio de Espinosa y Sanabria y María Martínez de Tirado; marido de Teresa Zapata, natural de Mendoza; y padre de Juan Antonio y María Espinosa, mujer de Miguel Cotarro (FB, II, 296).

¹⁵⁷ AGN, Tribunal Civil, Leg.E-21, Autos de D. Máximo Espinosa, fs.66.

¹⁵⁸ *Idem*.

¹⁵⁹ Francisco de Castro: Discurso crítico sobre las leyes y sus intérpretes (Madrid, 1765). Ver

para más detalles acerca del uso de genealogías en la antigüedad, a Bouquet (1996).

¹⁶⁰ AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.I, fs.1 (Microfilm 2680, del CHF).

¹⁶¹ hijo de José Manuel Salguero de Cabrera y de Josefa de Moinos y Ledesma; y hermano del Congresal de Tucumán Gerónimo Salguero de Cabrera (Díaz de Molina, 1966, 163-166).

¹⁶² hermana de Félix de Cabrera, hija de Pedro Luis de Cabrera, y nieta del fundador de Córdoba Gerónimo Luis de Cabrera.

¹⁶³ AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.I (Microfilm 2680, del CHF).

¹⁶⁴ AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.I (Microfilm 2680, del CHF).

¹⁶⁵ nieto del vecino de Tucumán Pedro Bazán Ramírez y Pedraza.

¹⁶⁶ hijo del Maestre de Campo Francisco Dávila Salazar y María Gutiérrez Gallegos.

¹⁶⁷ AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.IV (Microfilm 2668, del CHF).

¹⁶⁸ Hijo de Antonio Reynal y de Francisca Javiera Dávila y Laciari (FB, VI, 345).

¹⁶⁹ nacido en Valdemor, España; contrajo primeras nupcias con Antonia de la Fuente y Zevallos, hija de Francisco Martín de la Fuente y de María Josefa Zevallos; y segundas nupcias con Mariana Fernández de Agüero, hija de Amador Fernández de Agüero y de Petrona Cabral de Melo (FB, II, 208).

¹⁷⁰ AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.P-5, Exp.6.

¹⁷¹ hijo de Pedro Antonio Clemente Rodríguez y de María Martínez Pantoja y González Cabezas (FB, V, 364).

¹⁷² hijo de Pedro Alcántara Rodríguez.

¹⁷³ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. G-18, Exp.14, fs.26v.

¹⁷⁴ *Ibíd.*

¹⁷⁵ hija del Coronel Juan Ignacio de Elía y de Bárbara García de Zúñiga (FB, II, 275).

¹⁷⁶ marido de Josefa de Lizola y Escobar, hija de Juan Martín de Lízola y de Ana Escobar y Gutiérrez de Paz; y conuñado de Alonso García de Zúñiga, marido de Juana de Lízola y Escobar (AGN, Tribunal Civil, Leg.G-8, fs.23; y FB, II, 291).

¹⁷⁷ dispensado el parentesco de afinidad en el primer grado por línea transversal proveniente de cópula lícita (JR, 1989, ítem 7403).

¹⁷⁸ AGN, Tribunal Civil, Leg.G-8, fs.61.

¹⁷⁹ hija del Capitán Francisco de Bazurco y de Juana María de Herrera y Labayén; y hermana del Obispo de Buenos Aires José Antonio Bazurco y del Tte. Cnel. Juan Francisco de Bazurco (FB, I, 252).

¹⁸⁰ hijo del Dr. Antonio Basilio de Aldao y Rendón y de María Josefa Aragón y Avendaño; y sobrino político de Félix de Esquivel, Juan Manuel de Labardén y Manuel de la Quintana (FB, I, 62).

¹⁸¹ AGN, Tribunal Civil, Leg.A-14.

¹⁸² Maestre de Campo, Regidor y Alcalde, nacido en San Pedro Abanto; marido de Francisca Arias de Molina y Jofré, hija de Bernardo Arias de Molina Videla y de Catalina Jofré de la Barreda; y suegro de Petrona Sanchez del Carril, Paula Echegaray Cano, Jose Luciano Fernández Balmaceda y Teresa Blanco Echegaray (Calvo, V, 249).

¹⁸³ fundada en 1753 por Doña Bernardina Toranzos y Montenegro y su marido Don Juan Calzada Alvarez de Miranda.

¹⁸⁴ Verdaguer, 1931, I, 594, 602 y 626; y en el AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.XII (Microfilm 5625, del CHF).

¹⁸⁵ Verdaguer, 1931, I, 626.

¹⁸⁶ hijo de Juan Videla y Catalina Albarracín, y nieto de Cornelio Albarracín y Juana Irrazábal.

¹⁸⁷ nieto de Bernarda Irrazábal.

¹⁸⁸ nieto de Josefa Irrazábal.

¹⁸⁹ hijo de Remigio Albarracín y Josefa Irrazábal.

¹⁹⁰ hija de José Irrazábal y Navarrete y de María Sánchez de Loria y Guardia (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.182, Exp.4 y 5).

¹⁹¹ AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.X (Microfilm 5620, del CHF).

¹⁹² Reyes Gajardo, 1940, 176.

¹⁹³ hijo de José Arias Rengell y de María Pardo de Figueroa; hermano de Felix Arias Rengell; y cuñado de José Ruiz de los Llanos y de Justo Saravia Martínez Sáenz; y contrajo primeras nupcias con Isabel Torino de Viana y segundas nupcias con Zenona López de Villanueva (Calvo, I, 89).

¹⁹⁴ Cornejo, 1945, 202; y Vergara, 1946, 32-33. En primer Patrono de la Capellanía se había constituido el propio fundador, Pbro. Juan José Arias, y en adelante su primo el Pbro. Fernando Arias Rengel, o en caso de faltar la línea de Don Francisco Gabino Arias Rengel (hijo del Maestre de Campo y encomendero Félix Arias Rengel y Heredia y de Gregoria Hidalgo Montemayor; y marido de Feliciano Martínez Sáenz [Calvo, I, 89]), se establecía que entraría su otro primo Don Apolinar Arias Rengel y sucesores (Cornejo, 1945, 202).

¹⁹⁵ Fasolino, 1963-65, 29.

¹⁹⁶ AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.20, Exp.15, fs.89. Los patronatos que fundó el Dr. Pedro de las Cuentas y Valverde se hallaban distribuídos en cuatro Ramos: el primero y principal de \$1.050, que se pagaba anualmente en las Reales Cajas de Nuestra Señora de La Paz como producto de \$21.000 que recibió a censo la Real Hacienda; otro segundo de \$96 que pagaba la Hacienda nombrada Sapan, cita en el Valle de Carabillo, donde están impuestos \$3.195 al 3%; otro tercero de \$120 por el principal de \$4.000 impuestos en una casa frontera a la del Sr. Dr. Miguel Núñez de Sanabria, Oidor que fué de la Real Audiencia de Charcas; y último otros \$2.000 a favor de las buenas memorias de Dotes para remediar Doncellas impuestas en una Hacienda cita en la Villa de Pisco por el Alf. José Rodríguez Calero, y en nombre de Doña Lorenza de las Casas su mujer, que hoy dicen que es de Juan Cabero (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.54, Exp.7, fs.3).

¹⁹⁷ AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.54, Exp.7.

¹⁹⁸ AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.20, Exp.15, fs.89.

TOMO VIII

CAPITULO 5

Los Conflictos entre el Clero y el Estado en el mundo colonial. Las contradicciones entre el fuero eclesiástico y el Patronato Real.

publicado en Anuario del Archivo Nacional de Bolivia [Sucre, Bolivia], 1997, 201-238);

Las relaciones entre la Iglesia y el Estado en el mundo colonial no han sido convenientemente estudiadas hasta el presente, habiendo la mayoría de los estudios reduciéndose a analizar la naturaleza del origen del Patronato Real y del Vice-Patronato Indiano,¹ en lugar de estudiar la naturaleza de los conflictos que se suscitaron entre ambas instituciones claves del pasado colonial. Por un lado, la historiografía liberal, influenciada por las teorías galicanas o regalistas,² sostenía que el Patronato o Vicariato y el Vice-Patronato eran en su origen de naturaleza laica o profana, inherente a la soberanía temporal, y por lo tanto no subrogable por el fuero eclesiástico.³ Por otro lado, la historiografía católica, adversaria del regalismo o galicanismo y partidaria de la independencia de la Iglesia y el Estado, sostenía que el Patronato y el Vice-Patronato eran en su origen de naturaleza sacra o espiritual, por estar fundados en una gracia (concesión o transferencia) pontifical, la cual era rescindible pero intransferible o no subrogable.⁴

Por último, la historiografía positivista, argumentó que no obstante el Patronato y el Vice-Patronato y las teorías regalistas, el Clero operó como intelectual orgánico de las clases más tradicionales, en un principio para predicar la sumisión al poder divino, y luego con las Reformas Borbónicas para predicar la sumisión a la Corona de España, limitando así el desarrollo de una burguesía nacional en América.⁵ Ultimamente, Guerra (1989,1990) sostuvo la necesidad de analizar en las sociedades de Antiguo Régimen no las estructuras sino la conducta de los actores sociales y políticos.⁶ En el estudio de dichas conductas y en lo que habría constituido un antecedente inmediato de la revolución de independencia, las políticas centralizadoras y secularizadoras Borbónicas (expulsión de los Jesuitas) habrían logrado inconscientemente que los patriciados locales, representados por sus Cabildos seculares y eclesiásticos, sus Capítulos de religiosos, y sus Comandantes de Armas intensificaran la resistencia a Virreyes, Gobernadores, Corregidores (de españoles), Obispos y Oidores. Para Lavallé (1978), el antagonismo hispano-criollo vigente en el seno de las Ordenes Religiosas alimentó el nacimiento de la conciencia criolla.

A los efectos de sortear el punto muerto en que ha caído la actual discusión acerca de las relaciones entre la Iglesia y el Estado en el mundo colonial es que creemos que más allá de la discusión metafísica acerca de los orígenes del Patronato Real y del fuero eclesiástico, es preciso entonces investigar el contenido mismo de los conflictos y antagonismos entre ambas instituciones (Fuero y

Patronato), y su impacto en la estructura social colonial y en el proceso emancipador.⁷

Amén de la facultad de transferir el poder de confirmar o revocar elecciones concejiles, designar Villas Reales y capitales de provincia y virreinato, así como autoridades civiles y militares, otorgar licencias, administrar bienes de Temporalidades, recaudar impuestos y producir levass, a los Virreyes les cabía también el derecho de ejercer y transferir las facultades del Vice-Patronato Real, entre las cuales se destacaban los actos de administración o jurisdicción,⁸ y los actos de honor o representación.⁹ La subrogación o transferencia del Vice-Patronato Real de los Virreyes a los Gobernadores-Intendentes o de los Virreyes a las Reales Audiencias, y de estos a los Asesores Letrados, suscitó intensas controversias entre Cabildantes, Obispos, Gobernadores y Oidores, que iniciaron un largo historial en las relaciones entre la Iglesia y el estado. Esta subrogación o transferencia ofendía tanto a las autoridades eclesiásticas como a las profanas. A los Virreyes, por cuanto entendían que era impropio ceder a los Gobernadores-Intendentes facultades que les eran indelegables. A los Obispos, por cuanto estos últimos consideraban menoscabante que los Virreyes designaran a los Curas Párrocos e inferior a su dignidad tener que tratar con Gobernadores-Intendentes. A los Gobernadores, por cuanto algunos de estos últimos conceptuaban contrario a su jerarquía tener que ceder a los Tenientes Asesores Letrados sus prerrogativas.

Y a los Curas Párrocos, por cuanto estos últimos consideraban también por debajo de su autoridad tener que tratar con cabildantes.¹⁰ En este trabajo nos hemos propuesto indagar sólo el rol cumplido por algunas autoridades en el ejercicio del Patronato Real. En el sentido apuntado por las tesis de TePaske (1970) y Mora Mérida (1983), cabe preguntarse si los conflictos en el seno de la Iglesia, y entre ésta y el Estado, por la provisión de curatos, beneficios y canongías,¹¹ y el usufructo del fuero eclesiástico, se hallaban o no relacionados con los procesos de estamentalización, clericalismo y criollización de la sociedad colonial. Los conflictos entre la Iglesia y el Estado se manifestaban en las luchas por los ascensos, los destinos, y las capellanías y censos, las cuales reflejaban las contradicciones por la participación en la renta eclesiástica. Asimismo, nos preguntamos si estas luchas se acrecentaron durante las bonanzas mineras y comerciales, por cuanto fué durante las mismas que la metrópoli arreció con reformas destinadas a reducir el margen de autonomía de las burocracias eclesiásticas locales. En las contradicciones entre la Iglesia y el Estado colonial, estudiaremos en este trabajo los casos en que el fuero eclesiástico, y con él el clericalismo, afectaron la autonomía de los Cabildos seculares; los casos en que los Cabildos Eclesiásticos se enfrentaron a los episcopados respectivos, y los casos en que la composición étnica de las Ordenes Religiosas influyó en la actitud de los cabildos seculares, como fueron los casos de Córdoba y San Juan. Para ello hemos recogido una docena de textos de época, hallados en litigios judiciales del siglo XVIII, depositados en el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires, en el Archivo Histórico de Córdoba (AHC) y en el Archivo Municipal de Córdoba (AMC).

En este trabajo nos hemos limitado a indagar el rol jugado por los estamentos en la actividad eclesiástica. La incidencia de los conflictos entre el fuero eclesiástico y los derechos del Patronato Real en la estamentalización de la sociedad colonial, variaba según que involucraren al clero regular o al secular, y según se manifestaren en el ejercicio de los actos de administración o jurisdicción, o en los actos de honor o representación. El derecho al fuero eclesiástico, contó como un verdadero privilegio personal, que alcanzaba a las autoridades de los sub-ordenes, tales como los Cabildos Eclesiásticos, los Tribunales del Santo Oficio de la Inquisición, las Cofradías y las Universidades.¹² A menos que las causas civiles fueren de lesa majestad, las autoridades civiles no podían intervenir en contra de dichas autoridades.¹³ Al liberar a los miembros del clero y sus sub-ordenes de las persecuciones de los Alcaldes Ordinarios y los oficiales de Real Hacienda, y atentar contra el principio de la inamovilidad de los jueces y la integridad del comercio, el fuero eclesiástico influía en el comportamiento de los

vecindarios y de los mercados de mercancías.¹⁴ En este último caso, afectaba causalmente las relaciones inter-estamentales e implicaba verdaderas subordinaciones y preeminencias sociales.¹⁵ Por ejemplo, el fuero eclesiástico, al igual que el fuero capitular, privaba al comercio y al mercado de mercancías del poder para cobrar gabelas y ejecutar créditos.

Asimismo, el fuero eclesiástico habría dado lugar en muchos casos a: a) una intromisión en los asuntos civiles y políticos;¹⁶ y b) privado al mercado de mercancías de la seguridad jurídica imprescindible para la circulación y cumplimiento de negocios y contratos. Levaggi (1971) sostuvo que mientras el fuero eclesiástico fué en tiempos coloniales y hasta su subrogación por las leyes Rivadavianas de naturaleza estrictamente personal, los fueros consulares (mercantiles) y profesionales (Protomedicato) fueron de un acentuado carácter real.¹⁷ Autores positivistas como García (1900) insistieron en el nocivo efecto que las corporaciones y los fueros provocaban en la sociedad civil. Pero para autores como Levaggi (1971, 1977), durante la dominación Borbónica, las Reformas alcanzaron -- mediante instrumentos jurídicos como los Recursos de fuerza y los derechos de presentación --¹⁸ a modificar la preeminencia social engendrada por dichos fueros. Asimismo, con dichas Reformas el clero vió seriamente reducida su inmunidad personal.¹⁹ Para Rivarola (1934), sólo los fueros personales (de nobleza o de etnia) otorgaban dicho tipo de preeminencia. Levaggi (1971), en tanto, sostuvo que mientras el fuero eclesiástico fué en tiempos coloniales y hasta su subrogación por las leyes Rivadavianas de naturaleza estrictamente personal, los fueros, asilos o inmunidades consulares (mercantiles) y profesionales (Protomedicato) habían sido de un acentuado carácter real.²⁰

La subrogación de las facultades y prerrogativas de los Virreyes, Gobernadores y Reales Audiencias.

Con respecto a la subrogación de las facultades y prerrogativas de sus cargos, los Virreyes, Gobernadores y Reales Audiencias eran renuentes a cederlas a los Obispos, los Cabildos Eclesiásticos y los Asesores Letrados. En 1748, en Corrientes, el Teniente de Gobernador Nicolás Patrón,²¹ enfrentado al dominante clan de la familia Casajús, y en connivencia con el Obispo de Buenos Aires Manuel Antonio de la Torre y su Cabildo Eclesiástico, ordenó dividir el curato de San José de las Saladas dando comisión al cura y vicario de Corrientes Dr. Antonio Martínez de Ibarra,²² para demoler la iglesia y pasarla a nuevo sitio.²³ Resistida la maniobra por su primo, el Cura y Familiar del Santo Oficio de la Inquisición José Francisco de Casajús, logró siete años más tarde sentencia favorable del Obispo Dr. José Antonio Bazarco.²⁴ Diez años más tarde, en 1764, el mismo conflicto se reavivó desatando la famosa rebelión de los Comuneros de Corrientes. Según José Borjes, testigo en el juicio contra los amotinados, dos eran los motivos de la rebelión, el uno el esfuerzo que el Tte. Gob. Manuel de Rivera y Miranda, hechura de los Jesuitas, hizo por

"...prehender a Don Sebastián de Casajús, habiéndose por ello disgustado con el Cura de las Saladas su hermano y con el de Corrientes Don Antonio Martínez [de Ybarra], a quien le instaba porque le allanase la Iglesia [omitiera la inmunidad eclesiástica] y éste se escusaba por decir que la Iglesia de las Saladas la había de allanar el Cura de ella como tal Cura y Vicario, aunque fuese hermano del que se pretendía extraer".²⁵

El segundo motivo de la rebelión habría sido el que habiendo el Tte. Rivera procurado desentrañar la confederación que entre los dos curas había, descubrió

"...que nacía de una carta dotal falsa según han dicho varios que el Cura Martínez valiéndose de la avilidad del viejo Casajús Padre de Don Sebastián y de el Cura de las Saladas había hecho formar a favor de una sobrina suya, que estaba casada con un Portugués llamado Don Francisco

González de Macedo, para haber hecho con ella que su sobrina se quedase con todos los bienes de su difunto marido a título de una dote imaginaria que jamás tuvo, ni sus parientes fueron capaces de darle; en odio y venganza del empeño que dicho Tte. Rivera parece manifestó en verificar la falicidad de aquella Carta Dotal por ser en perjuicio de la Real Hacienda, y en reconocimiento del beneficio que había recibido del viejo Casajús, se unió con su hijo el Cura de las Saladas, tal vez también temeroso de que este Don Sebastián no descubriesen el Pastel, y ayudó a que el Tte. no sacase de la Iglesia a dho Dn. Sebastián, y fomentó el levantamiento del Pueblo, para que preso el Teniente Rivera se metiese todo a tablas".²⁶

En Cochabamba, casi tres décadas después, en 1790, se suscitó una disputa entre el Gobernador-Intendente Francisco Viedma y el Obispo de La Paz, respecto a la designación de sacerdotes.²⁷ Pasado otro par de décadas, en 1809, Acevedo (1965) nos revela que habiéndose dividido el Obispado de Córdoba del Tucumán en dos, se desató en Salta alrededor de la provisión de cargos catedralicios un agudo conflicto entre su primer Obispo Nicolás Videla del Pino,²⁸ partidario de posiciones anti-regalistas, y los miembros de su Cabildo Eclesiástico, el Deán Dr. Vicente Anastasio de Isasmendi,²⁹ y el Canónigo Dr. José Miguel de Castro,³⁰ afectos a las doctrinas regalistas. Para Isasmendi y para Castro, la creación por parte del nuevo Obispo Videla de tres nuevos cargos catedralicios (arcediano, chantre y tesorero) constituían un abuso que despojaba al Rey de su derecho de Patronato.³¹ El ánimo del Rey había sido sólo el de "...proveer la dignidad de deán y dos canongías", lo cual constituía "...suficiente número para la formación de un cabildo eclesiástico con concepto a las rentas que podría proporcionar un Obispado dividido".³² Uno de los religiosos que más se obstinó en manifestar su regalismo en el Río de la Plata fué el Maestro General de la Orden de Santo Domingo Fray Baltasar de Quiñones, cuando en 1793 publicó sus Observaciones al Capítulo provincial platense de 1791.³³ Asimismo, el primer laico de las provincias del Río de la Plata en reclamar jurídicamente las prerrogativas del Patronato Real fué el abogado defensor de los integrantes del Cabildo de Córdoba, el Dr. Mariano Pérez de Saravia.³⁴ En el Paraguay, en 1783, el Gobernador-Intendente Don Pedro Melo de Portugal le informaba al Virrey Juan José de Vértiz y Salcedo, haber exhortado al Cabildo Eclesiástico de Asunción "...no executara nombramiento alguno de los Tenientes de Cura destinados al servicio de las Viceparroquias del campo sin acuerdo mío como Real Vice Patrono de esta Provincia".³⁵ Cinco años después, en 1787, el Cabildo secular de Asunción era del parecer que el Colegio Seminario de San Carlos estuviera enteramente sugeto al Vice-Patrono Real como lo estaba el Colegio de Buenos Aires.³⁶ Y doce años después, en 1799, cuando el Provisor y Canónigo de la Catedral de Asunción Dr. Juan Bernardo de Arroquia de Osés,³⁷ solicitó la propiedad del Rectorado del Real Colegio Seminario de San Carlos,³⁸ perteneciente al Capítulo Catedralicio de Asunción, Félix de Azara y Fr. Luis de Velasco nos cuentan que el Gobernador del Paraguay Joaquín Alós y Brú, en su condición de Vice-Patrono Real, se la negó, para dársela en cambio al correntino Don José Baltasar Casajús.³⁹ Los Cabildos Eclesiásticos tenían erigidos con título de Vice-parroquias diferentes seminarios y capillas, y en ellas diputaban (elegían) sacerdotes seculares, despachándoles títulos de Rectores, Vicarios, Coadjutores y Tenientes de Curas Propietarios. Los coadjutores eran regularmente

"...los eclesiásticos más novatones y pobres que a título de tener como vivir toman sobre sí esta carga con la recompensa de las primicias, oblaciones, y demás derechos parroquiales que les asigna el Cabildo Eclesiástico por vía de estipendio de su servicio, sin reservársele al Cura propietario cosa alguna de estos frutos de su Iglesia en todo el territorio del Tenientazgo".⁴⁰

Más aún, por carecer la mayor parte de ellos "...del conjunto de requisitos que demanda para su perfecto desempeño, un oficio tan escrupuloso, no produce en aquellas gentes los efectos saludables,...[de lo que] resultan muchos encuentros, disensiones y pesadumbres".⁴¹

La facultad de arbitrar o laudar en conflictos eclesiásticos.

En cuanto a la facultad de arbitrar o laudar en conflictos eclesiásticos, los Gobernadores eran también renuentes a subrogar las facultades y prerrogativas del Patronato Real a los Obispos, y menos aún a aquellos Obispos pertenecientes a otras jurisdicciones. El que los conventos localizados en una provincia tuvieran sus autoridades en otra jurisdicción, dependientes de un Obispado vecino, no solo colisionaba con el Vice-Patronato que ejercía el Gobernador-Intendente sino que se prestaba a los enfrentamientos que, según Ganster (1993), alimentaban los diferentes regionalismos.⁴² Estos fueron los casos de Cuyo y de Córdoba.⁴³ En una causa judicial por un crimen ocurrido en 1766 --meses después de producirse en Madrid el Motín de Esquilache-- en el Convento Mercedario de San Lorenzo, en Córdoba --pero iniciada también en Santiago de Chile por depender dicho Convento de las autoridades residentes en dicha ciudad-- se provocó un serio conflicto de superposición de competencias, por cuanto la causa había sido despachada también al Obispado de Córdoba, el cual estaba subordinado a la Real Audiencia de Charcas.⁴⁴

La circunstancia de que el convento Mercedario en Córdoba tuviera sus autoridades en Chile, dependientes del Obispado de Santiago de Chile, colisionaba con el Vice-Patrono, que residía en Córdoba. El caso Cordobés ocurrió a comienzos de la década del 60, cuando el Regidor Diputado Juan Vicente Piñero Pacheco,⁴⁵ fué expulsado del Cabildo de Córdoba por una facción política encabezada por el Gobernador de Córdoba Juan Manuel Campero,⁴⁶ y la clásica familia de los Allende, adversaria de los Jesuitas y allegada a la defraudación del Ramo de Sisa y a los intereses de la cría de mulas procedentes del litoral porteño. Piñero Pacheco había sido expulsado so pretexto de haber incurrido en amancebamiento, pero en realidad debido a la circunstancia de pertenecer al clan de los Echenique, más ligado a los Jesuitas, al régimen encomendil y a las vaquerías que se practicaban en el desierto.⁴⁷ Con ese motivo Piñero buscó asilo en el Convento Mercedario de San Lorenzo, cuyos fondos financieros él mismo administraba y que a la sazón dirigía el Provisor y Vicario General Doctor Fr. Pedro Pablo de Allende y Losa.⁴⁸ Es entonces, que al poco tiempo, violando el "honor, clausura, y sagrado de este Convento" y el asilo e inmunidad o fuero que prescribían los Sagrados Cánones,⁴⁹ Fr. Pedro Pablo Allende, como portavoz del Gobernador Campero y de los intereses de la facción anti-Jesuitica del clero Mercedario, personificados en la Casa de los Allende,⁵⁰ permitió que el Juez Real, designado por el Cabildo, extrajese del Convento al Regidor Piñero.⁵¹ El documento añade que a la dirección e influjo de este profanamiento sacrílego concurrieron

"...como sangrientos fraticidas e hijos adúlteros de la religión SMe los PP Pdo Fr. Ignacio Lescano, Lector Fr. Francisco Xavier Olmos, y novísimamente el R.P. Provincial absoluto Fr. Juan Esteban Herrera, siendo íntima la amistad y notoria la coligación que han tenido y tienen con aquellas familias y sus cabezas".⁵²

Con motivo de este incidente, violatorio del fuero eclesiástico, donde intervinieron cabildantes, milicianos y religiosos, las autoridades de la Orden Mercedaria iniciaron contra el Vicario Allende, ante el Obispo que residía en la Real Audiencia de Chile, la correspondiente causa criminal.⁵³ Fué entónces, a partir de dicho proceso judicial, que la Casa de los Allende guardó para con la Orden Mercedaria una "...notoria enemistad, antipatía y odio entrañable".⁵⁴ Relevado de su función Fr. Pablo Allende, que había defendido los intereses de su familia así como los de los clérigos de la facción ligada a los intereses anti-Jesuiticos, y fallecido un año más tarde, en 1766, un nuevo Vicario General impuesto desde Chile se hizo cargo del Convento, no sin provocar discordias entre los clérigos.⁵⁵ En efecto, el R.P. Provincial Absoluto Fr. Juan Esteban de Herrera y seis clérigos más fueron expulsados, entre los cuales se destacaban los frailes porteños Antonio Rodríguez Flores,⁵⁶ Simón Rodríguez Flores,⁵⁷ Lorenzo López de Osornio,⁵⁸ Vicente Chaparro,⁵⁹ y José Esquivel,⁶⁰ aparentemente por haberse solidarizado en el pasado con el Fraile Allende, al extremo de verse obligados a vivir prófugos

en las inmediaciones del convento.⁶¹ Habiendo llegado el escándalo a tal gravedad, las partes involucradas en el conflicto, acordaron firmar una transacción y convenio que devolviera la paz a la provincia.

Como consecuencia directa de esta crisis, los cabildantes cordobeses ligados a los intereses anti-Jesuiticos recurrieron al Virrey del Perú Manuel Amat y Junient, contra la autoridad del Teniente de Rey Manuel de Estéban y León,⁶² encargado de la recepción del Ramo de Sisa.⁶³ El Virrey Amat dió su apoyo a la facción de frailes ligados a los intereses anti-Jesuiticos y depuso de su Tenientazgo a Estéban y León.⁶⁴ Cabe recordar que Amat llegó a escandalizarse porque los delincuentes usufructuaron el asilo eclesiástico para sus andanzas.⁶⁵ Es sabido que en el Río de la Plata, fueron los contrabandistas quienes más usufructuaron de dicha prerrogativa, al extremo que el Provisor del Obispado declaró en 1774 cuales eran las iglesias que gozaban del privilegio del asilo.⁶⁶ Asimismo, los religiosos ligados a los intereses pro-Jesuiticos recurrieron al Metropolitano de los Mercedarios residente en Santiago de Chile contra la autoridad del Provincial Absoluto del Convento. En respuesta, los religiosos ligados a los intereses anti-Jesuiticos recurrieron al Papa contra la autoridad del nuevo Vicario General del Convento. Es entonces que en virtud de tan insoluble conflicto de competencias el Maestro General de la Orden Mercedaria Fr. Basilio Gil de Bernabé obtuvo del Papa Clemente XIII en mayo de 1767 un Breve Pontificio por el cual se dividía la provincia Mercedaria del Tucumán en tres partes.⁶⁷ Un año después, en mayo de 1768, cuando se aclara el escándalo ocurrido, se comprueba por dos testigos que deponen ante la justicia, que las fatales discordias acontecidas fueron originadas por "el mal formado dictámen", violatorio de los fueros eclesiásticos, que el Procurador Juan Tiburcio de Ordóñez,⁶⁸ había dado al Teniente de Rey Estéban y León, sobre el auxilio policial que los Mercedarios pidieron,⁶⁹ a los Alcaldes Cayetano Terán Quevedo,⁷⁰ y José Martínez de Candia.⁷¹ Finalmente, el 1 de Octubre de 1770, el Virrey Amat, en la causa iniciada en 1768 por el Alcalde Terán Quevedo, en representación del Cabildo de Córdoba,⁷² condonó la pena a la que habían sido acreedores Manuel de Estéban y León, Prudencio Palacios,⁷³ y Santiago de Allende y Losa.⁷⁴

Pero como el conflicto no alcanzó a resolverse, los indultados por el Virrey Amat volvieron en un par de años a sus andadas. La crisis iniciada en el atrio de la Merced en 1766, consistente en un conflicto de superposición de competencias entre Córdoba y Santiago de Chile y una violación de los fueros eclesiásticos, vino a resolverse en 1772 mediante una metodología violenta, por cuanto se convocaron en el mismo atrio a las Milicias urbanas y rurales. Las causas pendientes del Juzgado de Segundo Voto, por los dineros provenientes de la limosna de Redención de Cautivos, administrada por la Orden Mercedaria, y por el reparto de los bienes secuestrados a los Jesuitas, recayeron en un peninsular identificado con el clan de los Echenique, el Alcalde de Segundo Voto Terán Quevedo, lo cual agravó el conflicto. A juzgar por un documento de la Audiencia de Buenos Aires, hallado en el Archivo General de Indias,⁷⁵ y publicado primero por Toledo (1919) y luego por Bruno (1967), las Milicias de Córdoba entraron nuevamente en acción en 1772 a pedido de las autoridades religiosas. En efecto, el Alcalde Provincial José Martínez y González, y el Alcalde de Segundo Voto Terán Quevedo, partidarios de los Jesuitas y de la Casa de los Echenique,⁷⁶ habían concurrido al Convento Mercedario de San Lorenzo con quince o veinte hombres armados, a pedido del R.P. Vicario General para "...fortalecer con gente armada estos claustros", a fin de reducir al R.P. Provincial Absoluto Herrera y los seis frailes expulsados, que prófugos habían vuelto en rebeldía.⁷⁷ En respuesta a dicha acción policial el Alcalde de primer voto Don Santiago de Allende y Losa, conjuntamente con el Teniente de Rey Estéban y León, y su yerno el Justicia Mayor Don Prudencio Palacios, y con otro copioso número de milicianos armados de a pié y a caballo, irrumpieron en el pretil del Convento, con el fin de apoyar a los clérigos de la facción ligada a los intereses anti-Jesuiticos, llegando en su vehemencia hasta "acometer" violentamente al Alcalde Provincial Martínez y al Alcalde de Segundo Voto Terán Quevedo. El Teniente de Rey llegó a darle de empujones y hasta dispararle un tiro de pistola al Alcalde

Provincial, el "gallego" Martínez, "...y no aquietando su osadía echó mano a la espada para invadirle".⁷⁸ De la circunstancia de haber violado el sagrado resultó

"...que no sólo embarazaron el auxilio, desterrando con golpes y conminaciones a la gente que sufragaba a los auxilantes, sino para más despeñarse arrestaron en el mismo sitio la persona del Alcalde Provincial llevándole preso a la Sala del Cabildo junto con la de Gonzalo Terán y Quevedo, primo hermano del Alcalde de segundo voto a quien pusieron a buen recaudo en un calabozo de la cárcel baxa entre reos facinerosos".⁷⁹

Para mayor escándalo Allende, León, y Palacios

"...mandaron publicar y de hecho publicaron vando a toque de caja por las cuadras y cantones públicos de la ciudad,..., que ningún estante ni habitante auxiliase ni favoreciese de modo alguno al Prelado y Presidente de esta Provincia ni a ningún juez que lo mandase".⁸⁰

Como trágica secuela de esta crisis el Comisionado de la Real Audiencia de Charcas General José Francisco de Galarza,⁸¹ fué ultrajado, de resultas de lo cual enfermó de muerte, falleciendo a los tres días, y

"...haciendo que su muerte fuere el más claro testimonio de la lealtad con que se sacrificó en obsequio de la autoridad del Regio Tribunal que lo comisionó, y el más fuerte convencimiento de la temeridad de estos individuos [los Allende] que se la ocasionaron".⁸²

La superposición de competencias.

En otra causa en la que estaba involucrado el Convento de Predicadores de San Juan --en la que intervino el Obispo de Santiago de Chile por depender dicho Convento de la provincia Dominicana de San Lorenzo Mártir de Chile--⁸³ se provocó también un serio conflicto de superposición de competencias, alimentado también por viejos regionalismos, por cuanto los frailes cuyanos, agraviados por los frailes chilenos, habían recurrido al Cabildo de San Juan, el cual para ese entonces estaba subordinado a la Gobernación-Intendencia de Córdoba. Sus religiosos,⁸⁴ se presentaron en 1802 ante el Cabildo para denunciar que el Prior Fr. Cayetano Bastidas, de origen chileno, afectado de una gravísima enfermedad, era sustituido por su Procurador el R.P. Lector de Teología Fr. Isidro González, también chileno, en cuyo gobierno

"...se han hecho ventas de muchos fundos de este Convento y se han recibido varias cantidades redimidas por los inquilinos sin que el producto de estas, ni el de aquellas se haya impuesto a censo ni invertido en compras que sustituyan las ventas".⁸⁵

Un año más tarde, en 1803, a la muerte de Bastidas, el Provincial Fr. Marcos Vázquez impuso de Superior a Fr. Matías José del Castillo, quien recurrió por ante la Real Audiencia de Buenos Aires el rechazo del Cabildo con inusual éxito.⁸⁶ Pese a ello, los Religiosos Sanjuaninos insistieron a tal grado que en 1806 lograron por Real Despacho que los conventos cuyanos se agregaran a la provincia dominica de San Agustín, cuya jurisdicción comprendía a las provincias de Buenos Aires, Tucumán y Paraguay.

Analizando el comportamiento de Obispos, Gobernadores, Oidores, Comandantes de Armas y Tenientes Asesores Letrados tomamos conciencia también de la importancia que gozaban las funciones de tablas (religiosas y universitarias) en los conflictos de competencia. Quesada (1869), Brown (1910),

Carbia (1914,1915,1945), Levene (1920), Legón (1920) y Bruno (1967) fueron los primeros en tomar en consideración aquellos conflictos en que estaban en juego cuestiones de etiqueta eclesiástica. Sin embargo, dichos autores no alcanzaron a vislumbrar las derivaciones sociales y políticas de dichos actos. Según documentos hallados en el Archivo General de la Nación, entre las prerrogativas de que gozaban los Gobernadores, estaba la de

"...acompañarles los dos Alcaldes a los acuerdos capitulares, todo el Cabildo a las funciones públicas y de Tabla, de ida y vuelta, salir todo él en cuerpo de tal, recibirle a las inmediaciones de la Ciudad cuando llega de afuera, y cuando entra y sale a la Visita [indagación] de la Provincia, cumplimentarlo en su cumpleaños, darle agua bendita al entrar a la Iglesia con el Cabildo, usar en ella silla, tapete, cogín y bela con arandela, y recibir la Paz por ministro más autorizado".⁸⁷

En cambio, los Tenientes Letrados, aún cuando en ellos recaía todo el Gobierno y la autoridad, sólo gozaban de la prerrogativa de que el Cabildo "...les saque y buelva a su habitación en las funciones de Tabla y públicas".⁸⁸ Respecto a los Comandantes de Armas, estos solían seguir, en el paseo del Real Pendón, detrás de los Regidores. En un caso ocurrido en Córdoba en 1807, el Regidor Benito Rueda,⁸⁹ le advirtió al Comandante Francisco Rodrigo,⁹⁰ "...que no podía seguir en el lugar que traía, y se retiró [este] sin discordia ni disputarlo".⁹¹

La resistencia a subrogar el Vice-Patronato Real.

Así como los Gobernadores se resistían a ceder a los Cabildos Eclesiásticos y a los Asesores Letrados la prerrogativa de designar autoridades eclesiásticas y laudar en conflictos eclesiásticos, los Virreyes se resistían también a subrogar el Vice-Patronato Real que ejercían sobre la educación superior. Los Virreyes habían accedido al Vice-Patronato sobre las Universidades luego de la Expulsión de los Jesuitas. Habiendo quedado sometidas las Universidades al Vice-Patronato Real del Gobernador de Buenos Aires primero (1767), y del Virrey del Río de la Plata después (1778), las gobernaciones donde estas universidades estaban asentadas solicitaban en vano se les cediera dicho vice-patronato. En 1785, el Gobernador-Intendente de Córdoba Rafael de Sobremonte había solicitado infructuosamente del Virrey Loreto la cesión del vice-patronato real sobre la universidad.⁹² Frustradas esas pretensiones, los conflictos persistieron en oportunidad en que se elegían sus autoridades. En Córdoba, la Orden Franciscana y el Clero Secular venían dirimiendo un interminable conflicto por el poder académico de la Universidad y del Colegio de Monserrat.⁹³ Estaba este conflicto íntimamente ligado a las luchas libradas en el mismo cabildo secular.⁹⁴ Este alcanzó su punto más álgido en tres distintas ocasiones: 1) durante el Rectorado de fray Pedro Nolasco Barrientos en 1774; 2) a partir de la muerte del Rector Fr. Pedro José de Parras y durante el rectorado de fray Pedro Guitián y Arias, en 1784; y 3) durante la gestión de fray Pedro José de Súlivan, en 1799.⁹⁵ En favor de Barrientos se habían pronunciado en 1774 el Cabildo secular de Córdoba, el Presidente de la Junta Provincial de Temporalidades José Luis Cabral,⁹⁶ el Alcalde Manuel de Estéban y León,⁹⁷ y el Procurador General del Cabildo de Córdoba Alejandro Echenique.⁹⁸ En ocasión del rectorado de Guitián y Arias, en 1784, el Obispo de Córdoba Fray José Antonio de San Alberto,⁹⁹ enfrentado a su Cabildo Eclesiástico, apoyó la gestión de Guitián y la connotación consultiva del voto de los graduados en la conducción de la Universidad.¹⁰⁰ Por el contrario, en apoyo de los graduados, que solicitaban voto decisivo y no meramente consultivo, acudieron los miembros del Cabildo Eclesiástico: Deán Dr. Pedro José Gutiérrez, Magistral Nicolás Videla del Pino, Canónigo Gregorio Funes,¹⁰¹ y Chantre José Antonio Ascasubi.¹⁰² La oposición del Cabildo Eclesiástico, controlado por el estamento criollo, a la gestión rectoral del clero Franciscano obedecía, según el ex-Obispo Abad Illana, a que los integrantes de dicho Cabildo sufrían de jesuitismo, o escolasticismo, por haber sido formados en dicha Universidad.¹⁰³

Por último, en ocasión del Rectorado de fray Pedro Súlivan, en 1799, también se gestó una fuerte ofensiva contra los Franciscanos.¹⁰⁴ Acudieron en su contra el fuerte comerciante Ambrosio Funes,¹⁰⁵ hermano del Deán Gregorio Funes, el Regidor Defensor de Menores Benito Rueda,¹⁰⁶ y un numeroso grupo de vecinos.¹⁰⁷ En esta ocasión es preciso tener en cuenta que Funes había quedado profundamente resentido por cuanto Sobremonte le había escamoteado la Comandancia General de Armas en beneficio del Coronel Santiago Alejo de Allende,¹⁰⁸ así como promovido en la jerarquía militar a Pedro Lucas de Allende,¹⁰⁹ y a José Javier Díaz.¹¹⁰ En general, los Franciscanos, cuya hegemonía en la Universidad transcurrió sin interrupciones hasta la asunción del Virreinato por Santiago de Liniers, contaron con la ayuda de la familia Allende, de su instrumento el Dr. José Dámaso Xijena "...preceptor que fué en latinidad de los hijos del finado Pedro Lucas de Allende",¹¹¹ y de la facción Sobremontista. Finalmente, como a fines de siglo, el Episcopado de Córdoba, enfrentado a su Cabildo Eclesiástico, se hallaba inmerso en un profundo desprestigio, así como neutralizado por los efectos del Patronato Real que impulsaban los Borbones, y el Cabildo secular seguía en manos de los Sobremontistas, mal se pudo lograr desplazar a los Franciscanos del poder académico de la Universidad.¹¹²

También la Universidad de Charcas, Alto Perú, sujeta al clero secular, a partir de la expulsión de los Jesuitas, vivía sacudida por los conflictos de poder. Cuando en 1785, hubo cesado en el cargo de Rector de su Universidad el Dr. Gregorio de Olaso, y estando a punto de elegirse como su sustituto al Dr. Juan José Segovia,¹¹³ Olaso le soplabá al Virrey del Río de la Plata las connotaciones de Segovia, pues "...se jacta de ser el defensor de los criollos, sin distinción de calidades, y se reputa el tribuno del Pueblo, y el Cónsul de estas Provincias".¹¹⁴ Segovia fué Oidor de la Real Audiencia de Charcas, era conocido de Juan Bautista Maziel,¹¹⁵ se casó con la dueña de ingenios Manuela del Risco y Agorreta, y un par de meses antes de la partida de Olaso había participado en la **revolución de los muchachos**, acontecimiento provocado por la presencia del Regimiento de Granaderos de Extremadura.¹¹⁶ Conociendo Olaso el rol que le cupo a Segovia, en connivencia pasiva con el Gobernador-Intendente General Ignacio Flores, en dicho evento, le parecía que estaba obligado en su calidad de Rector saliente de

"...embarazarlo en cuanto fuese de mi parte, pues...no debía tolerarse ponerlo a la cabeza de un cuerpo, donde...pudiese él inspirar algunas especies sediciosas, aprovechando las proporciones de ser oídos y respetados como Maestros, los individuos, que le forman, y de componerse su mayor parte de los de su raza y facción".¹¹⁷

Terminaba la escuela Olaso advirtiéndole que "...cualquier leve chispa debe con tiempo apagarse, y no permitirle el menor aire, para que llegue a cundir, y causar mayor incendio".¹¹⁸ Las advertencias de Olaso no fueron en vano, pues el Virrey Loreto, fiel a la misma política por la cual desterró a Montevideo al Maestre-Escuela Juan Baltasar Maziel, ordenó procesar a Segovia condenándolo a cuatro años de cárcel, y destituyó al Gobernador-Intendente General Ignacio Flores. Segovia purgó su condena en el presidio de Buenos Aires, para luego obtener del Rey en 1789 una reivindicación completa.¹¹⁹ El resultado de esta política fué la corrupción de los estudios, tal como lo aseveraba el Deán Funes en 1805, en carta al Obispo Orellana.¹²⁰

La incidencia del fuero eclesiástico en el equilibrio de poder entre autoridades civiles.

Finalmente, el ejercicio del fuero eclesiástico por parte de Obispos y Arzobispos también incidió en el equilibrio de poder existente entre las autoridades civiles mismas. El Gobernador-Intendente de Potosí Francisco de Paula Sanz vió en la Real Cédula del 9 de mayo de 1795, que

despojaba a los Intendentes del ejercicio del Patronato Real, el resultado del esfuerzo del citado ex-Obispo de Córdoba y posterior Arzobispo de La Plata Fray José Antonio de San Alberto, por reducir su poder y suspender la Visita de Chayanta.¹²¹ Dicho Arzobispo era afecto a las posiciones regalistas más extremas, desde cuando había desempeñado el Obispado de Córdoba.¹²² El conflicto se había originado a partir de la facultad que tenían los Curas de cobrar en las fiestas de tabla oblaciones y limosnas, más brevemente conocidos como el Arancel, único fondo del cual percibían sus ingresos o estipendios.

El ejercicio del fuero eclesiástico por parte del clero regular (Ordenes Religiosas) habría incidido en la disciplina eclesiástica mucho más fuertemente que el ejercido por el clero secular. Como el otorgamiento del fuero eclesiástico operaba en forma semejante a la avocación, inhibitoria,¹²³ o declinatoria,¹²⁴ pues substraía al beneficiado de la jurisdicción ordinaria o civil, se originaba con su aplicación una crónica indisciplina eclesiástica, nacida del desmedido goce de este privilegio y de la inescrupulosa ambición del clero regular --compuestas mayoritariamente por mestizos-- en querer monopolizar todos los cargos religiosos. También, de acuerdo a la Real Ordenanza de Intendentes, los Contadores Reales de la Mesas Decimales de los Obispados, los Síndicos Procuradores de los Monasterios, los Contadores y Tesoreros del Santo Oficio de la Inquisición, la Santa Cruzada y la Redención de Cautivos, como sub-ordenes de la corporación eclesiástica, gozaban del fuero eclesiástico y de la libertad de cargos concejiles y militares.¹²⁵

Los Mercedarios y los Agustinos fueron los que más intensamente tuvieron que ver con la asimilación de los mestizos, los criollos y los hijos naturales en los ámbitos conventuales. Los Jesuitas y los Franciscanos (estos últimos luego de la expulsión de los primeros) fueron a su vez los que más intensamente se vincularon con igual proceso de asimilación, pero en los ámbitos de la docencia, esencialmente en las Universidades de Córdoba y Charcas, donde el fuero universitario jugaba como un sub-orden del fuero eclesiástico.¹²⁶ Y la Orden Mercedaria y los Conventos de Monjas Teresas y de Santa Catalina los que más influyeron en la consolidación de la base material o temporal de la Iglesia, léase administración de recursos económicos y financieros. La Orden Mercedaria, debido a su rol como administradora de los dineros provenientes de la limosna de Redención de Cautivos; y los Conventos de Monjas Teresas y de Santa Catalina, como administradores de Capellanías y Obras Pías.¹²⁷

Podemos concluir, sobre la base de los innumerables conflictos suscitados entre las autoridades civiles y religiosas de fines del siglo XVIII, aquí relatados, que el fuero eclesiástico continuó interfiriendo en el ejercicio del Patronato Real; y los Virreyes, Gobernadores y Reales Audiencias continuaron participando en las decisiones eclesiásticas. No solo interfirió el fuero eclesiástico en el devenir de los Cabildos, sino que también irrumpió en la vida de las demás corporaciones, como la Real Hacienda y la Milicia. El clero habría logrado entonces una sostenida preeminencia social que la Revolución apenas logró disipar.

NOTAS

¹ Sobre el Real Patronato Indiano, ver Weckman, 1984, I, 383-385.

² partidarias del control estatal de la Iglesia.

³ Febronio, 1770-74, 1781; Parras, 1783; Gorriti, 1836; Vigil, 1848/49; Alberdi, 1895, 279-280; López, 1883, I, 3877; y 1891, 80-83; González, 1897, 155-156; Bunge, 1913, 277-278; y Vélez Sársfield, 1919, 90-91.

⁴ Gual, 1852; Estrada, 1871, 193-260; Ayarragaray, 1920; Carbia, 1914; y Legón, 1920.

⁵ Justo, 1945, 145-227; Bagú, 1949, 80 y 89; Furlong, 1954, 64; y Choy, 1985, 247.

⁶ Guerra, 1989, 673.

⁷ Saguier, 1984b, 491-515; y Sánchez Bella, 1989, 445.

⁸ provisión de curatos y beneficios, declaración de sedes vacantes, administración de haciendas, censos y capellanías, cobro de oblacones y limosnas, distribución de la renta eclesiástica, laudo en litigios eclesiásticos, concurso de canongías, designación de Diputados o vocales en las Juntas Municipales de Propios y Temporalidades, y supervisión y control de la educación superior.

⁹ privilegios, precedencias o prerrogativas del ceremonial o protocolo religioso.

¹⁰ Fisher, 1981, 52 y 59; y 1990, 640.

¹¹ Gardella, 1968, 153-160.

¹² para integrar el Santo Oficio de la Inquisición sus miembros debían someterse a las pruebas de la limpieza de sangre, practicadas por sus propios Alguaciles (Lewin, 1950, 91-92). Sobre el fuero universitario, ver Torremocha Hernández, 1991, 128.

¹³ Medina, 1945, 59, cit. por Lewin, 1950, 93.

¹⁴ Los miembros de las Cofradías eran inmunes a la jurisdicción civil en materia criminal (Russell-Wood, 1974, 175).

¹⁵ Giddens, 1977, 274.

¹⁶ Gibson, 1966, 80.

¹⁷ Levaggi, 1971, 45.

¹⁸ recurso ordinario interpuesto por un agraviado ante un juez secular contra un juez de la jurisdicción eclesiástica para que disponga que este último alce la fuerza o violencia que hace al agraviado o en su defecto provea su declinatoria (Gardella, 1968, 99-103).

¹⁹ Cabral Texo, 1952, 99; Hera, 1960, 570-571; y Levaggi, 1971, 46.

²⁰ Levaggi, 1971, 45.

²¹ Yerno del Maestre de Campo Juan Crisóstomo de Dícido y Zamudio y concuñado de Ziprián de Lagraña y de José de Acosta. Falleció en Lima.

²² Primo hermano del Cura de las Saladas José Francisco de Casajús; y hermano de León Martínez de Ybarra, quien estaba casado con María Ignacia de Acosta y Zamudio, hija de José de Acosta y de Ana Zamudio (Calvo, I, 29). El suegro de su hermano, Don José de Acosta, era concuñado del Teniente Gobernador Nicolás Patrón y Centellas.

²³ Labougle, 1930, 1-18; y Bruno, 1967, V, 153.

²⁴ Bruno, 1967, V, 154.

²⁵ Testimonio de José Borjes, en AGN, División Colonia, Justicia, Leg.2, Exp.19.

²⁶ *Ibídem*.

²⁷ Lynch, 1967, 84.

²⁸ ex-Obispo del Paraguay. Ver Piaggio, 1912.

²⁹ Hijo del Teniente Gobernador, Justicia Mayor, y Comandante de Armas de Salta General Domingo de Isasmendi y Ormazábal, nacido en Marín en noviembre de 1700, Encomendero de los Molinos, y de María Magdalena Díez Gómez y Castellanos, hija del Teniente Gobernador, Justicia Mayor, y Encomendero de los Molinos Maestre de Campo Diego Díez Gómez y Argüello y de Valeriana de Escobar Castellanos y Cabrera, sin sucesión. Su padre contrajo segundas nupcias en 1744 con Josefa Gertrudis de Echalar y Morales, nacida en Tarija, hija del Teniente Gobernador de Tarija Maestre de Campo Juan Echalar y de Bartolina Morales. Era hermano de Nicolás Severo Isasmendi, el último Gobernador-Intendente designado por el Rey de España, y cuñado de Sinforoso José Rioja, de Cayetano José Viniegra, de Francisco de Poveda Hernández, de Jacoba Gorostiaga Rioja, y de Micaela de Gordaliza y Hoyos (Calvo, II, 32-33).

³⁰ fué designado en 1784 Cura del curato de San Javier, en Traslasierra, y en 1794 fué reemplazado por el Dr. José Agustín Álvarez (Barrionuevo Imposti, 1949, 781).

³¹ Acevedo, 1965, 455. El chantre constituía una de las dignidades menores, la cuarta luego del prelado, y su oficio principal el de concurrir a las cargas que el prelado y el Cabildo catedralicio habrían querido encomendarle (Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa Calpe, t.16, p.1530)..

³² Acevedo, 1965, 455.

³³ Lewin, 1967, 27. Los Capítulos Generales eran una suerte de convenciones periódicas, que se convocaban cada seis años, en las cuales delegados de cada provincia se encontraban para elegir un nuevo Superior General denominado Ministro General o simplemente General (Tibesar, 1955, 243).

³⁴ Hijo de Francisco Pérez de Saravia y de Isabel de Sorarte. Fué abogado del famoso comerciante Tomás Antonio Romero. Para la biografía de Pérez de Saravia ver Cutolo, V, 440; Mariluz Urquijo, 1958, 132-133; y Fuenzalida Grandón, 1972, 633.

³⁵ Pedro Melo de Portugal al Virrey Vértiz, Asunción, 13-VI-1783 (AGN, División Colonia, Intendencia del Paraguay, Leg.2, Sala IX, 5-4-1).

³⁶ AGN, División Colonia, Interior, Leg.39, Exp.5, fs.32v.

³⁷ Había pasado a América en la familia del Obispo de Arequipa Fr. Miguel Pamplona, y en su tránsito por Montevideo lo recogió el Obispo de Asunción Fr. Luis de Velasco (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.26, Exp.772, fs.73).

³⁸ ver Mora Mérida, 1976, 123-129.

³⁹ AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.104, Exp.25 y 40.

⁴⁰ Pedro Melo de Portugal al Virrey Vértiz, Asunción, 13-IV-1783 (AGN, División Colonia, Intendencia del Paraguay, Leg.2, Sala IX, 5-4-1).

⁴¹ *Ibíd.*

⁴² Ganster, 1993, 157.

⁴³ Lynch, 1967, 82.

⁴⁴ Por cuanto en los tres volúmenes del Catálogo de la Real Audiencia de Santiago (Santiago de Chile: Imprenta Barcelona) no figura ningún litigio referente a este singular caso sospecho que debe haber algún expediente en el Archivo de la Audiencia de Charcas.

⁴⁵ Hermano de Fr. José Piñero, ambos hijos del Capitán Juan Eusebio Piñero de Torres y de María Rosa Pacheco de Mendoza, y nietos de Margarita Villarroel, fallecida en Colcha, Santiago del Estero (AHC, Escribanía N.1, Leg.369, Exp.4). Juan Vicente era casado con María Baigorri Garay, viuda del Sargento Mayor Bernardo Vélez de Herrera, hija del General Juan Clemente de Baigorri y Brizuela, Señor de San Sebastián de Sañogasta, y encomendero de Nogolma, y de Gabriela de Garay y Tejeda. Eran padres de Juan José Piñero, casado con Vicenta Molina, hija del Cap. Vicente Molina, vecino del Río Cuarto, y de Vicenta Montiel, nieta paterna del Cap. Luis de Molina Navarrete y Tejeda, y de Isabel de Garay Peralta y Tejeda (Lazcano Colodrero, 1968, II, 160; III, 386; Buscá-Sust, 1981, 68). Juan Vicente Piñero fué procesado en 1765 por amancebamiento, proceso por el cual fué expulsado del Cabildo (AHC, Crímen, Leg.19, Exp.25). También usufructuó Piñero largamente de los fondos financieros (capellanías y obras pías) de la Orden de la Merced, al extremo que en 1770 fué ejecutado por incumplimiento en el pago de los réditos (AHC, Escribanía N.1, Leg.369, Exp.4).

⁴⁶ Teniente Corregidor de Quispicanchis, en el Cuzco, entre 1755 y 1760. Sobrino de Diego de Hesles, y marido de María Ignacia Martiarena del Barranco y Campero, padre de María Ignacia Fernández Campero, mujer legítima del 2o. Marqués de Yavi Fernando Campero, y primo de Juan José Campero (Acevedo, 1969, 14; y Cutolo, II, 74; y III, 50). Tomás de Allende y Losa y su cuñado Gregorio Arrascaeta afianzaron en 1764 el juicio de residencia del Gobernador Campero (Acevedo, 1969, 15). A juicio de Acevedo (1969), Campero utilizó la Expulsión de los Jesuitas como medio para envolver a todos los que se opusieron a sus anteriores manejos del Ramo de Sisa (Acevedo, 1969, 117).

⁴⁷ Archivo Histórico de Córdoba (AHC), Crímen, 1765, Leg.19, Exp.25.

⁴⁸ Hermano del Teniente Gobernador de Córdoba General Tomás de Allende y Losa, y de José y Santiago de Allende y Losa (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 1, Sala IX, 5-9-3).

⁴⁹ Ver Abad y Queipo, 1963, 182-183; Comadrán Ruiz, 1971; y Arvizu, 1986, 521-541.

⁵⁰ La cual se hallaba fuertemente ligada al tráfico de mulas críadas en el litoral rioplatense.

⁵¹ Acevedo, 1969, 17. Ofreciéndose en la década del 60 el capitanazgo de los Mercedarios, su Vicario General, "...por temor de alguna revuelta, consiguió un despacho del Superior Gobierno para que las Justicias diesen auxilio a los Frailes si le pedían, y después de haber obedecido el Cabildo cuando pidieron favor los frailes, no solo no le dió dicho Teniente [Palacios] sino que se juntó con su suegro y el Alcalde de primer voto don Santiago Allende, y fueron a impedir, le diese al otro Alcalde don Cayetano Terán Quevedo, con los demás Regidores, a quienes quisieron matar, y ya que erraron

los tiros, anduvieron por prenderlos y por obviar mayores daños los Regidores se ausentaron y el Alcalde repuso de la vara al Gobernador" (Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires, 49, América Meridional, 12 de Julio de 1768, 0-3-7; cuya copia reside en la Colección Documental donada por Enrique Barba, existente en el Centro de Historia Colonial, de la Universidad Nacional de La Plata).

⁵² AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 1, Sala IX, 5-9-3).

⁵³ Lamentablemente no he tenido aún acceso a dicho expediente.

⁵⁴ AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 1, Sala IX, 5-9-3).

⁵⁵ El espíritu de discordia que reinaba en la provincia Tucumana de la Orden Mercedaria no era el único. En la provincia Altoperuana de la Orden Mercedaria, Potosí "...siempre ha sido insolente y escandaloso como se ha visto con los bullicios recientes acaecidos con los religiosos de la Merced, sin que faltasen homicidios hasta de clérigos, y otras fuerzas públicas" (El Fiscal Protector de la Real Audiencia de La Plata y Gobernador Interino de la Villa de Potosí Manuel Martínez de Escobar y Coronado al Virrey del Perú Manuel de Amat, Potosí, 26-II-1771 [AGN, División Colonia, Potosí, Leg.4, Sala IX, 6-3-1]). También en la provincia chilena de la Orden Franciscana, fomentado por "el parentesco y las conexiones del siglo", reinaba en noviembre de 1765 un odio implacable (Gonsález Echenique, 1962, 186).

⁵⁶ Provincial de la Orden Mercedaria en 1766 (Brunet, 1973, 81). Hijo de Marcos Rodríguez Flores, dueño de una estancia de criar mulas en Luján, Provincia de Buenos Aires, y de Catalina Martínez de Saravia (Fernández Burzaco, 1990, V, 379).

⁵⁷ Fué Capellán de la expedición a las Salinas Grandes al mando de Manuel Pinazo en 1770 (Brunet, 1973, 73). Hijo de Marcos Rodríguez Flores, dueño de una estancia de criar mulas en Luján, Provincia de Buenos Aires, y de Catalina Martínez de Saravia (Fernández Burzaco, 1990, V, 379).

⁵⁸ Maestro en Sagrada Teología y Presidente in cápite del Convento de San Lorenzo entre 1755 y 1757 (Brunet, 1973, 74). Hijo del Capitán Francisco López de Osornio, dueño de una estancia de criar mulas en Luján, Provincia de Buenos Aires, y de María de Gámez (Fernández Burzaco, 1990, IV, 178).

⁵⁹ Hijo de José de Chaparro, nacido en Asunción y vecino de Buenos Aires, y de Juana de Sosa, y cuñado de Juan Antonio González y de Francisco Antonio Ferreyra (Fernández de Burzaco, II, 195).

⁶⁰ Hijo de José Esquivel y de Angela Ramírez Pedernera (Fernández de Burzaco, II, 304).

⁶¹ Fr. Gregorio Leguizamón, Fr. Joseph López de Salazar, Fr. Lorenzo López de Osornio, Fr. Antonio Rodríguez Flores, Fr. Simón Rodríguez Flores, Fr. Pedro Aparicio, Fr. Vicente Chaparro, Fr. Joseph Esquivel, Fr. Ignacio Lescano, Fr. Joseph Herrera, Fr. Pedro Nolasco Melgarejo, y Fr. Juan Brenes (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 1, Sala IX, 5-9-3)

⁶² Obtuvo en 1743 el cargo de Teniente de Rey por 4.000 pesos, permaneciendo en el puesto hasta de 1775 (Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires, Leg.50, copia existente en el Instituto de Investigaciones Históricas "Dr. Emilio Ravignani", carpeta 155, n.3, citado en Zorraquín Becú, 1959, 176; y Acevedo, 1972, 253-267). Fué también encargado de la recepción del ramo de Sisa. Era casado con Eugenia de Ledesma y Olmedo, hija del Regidor y Fiel Ejecutor General Ignacio de Ledesma y

Ceballos, dueño de la estancia Santa Cruz, y de la hija del encomendero de Cabinda y Macarrire y Teniente Gobernador de La Rioja Bartolomé de Olmedo y Serrano; y suegro del General Prudencio Palacios (Lazcano, 1969, III, 293). Fué padre del Chantre de la Catedral Dr. José Lino de León, de Pasqual Baylón de León, ausente en las Provincias del Perú, de María Teresa de León, mujer del General Prudencio Palacios, y del Dr. Domingo Ignacio de León, Teniente de Rey de Córdoba, Subdelegado de la Renta de Correos, Juez de la Universidad, y Presidente de la Junta Municipal de Temporalidades de Córdoba en 1775, marido de María Josefa Zavala. Era dueño de la estancia nombrada La Chacarilla (AHC, Escribanía N.2, Leg.64, Exp.21).

⁶³ plaza creada para los casos de ausencia del gobernador. Según Zinny poseía atribuciones sólo en el ramo militar (Zinny, 1920-21, I, 202). Pero según Ornaghi y Franciosi (s/f), el Teniente de Rey tenía a su cargo la recepción del ramo de Sisa, debido a que su tarea específica estaba relacionada con la defensa de las fronteras de los ataques de los indígenas (Ornaghi y Franciosi, s/f, 99).

⁶⁴ El cargo de Teniente de Rey fué abolido por Real Orden el 4 de Junio de 1778 (Ornaghi y Franciosi, s/f, 99).

⁶⁵ Haslip-Viera, 1993, 351.

⁶⁶ Acuerdos, III Serie, V, 85 y 89.

⁶⁷ La primer parte la constituían los conventos de Córdoba, Santiago del Estero, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Salta y el Hospicio de Catamarca; la segunda los conventos de Buenos Aires y el Hospicio de San Ramón de las Conchas; y la tercera los conventos del Paraguay, Santa Fé y Corrientes (Toledo, 1919, 40).

⁶⁸ Hijo de Juan de Ordóñez y Herrera, y de Luisa Ledesma y Garaian, casado en primeras nupcias con su prima Isabel Bustos y Ledesma, y en segundas nupcias con María Caldevilla (Lazcano Colodrero, 1936, 140). Pretendió en 1785 adquirir de los Dominicos la estancia denominada de Diego Celis en \$2.000, y fracasó en el intento (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.242, Exp.12).

⁶⁹ Córdoba, 13-V-1768 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.1, Sala IX, 5-9-3).

⁷⁰ Familiar del Santo Oficio de la Inquisición, y Presidente de la Junta Municipal de Temporalidades. Primo hermano de Gonzalo Terán Quevedo. Cayetano estaba casado en primeras nupcias con Bartolina Fernández, y en segundas nupcias con María Mercedes Amarante, hija del comerciante y frustrado minero José Amarante y de Catalina de Quevedo y Soria (datos proporcionados por Carlos Jáuregui). Amarante había contraído con comerciantes de Buenos Aires entre 1749 y 1751 cinco operaciones de fiado por valor de \$23.489 (AGN, Protocolos, Reg.4, 1749, fs.225; R.1, 1751, fs. 463; R.4, 1751, fs.145; y R.2, 1751, fs. 485 y 489). También había sido Amarante dueño de un trapiche para moler metal en La Punilla (Gould, 1983, 32). Desconocemos si este Amarante es el mismo casado con Catalina Arrascaeta, y suegro de Juan de Hormaeche, o si se trata de un homónimo. Terán Quevedo fué el Alcalde que en 1766 dió cuenta a la Audiencia de Charcas y al Virrey de Lima que el Gobernador Campero se había juntado con Palacios, su suegro Estéban y León y el Alcalde Santiago Allende para impedir que él [Terán] pudiera dar ayuda a los Frailes Mercedarios. Las Reales Audiencias mandaron en comisión al General don José de Galarza "...para que lo pusiera [a Terán] en posesión de la vara". A fin de no dar cumplimiento al despacho del Comisionado Galarza, el Gobernador Campero salió de Salta para Córdoba, para deponer "...a los Regidores antiguos, y como seis de dos solas familias, que fueron un hijo de dicho Teniente de Rey [Domingo Ignacio de León], a dicho Alcalde Allende, a su

concuñado, y ya citado Uriarte, a un Santibáñez, sobrino de éste, y a otro Allende, hijo natural; que en dos días le hizo Capitán Sargento Mayor y Regidor...Terán, por no verse preso, ganó sagrado, y no sé si está todavía, y han pasado más de dos años" (Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires, 49, América Meridional, 12 de Julio de 1768, 0-3-7; cuya copia reside en la Colección Documental donada por Enrique Barba, existente en el Centro de Historia Colonial, de la Universidad Nacional de La Plata).

⁷¹ Natural de Galicia, casado con Clara Echenique y Urtubey, y padres de Julián Martínez, casado con Juana Luisa Pérez, y de José Raimundo Martínez, propietarios de la estancia de Ambargasta, en Santiago del Estero (Lazcano, 1968, II, 223). Fué denunciado en 1761 por el Tesorero Oficial Real Manuel Arredondo y Puerta, primer marido de María Allende y Losa, y procesado por protector de comercios ilícitos y defraudador de los reales derechos (AHC, Crímen, 1761, Leg.16, Exp.5; y Escribanía N.2, Leg.36, Exp.13). En 1761 litiga con Estanislao de las Casas por incumplimiento de contrato (AHC, Escribanía N.1, Leg.345, Exp.1). En 1762 litiga con Julián Cabrera (AHC, Escribanía N1, Leg.347, Exp.12). En 1764 le inicia a Francisco José de Uriarte, marido de María Mercedes Mendiola, un juicio por injurias (AHC, Crímen, 1764, Leg.19, Exp.13). Con motivo de la expulsión de los Jesuitas, en 1767, estuvo preso conjuntamente con Juan Antonio de la Bárcena, José Bejarano y Manuel Isidoro Gutiérrez (Learte, 1926, 216). Cuando su hijo Julián Martínez se casó en 1794 con Juana Pérez, su madre Clara Echenique le inició un juicio de disenso "...respecto a que el padre de la contrayente Joaquín Pérez, es de extraño vecindario [vecino de Potosí], y en tan larga distancia como la de Potosí, se me hace preciso se me dé a conocer su calidad y esclarecimiento" (AHC, Escribanía N.2, Leg.83, Exp.9).

⁷² AGN, División Colonia, Temporalidades de Córdoba, Leg.5, 1772, Sala IX, 21-9-6.

⁷³ Sobrino del Oidor de la Real Audiencia de Charcas Francisco Xavier de Palacios. Marido de María Teresa de León, hija del Teniente de Rey Manuel de Estéban y León. A Prudencio Palacios se le abre sucesión en 1797 (AHC, Escribanía N.2, Leg.91, Exp.5). Padre de Francisco Xavier de Palacios, marido de María Ignacia de la Fuente, y de Petrona Palacios, mujer de Andrés Gigena y Santelices, padres a su vez de Martín Gigena y Palacios, dueño de la estancia del Tío (AHC, Escribanía N.1, Leg.409, Exp.1). Al enviudar María Ignacia de la Fuente contrae segundas nupcias con Francisco García Arenas (AHC, Escribanía N.2, Leg.91, Exp.5). El Gobernador Campero quiso quitar del Cabildo de Córdoba "...sus individuos, y crear otros, para lo que hizo su lugarteniente al yerno del Teniente de Rey [Estéban y León] (depuesto del empleo político) don Prudencio Palacios que anhelaba mucho por la tenencia y por ella le dió al Gobernador \$4.000; y éste, así por esta dádiva como por adherir así, no reparó en que era mozo caviloso e inquieto; y no obstante obtuvo la confirmación de la Real Audiencia por respeto de su tío Oidor; éste para la elección de Alcaldes, y que salieran de su facción, privó varios votos de que se siguió grande escándalo, pero siempre salió uno que no pudo ganarlo, y ofreciéndose en este tiempo el capitánazgo de los Mercedarios, su Vicario General por temor de alguna revuelta, consiguió un despacho del Superior Gobierno para que las Justicias diesen auxilio a los Frailes si le pedían, y después de haber obedecido el Cabildo cuando pidieron favor los frailes, no solo no le dió dicho Teniente sino que se juntó con su suegro y el Alcalde de primer voto don Santiago Allende, y fueron a impedir, le diese el otro Alcalde don Cayetano Terán Quevedo, con los demás Regidores a quienes quisieron matar, y ya que erraron los tiros, anduvieron por prenderlos y por obviar mayores daños los Regidores se ausentaron y el Alcalde repuso de la vara al Gobernador" (Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires, 49, América Meridional, 12 de Julio de 1768, 0-3-7; cuya copia reside en la Colección Documental donada por Enrique Barba, existente en el Centro de Historia Colonial, de la Universidad Nacional de La Plata).

⁷⁴ Hijo de Lucas de Allende y Larrea y de Agueda de Losa Bravo. Casóse en primeras nupcias con Engracia Arze, y en segundas nupcias con María de la Cruz Mendiolaza, hija del Comisario de Caballería José Joaquín Mendiolaza y de Teresa de las Casas y Ponce de León, prima hermana de la mujer de su hermano José. María de la Cruz era nieta de Gaspar de Mendiolaza, asentista del azogue de Huancavelica, quien proveía asimismo los ingenios de la ribera de Potosí.

⁷⁵ Bruno, 1967, V, 470-474. También existen otros testimonios en el Archivo Histórico de Córdoba (AHC), Escribanía N.2, Leg.35, Exp.6, y Leg.34, Exp.8 y 11.

⁷⁶ Enfrentada a la Casa de los Allende.

⁷⁷ AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 1, Sala IX, 5-9-3).

⁷⁸ AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 1, Sala IX, 5-9-3).

⁷⁹ *Ibídem*.

⁸⁰ *Ibídem*.

⁸¹ Peninsular, casado con la cordobesa Ana Petronila Hurtado de Saracho (Dato proporcionado por Carlos Jáuregui), probablemente hermana de Catalina Hurtado de Saracho y Ordóñez, hija de Lorenzo Hurtado de Saracho y de Teresa Ordóñez. Catalina Hurtado era casada con José de los Reyes, natural de Huelva, Andalucía (Lazcano Colodrero, 1936, I, 122). Este último era tío del fundador de la Hermandad de la Caridad Juan José Vélez y de los Reyes.

⁸² Antonio de Arriaga al Exmo Sr. Pedro de Ceballos, Córdoba, 31-X-1777 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 2, Sala IX, 5-9-4).

⁸³ Recién en 1809 Cuyo fué agregado a la provincia dominicana de San Agustín de Buenos Aires, Tucumán y Paraguay (Verdaguer, I, 51).

⁸⁴ Fr. Manuel Flores, Lector Pretérito, Fr. Juan Castro, Fr. Manuel Barrionuevo, Fr. Pedro Fernández, Lector de Vísperas, Fr. Remigio Albarracín, Lector Pretérito, Fr. Antonio Ximénez, Lector de Artes y Maestro de Novicios, Fr. Rafael Balenzuela, y Fr. Dionicio Rodríguez. Barrionuevo era nacido en San Juan en 1754, hijo de Domingo Barrionuevo y de Ana Oro, Teniente Cura en San Juan desde 1788 a 1797, y Prior del Convento de Santa Catalina Virgen y Mártir de la ciudad de San Luis (Verdaguer, I, 590). Albarracín era nacido en San Juan en 1756, hijo de Remigio Albarracín y Balmaceda y de Josefa Irrazábal, hermano de Fr. José Francisco Albarracín, sobrino de Fr. Miguel Albarracín y Balmaceda y de Fr. José Justo Albarracín y Domínguez, y primo segundo del primer Obispo de Cuyo Fr. Justo Santa María de Oro (Verdaguer, I, 592). Flores nació en San Juan en 1757, hijo de Domingo Fernández y de María Antonia Hurtado (Verdaguer, I, 592). Fernández nació en San Juan en 1768, fué Prior en 1810, y fué quien obtuvo la vuelta al claustro de los dominicos secularizados en tiempos del Gobernador Salvador María del Carril (Verdaguer, I, 607; y Saldaña Retamar, 1920, 99). Y Rodríguez, nació en San Juan en 1779, fué Sub-Prior del Convento de 1811 a 1815 y Prior de 1815 a 1818 (Verdaguer, I, 639).

⁸⁵ En efecto, \$600 fueron redimidos por Basilio Pastoriza, que recaían sobre la hacienda de Don Remigio Albarracín; \$600 que redimió Felipe Mallea; \$977 que redimió Juan Manuel de Castro; \$600 que redimió el albacea de Modesto Molina; \$100 que dió Santiago Jofré cuando entregó perdida la viña

sobre que recaían \$500 de principal; \$253 en que fueron vendidas las tierras a Don Leandro Castro; \$700 en que fueron vendidas a Xavier Garramuño la viña y molinos del finado Guevara, que las había recibido en \$4.000; el precio ignorado en que fueron vendidas a Estanislao Zavalla las tierras que eran de los Moyano en capellanía; \$600 en que fueron vendidas las tierras y viña de Don Mateo Castro; el precio ignorado en que fueron vendidas las tierras que fueron viña, en que se fundó la Capellanía del Sr. de la Columna, en la pampa de San Pantaleón; y los \$500 en que se vendió a Juan Manuel Castro la Chacarilla (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.209, Exp.11).

⁸⁶ AGN, División Colonia, Justicia, Leg.45, Exp.381; y Leg.48, Exp.1384 (citado por Bruno, VII, 210).

⁸⁷ AGN, División Colonia, Justicia, Leg.51, Exp.1463, fs.68.

⁸⁸ *Ibídem*.

⁸⁹ Regidor, Defensor de Pobres de Córdoba. Casado con Asención Martínez, hija del comerciante Bruno Martínez. En 1806 y 1807 mantuvo sendos litigios (AGN, Justicia, Leg.51, Exp.1463; y Hacienda, Leg.135, Exp.3415).

⁹⁰ Hijo de Salvador Rodrigo y de Teresa Pérez, marido de María Antonia Espinosa de los Monteros, hija de Francisco Espinosa Moxica y de María Narcisa de la Quintana Riglos (Fernández de Burzaco, 1990, V, 336-337).

⁹¹ AGN, División Colonia, Justicia, Leg.51, Exp.1463, fs.68.

⁹² Bustos, 1901, 127-128; y Aznar, 1935, 62, citados en Bruno, 1967, VI, 515. También en Lynch, 1967, 83.

⁹³ Clausurados los establecimientos jesuíticos, el mismo Furlong (1960) reconoce por boca de Pemán (1944) que

"...vinieron sin selección, tropes de mediocres profesores al país [lo cual] dió un un impulso enorme a la difusión e influencia de lo que se ha llamado luego el criollismo, o sea, la difusa conciencia de solidaridad diferencial --raíz de independencia-- de los naturales del país" (Furlong, 1952, 179).

Sin embargo, a la luz de los argumentos expuestos por Cheroni (1983), podríamos concluir en un juicio totalmente opuesto, es decir, que los Franciscanos garantizaron una educación más abierta y comprometida con el avance del conocimiento científico, desde el momento que incorporaron seglares en sus aulas.

⁹⁴ Bruno, 1967, VI, 522; y Chamosa, 1991.

⁹⁵ Oriental, hijo de Salvador Súlván y de María Leocadia Fuentes (Apolant, III, 1713).

⁹⁶ porteño, hijo de Antonio Cabral y Ana María Hernández; y marido de Martina Gutiérrez de la Bárcena, hija de Bernardo Gutiérrez de la Bárcena y de Gerónima de Arauz; y suegro de José Gregorio

Belgrano (Fernández de Burzaco, II, 20).

⁹⁷ Partidario de la familia Allende. Era casado con Eugenia de Ledesma y Olmedo, hija del Regidor y Fiel Ejecutor General Ignacio de Ledesma y Ceballos, dueño de la estancia Santa Cruz, y de la hija del encomendero de Cabinda y Macarrirre y Teniente Gobernador de La Rioja Bartolomé de Olmedo y Serrano; y suegro del General Prudencio Palacios (Lazcano, 1969, III, 293). Fué padre del Chantre de la Catedral Dr. José Lino de León, de Pasqual Baylón de León, ausente en las Provincias del Perú, de María Teresa de León, mujer del General Prudencio Palacios, y del Dr. Domingo Ignacio de León, Teniente de Rey de Córdoba, Subdelegado de la Renta de Correos, Juez de la Universidad, y Presidente de la Junta Municipal de Temporalidades de Córdoba en 1775, marido de María Josefa Zavala. Era dueño de la estancia nombrada La Chacarilla (AHC, Escribanía N.2, Leg.64, Exp.21).

⁹⁸ Hijo del Alcalde Gerónimo Luis de Echenique y de Josefa de Urtubey y Paz de Figueroa, cuñado del Alcalde Provincial José Martínez de Candia, y del R.P. Bernabé Echenique, y marido de Marquesa Antonia de los Reyes, viuda de Felipe Crespo.

⁹⁹ Ver Triano, 1984, 125-154.

¹⁰⁰ Pueyrredón, 1953, 28-31; y Bruno, 1967, VI, 530-531.

¹⁰¹ Hijo del Sargento Mayor Juan José de Funes y Rodríguez Navarro y de Josefa Bustos y Cabanillas, y nieto de Vicente de Funes y Losa Bravo (primo hermano de la mujer de Lucas de Allende), y de Juana Rodríguez y Navarro (Lazcano, I, 194). Era hermano del comerciante y Alcalde Sargento Mayor Ambrosio Funes. Funes habría incurrido en el delito de simonía, al gestionar para sí con dinero el Obispado de Córdoba (Carbia, 1929, 58, 467-68; 60, 527-30; y 63, 85-89; y Olmedo, 1929, 59, 501-03; y 61, 19-23).

¹⁰² Fué Comisario de la Santa Cruzada y luego Arcediano de la Catedral de Córdoba, falleció en 1792, hijo de Don Marcos Ascasubi y de Rosalía de las Casas y Ponce de León; sobrina de Teresa de las Casas, mujer del Comisario de Caballería Joaquín de Mendiola, dueño de la mayor arria de mulas existente en Córdoba; cuñado de Don José de Allende y Losa; y tío político del Teniente Coronel Félix Mestre. Existe un inventario de sus libros y papeles (AHC, Escribanía N.4, Leg.5, Exp. 21).

¹⁰³ Bruno, 1967, VI, 517.

¹⁰⁴ Bruno, 1967, VI, 533.

¹⁰⁵ Nacido en Córdoba en 1755. Hijo del Sargento Mayor Juan José de Funes y Rodríguez Navarro y de Josefa Bustos y Cabanillas, y nieto de Vicente de Funes y Losa Bravo (primo hermano de la mujer de Lucas de Allende), y de Juana Rodríguez y Navarro (Lazcano Colodrero, I, 194). Casó con María Ignacia de Allende Vicentelo, hija del finado General Tomás de Allende y Losa, sobrina carnal de José y Santiago de Allende y Losa, hermana del Caballero de Carlos III Pedro Lucas de Allende, y cuñada de Francisco Javier de Usandivaras, de Antonio de la Quintana Sebreros, y de Nicolás Cabrera Zeballos. Don Ambrosio fué Sargento Mayor y Comandante del Regimiento de Milicias. Participó en tres expediciones contra los indios del sur y los portugueses. Fué Alcalde de segundo voto en 1783, Procurador en 1791, Juez Diputado del Real Consulado en 1794, y Alcalde de primer voto en 1798. Funes fué suegro de José Antonio de la Bárcena (padre del Coronel Bárcena), de Juan Pablo Pérez Bulnes, y del Cap. José María Cortés y del Portillo (Allende Navarro, 1964, 104). Funes tomó partido por su sobrino político Pedro Zenavilla, marido de una hija de Benito Antonio de Allende Vicentelo y

de su prima María Mercedes Funes, en contra de su cuñado el Caballero de Carlos III Pedro Lucas de Allende Vicentelo (Archivo Histórico de Córdoba [AHC], Escribanía N.2, Leg.103).

¹⁰⁶ Regidor, Defensor de Pobres de Córdoba. Casado con Ascensión Martínez, hija del comerciante Bruno Martínez. En 1806 y 1807 mantuvo sendos litigios (AGN, Justicia, Leg.51, Exp.1463; y Hacienda, Leg.135, Exp.3415).

¹⁰⁷ Amén del Comandante General de Armas Francisco del Signo, informan al Virrey los siguientes vecinos: Agustín Igarzábal, Juan Rolón, Juan Prado, Antonio Fragueiro, Pedro Malde, Francisco Antonio González, Francisco Peña, Francisco Alvarez, Lorenzo Antonio Maza, José Eguilúz, Fermín Sierra Pico, Manuel Azúnsolo, Francisco Bulnes, Manuel López y Gregorio Texerina (Garro, 1882, 191, 194, 205-211; Bustos, 1901-10, III, capítulos IV-XIII; y Bruno, 1967, VI, 531-533).

¹⁰⁸ Nacido en Junio de 1753 (Allende Navarro, 1964, 93). Hijo de Santiago de Allende y Losa y de María de la Cruz Mendiolaza, y primo hermano del Caballero de Carlos III Pedro Lucas de Allende Vicentelo. En su testamento fechado el 19-V-1798, declara tener un hijo natural en el Cuzco llamado Mariano Santiago (AHC, Escribanía N.4, Leg.42, Exp.3).

¹⁰⁹ Hijo de Tomás de Allende y Losa y de Bernardina Vicentelo de la Rosa y Carranza, cuñado de Francisco Xavier de Usandivaras y Sierra, de Antonio de la Quintana y Cebreros, de Nicolás de Cabrera y Ceballos, y de Ambrosio Funes y Bustos; casado con María Javiera de Torres Gaete, y padre de José Manuel de Allende y Torres, casado con Teresa de la Quintana y Allende, del Teniente Coronel Tomás Bailón de Allende, casado con Inocencia Díaz de la Fuente y Arias, y del Sargento Mayor Faustino de Allende, casado con Rita Trinidad Moyano y Deza; y suegro de José Joaquín de la Torre y Zúñiga, de José Cipriano de Argüello y Moynos, de José Roque de Funes y Sánchez, y de Manuel de la Piedra y Vargas (Calvo, I, 36; y III, 56).

¹¹⁰ Tonda, 1981, 43. Hijo de Francisco Antonio Díaz, Español, y de María del Carmen Albornoz y Carranza, marido de Jenuaria Allende y Mendiolaza; y hermano de Juana Isabel Díaz, mujer del comerciante de mulas Gaspar Sáenz Bravo; y de María Clara Díaz, mujer del Fiel Ejecutor José García Piedra (Calvo, I, 203).

¹¹¹ AGN, Sala IX, Interior, Leg. 51, Exp. 13.

¹¹² El Chantre de la Catedral Dr. José Lino de León fué célebre por su barraganía con la mulata Bernabela, y por su amistad con el Coronel Santiago Alexo de Allende. Es de destacar la honestidad con que este clérigo admitió su estado por cuanto apenas las circunstancias se lo permitieron mandó llamar a su amante y sus hijos que residían expatriados en Buenos Aires.

¹¹³ Asesor de Guerra en la expedición de Moxos y procurador del famoso azoguero Luis Beltrán de Orueta (Buechler, 1989, 357). Casó con Manuela del Risco y Agorreta, hermana de Francisca del Risco y Agorreta, dueña del Ingenio Chaca, en Potosí; padre de María Rosalía Segovia, mujer del poderoso azoguero de Potosí Pedro Antonio Ascárate, y de Margarita de Segovia, mujer de Félix Alejandro de Mendieta y Aréchaga; cuñado del Dr. Agustín del Risco; y concuñado del Alguacil Mayor de la Real Audiencia de Charcas Dr. Tardío de Guzmán (Morales, s/f, 245; y Costa Du Rels, 1944, 215). Probablemente parienta de Mercedes del Risco y Ciudad, mujer del Virrey del Río de la Plata Marqués Gabriel de Avilés; y del Corregidor de Cuyo General Juan del Risco y Alvarado, natural de Trujillo, Perú, hijo de Valentín del Risco y de Isabel de Alvarado y Toledo (Morales Guinazú, 1936, 104).

¹¹⁴ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 192, Exp. 1, fs. 57.

¹¹⁵ Bautizado en 1727, hijo del Maestre de Campo Manuel Maziell y de Rosa de Lacoizqueta (Crespo Naón, 1983, 72). Sobre su conocimiento del escritor e historiador Peruano Juan de Peralta y Barnuevo, ver Mariluz Urquijo, 1988, 186.

¹¹⁶ este tumulto popular se halla detallado en AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 221, Exp.1, 2, y 4; y en Mendoza, 1939, 88-89; Montenegro, 1967, 36; Lynch, 1967, 227; y Francovich, 1948, 61-71.

¹¹⁷ Muñoz Cabrera, 1867, 17.

¹¹⁸ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 192, Exp. 1, fs. 57.

¹¹⁹ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 192, Exp. 1, fs. 57; en el mismo legajo, pero en los expedientes 2, 4, 6, y 10 siguen los entretelones de este conflicto; Ripodas Ardanaz, 1975, 511; y Tanzi, 1977, 184-185.

¹²⁰ Bruno, VII, 179.

¹²¹ Buechler, 1989, 265.

¹²² Halperín Donghi, 1961, 121.

¹²³ consistía en sustraer al acusado de sus jueces naturales para someterlo a aquellos otros jueces especiales designados por alguna autoridad superior (Silva, 1968, 1030).

¹²⁴ Petición en que el demandado declina la jurisdicción del juez que le ha citado, por creerle incompetente, pidiéndole que se inhiba y abstenga del conocimiento de la causa, o porque no es juez competente para él, o porque no puede conocer de aquel negocio, o porque este se halla pendiente en otro juzgado (Escriche, 1863, 668).

¹²⁵ En 1752 el Comisario del Tribunal del Santo Oficio libraba exhortos para que a los Familiares se les guarde el privilegio de que gozan en las elecciones de alcaldes ordinarios (Acuerdos, III Serie, I, 271-279). Cincuenta años más tarde, en 1804, el Rey dictó una Real Cédula que obligó a los Familiares a aceptar los cargos concejiles (Acuerdos, IV Serie, t.I, 533). Para la jerarquización interna del Tribunal del Santo Oficio en América, ver Castañeda y Hernández, 1989, capítulos I y II. Y en 1793 Don Miguel de Learte y Ladrón de Zegama, solicitaba que como Contador de la Mesa Decimal del Obispado de Córdoba, en sustitución de Miguel Antonio del Corro, se le guardaran todos los fueros que le correspondían (AGN, Justicia, Leg.31, Exp.897).

¹²⁶ Ver Tibesar (1955), González Echenique (1962), Palacio y Brunet (1977), y Lavallé (1979).

¹²⁷ El Obispo Sarricolea informaba a mediados del siglo XVIII que se le estaba debiendo al Convento de Santa Catalina \$121.000, y al Convento de Monjas Teresas \$36.820 (Larrouy, 1927, 24; y Punta 1988, 2).

TOMO VIII

Capítulo 6

Las presiones crediticias eclesiásticas y su recepción en la estructura social. El endeudamiento contraído con el clero en el Río de la Plata.*

* ponencia presentada en el Seminario "El Crédito y las capellanías en el mundo hispánico colonial", organizado por el Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile, el 28 de Noviembre de 1994.

Uno de los problemas aún no resueltos en la historiografía latinoamericana fué la caracterización del rol que desempeñó la Iglesia en la economía, la sociedad y el estado del llamado Antiguo Régimen colonial y en todo el proceso de crisis política previa a la emancipación. Por un lado, cierta historiografía atribuye entre los factores irritantes que provocaron en las élites criollas el apoyo al proceso revolucionario: a) la expulsión de los Jesuitas; y b) la disminución de las inmunidades eclesiásticas que las Reformas Borbónicas adoptaron a fines del siglo XVIII.¹

Por otro lado, la historiografía liberal insistió siempre que una de las razones más fuertes que impulsaron al bajo clero criollo a apoyar la revolución fué la discriminación que este sufría a manos de un alto clero peninsular, el cual participaba del proceso de concentración de la riqueza colonial. Para el caso de México, Barrett (1970), Taylor (1972), Bazant (1977), Castañeda y Marchena (1978) y Wobeser (1985, 1989a, 1989b, 1990) ilustraron sobradamente como el crédito eclesiástico (censos) se constituyó en el principal mecanismo de transferencia del excedente experimentado por la Iglesia Católica. Sus cálculos indicaron que las ejecuciones hipotecarias, las almonedas o remates, y las ventas de inmuebles --propiedad de las élites patricias-- a manos de la Iglesia, como medio para saldar deudas, fueron responsables del alto grado de acumulación de tierras por parte de la Iglesia. De igual manera ocurrió en el Perú. A juzgar por lo descrito por Macera (1963) y por Burga (1979), a comienzos del siglo XVIII los religiosos se habían convertido en el grupo rentista más poderoso de la región.² Si la Iglesia se había enriquecido, los propietarios seculares se habían empobrecido y las haciendas devaluado, lo cual produjo un cambio masivo de propietarios.³ En el Río de la Plata y Chile, por el contrario, el proceso de concentración no se dió en el rubro inmobiliario rural sino en el crediticio, ni tampoco en las zonas rurales, y sí en las zonas urbanas, y en especial en los barrios más valiosos de las mismas, afectando por ende a las embrionarias burguesías mercantiles existentes.⁴ Recientemente esta vieja polémica ha vuelto a resucitar.

Mientras que Cabat (1971), Gudmundson (1983), Schwaller (1985) y Burns (1991) han

sostenido que en México, la América Central y el macizo Andino los ingresos de todo tipo de capellanías y obras pías ayudaron a dinamizar la economía colonial;⁵ autores como Greenow (1979,1980), Levaggi (1986), Fisher (1990) y últimamente Jiménez-Pelayo (1991), han argumentado que lo que hacía que el clero secular y regular fuera una fuerza económica y financiera dominante en la sociedad colonial Latinoamericana fué no sólo el rol que desempeñó al acumular reservas de capital mediante capellanías y patrimonios, sino el papel que cumplió al convertirse en la fuente de crédito (censos) más relevante para las clases productivas locales.⁶ El mismo argumento ensayan para España Alvarez Vázquez (1978) y Sánchez González (1991). En una variante opuesta, Bauer (1983) concluye por definir a la Iglesia más como un consumidor de la riqueza colonial que como un "banquero" o intermediario financiero,⁷ y Lavrin (1985) y Wobeser (1990) definen a las inversiones eclesiásticas no como orientadas hacia el capitalismo sino como rentistas señoriales.⁸ En cuanto a aquellos autores que se dedicaron al Río de la Plata, sus contribuciones han padecido de los déficits propios de una historiografía fundada en una archivística por demás escuálida. Si bien Socolow (1978) estudia el rol de las capellanías en manos de grandes comerciantes omite el tratamiento de los censos y la repercusión de ambas instituciones en el proceso revolucionario; y si bien Liberti (1969) y Levaggi (1986), trabajaron el tema de las capellanías y los censos, se fundaron para ello en la incompleta información de los Libros del Obispado de Buenos Aires y de la Consolidación de Vales Reales, desestimando el tratamiento de la fuente notarial.

Concretamente, con relación a la modernidad o antigüedad de los conceptos o categorías institucionales del censo y la capellanía debo confesar que cada vez estoy más convencido que la genealogía de los conceptos de fundación e hipoteca, pertenecientes al derecho civil moderno, tienen una relación de semejanza con los conceptos o categorías institucionales del censo y la capellanía. En ese sentido, aparte de los motivos de discriminación que sufrían los aspirantes a Patronos, por su sexo, o menor edad, practicada en la sucesión de los Patronatos Capellánicos, y la amenaza que se cernió sobre el clero criollo mismo por la aplicación de las Informaciones de Limpieza de Sangre y la Real Cédula de Consolidación de Vales Reales, estudiados en otros trabajos de este autor,⁹ la animadversión contra la Iglesia obedecía también a la conducta de los patronos en la administración de las capellanías laicales. Esto último ha sido por lo general obscurecido debido a la absorbedora presencia de los capellanes. La responsabilidad de los patronos consistía en vigilar el cobro de los réditos, invertir los fondos recaudados, elegir el número de misas que se han de aplicar anualmente, presentar el capellán al Obispo cuando su identidad no estaba definida en la fundación de la capellanía, o su lugar estaba vacante por muerte del propietario del mismo, y abonarle los estipendios de sus misas y servicios.¹⁰ Las capellanías laicales o de sangre eran erigidas sin intervención de la autoridad eclesiástica y sus bienes se consideraban como propiedad familiar, sin poderse vender, trocar, donar ni enajenar, ni tampoco separar, dividir, asensuar, hipotecar ni gravar total ni parcialmente, y conservaban la calidad de temporales, en donde el clero era meramente depositario de los bienes de la misma.¹¹

Este tipo de capellanías reforzaban el prestigio familiar por cuanto la sucesión de sus patronatos se regía por las leyes del mayorazgo (primogenitura), la varonía (patrilinealidad) y la pureza de la estirpe (Limpieza de Sangre), y sus frutos se aplicaban para la pensión exclusiva de parientes en la carrera eclesiástica. Los padres pudientes y solventes de hijos que contaban con vocación religiosa preferían que estos se incorporaran al clero secular y no al regular, porque de esa forma garantizaban que su familia pudiera controlar el patronato de las capellanías con que dotaban a aquellos. Continuando estas líneas de reflexión, nos preguntamos en este trabajo si en aquellas ciudades con un alto grado de penetración mercantil, las estrictas cláusulas acerca de la sucesión de los patronos de las capellanías legas, que privilegiaban a unas ramas familiares en detrimento de otras, y a los patronos en detrimento de los capellanes interinos; la longevidad o abolengo con que esta institución perduró en el

tiempo; la intensidad con que fué distribuída; la íntima vinculación entre los adquirentes de cargos capitulares y los fundadores de capellanías, y la estrecha correlación entre los ciclos comerciales y la frecuencia con que se fundaban capellanías y patrimonios, contribuyeron o no a fortalecer un régimen clerical, patrimonialista y señorial.

Asimismo, la animadversión contra la Iglesia obedecía también al creciente endeudamiento provocado por los censos u obligaciones a censo, y a las rígidas políticas crediticias de las ordenes religiosas, que se negaban a rebajar la tasa de interés y ejecutaban y embargaban a los deudores de réditos de capellanías, contribuyendo así también al fortalecimiento de un régimen clerical patrimonialista y señorial. La tremenda resistencia a rebajar las tasas de interés en el mundo colonial nos induce a pensar que en él existía un sostenido desaliento en la propensión a invertir en el circuito productivo, lo cual explicaría en parte el congelamiento del precio de la tierra.

Para detectar estas operaciones de censos hemos debido relevar y procesar en numerosas tablas centenares de escrituras notariales de los siglos XVII, XVIII y XIX, registradas en los protocolos de escribanos depositados en el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires; y numerosos litigios, correspondientes a las series tribunalicias seglares y eclesiásticas, de los períodos colonial y nacional, depositados en el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires, y en el Archivo Histórico de Córdoba (AHC); y en los Libros de Capellanías del Archivo del Arzobispado de Córdoba.¹² A los efectos de la investigación y con el propósito de detectar parentescos afines y sanguíneos fué preciso también completar los apellidos de los censatarios o deudores y de los censualistas o acreedores con los apellidos maternos, sirviéndonos para ello de la información genealógica que nos proveen los testamentos protocolizados en Buenos Aires.¹³

El problema metodológico que se nos plantea es el de elaborar instrumentos y técnicas que nos ayuden a explicar las alzas y bajas del volumen y valor del crédito de compra. En principio, postulamos la hipótesis de una relación causa-efecto o co-variación negativa entre las obligaciones e imposiciones a censo y a réditos pupilares y los mercados de bienes de inversión o de renta (esclavos, casas, chacras y estancias) por un lado y el fiado de Castilla por el otro. Mientras los frutos de la tierra (cueros, ganados, etc.), la adquisición y poblamiento de chacras y estancias, y la industria de la construcción, se enfrentaban a la moneda-circulación mediante los instrumentos del censo y las obligaciones a réditos, las mercancías importadas se enfrentaban a la moneda-mercancía mediante el instrumento del fiado.

La voluntad de fundar capellanías y patrimonios.

La voluntad de fundar en Buenos Aires capellanías y patrimonios --condicionada por el comportamiento de los ciclos comerciales-- se halla sobradamente ilustrada en el Gráfico A-III, fundado en la estadística ofrecida por la Tabla G-I, y por la demanda de plazas vacantes en colegios y universidades.¹⁴ A comienzos de la década del 50 se registró en Buenos Aires con motivo del Tratado de Madrid (1750) --que puso fin a las amenazas guerreras entre las colonias de España y Portugal-- un boom mercantil que se tradujo en 1752 por un record de capellanías. En efecto, el número y monto de las capellanías aumentó de dos capellanías por valor de \$1.200 en 1750 a 11 capellanías por valor de \$15.500 en 1752.

En la década previa a las Ordenanzas del Comercio Libre (1770-79), el comercio exterior porteño quedó estancado debido al estado de lucha permanente con las colonias Portuguesas. Esta realidad llevó a que se diera entonces una muy baja propensión para fundar capellanías, que se acentuó durante la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos (1780-1782). De todas maneras, las

perspectivas de la Ordenanza de Libre Comercio de 1778 y la tendencia ascendente que las exportaciones de cueros prometían, aliviaron el sentimiento de frustración. Paralelamente al ascenso de las exportaciones, la demanda de ingresos al Colegio de San Carlos (Buenos Aires) aumentó, de 18 estudiantes de Filosofía a 47 en los cursos de 1777 a 1779.¹⁵ Con la Guerra de la Independencia Americana (1776-83), tan pronto como España se sumó a la misma (1780), el número de capellanías cayó de 10 en 1778 y 6 en 1779 a 2 capellanías en 1780 y 1781 respectivamente. Al caer el número de capellanías habilitadas para servir el culto religioso le fué preciso a la Iglesia flexibilizar las exigencias de Limpieza de Sangre en el otorgamiento de las ordenes sagradas. A partir de 1783 en que se registró un marcado superávit de la balanza comercial, que hizo caer los precios de los productos foráneos, el número y monto de las capellanías alcanzó uno de los picos máximos con 25 escrituras de fundación, por valor de \$50.812.

Un par de años más tarde, en 1785, la balanza comercial se vuelve deficitaria, registrándose como consecuencia una mayor caída del número de nuevas capellanías registradas. En esos mismos años, de 1787 a 1789, la matrícula del Colegio de San Carlos aumentó a 89 estudiantes de Filosofía y 37 de Teología.¹⁶ Desde 1789, y durante los nueve años que restaron hasta 1797 la balanza comercial fué altamente favorable registrándose como reflejo de la misma un prolongado incremento del número de capellanías. Las guerras provocadas por la Revolución Francesa se ven asimismo reflejadas en las estadísticas.¹⁷ Con el desencadenamiento de la guerra continental en 1798 es cuando las capellanías caen en forma abismal de 31 en 1798 a 17 en 1799. Debido al efecto combinado de la Real Cédula de Consolidación de Vales Reales y las Invasiones Inglesas (1806-07), las capellanías desaparecieron. Luego que Buenos Aires fué reconquistada y la paz con Inglaterra sellada como consecuencia de la invasión Napoleónica a España, y 31 navíos británicos con una carga valuada en más de un millón de libras esterlinas, o cinco millones de pesos plata, arribó a Buenos Aires,¹⁸ el número de capellanías creció de una sólo en 1808 a 7 en 1809.

La distribución del número de capellanías refleja en parte la naturaleza de la estructura económica y social vigente. Mientras la Tabla G-II nos ofrece la nómina de media docena de capellanías registradas en La Paz, Alto Perú, las Tabla G-I y G-III nos ofrecen la estadística y la nómina de los 584 fundadores, o primeros patronos, y de las 757 capellanías y patrimonios registradas notarialmente en Buenos Aires entre 1600 y 1820, que a un promedio de \$1.500 cada una, hacían un total aproximado al millón de pesos plata.¹⁹ A diferencia del Alto Perú, la distribución de las capellanías era en Buenos Aires bastante acentuada. Esta última Tabla enumera los casos de un fundador que instituyó trece capellanías,²⁰ dos fundadores que instituyeron ocho capellanías cada uno,²¹ otros dos fundadores que instituyeron seis capellanías cada uno,²² seis fundadores de cinco capellanías cada uno,²³ cinco fundadores que impusieron cuatro capellanías,²⁴ una veintena de fundadores que lo fueron de tres capellanías (o el 4% del total de fundadores), 77 fundadores que lo fueron de dos capellanías cada uno (o el 13%), y 267 fundadores de una sola capellanía (o el 46%). Por lo general, la primer capellanía era fundada a favor de sus hijos o hermanos, y la segunda a favor de sus otros parientes o descendientes. El responsable de haber fundado la mayor cantidad de capellanías (trece capellanías), el Pbro. Marcos Rodríguez de Figueroa,²⁵ favoreció primero la ordenación de su propio hermano carnal Domingo Soriano Rodríguez de Figueroa; y luego la de numerosos sobrinos carnales, como Francisco de Cossio Terán y Pablo Romero.²⁶ La Tabla G-IV discrimina la información de la Tabla G-III por Convento u orden religiosa. Esta Tabla, aunque muy incompleta, por no revelarse en el texto de las capellanías de sangre la iglesia u orden religiosa donde el capellán beneficiado debía servir la capellanía, revela en cambio la escala del poder económico entre las Ordenes Religiosas. La encabeza la Orden de Santo Domingo con 34 capellanías por valor de \$40.080, seguida por la Orden de San Francisco con 19 capellanías por valor de \$25.402, y por la Orden de la Merced con 17 capellanías

por valor de \$16.952. Las capellanías otorgadas a favor de la Iglesia de San Ignacio fueron secularizadas cuando la Expulsión de los Jesuitas, y pasaron a integrar los activos del ramo de Temporalidades.

Los fundadores de capellanías y primeros patronos.

Entre los fundadores de capellanías y primeros patronos, figuraban personajes poderosos, tales como regidores perpetuos, oficiales de ejército, clérigos, comerciantes, hacendados, síndicos de cofradías, alguaciles del Santo Oficio, Administradores de Hospitales, miembros de las Ordenes Terciarias, etc. y en mucha menor medida plebeyos o humildes vecinos, libertos y artesanos, que alcanzaron mediante su oficio a acumular algún capital. En la clase política, se registró una quincena de casos tipo, sobresaliendo Cristóbal de Aguirre, Francisco de Almandoz, Martín de Alzaga, Vicente Azcuénaga, Juan Benito González, Fernando Caviedes, Domingo Belgrano Pérez, José Blas de Gainza, Juan José de Lezica y Alquiza, Juan de Mansilla, Antonio Obligado, José Antonio Otálora, Miguel Fermín de Riglos, Manuel Rodríguez de la Vega,²⁷ Gaspar de Santa Coloma, Saturnino Saraza, Manuel Antonio Warnes y Domingo Antonio Zapiola y Sosa. En la clase militar, logré detectar a sólo dos oficiales de relevancia: el General Antonio de Larrazábal y el Coronel José Antonio de Otálora. Entre los hacendados, en un previo trabajo de mi autoría, registré una docena de casos relevantes.²⁸

Y entre la clase mercantil, también se registró una docena de casos paradigmáticos, sobresaliendo Nicolás de Acha, Diego de Agüero, Cristóbal de Aguirre, Vicente Azcuénaga, Tomás Balanzátegui, Domingo Belgrano Pérez, José Blas de Gainza, Eugenio Lerdo de Tejada, Juan Viola, José de la Peña Fernández, Gaspar de Santa Coloma y Carlos de los Santos Valente. Algunos de ellos, como Balanzátegui, Belgrano, Rodríguez de la Vega y Viola, reunían además la condición de miembros de la Hermandad de la Caridad. La familia Lezica, íntimamente ligada al comercio mayorista a larga distancia con el Alto Perú, alcanzó a instituir 18 capellanías. Entre sus miembros, Juan Antonio de Lezica reunía también la condición de miembro de la Hermandad de la Caridad, y Juan José de Lezica y Alquiza la de Administrador del Hospital de Mujeres.²⁹ Andrés Lezica y de la Torre,³⁰ debió litigar con su propia madre Rosa Victoria de la Torre y Tagle Bracho,³¹ en dos oportunidades, por los intereses vinculados a la capellanía fundada por su abuela materna Petrona Tagle Bracho.³² Y María Manuela de Lezica,³³ también debió acudir a los estrados judiciales para defender sus intereses capellánicos.³⁴ La familia Fernández de Agüero, distribuída en seis miembros distintos, alcanzó a instituir nueve capellanías. Entre los funcionarios fundadores de capellanías, los clérigos fueron los más numerosos registrándose 47 casos, entre los cuales hubo 18 doctores, 10 presbíteros, 4 maestros, 2 arcedianos, 4 deanes, 5 frailes y 1 beata.

También figuraban como fundadoras de capellanías, y en su consecuencia como primeros patronos, numerosas mujeres, de las poderosas y de las plebeyas. La Tabla G-III revela la existencia de 169 mujeres que fueron fundadoras, o el 28%, casi la tercera parte, de las cuales 64 eran viudas, 87 solteras, y algunas como Josefa Troncoso y Canales, Hermana Terciaria de Santo Domingo. Por último, la Tabla G-V revela la intensidad de la circulación generada por los mismos fundadores de capellanías. En dicha Tabla figuran las operaciones de censo practicadas por 82 fundadores de capellanías, que sobre un total de 584 fundadores, representaba el 14%. Entre ellos figuran comerciantes, altos funcionarios, y hacendados.

Longevidad o abolengo de las capellanías.

Cuanto más longevidad o abolengo padecía una capellanía, mayor era el prestigio de la familia

que la detentaba y más rigurosos se volvían los criterios de legitimidad y patrilinealidad. La longevidad o abolengo de las capellanías dependía también de otros numerosos factores, entre los cuales privaba la naturaleza perpetua o redimible de la escritura otorgada y la política que cada orden religiosa seguía con respecto a las redenciones. De la extensa nómina de capellanías, ilustrada en la Tabla G-III, sólo en 61 casos hemos podido hallar la fecha de la redención. En unos pocos casos la escritura de redención fué registrada por separado, como cuando en 1726 Lucas Manuel Belorado y Antonio de Indá cancelaron sus respectivas capellanías.³⁵ De todas las capellanías conocidas, en lo que fué el antiguo Virreinato del Río de la Plata, la más antigua aún vigente en tiempos de la revolución fué sin duda la conocida como Capellanía de Copacabana, instituída en Córdoba en 1613, por Leonor de Tejeda Miraval.³⁶ Su heredera en el siglo XVIII fue Isidora Zamudio y Echenique, hija de Juan José de Dízido y Zamudio y de Tadea Echenique y Garay, Señora de la Capellanía de Copacabana, y mujer del Alcalde Provincial Domingo de Garay.³⁷

Y de la nómina de capellanías registradas en Buenos Aires, elevada por el Provisor Dr. Mariano José Francisco Zavaleta al Ministro Rivadavia en 1821, publicada por Levaggi (1974), hemos podido determinar que la más antigua fué la del Obispo Fr. Pedro de Carranza, fundada en 1632; siguiéndole en orden de antigüedad las capellanías del Deán Pedro Montero de Espinosa, fundada en 1646; la del Dr. José Marcianes, fundada en 1684; la del Obispo Dr. Antonio de Ascona Imberto, fundada en 1694; y finalmente la del Canónigo Juan de Lemus, fundada en 1698.³⁸ Asimismo, de las capellanías laicales que aún ofrecían dinero a censo a mediados del siglo XIX, la más antigua fué la del Capitán Juan del Pozo y Silva,³⁹ que se fundó en 1662, y cuyo patronato ejercieron en el siglo XVIII su nieto el Pbro. Francisco del Pozo y Vitte,⁴⁰ y en el siglo XIX su tataranieta Dolores Ramos Mexía y Ross y su chozno Ildefonso Ramos Mexía Basabilbaso.⁴¹ Le siguieron en orden de antigüedad una capellanía del Deán Marcos Rodríguez de Figueroa, que se fundó en 1684,⁴² y la de Domingo de Acassuso a favor de la Capilla de San Isidro, que se fundó en 1706.⁴³

Los censos a favor de conventos o monasterios.

Amén de las capellanías, las obligaciones a réditos a favor de laicos, tutores y curadores de viudas y huérfanos, y de los censos a favor de capellanías específicas, el mecanismo más usual para hipotecar propiedades inmuebles era el de los censos a favor de conventos o monasterios. Para el autor de este trabajo, la animosidad de las élites criollas contra el alto clero habría obedecido a los innúmeros conflictos generados a causa de la amenaza que se cernió sobre el clero criollo mismo por las políticas regalistas de la Corona, entre las cuales la Real Cédula de Consolidación de Vales Reales venía a sustraerle la única verdadera fuente de ingresos que poseía. Si bien Levaggi (1986) sostiene la inocuidad de los efectos de esta Ley para la economía de la región, reconoce en cambio su potencial peligrosidad.⁴⁴ Continuando estas líneas de reflexión, nos preguntamos en este trabajo si en aquellas ciudades con un alto grado de penetración mercantil, las rígidas políticas crediticias de las ordenes religiosas, que ejecutaban y embargaban a los deudores de censos, así como las políticas regalistas (Real Cédula sobre Consolidación de Vales Reales) que so pretexto del rescate de los títulos Reales combatieron el patrimonialismo clerical, fueron idóneas para este último propósito.

También nos preguntamos si por el contrario, la mezquindad de estas políticas, al ordenar la redención de los censos, sin contemplar sustituto financiero alguno, alimentó el resentimiento contra la Corona y la Iglesia, así como contra la función de esta última en cuanto acreedora del crédito eclesiástico. La voluntad de contraer operaciones de censo --condicionada por el comportamiento de los ciclos comerciales-- se hallaba sobradamente ilustrada en los Gráficos A-IV al A-VI, fundados a su vez en la estadística ofrecida por las Tablas H-II y H-III. Estas Tablas, fundadas a su vez en los

apéndices C-I, C-II y C-III nos brindan el número, monto y promedio de los censos y reconocimientos de censos y capellanías, otorgados en Buenos Aires a favor de los diferentes conventos, monasterios, hermandades, cofradías y capellanías. Estos censos montaron, en lo que fué de los siglos XVII y XVIII, hasta 1820, la cantidad de 1.063 operaciones por la suma total de \$1.094.332. Lamentablemente, al igual que con las capellanías, nos es imposible ponderar por el momento la relevancia de las imposiciones y reconocimientos de censos (crédito hipotecario) en los mercados inmobiliarios urbano y rural, hasta tanto no hayamos reconstruido totalmente los catastros urbano y rural de Buenos Aires, procesando mediante métodos informáticos el universo de las compra-ventas de inmuebles urbanos y rurales.

Los ciclos comerciales y la voluntad de contraer censos.

Los ciclos comerciales tuvieron su impacto sobre la voluntad de contraer censos. Cuando en tiempos de guerra, el precio de los productos de exportación era bajo, debido a la imposibilidad de exportarlos, la demanda de crédito en moneda dura caía, al igual que su premio en el canje por moneda corriente o sencilla.⁴⁵ La demanda de moneda corriente o sencilla para la circulación del mercado interno, por el contrario, aumentaba. Por el contrario, en tiempos de paz, la afluencia de mercaderías importadas procedentes de Africa y Europa, inducía la deflación de los precios de dichas mercancías, la caída del flete marítimo, el alza del premio de la moneda doble, la disminución del monto de dinero puesto a censo, de los depósitos en capital-dinero y de las operaciones de crédito eclesiástico, la mayor diferenciación del comercio mayorista y minorista, una mayor movilidad social del personal dependiente del comercio, la estamentalización de la burocracia colonial, y paralelamente, la inflación de los precios de los productos de exportación y el consecuente aumento de la demanda de crédito en efectivo, por lo general otorgado por los patronos de capellanías, los mayordomos de cofradías y hermandades religiosas y los apoderados, tutores y curadores de viudas, huérfanos e incapaces. El impacto mencionado se vé ilustrado sobradamente en los Gráficos A-IV al A-VI, fundados a su vez en la estadística ofrecida por la denominada Tabla H-I. Durante la Guerra de Sucesión de España (1706-12) el mercado de censos (hipotecas) (MH) se cuadruplicó, de un promedio de \$2.000 anuales en el quinquenio 1698-1702 a \$9.000 anuales en el decenio 1703-13. A comienzos de la década de 1760 se registró con motivo de la intervención española en la Guerra de los Siete Años (1762-63) una espiral hipotecaria. En efecto, el número y monto de los censos aumentó de 5 obligaciones a censo por valor de \$4.118 y 3 imposiciones de censo por valor de \$390 en 1761, a 15 y 32 obligaciones a censos por valor de \$17.261 y \$29.135, y 18 y 11 imposiciones de censo por valor de \$18.088 y \$8.540 en 1762 y 1763, respectivamente.

Las frustraciones económicas o la brecha entre expectativas y ganancias mercantiles, durante la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, se profundizan más que durante la intervención española en la Guerra de los Siete Años. De todas maneras, las perspectivas de la Ordenanza de Libre Comercio de 1778 y la tendencia ascendente que las exportaciones de cueros prometían, aliviaron el sentimiento de frustración. Con la Guerra de la Independencia Americana (1776-83), tan pronto como España se sumó a la misma (1780), el número de censos creció de 6 censos por valor de \$7.068 en 1778 y 11 censos por valor de \$11.050 en 1779, a 21 censos por valor de \$19.096 en 1780. Un lustro más tarde, en 1785, la balanza comercial se vuelve deficitaria, registrándose como consecuencia un mayor incremento del número de censos registrados. Desde 1789, y durante los nueve años que restaron hasta 1797 la balanza comercial fué altamente favorable registrándose como reflejo de la misma una prolongada caída del número de censos. Las guerras provocadas por la Revolución Francesa se ven asimismo reflejadas en las estadísticas.⁴⁶ Con el desencadenamiento de la guerra continental en 1798 es cuando en Buenos Aires el número y monto de los censos se incrementan en forma abismal, de

16 censos por valor de \$16.951 en 1799, a 22, 30, 20 y 22 censos, por valor de \$26.849, \$48.576, \$45.087 y \$32.620 en 1800, 1801, 1802 y 1803 respectivamente.

También en Montevideo se observa el mismo fenómeno, pues el número y monto de los censos aumentan de dos censos por valor de \$1.335 en 1800 a 25 censos por valor de \$77.381 en 1801.⁴⁷ Con la amenaza de la aplicación de la Real Cédula de Consolidación de Vales Reales, los censos disminuyeron en Buenos Aires drásticamente, de 22 censos por valor de \$32.620 en 1803 a 12 censos por valor de \$16.150 en 1804, 4 censos por valor de \$4.150 en 1805, y 2 censos por valor de 2.500 en 1806. También Montevideo sufrió dicha caída, por cuanto el número y monto de los censos cayó de un pico máximo de 20 censos por valor de \$107.053 en 1805 a 13 censos por valor de \$59.414 en 1806, y 5 censos por valor de \$6.287 en 1807.⁴⁸ Luego que la paz con Inglaterra fué sellada como consecuencia de la invasión Napoleónica a España, y 31 navíos británicos con una carga valuada en más de un millón de libras esterlinas o cinco millones de pesos plata arribó a Buenos Aires,⁴⁹ el número y monto de los censos registrados en Buenos Aires creció de 4 censos por \$10.000 en 1808 a 7 censos por valor de \$14.940 en 1810. Asimismo Montevideo experimentó similar incremento, por cuanto el número y monto de los censos aumentó de 5 censos por valor de \$6.287 en 1807 a 15 censos por valor de \$29.322 en 1808, 18 censos por valor de \$76.416 en 1809, y 16 censos por valor de \$33.856 en 1810.⁵⁰ De los 181 censos registrados en Montevideo entre 1796 y 1810, 3 lo fueron asegurados sobre quintas, 18 sobre chacras, 9 sobre estancias, y la inmensa mayoría sobre piezas, casas y solares urbanos.

La importancia de Buenos Aires como asiento del crédito eclesiástico está reflejada también parcialmente en la Tabla H-I. Cuando el crédito eclesiástico se estrechaba, la mayor fuente de crédito existente en ese entonces, que no fuera crédito eclesiástico, consistía en los capitales líquidos propiedad de viudas y huérfanos, en manos de vecinos abonados, por lo general grandes comerciantes. Cuando en 1774 y 1775, el crédito eclesiástico se redujo a un mínimo de 7 y 11 operaciones, por montos de \$10.798 y \$16.838 respectivamente, la oferta de dinero a réditos pupilares creció en 1774 a 18 operaciones por valor de \$9.498. En forma semejante, en oportunidad de la implantación de la Real Cédula sobre Consolidación de Vales Reales (1805), en que el crédito eclesiástico se redujo a su mínima expresión, el recurso a los fondos pupilares se incrementó, alcanzando su máxima en 1805, en que se concertaron 31 operaciones por valor de \$101.759.

Conventos y monasterios del interior del espacio colonial.

La importancia del crédito eclesiástico estuvo dada también por las numerosas operaciones crediticias concertadas a favor de conventos y monasterios del interior del espacio colonial. Los Monasterios de Monjas Teresas y de Santa Catalina, con sede en Córdoba, eran de los preferidos por los deudores porteños. La Tabla H-III demuestra cómo mientras el Monasterio de Monjas Teresas concertó una treintena de operaciones por valor de \$32.000, el Monasterio de Monjas Catalinas alcanzó a concertar unas cuarenta operaciones por valor de \$97.000. La Tabla H-IV ofrece el listado de los censatarios o deudores que tomaron prestado dinero a censo a fines del siglo XVIII en La Paz. La Tabla H-V ofrece el listado de los cincuenta censatarios o deudores que tomaron prestado dinero a censo a fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX del Monasterio de Carmelitas Descalzas de Córdoba. Maeder (1981) nos revela que en Corrientes, entre 1775 y 1810, se contrajeron una veintena de operaciones de censo por valor de \$9.100.⁵¹

De los montos promedios de cada censo reflejados en la Tabla H-III surge cómo las diversas ordenes e instituciones eclesiásticas mantenían un patrón de conducta crediticia diversa. Por ejemplo,

mientras el Monasterio de Monjas Catalinas de Córdoba prestaba a un promedio de \$2.500 por censo, el mismo Monasterio residente en Buenos Aires prestaba a un promedio de \$1.300 por censo. Asimismo, el Apéndice C-IV nos ofrece la nómina de un centenar de capellanías que otorgaron préstamos a 115 censatarios por valor de \$146.063, a un promedio de \$1.300 por censo. El listado de este centenar de capellanías, demuestra que sólo ocho fundadores de capellanías mantuvieron una relación de parentesco con los censatarios o deudores, lo cual pudo haber morigerado sólo en esos casos los rigores de la cobranza de los réditos. La mayoría de los censatarios, 90 sobre 100, o el 90%, no poseían relación de parentesco alguna con los fundadores de capellanías, aunque si podrían haberla tenido con el patrono de dichas capellanías. De ese centenar de capellanías citadas en las operaciones de censos, varias de entre ellas no han podido ser halladas.⁵²

Muchas operaciones crediticias eran celebradas bajo la designación de reconocimiento de censo. El Apéndice C-II, que figura como fuente de la Tabla H-III, nos brinda a su vez la mención de 58 reconocimientos de censos otorgados en Buenos Aires por los diferentes conventos y monasterios, que montaron la suma de \$68.733, a un promedio de \$1.200 cada reconocimiento. Sin embargo, esta cifra no refleja el número real de estas operaciones, por cuanto la mayoría de los reconocimientos de censos y capellanías eran celebrados simultáneamente con las compraventas o traspasos de dominio de los inmuebles. De estas últimas operaciones dobles o combinadas (compraventas y reconocimientos) hemos podido ubicar sólo unas 65 operaciones sobre bienes inmuebles urbanos y 25 sobre bienes inmuebles rurales, los cuales se hallan incluídos en el Apéndice C-III.

Los deudores de censos y réditos de capellanías.

Los deudores de censos y réditos de capellanías, en su mayoría propietarios de bienes inmuebles urbanos, eran por lo general integrantes de la clase mercantil. Cuando alguno de ellos carecía de bienes inmuebles con que afianzar un adelanto de mercaderías solicitaba de sus colegas las fianzas correspondientes. En otras palabras, como lo afirma Martínez López-Cano (1994), los deudores de censos se veían favorecidos por créditos a largo plazo, por cuanto "...con un desembolso pequeño de dinero en el momento de compra de un inmueble, podían acceder a la propiedad a cambio de reconocer el censo y pagar sus réditos".⁵³ El acreedor más exigente en esta materia fué el Convento de Monjas de Santa Catalina. El Alguacil Mayor Silvestre de Zarria y el hacendado Juan Gutiérrez de Paz tomaron prestado de dicho Convento, a comienzos de 1730, la suma de \$1.000 cada uno, y pusieron de fiador al comerciante registrero Francisco de Vieira.⁵⁴ Para la misma época, el registrero Pedro de Lea tomó prestado de dicho Monasterio la suma de \$6.347 y puso de fiador a Juan Martín de Mena.⁵⁵ Y el hacendado del pago de Areco y comerciante en mulas con el Alto Perú José Ruiz de Arellano tomó prestado de dicho Convento en ese mismo período la suma de \$1.000, y puso de fiador al hacendado Fermín de Pessoa, propietario de la rinconada existente en la boca del río las Conchas.⁵⁶ Los deudores de censos y réditos de capellanías, en su mayoría propietarios de bienes inmuebles urbanos, eran asimismo fundadores de capellanías. La Tabla G-V revela la intensidad de esta práctica por parte de los mismos deudores de censos. En dicha Tabla figuran las fundaciones de capellanías practicadas por 82 deudores de censos, que sobre un total de casi un millar de deudores, representaban casi el 10%. Entre ellos figuran grandes comerciantes, altos funcionarios, y hacendados.

Los plazos de redención y renovación de los censos.

La generalidad de los deudores de la pirámide de censos y capellanías contraídos pugnaban en tiempos de penuria comercial por faltar al cumplimiento de los pagos, o en su defecto, por la prolongación o espera de los plazos de redención y renovación de los censos y por la rebaja de los

réditos o corridos. El incumplimiento de los pagos de los réditos procedentes de censos contraídos era también el mecanismo por el cual se castigaba a aquellos párrocos que manipulaban el culto con fines políticos. En Agosto de 1852 el Cura Párroco de San Nicolás Estéban José Moreno, conocido como un fiel amante de la que fuera la Santa Federación, se presentó al Director Provisorio de la República Argentina para protestar del estado escandaloso en que yacían las cinco capellanías de las que se suponía debía servirse su parroquia. En efecto, si bien la primera de estas capellanías, la de misa de alba, instituída para los días semi-festivos, se pagaba escrupulosamente, la misa no se daba o decía.⁵⁷ La segunda capellanía, la de la misa de después de salir el sol, que había sido servida por el finado patrono y capellán Dr. José García López, no se pagaba ni servía, debido a una litis entre su deudo, el Dr. Mariano Gazcón,⁵⁸ y su albacea el Dr. Vicente Anastasio Echevarría.⁵⁹ La tercera y quinta capellanías, de las misas de ocho y doce, tampoco se pagaban, por resistirse a ello su patrona Doña Josefa Peña.⁶⁰ Y la cuarta capellanía, la de misa de diez, que estaba fundada en una casa que fué vendida por su patrono Nicolás Giráldez, se transfirió a una quinta en Quilmes, la cual luego fué concursada por la quiebra de Giráldez.⁶¹

La oposición a reducir las tasas de interés y los plazos de redención y renovación de los censos.

Pero en tiempos de penuria, los Vicarios y Vice-Patronos Reales (Virreyes, Gobernadores y Reales Audiencias) se oponían firmemente a reducir tanto las tasas de interés como los plazos de redención y renovación de los censos, y presionaban por la ejecución y embargo de sus deudores. Tal fué la intensidad de las ejecuciones y embargos producidos, que para 1821, el Provisor Mariano Zavaleta --quien elevara un Informe al Ministro Bernardino Rivadavia acerca de las memorias pías fundadas por las diversas ordenes religiosas-- reveló que el Convento Mercedario ingresó en concepto de alquileres de bienes inmuebles urbanos, obtenidos mediante ejecución, una suma tres veces superior (\$6.956) a la que ingresaba a dicho Convento en concepto de réditos de censos y capellanías.⁶² Para obtener o renovar un censo los potenciales deudores o censatarios debían "...ganar la voluntad de cada uno de los miembros del capítulo de la orden, obtener la recomendación del Obispo, quien a su vez solía sugerir ver primero a los confesores".⁶³ El método que se observaba en los monasterios de monjas era semejante. Siempre que había alguien que solicitaba dinero a censo

"...lo pedía a la Prelada, y esta lo consultaba con el Síndico y Madres del Consejo, y si tenía cuenta, se pedía licencia al Prelado, y con ella se entregaba el dinero, de modo que los prelados no tienen que hacer en estos asuntos mas que conceder la licencia o negarla".⁶⁴

Muchas veces los deudores del crédito eclesiástico estaban expuestos a la arbitrariedad de Obispos y Mayordomos de cofradías, hermandades y capellanías, los cuales se negaban a conceder préstamos o a prolongar plazos de redención o renovación de censos bajo excusas de naturaleza extra-económica.⁶⁵ El azoguero potosino Coronel Juan de Peñarrubia,⁶⁶ confesaba en su testamento que para habilitar el giro de sus ingenios recurrió siempre a las arcas del Convento de Santa Mónica y a la Catedral de la Ciudad de La Plata, con la garantía hipotecaria de un par de casas que poseía en la calle de la Recoba. Mas como su hija natural, María Enríquez (cría y educada por Doña Brianda Enríquez), mujer de Juan Antonio Aguilar, con la cual mantenía crónicas reyertas por el monto de los alimentos debidos, se opuso secretamente a librar dichas casas para la operación, el Convento le negó los auxilios financieros, obligándolo así a recurrir por vez primera al Banco de San Carlos.⁶⁷

La base económica de la pirámide financiera eclesiástica.

La base principal de la pirámide financiera construída por la Iglesia --en Buenos Aires como en

la mayoría de las ciudades de la llamada carrera del Perú-- dependía de la suerte de la agricultura y ganadería Rioplatense, de la minería Altoperuana y del consiguiente comercio ultramarino. Pero los bienes inmuebles urbanos y rurales hipotecados en Buenos Aires solo tenían valor en relación con la intensidad del comercio (mular, yerbatero y de mercancías Europeas) existente con el Alto Perú, que la producción minera facilitaba. Una declaración de guerra alimentaba la crisis económica, al disminuir el valor real de las fincas gravadas, sin que mediara deterioro físico alguno de las mismas; y una declaración de paz provocaba el efecto contrario, sin que mediara tampoco mejora física alguna del inmueble.

Por el contrario, el deterioro físico de los inmuebles, urbanos o rurales, iba en desmedro de los alquileres o arrendamientos recaudados, y por consiguiente de los réditos de las capellanías. Para los canonistas Murillo (1765) y Alvarez de Velazco (s/f), seguidos por Febrero Bermúdez (1778), cuando una finca decaía de su antiguo valor, por las circunstancias del país (guerras, pestes, etc.), el perjuicio debía ser para el censatario o deudor y no para el censalista.⁶⁸ En el expediente promovido en Córdoba en 1838 por Restituta Díaz de la Fuente, viuda de Mariano Usandivaras y Allende, contra Fr. Lorenzo de Villada, por la rebaja de los réditos del censo consignativo, que había sido impuesto en su casa por Estanislao Quinteros en 1763, la regla del derecho decía que "La cosa perece y produce por aquel que es Señor", de tal suerte

"...que aunque la finca valiese mucho mas que lo que valía al tiempo que fué censuada, la pensión no podía aumentarse, ni obligársele al censatario que pagase en proporción de lo que había aumentado, por la razón poderosa que las comodidades y perjuicios le pertenecen al censuario por [ser] Señor de la cosa".⁶⁹

Luego, del mismo modo, Murillo sostenía que aunque la finca hubiese disminuído su valor no debía pagar en proporción de lo que había decaído de su valor, según aquella regla de derecho que dice "...secundum naturam est incommoda cujusque rei cum sequi; quem sequuntur commoda".⁷⁰ Pero Doña Restituta, para quien la operación no se trataba de un censo consignativo sino de un contrato de compra-venta, insistía que el detrimento que había sufrido la casa no era accidental o temporal sino necesario o permanente. Efectivamente, Doña Restituta sostenía que el valor intrínseco que antiguamente tenían las fincas de su clase estaba

"...enteramente variado en nuestros tiempos, y mucho más desde que naturalmente se va destruyendo con el uso de tantos años, y siguiendo el orden regular de las cosas como la práctica que desde tiempo inmemorial nos enseña, jamás volverán ni aproximadamente al valor que antes tuvieron".⁷¹

Habiendo entonces sufrido su casa un demérito tan constante en el tiempo no era aplicable según Doña Restituta la doctrina de Murillo transcrita por Villada, porque Murillo suponía "...una variación de poco tiempo, no inmemorial como se ha demostrado "...ita ut per aliquos annos fundos ille non ferat".⁷² La doctrina que era aplicable según Doña Restituta era la de Salas (1617),⁷³ y para Villada la doctrina de Cencio (1621), según las cuales el que las fincas hayan decaído de su valor, es un defecto temporal, que depende de las circunstancias del país, por lo que no deben rebajarse los réditos.⁷⁴ Cecilio Ignacio Ferreyra, apoderado de Villada, argüía que en el censo, a diferencia de la compra-venta, el imponente o censuario "...permanece siempre en el dominio pleno, y la administración de la casa censuada", y el comprador, acreedor o censalista, "...no tiene más derecho que a percibir la pensión anual hasta que el censo se redime, y lo que se vende no es la finca sino el derecho [a cobrar los réditos]".⁷⁵ En la disputa ocurrida en Buenos Aires, entre la Orden Mercedaria y Petrona Chaparro,⁷⁶ sobre el mejor derecho a una capellanía y oposición a la venta de la casa de Lázaro Quixano, el Procurador del Convento

declaraba en 1775 que si bien "...la finca no vale hoy más que lo que consta de la tasación", reconoce que las casas "...tienen hoy mayor valor que antes por estar más introducido el comercio".⁷⁷ Por el contrario, en el caso que --con motivo de la reducción de un censo-- libró en Buenos Aires en 1786 Doña Manuela Yrasusta,⁷⁸ pobre de solemnidad, con el hacendado Januario Fernández do Eijo, declaró que habiendo justificado el censuario o deudor haber padecido una lesión en el precio "...tiene acción expédita para hacer que el Censo se reduzca al justo precio".⁷⁹ Para fundamentar su alegato Doña Manuela argüía que si en la compra de un esclavo, que no valía mas de \$200 daba el comprador \$300, el perjuicio experimentado por una vez no era mas que de \$100, y si no lo reclamaba dentro de los cuatro años que previene la ley debía sufrirlo en pena de su omisión; pero en los contratos de censo

"...si para imponerlos se dió una finca regulada a juicio privado y erróneo de los contrayentes en \$2.000, sin que ella valiese en realidad mas que \$1.000; el perjuicio es sucesivo en cada año, y el censuario perjudicado tendría que pagar por \$1.000 de capital imaginario \$50, que en el transcurso de veinte años infieren un perjuicio de otros \$1.000, y en el de cien años sube a \$5.000, que es suficiente para arruinar una familia".⁸⁰

De igual forma, en los autos que el Síndico del Convento de San Francisco celebró a comienzos del siglo pasado con los herederos de Miguel Pintola y Anastasia Delgado,⁸¹ sobre el pago del principal (capital) y réditos (intereses) de la escritura censual a que se obligaron tanto la referida, como su yerno Miguel de Ycasate y su hija Sebastiana Pintola, el Dr. José Carrancio alegaba, fundado en la doctrina de Gómez (1552), que para que una mujer casada, obligada de mancomún con su marido, pudiera reclamar de dicha obligación debía pedir relaxación o rescisión de contrato, probando haber sufrido lesión enormísima y haber quedado indotada y no tener el marido bienes con que resarcir el perjuicio. Y cuando en 1813, el Dr. Domingo González y Gorostizú,⁸² patrono de la Capellanía fundada por María Eulalia Fustel, dejó de practicar los mantenimientos de la casa gravada, ubicada en el barrio de la Merced, las consecuencias fueron "...en términos de no producirme de alquileres el redicto competente".⁸³ Fue entonces que González decidió vender la finca al Arcediano Andrés Florencio Ramírez "...quien podrá adelantarla y mejorarla dejando siempre reconocido e impuesto sobre ella el principal de la Capellanía".⁸⁴

La opinión citada de Gómez (1552, 1718),⁸⁵ antagónica a la de Febrero Bermúdez (1778), no era peregrina, porque los más clásicos expositores siguiendo el espíritu de la Ley de Toro opinaban del mismo modo. Gregorio López, entre ellos, tratando de la fianza de la mujer casada decía que "...renunciando el Velisano y la citada Ley y obligándose con juramento prometiendo no oponerse por algún remedio aunque sea de derecho, vale la obligación ¿con cuanto más motivo valdrá si la obligación fué de mancomún?".⁸⁶ Espino de Cáceres (1587, 1592) sostuvo que: "...mulier pro marito vali de fidei pubere potest cum juramento, etiam si non esset certioraa velisari"; que era más y con mayor razón que si se obligara in solidum.⁸⁷ Díez Noguerol (1676) opinaba que "...la mujer por su indotación o por haber sido enormísimamente lesa puede rescindir el contrato".⁸⁸ Zeballos (1613),⁸⁹ al igual que Gutiérrez (1789),⁹⁰ decían que "...el juramento confirma el acto aunque sea nulo, cuando se puede guardar sin perjuicio del alma; pero excluye del acto todo dolo, fraude, miedo y lesión enormísima".⁹¹ El regalista Salgado de Somoza (1626-27) propuso el caso en el que una mujer casada contrajo con su marido dos obligaciones de mancomún en dos tiempos; en la primera obligación la mitad de sus bienes dotales, y en la segunda la otra mitad. Salgado se preguntaba "...¿si quedando como queda indotada se rescindirán las dos obligaciones?".⁹² Y respondía que la primera obligación no. Y la razón de la no rescisión la designa Castillo (1563), porque el juramento

"...tiene razón de contrato o cuasi contrato y confirma el contrato alias nulo: y no estando

prohibido por nuestra legislación de que estos contratos se apoyen con juramento no hay motivo para que se quebrante tan ligeramente, que es el motivo porque Inocencio III prescribe su observancia en el capítulo *cum contingat*".⁹³

Castillo (1563) y Larrea (1626, 1732) estuvieron conformes en que "...concurriendo en los contratos que celebran las mujeres casadas lesión enormísima, o miedo no reverencial, por que no basta sino un miedo verdadero *cum minis, et verberibus*".⁹⁴ Y justificado este miedo con la prolijidad que explica dicho Larrea, bastaba para irritar dichos contratos jurados: Y así se explica la santidad del Papa Inocencio III ya citado: *Dum modo absit dolus, aut vis*. Bonifacio VIII en el capítulo *licet mulieris*, pone la excepción para la observancia del juramento,

"...de que hayan sido prestados sin miedo y sin violencia y como en las lesiones enormísimas se sospecha dolo, y en las mujeres que así contratan con juramento un miedo que sea bastante para violentar el consentimiento; por eso en el dictámen de los más expositores siempre que concurre violencia para prestarse el juramento y lesión enormísima de que dimana la indotación se irritan estos contratos *ope exceptionis*".⁹⁵

Para esta irritación era indispensable según el Protector de las Herederas, Antonio Gómez, "...pedir primero la relajación del juramento *ad effectum excipiendi*".⁹⁶ Gabriel Pereira tratando el modo como se purga el miedo en los contratos de las mujeres casadas cuando los maridos las engañan o empeñan sus Dotes, según el capítulo *ad id quod de sponsalibus et regula ratihabitio*, cita a Menochio (1605),⁹⁷ a Mascardo (1637), a Padilla (1605), y a Bartolomé Cepolla.⁹⁸ Larrea asimismo decía que "...el miedo se excluye quando el que le padece ratificó el acto meticoloso, y que seguida su observancia se purga el miedo y se prueba el consentimiento, y ratihabición: *Ratihabitionem vetro trahi; et mandato non est dubium comparari*".⁹⁹

La naturaleza del precio pagado a los censualistas o acreedores.

En cuanto a la naturaleza del precio pagado a los censualistas o acreedores, los comerciantes censatarios o deudores solían saldar los réditos adeudados a censos y capellanías con mercancías importadas por ellos con precios también impuestos por ellos, superiores a los precios que solían regir en el mercado de mercancías. En Buenos Aires, el Lic. Pascual de Fuentes,¹⁰⁰ declaró en su testamento, registrado en 1671, que "...corrí dos años con una capellanía del Cap. Marcos Gutiérrez [de Vargas], y por razón de ella, no he recibido más de tres cuartas de paño de Quito a razón de siete pesos vara".¹⁰¹ María Teresa Rendón y Lariz, mujer de Jacinto Aldao,¹⁰² en los autos con el R.P. Rector de la Compañía, declaraba en 1766 como podría en parte alguna del mundo

"...hacerse efectivo un censo cuyo precio exhibido por el comprador de él, se reducía a pitos y alfileres, millares de abujas, sintas de lana, un almires, un tarro, navajas de barba, gruesas de botones blancos y de serda, gorros, olanes, y bretañas averiadas".¹⁰³

De haber sido esto común, los acreedores de censos o censualistas no sólo habrían estado impedidos de cobrar intereses usurarios (que probablemente burlaban) y sufrir la imposición de precios monopólicos en la mercadería que recibían como pago por los intereses acreditados, sino que también se habrían visto privados de un metálico con el cual podrían haber accedido al mercado "libre" de mercancías y comprado mercancía importada a precios de competencia. Para cubrirse de estos altos precios, los censualistas o acreedores buscaban cargar sus créditos en inmuebles cuyo valor real fuere superior al de su tasación, o cuya amortización por deterioro físico fuere menor que las expectativas de valorización

futura.¹⁰⁴ Al no cargar con los costos de reposición o mantenimiento de los inmuebles, los censatarios o deudores se veían con el tiempo beneficiados, al disminuir con su deterioro físico el valor real de los inmuebles.¹⁰⁵

En la zona más céntrica de Buenos Aires, cercana a la plaza mayor, las casas más valiosas eran las más recargadas con gravámenes contraídos por diversos propietarios en épocas distintas.¹⁰⁶ Cuando la recarga de los gravámenes excedía el valor real de un inmueble, y su eventual propietario deseaba deshacerse del mismo, hacía el traspaso del dominio sin precio alguno.¹⁰⁷ La base de la pirámide financiera en el caso de las tierras de estancia y de chacra hipotecadas en el Río de la Plata dependía sólo del precio de las mulas, del cuero y del trigo. Las tierras de estancia hipotecadas solo tenían valor en relación con el valor de las mulas y el cuero producidas en ellas. De igual forma, las tierras de chacra gravadas con censos y capellanías solo tenían valor en relación con el valor del trigo producido en ellas para el mercado interno local.¹⁰⁸

Los Cabildos Eclesiásticos y las Ordenes Religiosas, una suerte de clase rentista señorial,¹⁰⁹ solían mantener en vilo a los deudores de censos y réditos de capellanías. En Cochabamba y La Paz, los Cabildos Eclesiásticos, se opusieron terminantemente a rebajar la tasa de interés alegando que los Cabildos seculares habían padecido engaño en "...suponer destruídas las fincas o haciendas de la provincia con la Sublevación de los Indios".¹¹⁰ Esta afirmación la fundaba en la circunstancia de que la mayoría de las fincas de Cochabamba consistían en tierras de panllevar. Aunque algunas de ellas, en los confines de la provincia, hubiesen padecido perjuicio en sus aperos y ganados, nunca pudieron, para el pensar del Cabildo Eclesiástico, haber sufrido perjuicio en los terrenos. Y como para la situación de los censos, jamás se habían considerado los utensilios de las haciendas, sino el valor de sus tierras, el Cabildo Eclesiástico concluía "...que no pudo dar mérito el quebranto de aquellos a la rebaja que se solicitó en las pensiones de éstas".¹¹¹ Es cierto, sostenía el Cabildo Eclesiástico, que en el Partido de Ayopaya,

"...donde los rebeldes hicieron la mayor resistencia, perdieron los dueños de las Haciendas dos años de cosechas, ya por que se hallaba el campo infestado de los insurgentes, que ejecutaban hostilidades, ya por que los españoles estaban ocupados en la vigorosa defensa, que correspondía a su lealtad".¹¹²

Como los conventos, monasterios, eclesiásticos seculares y otras obras pías de limosnas, dotes y piadosas memorias tenían fundada su mantención en los réditos de los capitales o principales impuestos sobre las fincas, con consideración al 5%, en cualquier rebaja de la tasa de interés de los censos "...se perjudicaría no sólo el censalista, sino también claudicaría la disposición del fundador".¹¹³ Si un censalista o acreedor instituía una capellanía de \$4.000 con el cargo de 25 misas dotadas a \$8 cada una, sobre los \$200 de sus réditos, de rebajarse la tasa de interés de los censos, el capellán habría de recibir solo \$120, a razón del 3%, por lo cual "...tampoco podría cumplir el número de misas asignado, por que quedaba indotada parte de ellas".¹¹⁴ Estas consideraciones se hicieron extensiva más luego a la Provincia de La Paz, donde por Real Cédula del 9 de febrero de 1795 la Corona insistió, a instancias del Cabildo secular de La Paz, en la rebaja del 3% de los réditos de los censos redimibles y del 2% de los réditos de los censos perpetuos. No obstante la suprema autoridad que respaldaba la medida, el Cabildo Eclesiástico de La Paz manifestaba "...que el deterioro de las haciendas de este Obispado no dá mérito a la pretendida reducción de censos".¹¹⁵ Con todo, el Cabildo Eclesiástico de La Paz no pretendía negar la decadencia y deterioro en que por la Rebelión de Túpac Amaru habían quedado muchas haciendas no sólo de La Paz, sino también del Cuzco y Charcas. Sin embargo, el Cabildo Eclesiástico de La Paz manifestaba no tener noticia de que Cuzco y Charcas "...hayan solicitado la

rebaja que intentan estos hacendados".¹¹⁶ El argumento del Cabildo Eclesiástico consistía en hacer ver que "...en realidad no fueron destruidos los cicales, en que principalmente consiste la abundancia de los que poseen esa especie de haciendas".¹¹⁷ Ellos no fueron destruidos porque los Indios Rebeldes tenían por las plantas de cicales "aprecio y estimación". Aunque algún deterioro sufrieron los cicales por falta de cultivo y en varias de dichas haciendas fueron quemados los caseríos "...se repararon y repusieron sin morosidad a beneficio de la excesiva estimación que tomó este fruto en los tiempos inmediatos de la sublevación".¹¹⁸ Con el adelanto de su valor "...se auxiliaron no poco los hacendados para reponer sus quiebras, y algunos de ellos que no experimentaron incendios de sus casas por hallarse sus haciendas retiradas, lograron la coyuntura de restablecer sus caudales, y quizá de engrosarlos".¹¹⁹

El Cabildo secular de La Paz esgrimía como antecedentes de la reducción de los censos los ejemplos de Lima, con motivo del terremoto de 1746, y de Panamá, con motivo de la caída de Portobello en 1740. Pero para el Cabildo Eclesiástico la ruina acaecida de los edificios de Lima con motivo del sismo era, a diferencia de la pérdida de valor de los cicales de La Paz, irreparable, y como tal acreedora a una rebaja de los censos. En cuanto al ejemplo de Panamá, bien lejos de favorecer a los hacendados de La Paz, antes probaba, según dicho Cabildo, "...todo lo contrario". Los vecinos de Panamá solicitaron la rebaja de los censos por el deplorable estado a que los había reducido la cesación del comercio ocasionada por la caída de Portobello, y los incendios de 1737 y 1756. En efecto, ya fuese por evitar las terribles enfermedades a que estaba sujeto la travesía del Istmo, ya sea "...la menos morosidad y escusación de gastos que adelantan los interesados con la navegación por el Cabo [de Hornos]", lo cierto era que el tráfico marítimo empezó a venir o por Montevideo o por el Cabo de Hornos. De esta realidad provino la despoblación de Panamá, la total ruina de su comercio, y el corto o ningún valor de sus frutos. Muy justa era, entonces, a juicio del Cabildo, la rebaja de la tasa de interés de los censos, "...porque si las haciendas perdieron irreparablemente parte de su valor, si lo que producían cayó igualmente de su estimación, sin que la industria encontrase arbitrio para reemplazar esos deterioros "...no había cosa mas equitativa que la reducción de sus pensiones".¹²⁰

El tenor de las tasas de interés.

Veinte años después, y con relación al tenor de las tasas de interés con que eran gravados los endeudados productores de plata (azogueros) del Alto Perú, el Fiscal de la Real Audiencia de Charcas, Vitorián de Villava, traductor de la obra de Antonio Genovesi,¹²¹ consciente del atraso económico del mundo colonial --al igual que Joshua Child, el pensador mercantilista inglés-- manifestaba desde la antigua Charcas en noviembre de 1800 ignorar los verdaderos motivos que habría habido para no haber repetido en los dominios coloniales la reducción de los réditos (intereses) en los censos que ya se había producido en la metrópoli española.¹²² El saber fijar por ley la cuota que deben producir los capitales era, en el concepto del Fiscal Villava, "...uno de los golpes más difíciles y más diestros que puede presentarse a los que llevan el timón del gobierno. Que ni lo subido de los intereses abrumen a los necesitados que toman dinero, ni lo bajo de ellos retraigan a los ricos que lo prestan".¹²³

Los dos principales fundamentos que ocasionaban la subida de los réditos, en la opinión de Villava, eran "...el poco dinero, o el mucho comercio: el primero trae consigo el haber pocos prestadores; y el segundo el haber muchos que pidan para sus giros". Ninguno de estos dos motivos se verificaba en las colonias, en donde al decir de Villava la masa del dinero es respectivamente [por relativamente] mayor que en España,

"...por que la moneda nunca es poca ni mucha, sino con relación a lo que representa, esto es a los frutos y efectos comerciales, de modo que suponiendo que se dé una porción de plata u oro

por otra porción de géneros, aquella es mayor o menor según la abundancia de éste y como los precios de todo son mucho mas subidos en el Perú que en España, es claro que la abundancia del dinero es mayor respectivamente".¹²⁴

Esta misma reflexión le servía al agudo Fiscal de Charcas para confirmar su impresión que el comercio era menor en América que en Europa, "...pues el concurso de vendedores proporciona la abundancia, y esta proporciona la baratura". Más luego, Villava sostuvo que en un país sin fábricas, sin primeras materias, sin industria, y en donde el comercio es precario y dependiente cuasi enteramente de la metrópoli, es imposible que el comercio prospere mucho. Así pues, la reducción de la tasa de interés de los censos del año de 1705 con que Felipe V auxilió a sus vasallos de Castilla, debió extenderse, a juicio de Villava, por las mismas causas o mayores

"...a los vasallos de América, especialmente cuando observamos que los intereses de los préstamos en el comercio están al mismo medio por ciento al mes que en España, no obstante la diferencia, y desigualdad de su giro, y sus riquezas, y no alcanzamos a entender por qué los censos cargados sobre hipotecas no hayan seguido la misma proporción que allá".¹²⁵

En la hipótesis de que la rebaja de los intereses del dinero promueve la industria y la agricultura, facilitando el tomarlo a censo para emplearlo en beneficiar las tierras y perfeccionar las fábricas y los obrajes, y en el supuesto de que como dice la pragmática de Felipe V, la decadencia de la agricultura exige esta rebaja, y aún los mismos censualistas [rentistas] sensatos reconozcan, que si no se hace se hallan expuestos a perder sus réditos, y aún parte de sus capitales, Villava se preguntaba con increíble lucidez para su tiempo "...¿a quién deberá atender antes el legislador? ¿a la clase productiva del Estado, o a la clase consumidora? ¿a los adinerados capitalistas o a los abrumados censuarios [deudores hipotecarios]?"¹²⁶ Todas las reducciones que se han hecho de los réditos de los censos desde el siglo XVI han tenido según Villava sus contradicciones, como expresamente lo declaraba la Pragmática de Fernando VI, "...pero los soberanos han cerrado los ojos al interés que con su bocina de oro aumenta sus roncós alaridos, y abriéndolos sólo a la humanidad, y al bien del Estado, han determinado la reducción según las circunstancias".¹²⁷

Con una claridad asombrosa para los conocimientos económicos de la época Villava reflexionaba con argumentos que bien podrían ser usados hoy en día por quienes cuestionan las altas tasas de interés de la enorme deuda externa que pesa sobre las finanzas públicas de la América Latina

"...La rebaja general en el Perú del 1% sería útil a los deudores, porque les aliviaría la carga, sería útil a los acreedores, porque les aseguraría sus réditos y sería útil al público, porque sin ella con las continuas ejecuciones que se echan sobre las hipotecas y con las repetidas fundaciones de capellanías y obras pías se va aumentando el número de los pordioseros".¹²⁸

Del estudio del patronato de las capellanías vigentes en Buenos Aires y el interior, surge a las claras a lo largo de los siglos XVIII y XIX una inestabilidad muy pronunciada en la consistencia de status de los miembros de la élite, que hacía de la longevidad de los patronatos, un instrumento envidiable de prestigio social. Es indudable que dichos prestigios, manipulados por los estamentos colonialistas, deben haber alimentado profundos resentimientos, no siempre expresos, que al acumularse no hicieron mas que madurar la conciencia social de aquellos miembros marginados de la élite y a su vez presionar la inevitable crisis revolucionaria de comienzos y mediados del siglo XIX. Podemos concluir también, que las deudas contraídas por los grandes comerciantes con las instituciones de la Iglesia Católica a través de los censos, y con las casas monopolistas de Cádiz a través del fiado de Castilla, fué entonces la responsable de que en las colonias españolas de América se

discutiera en ese entonces, al igual que también se hacía en Europa, las razones de la crisis del crédito eclesiástico y las oscilaciones de la tasa de interés.¹²⁹ Es evidente que estos conflictos no resueltos socavaron la unidad del sector mercantil, lo cual a su vez afectó el equilibrio de poder en el seno del Consulado de Comercio de Buenos Aires, perjudicando al grupo de comerciantes registreros o monopolistas ligado con la casas comerciales de Cádiz y beneficiando a aquel grupo de comerciantes porteños que por negociar con cueros y carnes saladas estaba interesado en el librecambio y en el comercio con las colonias extranjeras (Brasil, Angola, Mozambique, etc.). Sin duda, en esta fractura se encuentra una de las raíces de la fragmentación política acaecida al antiguo Virreinato del Río de la Plata y el origen de la llamada independencia argentina.

NOTAS

¹ Sánchez Bella, 1986.

² citado por Quiróz, 1993, 36.

³ Los censos y capellanías sobre nueve haciendas del valle de Chicama sumaban \$322.418; y redituaban a los conventos, monasterios e Iglesia Catedral, al interés promedio del 4% anual, \$12.896 (Burga, 1979, 82).

⁴ ver Muñoz y Robles (1993).

⁵ Schwaller, 1985, 147. Bauer (1971) concluyó que la mayoría de las capellanías y obras pías estuvieron fundadas en gravámenes a la propiedad inmueble y no en donaciones en efectivo o en inmuebles, como comprueba Schwaller para la Nueva España del siglo XVI (Bauer, 1971, 78-82).

⁶ Levaggi, 1986, 19; y Fisher, 1990, 642.

⁷ Bauer, 1983, 732.

⁸ Lavrin, 1985, 38. Lamentablemente me ha sido imposible consultar el trabajo de Cervantes Bello (1986).

⁹ Ver Saguier, 1992a, 1992b, 1994, 1995a y 1995b.

¹⁰ Schwaller, 1985, 121.

¹¹ Bazant, 1984, 198.

¹² de ahora en más identificado con las siglas AAC, cuyas copias en microfilm se hallan en el Centro de Historia Familiar (CHF) perteneciente a la filial porteña de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que son a su vez copias de los microfilms existentes en la Genealogical Society of Salt Lake City, Utah, de la Granite Mountain Record, también de ahora en más identificado con las siglas CHF. Debo el conocimiento de la existencia de esta invalorable fuente documental a la generosidad del infatigable y esforzado investigador Carlos Jáuregui Rueda. Desgraciadamente no se han microfilmado los Libros de Capellanías de los obispos de Tucumán, Mendoza y Santa Fé.

¹³ El fichaje de los testamentos porteños de los siglos XVII y XVIII fueron facilitados por mí al Sr. Hugo Fernández de Burzaco, --por intermedio del investigador y colega Jorge Zenarruza-- quien los aprovechara con mi autorización para su valiosa obra denominada "Aportes Biogenealógicos para un Padrón de habitantes del Río de la Plata", la cual identificaremos de ahora en más con las siglas FB.

¹⁴ Lamentablemente, nos es imposible ponderar por el momento la relevancia económica de las capellanías con respecto a los mercados inmobiliarios urbano y rural porteño, hasta tanto no hayamos reconstruido por medios informáticos, para cada época histórica, los catastros urbano y rural de Buenos Aires, procesando la totalidad de las compra-ventas de inmuebles registrados notarialmente.

¹⁵ Isern, 1936, 82.

¹⁶ Isern, 1936, 82.

¹⁷ Para Montevideo, Pivel Devoto (1964) nos brinda una estadística que cubre el período entre 1796 y 1816 (Pivel Devoto, 1964, 1230). De las 187 operaciones registradas por Pivel Devoto, 11 fueron capellanías y 176 censos. De las 11 capellanías dos fueron registradas en 1797, una en 1798 y 1801 respectivamente, dos en 1803, 1804 y 1808, y una sólo en 1810. De las mismas 11 capellanías registradas, una se afincó en una chacra, tres en fincas, y el resto en casas de Montevideo.

¹⁸ Goebel, 1938, 309.

¹⁹ Michael Costeloe trae para todo México a comienzos del siglo XIX una lista de 10.000 capellanías, que a un promedio de \$3.500 cada una totalizaron la suma de \$35.000.000 (Bauer, 1983, 717).

²⁰ Marcos Rodríguez de Figueroa.

²¹ Manuel Antonio de Castro y Careaga y Francisco Salvio Marull.

²² Juan B. Maciel y Fermín de Pessoa.

²³ Juan de Lezica y Torrezuri, María Bernarda Lezica de Seguroola, Lorenzo Lóyzaga, Alfonso Rodríguez, Manuel Rodríguez de la Vega y Gaspar de Santa Coloma.

²⁴ José Cano Cortés, José Díaz, Simón González de Leyva, Bartolomé Márquez y Francisco de los Ríos y Gutiérrez.

²⁵ hijo del Capitán y Justicia Mayor Diego Rodríguez de Figueroa y de Petronila de Cervantes (FB, V, 381).

²⁶ Ver Tabla D-III.

²⁷ Amén de las capellanías que fundó en Buenos Aires, Rodríguez de la Vega fundó en España una capellanía por \$40.000 a favor de una hermita y escuela de niños en su lugar de Barsenas (AGN, Protocolos, Registro 6, 1779, fs.270).

²⁸ ver Saguier, 1993, 27 y Tabla C-V.

²⁹ Socolow, 1978, 97 y 98.

³⁰ hijo de Juan Antonio de Lezica y de Rosa Victoria de la Torre y Tagle Bracho, y apoderado de su tío, el Pbro. Bernabé Santiago de la Torre (AGN, Tribunal Civil, Leg.L-3, "Andrés Lezica, s/capellanía", fs.12).

³¹ hija de Bernabé de la Torre de Trassierra, nacido en Asturias, Gobernador de Huancavelica, Perú; y de Petrona Eugenia de Tagle Bracho; y prima hermana de Ana María Velasco y Tagle Bracho, mujer del Capitán Martín Antonio Barquin (FB, VI, 165, 190 y 250).

³² Andrés Lezica alegaba que si se presentó en juicio contra su madre "...no fué por algún efecto de rencor o enemistad que encubriese en mi pecho, y sí sólo por el fin de aclarar, tanto lo conducente a mi honor y estimación, cuanto lo perteneciente a mi derecho y justicia" (AGN, Tribunal Civil, Leg.L-3, fs.12; y Leg. L-14).

³³ hija de Juan José de las Llagas Lezica y de Petrona de Vera Pintado (FB, IV, 143).

³⁴ AGN, Tribunal Civil, Leg.L, n.22, "Lezica, María Manuela s/Capellanía". Los ordenanzas del AGN no han podido localizar este legajo.

³⁵ AGN, División Colonia, Escribanías Antiguas, tomo 72, f.306 y 800v.

³⁶ Rázori, 1945, 245.

³⁷ Calvo, 1924, 164.

³⁸ Ver Tabla D-III.

³⁹ nacido en Chile, hijo del Sargento Mayor Gerónimo del Pozo y Silva y de Constanza de Lemos; y marido de Ana María de Garro (FB, V, 239).

⁴⁰ hijo de Alonso del Pozo y Silva y de Ana María de Garro (FB, V, 239).

⁴¹ AGN, Tribunal Civil, Leg.A, N.108.

⁴² AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, tomo 46, fs.151v.

⁴³ AGN, Sala IX, Escribanías Antiguas, tomo 65, fs.737. El patronato de esta capellanía fué reclamada por Lorenza de Acasuso, hija o nieta de Domingo de Acasuso, a Damiana de los Heros y Acasuso, hija de Antonio de los Heros y Acasuso y de María Josefa Jofré de Arce y Videla, por ante el Juez Metropolitano de la Ciudad de La Plata (AGN, Protocolos, Registro 4, año 1770/71, fs.140).

⁴⁴ Levaggi, 1986, 86.

⁴⁵ "Entre la moneda doble (o de ocho y cuatro reales) y la sencilla (de 2, 1, 1/2, o 1/4 real) no había diferencia de fino o ley ni tampoco de peso salvando la proporción, pero si existió una diferencia de volumen, siendo mayor en moneda sencilla. También existió un premio a favor de la primera, que oscilaba según en qué momento o lugar se concertaba. El premio de la moneda doble, a la inversa de

las tasas de interés, era más alto en los puertos de salida, y más bajo en tiempo muerto (tiempo de ausencia de navíos en los puertos) y cerca de las Casas de Moneda. Durante el tiempo muerto en Buenos Aires el premio que se estilaba alcanzaba al 3%, y en tiempos de navíos oscilaba entre el 5 y el 15%. En Chile, en 1737, el premio de la moneda doble alcanzaba al 2% y en Potosí, donde había más abundancia de moneda doble el premio debió haber sido menor. En igual fecha, en Buenos Aires, el premio llegó al 6%, en 1778 en la Colonia del Sacramento alcanzó al 17%, y en Brasil al 25% (Saguier, 1989, 290).

⁴⁶ Para Montevideo, Pivel Devoto (1964) nos brinda una estadística que cubre el período entre 1796 y 1816 (Pivel Devoto, 194, 1230). De las 187 operaciones registradas por Pivel Devoto, 11 fueron capellanías y 176 censos.

⁴⁷ Pivel Devoto, 1964, 1230.

⁴⁸ Pivel Devoto, 1964, 1230.

⁴⁹ Goebel, 1938, 309.

⁵⁰ Pivel Devoto, 1964, 1230.

⁵¹ Maeder, 1981, 314.

⁵² Es el caso de las capellanías de Manuel de Abila, José Alcina, Isabel de Antas Martel, Vicente Arozarena, Pantaleón Rivarola, Rodrigo Sánchez de Bonilla, Gregorio de Brito, José Monsalve, María de Ayala, Pedro Sánchez Rendón, Deán Francisco de Saldívar, Santiago Rocha, Bartolomé de la Mata, Francisco Caballero Bazán, Juan de Eguía, Dominga de Ibarra, Gerónimo Sarachi y Ordóñez, Francisca Miranda, Fr. Cristóbal de la Mancha, Domingo García Moya, y Duarte Rodríguez de Estela.

⁵³ Martínez López-Cano, 1994, 30.

⁵⁴ AGN, Protocolos, Registro 2, 1732/35, fs. 181v. y 177

⁵⁵ AGN, Protocolos, Registro 3, 1733, fs.119.

⁵⁶ AGN, Protocolos, Registro 2, 1732/35, fs.89.

⁵⁷ AGN, Tribunal Civil, Leg. M-5, "Estéban José Moreno c/Josefa Peña, s/ capellanía".

⁵⁸ hijo de Blas Gazcón y de María Tomasa de Arze, y marido de María Manuela López García, hija de Francisco López García y de María Ventura Morales y Toscano (FB, III, 163; y IV, 15).

⁵⁹ *Ibídem*.

⁶⁰ *Ibídem*.

⁶¹ *Ibídem*.

⁶² Udaondo, 1949, 126, citado por Levaggi, 1974, 389.

⁶³ AGN, División Colonia, Asuntos Legales, Buenos Aires, 1780-82, Sala IX, 11-1-6.

⁶⁴ Idem.

⁶⁵ sobre el rol de las Hermandades en los entierros celebrados en Brasil, ver Queiroz, 1989; y Theije, 1990.

⁶⁶ Peñarrubia era natural de Villanueva de la Jara, La Mancha, Toledo; casado en primeras nupcias con Camila Prudencio Pérez, hija de Pedro Prudencio Pérez (Buechler, 1989, II, 343, nota 245); y en segundas nupcias con Juana Guriguru; hermana de Juana Guriguru, mujer del Teniente de Dragones Pedro Escribano Salvado, también nacido en Villanueva de la Jara, La Mancha, Toledo; y el mismo era tío político del Capitán de Dragones Pedro Nicolás Escribano, hijo de Pedro Escribano Salvado y de María Guriguru o Burburu; del Alférez del Presidio Cayetano Grimau, casado en primeras nupcias con María Antonia Escribano Guriguru, y en segundas nupcias con María Esperanza Gutiérrez Gálvez; de Tadea Grimau Escribano, mujer de Martín José de Goycochea; y de Mercedes, mujer del Ministro Contador de la Factoría de Tabaco Vicente Martínez; y primo de Miguel Besares (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 85, Exp. 2210, cláusula 59; y FB, 1986-90, II, 293; y III, 195 y 288).

⁶⁷ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 85, Exp. 2210, cláusula 59.

⁶⁸ "...Deinde census sol vendus est in specie monet de qua conventur, etiamsi usus valor tempore solutionis, auctus vel deminutus sit" Murillo, Libro 3, Decretali m. tit.39 De censibus, y Alvarez, in Tit. de cens., n.983, citados en AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.VI, fs.6 y 29v. (Microfilm 2677, del CHF).

⁶⁹ AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.VI, fs.6 (Microfilm 2677, del CHF).

⁷⁰ Ibídem.

⁷¹ Idem, fs. 29v.

⁷² Idem.

⁷³ "...alio quim parum distaret a mutuante sub usuris, qui sortem mutuata in omnem eventum se curam habet" (AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.VI, fs.29v. [Microfilm 2677, del CHF).

⁷⁴ "...secus tamem sit Herilitas non sit...que ademat omnem pror sus spem, quod aliquo tempore possit aliquos fructos reddere, sed si temporalis, ita ut per aliquos annos fundus ille non ferat vel nonnullos vel tan exiguos fructus ferat qui non sufficiant pro solutione totus census, co enim casu censum, non estingui vicendum est, sive hoc contingat caso fortuito, sive culpa et negligentia domini fundi supositi nam cum utroque casu re ipsa censuata remaneat de sui natura apta ut aliquo tempore fructus ferat census non potest dice extinctus" (AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.VI, fs.46v. [Microfilm 2677, del CHF]).

⁷⁵ Idem.

⁷⁶ viuda de Francisco Antonio Ferrera Feo, tutora de su hijo Juan Mariano Ferrera (FB, III, 54).

⁷⁷ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. C-10, Exp. 1, fs. 77.

⁷⁸ hija de Domingo de Irazusta y Orozco y de Juana Tomasa de Malaver (FB, IV, 63).

⁷⁹ AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.I-4, Exp.14, fs.412.

⁸⁰ Idem.

⁸¹ FB, V, 210.

⁸² hijo de Francisco González de la Coterá y de María Anastasia Gorostizú (FB, III, 263).

⁸³ AGN, Protocolos, Registro 3, 1813, fs.360v.

⁸⁴ Ibídem.

⁸⁵ Ver Molina, 1991, 70.

⁸⁶ AGN, Sucesión 7712, "Miguel Pintola y Anastasia Delgado, sobre el pago de principal y réditos de escritura censual", fs.78-82v.

⁸⁷ Ibídem.

⁸⁸ Ibídem.

⁸⁹ ver Molina, 1991, 71.

⁹⁰ ver Molina, 1991, 71.

⁹¹ AGN, Sucesión 7712, "Miguel Pintola y Anastasia Delgado, sobre el pago de principal y réditos de escritura censual", fs.78-82v.

⁹² Ibídem.

⁹³ Ibídem.

⁹⁴ Larrea (1626, 1732) decía: *Quoties juramento obligatio mulieris confirmeatur est comunies opinio, ut licet mulier maneat indotata, adhuc contractus firmatum debet obtinere.*

⁹⁵ AGN, Sucesión 7712, "Miguel Pintola y Anastasia Delgado, sobre el pago de principal y réditos de escritura censual", fs.78-82v.

⁹⁶ Ibídem.

⁹⁷ Ver Molina, 1991, 70.

⁹⁸ Pereira decía: *Ultimo concludam, quod si post venditionem celebratan aliqui superveniant actus, ex quibus appareat mulierem vere concenssisse venditioni; metus utique purgatus censebitur, nam*

si potem; et valens reclamare tacuerit, vel actum positivum fecerint pratedentis contractus approvationis, utique jam censetur omnis coactio abberse, et ratificatur, quod ab initio gestum est. Las obras de Cepolla fueron comentadas por los canonistas Gualterio Copinger y Juan Federico Schulte.

⁹⁹ AGN, Sucesión 7712, "Miguel Pintola y Anastasia Delgado, sobre el pago de principal y réditos de escritura censual", fs.78-82v.

¹⁰⁰ nacido en Córdoba, hijo de Gonzalo de Peralta y de Ana de Fuentes (FB, III, 96).

¹⁰¹ Avellá Cháfer, 1983, I, 30.

¹⁰² FB, V, 298.

¹⁰³ AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.F-3, Exp.13, fs.45v.

¹⁰⁴ Las tasaciones solían ser en extremo detalladas. En 1800, cuando Bernarda Abreu dotó a su hijo Félix José Pérez con una capellanía, incluyó en la escritura una tasación que prescribía para la pared de cocido de 3/4 vara de grueso, a 12 reales cada vara de largo; la pared sencilla de cocido, de 1/2 vara de grueso, a 6 reales vara; la pared doble de crudo, a 4 reales vara; la pared sencilla de crudo, de 1/2 vara de grueso, a 2 reales vara; y para la pared de cocido y crudo, de 3/4 vara de grueso, a 6 reales vara (AGN, Protocolos, Registro 3, 1800, fs.18). Igualmente, cuando se vendió judicialmente en el mismo año de 1800 la casa de María Dolores Asco, viuda de Martín J. de Gainza, a Francisco Barros, se incluyó una tasación que establecía para la pared doble de tapial y ladrillo crudo, 4 reales vara; la pared sencilla de ladrillo crudo, 2 reales vara; la sencilla de ladrillo cocido, 6 reales vara; el texado con cañas y texas, 2 reales vara; el enladrillado en el patio y vivienda, 1 1/2 real vara; el embostado y blanqueo 1 1/2 real vara; la vereda a la calle, 2 reales vara; y una parra \$4 (AGN, Protocolos, Registro 2, 1800, fs.270v.). Seis años mas tarde, en 1806, los herederos de María Inocencia Guzmán venden a Manuel Tovar una casa en el barrio de Monserrat, en la cual incluían una tasación donde consta que el muro de ladrillo cosido estaba en ese año a 7 reales vara, un real más caro que en 1800, o sea con un 15% de aumento; el texado con texas y cañas a 4 reales vara, o el doble de caro que en 1800; el muro de crudo y cocido a 3 reales vara; y las palamas de 5 varas cada una a 1 1/2 real vara (AGN, Protocolos, Registro 2, 1806, fs.127v.).

¹⁰⁵ Debo esta observación a la gentileza del Dr. Carlos A. Mayo.

¹⁰⁶ Los albaceas de Josefa Rodríguez Flores, viuda de Andrés Vivas, vendieron en 1792 a Jayme Alcina una casa en el barrio de la Catedral en \$12.000, que Vivas había adquirido en 1762 al gran comerciante registrero Manuel del Arco, la cual incluía tres gravámenes distintos: \$2.000 de la capellanía impuesta por el comerciante Eugenio Lerdo de Tejada, que la servía el Pbro. Judas Tadeo Poveda; \$2.500 tomados a censo en 1789 a favor de las Temporalidades; y \$1.000 tomados en 1786 de Bartola de Arce (AGN, Protocolos, Registro 6, 1792, fs.49v.). Antonio Romero de Tejada vendió en 1798 a Pedro José de Ballesteros y Francisca Ferosel unas casas a espaldas del Colegio de San Carlos, que habían sido adquiridas al Conde de Torre Tagle Francisco Sanginés, las cuales reconocían \$5.500 en censos y \$6.500 en tres capellanías de coro de la Catedral, de las que era Patrono el Deán de la misma, y que servían los Presbíteros Juan Manuel de Zavala y Juan Bautista Goiburu (AGN, Protocolos, Registro 2, 1798, fs.151 a 182; y Registro 2, 1802, fs.490). En 1799 el comerciante Pablo Thompson vendió a Manuel José de Ocampo y Navia, originario de Arequipa, "la casa grande" en la

calle de San Pedro en \$13.341, de los cuales \$4.000 pertenecían al Monasterio de Monjas Catalinas de Córdoba, y \$2.000 pertenecían a la capellanía fundada en 1783 por Manuel Rodríguez de la Vega a favor del Hospital Betlemítico (Mayo, 1991, 153-157), que servía el Pbro. Felipe José de Maqueda (AGN, Protocolos, Registro 3, 1799, fs.220). El mismo año, el albacea de Faustino Ortiz vendió a José de Echevarría y Medinaveitía una casa en \$7.000, la cual reconocía tres gravámenes distintos: 1) un censo de \$1.500 a favor del Dr. Fabián Aldao; 2) \$1.000 al Convento de San Francisco; y 3) \$1.000 al Convento de las Monjas Catalinas (AGN, Protocolos, Registro 1, 1799, fs.419). Un año después, en 1800, el Presbítero Juan Antonio Delgado vendió al escribano Juan José de Rocha una casa en \$10.300, que incluían tres capellanías: 1) \$900 que pertenecían a la capellanía de Diego López; 2) \$1.400 a la capellanía del Pbro. Carlos Rubio; y 3) \$4.000 a la capellanía que el mismo vendedor fundara en 1798 (AGN, Protocolos, Registro 1, 1800, fs.122v.). Otro año después, en 1801, los herederos de Juan Cabezas vendieron a Josefa Gabriela Lazcano y García de Zúñiga, viuda de Juan José Núñez, una casa en \$5.250, de los cuales \$2.000 pertenecían a la Santa Iglesia Catedral, \$1.000 al Convento de Santo Domingo, y \$600 al Convento Betlemítico (AGN, Protocolos, Registro 1, 1801, fs.291v.). El célebre comerciante Tomás Antonio Romero vendió en 1804 a Bernardo Lecoq una casa en la calle del Pino en \$15.000, a excepción de \$2.910 que estaban fincados a favor de las Temporalidades y \$2.000 a favor de la capellanía que fundara en 1789 Félix de Zuloaga, albacea de José Antonio Gutiérrez, la cual a su vez había estado instituída a favor del Dr. Mariano Medrano (AGN, Protocolos, Registro 1, 1804, fs.1). El mismo año de 1804, el Dr. Francisco Bruno de Rivarola, abogado de la Real Audiencia, vendió a Juan Manuel Marín una casa en el barrio de la Merced en \$3.500, que incluían dos capellanías de \$1.000 cada una, pertenecientes al Convento de la Merced, y otros \$1.000 a favor de la capellanía que fundara Mariana Ruiz de Bolaños, que había recaído en el Pbro. Estanislao de la Mata (AGN, Protocolos, Registro 1, 1804, fs.86). El Dr. Juan José Castelli vendió en 1806 y 1808 a Camilo Juliá y Viñals y a Antonio de las Cagigas sendas casas en la calle de las Torres, en \$10.000 cada una, que hubo su padre Angel Casteli por compra a Antonio Parraga, las cuales incluían seis gravámenes distintos: 1) \$3.000 a favor de la Capellanía fundada por Francisco X. Aspiázu; 2) \$1.000 a favor del Convento de Santo Domingo del Paraguay; 3) \$700 a favor del Convento de San Francisco de Santa Fé; 4) \$1.000 a favor del Ramo de Temporalidades; 5) \$2.000 a favor de los herederos de Francisco Segurola; y 6) \$500 a favor de los hijos menores de Manuel Joaquín de Zapiola (AGN, Protocolos, Registro 3, 1808, fs.346v.; y Registro 1, 1804/09, fs.239v.). La casa de José Manuel Estrada, situada en la calle Chacabuco esquina San Francisco, reconocía tres capellanías: la primera de \$2.000, cuyo Patrono era la Madre Rectora de la Casa de Ejercicios Doña Justa Rufina Díaz; la segunda de \$905, perteneciente a las Monjas Teresas de Córdoba; y la tercera de \$4.000, cuyo patronato pertenecía a José Manuel Estrada, por muerte de su madre Carlota Barquin (hija del Capitán de Milicias Martín Antonio Barquin y de Ana María Velasco y Tagle Bracho, FB, I, 223), viuda de Juan B. Estrada (AGN, Tribunal Civil, Leg.E-27, "Estrada, José Manuel y Juan Martín, p/redención de capellanía", fs.29).

¹⁰⁷ Pedro de Lezica hizo el traspaso de su casa, en el barrio de la Piedad, a Bernardo Castañón, en 1812, sin precio alguno, habiéndola comprado en 1810 al Pbro. Manuel Antonio de Castro y Careaga en \$4.000 (AGN, Protocolos, Registro 3, 1812, fs.87v.).

¹⁰⁸ ver Saguier, 1993, 20-21. En 1708, veinticinco años después que el Capitán Francisco Gil adquiriera del Convento de Santo Domingo una chacra en el pago de la Costa, con el compromiso de abonar los réditos de una capellanía de \$500 de principal, que fundara en 1662 Ana de Burgos, viuda de Fr. Diego Serrano, resolvió por presión del Convento hacer dejación de la chacra, en virtud de no poder pagar sus corridos (AGN, Protocolos, Registro 2, año 1708, fs.241). Dieciocho años después, en 1726, habiendo Antonio de Indá adquirido una chacra en el pago de las Conchas, con el compromiso de

pagar los réditos de un principal de \$325 fundado por Rodrigo Sánchez de Bonilla, a favor del Convento de San Francisco, declaró también por presión de este último hacer dejación de la misma (AGN, Protocolos, Registro 3, año 1726, fs.729v.). En 1763, el Monasterio de Monjas de Santa Catalina de Córdoba ejecutó y embargó una chacra ubicada en el pago de las Conchas, propiedad de Josefa Moreno, viuda de Francisco Miranda, por no abonar los corridos de \$600 de principal, fundados en 1757 y 1758 (AGN, Protocolos, Registro 6, año 1763, fs.147). Una década mas tarde, en 1772, Josefa Ossorio, viuda de Francisco Rodríguez, se vió precisada a vender a Vicente Azcuénaga una chacra en San Isidro, que obtuviera por donación de Juan de Ansaldo y Dongo, por no tener como pagar los réditos atrasados de \$1.000 de principal, que sobre sí tenía dicha chacra desde 1725 (AGN, Protocolos, Registro 1, año 1772, fs.58).

¹⁰⁹ Semo, 1974, 176ss.; y Lavrin, 1985, 67.

¹¹⁰ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 55, Exp. 1415, fs. 2.

¹¹¹ Idem.

¹¹² Idem.

¹¹³ Ibídem.

¹¹⁴ Ibídem.

¹¹⁵ AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 75, Exp. 1999, fs. 21v.

¹¹⁶ Idem, fs. 22v.

¹¹⁷ Idem, fs. 23

¹¹⁸ Idem, fs. 23.

¹¹⁹ Idem.

¹²⁰ Idem, fs. 24v.

¹²¹ para una crítica de Genovesi, ver Zambelli, 1978.

¹²² Roll, 1942, 71; Schumpeter, 1984, 306; y Heckscher, 1943, 615,645.

¹²³ Dictámen de Vitorián de Villava, La Plata, 5-XI-1800 (AGN, Sala IX, Hacienda, Leg. 75, Exp. 1999, fs. 89.).

¹²⁴ Idem, fs. 89v.

¹²⁵ Idem, fs. 90.

¹²⁶ Idem, fs. 90v.

¹²⁷ Idem,

¹²⁸ Idem, fs. 91.

¹²⁹ Ver Schumpeter, 1984, I, 306-307; y Baeck, 1988 .

TOMO VIII

CAPITULO 7

El reclutamiento y promoción en la carrera eclesiástica.

(publicado en 1994 en la Revista de Historia de América [México: Instituto Panamericano de Geografía e Historia], 118, 1994, pp.85-138);

El espíritu de rebelión del clero criollo contra el gobierno español ha sido motivo frecuente de polémicas entre los Americanistas. A juicio de Lavallé (1982), los conflictos registrados entre los frailes de las ordenes religiosas en oportunidad de celebrarse los capítulos de las respectivas ordenes obedecían a la necesidad que tenían las autoridades elegidas de colocar en curatos y doctrinas a la clientela de frailes que los habían apoyado. En apoyo de esa tesis, Fisher (1990) sostiene que el motivo principal de la rebelión del clero criollo fueron las tardías Reformas Borbónicas, que redujeron la estructura patrimonialista de la Iglesia --tales como la obligación de los curas de pagar sisas y alcabalas en sus transacciones comerciales,¹ la desamortización y vaciamiento de sus bienes,² y la prohibición de cobrar a los Indios oblacones y limosnas en las fiestas de tabla.³ Y para Sala i Vila (1993), entre los curas de indios, la privación del sínodo, debido a la abolición del tributo, fué lo que generó el mayor de los conflictos. En cuanto al motivo por el cual el clero secular porteño se volcó a favor de la Revolución de Independencia, para Avellá Cháfer (1980-81), inspirado probablemente en Carbia (1915,1945), obedeció a "...las angustias de una deficiente economía", que hacía que dicho clero fuera "pobre por antonomasia".⁴ Para Levaggi (1990), refutando a Socolow (1978) y a Auza (1981), la principal fuente de sostenimiento del clero, en el Buenos Aires colonial y revolucionario, no fueron las rentas fiscales --como el diezmo o las capellanías eclesiásticas-- sino la congrua,⁵ proveniente de las capellanías laicales impuestas por los grandes comerciantes.⁶

Amén del creciente endeudamiento de las élites criollas con la Iglesia, provocada por los censos y las capellanías; y la profunda animadversión contra la Iglesia, engendrada por las desigualdades inherentes a la concesión de los Patronatos y las Capellanías, estudiado en otros trabajos de este autor;⁷ la animosidad del bajo clero contra el alto clero y los continuos conflictos entre el clero y el estado habría obedecido a:

- a) la escasez de becas de gracia para seguir la carrera eclesiástica;
- b) los prolongados interinatos para cubrir las vacantes eclesiásticas mayores y menores;

c) el comportamiento de los Examinadores Sinodales y los Comisarios del Santo Oficio de la Inquisición en los concursos u oposiciones de curatos;

d) las dispensas o licencias canónicas para obviar los casos de ilegitimidad y mezcla de razas, arguyendo por información de testigos la nobleza y limpieza de padres o abuelos;⁸

e) la conducta de los Patronos para con los capellanes interinos;

y f) la amenaza que se cernió sobre el clero criollo mismo por las políticas racistas y regalistas de la Corona, entre las cuales las Informaciones de Limpieza de Sangre y la Real Cédula de Consolidación de Vales Reales venían a restringirle y/o sustraerle la única verdadera fuente de ingresos que poseían. Si bien Levaggi (1986) sostiene la inocuidad de los efectos de dicha Real Cédula para la economía de la región, reconoce en cambio su potencial peligrosidad.⁹

Continuando estas líneas de reflexión, nos preguntamos en este trabajo si en aquellas ciudades con un alto grado de penetración mercantil, y cuyo costo de vida era por lo general alto, las estrictas cláusulas acerca de la sucesión de los beneficiarios de las capellanías legas, que privilegiaban a unas ramas familiares en detrimento de otras, contribuyeron o no a fortalecer una presión clerical patrimonialista y señorial. También nos preguntamos si la escasez de capellanías y su bajo monto promedio, alimentó el resentimiento del clero contra la Corona y la Iglesia. Para ello hemos debido detectar, relevar y procesar en una sola tabla centenares de escrituras notariales de los siglos XVII, XVIII y XIX, registradas en los protocolos de escribanos, y estudiar un centenar de litigios de dichos siglos, correspondientes a las series tribunalicias de los períodos colonial y nacional, depositados en el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires;¹⁰ y en el Archivo del Arzobispado de Córdoba (AAC).¹¹ A los efectos de esta investigación y con el propósito de detectar parentescos afines y sanguíneos fué preciso completar los apellidos de los fundadores y beneficiados de las capellanías y obras pías con los apellidos maternos, sirviéndose para ello de la información genealógica que nos proveen diversos tratados,¹² así como los testamentos protocolizados en Buenos Aires.¹³

El caso de los capellanes con congrua.

El caso de los capellanes es ciertamente muy distinto del de los patronos de capellanías. En Europa, y en especial en Francia, la Iglesia patrimonialista o burocrático-patrimonial se habría perpetuado luego de la Revolución, y no se habría diferenciado mayormente de la Iglesia burocrática Borbónica.¹⁴ En Nueva España, las cuatro quintas partes del clero secular de fines del siglo XVIII, que engrosaron los ejércitos de Hidalgo y Morelos, no contaron según Barnadas (1984), con congrua alguna.¹⁵ Olachea (1992) insiste en la presencia de una estratificación social en el clero y en el rol que tuvieron las limitaciones regias a los Breves pontificios que dispensaban de ilegitimidades.¹⁶ Y Buenos Aires, según Azara, contaba en 1794 --fuera de los cuatro conventos existentes-- con 136 clérigos, sobre un total de 40.000 habitantes,¹⁷ o de tres (3) clérigos por cada mil habitantes, la mayoría de los cuales "...vivía anhelando prebendas".¹⁸ Lamentablemente, por desconocer gran parte de los nombres y apellidos de dichos clérigos nos es imposible identificar tanto a los que gozaban de congrua,¹⁹ como a los que no gozaban de dicha prebenda.²⁰ En cuanto al año de la revolución, 1810, hasta ahora sabemos que de los diez (10) clérigos que apoyaron en el Cabildo Abierto del 22 de mayo al "partido del pueblo", sólo dos (2) de ellos gozaron de rentas capellánicas (Albariño y Grela); de los seis (6) clérigos que votaron con la tendencia conciliadora, cuatro (4) de ellos gozaron de beneficio de capellanías (Fernández, Planchón, Alberti, y Solá); y los tres (3) que se retiraron sin votar gozaron también de capellanías (Agüero, Montes Carballo y Viola).²¹ Y de los 17 clérigos cuyas licencias para confesar fueron suspendidas en 1816 por su filiación realista, ocho (8) de ellos no contaban con congrua alguna.²² La Tabla E-I nos ofrece la nómina de 329 fundadores y beneficiarios de capellanías, patrimonios y obras pías, registrados notarialmente en Buenos Aires a lo largo de los siglos XVII,

XVIII y comienzos del siglo XIX (hasta 1820). De dicha nómina 47 resultaron presbíteros (15%), 48 doctores (15%), 15 maestros (4%) y otros 7 licenciados (2%).²³

El número de capellanías colacionadas.

La colación de una sólo capellanía no garantizaba un nivel de vida digno de una jerarquía clerical. Avellá Cháfer (1980-81), en abierta oposición con lo afirmado en 1769 por el Gobernador de Buenos Aires Francisco de Paula Bucareli, asegura que para que un cura en sede urbana pudiera vivir decentemente, a la renta de una capellanía (\$100), debían añadirse necesariamente los estipendios de misas y funciones religiosas --que se obtenían sirviendo interinamente capellanías vacantes-- y el sueldo de una o varias cátedras.²⁴ Tan pobres eran los candidatos a las ordenes sagradas y tan alto el costo de vida a que se había llegado a fines de siglo, que en 1780 el Obispo Sebastián Malvar y Pinto llegó a manifestar que las capellanías eran "...unas pías memorias cujos emolumentos no corresponden regularmente mas que a la carga de Misas establecida por sus fundadores",²⁵ y diez años después, en 1791, el Obispo diocesano Manuel de Azamor y Ramírez se negó a conferir ordenes sagradas a quienes no fundasen, previamente, una capellanía colativa.²⁶ Dicha negativa sufrió la consiguiente oposición del Cabildo, con sus necesarias repercusiones. Manuel de Villegas,²⁷ había concluido en 1792 sus estudios de cuatro años de Teología y manifestó entonces tener vocación al estado de sacerdote clérigo. Los padres de Villegas, en virtud de carecer su hijo de la congrua alimenticia necesaria, y deseosos de que su vocación se realizara y pudiera impetrar no sólo las ordenes menores de acólito y lector, para lo cual aparentemente no se necesitaba ni de congrua ni de Información de Limpieza de Sangre, sino incluso las ordenes mayores de presbítero, diácono,²⁸ y subdiácono,²⁹ determinaron fundarle patrimonio de \$2.000.³⁰ Pero al año siguiente, en 1793, el Obispo de Buenos Aires, en represalia por la anteriormente mencionada actitud del Cabildo, exigía para ordenarse de sacerdote la congrua de \$200 anuales de renta, equivalente a dos capellanías de \$2.000 de principal cada una. Como Joaquín Antonio López poseía en 1793 sólo una capellanía colativa eclesiástica de \$2.000 de principal, sus padres se vieron precisados a otorgarle una escritura de patrimonio por otros \$2.000 mas.³¹ Tampoco todos los padres tenían medios con que proporcionar a sus hijos estudios en España, Charcas, Lima, Santiago de Chile o Córdoba, que los prepararan para las ordenes sagradas.³² Aún para los que abundaban en proporciones, el Cabildo Eclesiástico de la ciudad de La Paz sostenía en 1795 que

"...los arredran poderosamente los gastos que se impende en la conducción, las asistencias necesarias en el tiempo de ocho o más años que han de estar niños separados de sus casas, y sobre todo, el justo recelo que les asiste de que se malogren por no encontrar deudos ni personas de satisfacción a quienes encomendarlos".³³

De estos inconvenientes resultaba "...el privarse varios jóvenes del cultivo de las Letras; o que después de serles demasiado costosa la enseñanza con los desperdicios que se dejan entender, hayan sacado poco o ningún aprovechamiento".³⁴

El nivel de vida de los curas.

Existieron en ese entonces, como lo hubo siempre, curas que gozaban de un alto nivel de vida, al acumular la propiedad de una multiplicidad de capellanías, y aquellos otros que por falta de congrua vivían del sínodo (salario eclesiástico proveniente de los novenos reales) o sirviendo capellanías interinas o mendigando limosnas para su sustento.³⁵ Para el Pbro. Andrés Nicolás Ortiz de Ocampo,³⁶ Cura de la doctrina de Anguinan, La Rioja, habiendo cobrado el sínodo

"...que le correspondía de los indios tributarios de su doctrina en una partida de lienzo, por estar mandado que los Sínodos a los curas se paguen con efectos de los mismos que trabajan los Indios se formó oposición por el Subdelegado [Don Vicente Antonio Bustos] y por Dn José Noroña empeñado en que mi ...mano se pagase de su sínodo con dinero abonando la vara de lienzo a dos y medio reales, quando acá se le cargaba a quatro reales".³⁷

En este caso, el Pbro. Andrés Nicolás Ortiz de Ocampo se resistía al proyecto de que Dn. José de San Román y Castro,³⁸ el Teniente Ministro de Real Hacienda, Administrador de la Real Renta de Tabaco y Naipes, y Alcalde de 2o. Voto José de Noroña y Losada,³⁹ y el Subdelegado Bustos "...tomasen los lienzos para negociar con ellos".⁴⁰ Para el Pbro. Leopoldo de Allende, Cura Rector del Colegio Real de Loreto, en Córdoba, la multiplicidad de beneficios o capellanías sólo era ofensiva del espíritu de la Iglesia "...cuando ellas son entre sí incompatibles".⁴¹ Perseguir dicha multiplicidad era para Allende "...constituírse en rígido censor en estas materias, y escrupulizar demasiado quando no hay fundamento para ello".⁴² Dos o tres capellanías eran compatibles en un mismo sujeto "...especialmente si son tenues y de cortas obvenciones".⁴³ En Buenos Aires, la Tabla E-I enumera los casos de dos beneficiarios (Francisco de Cossio y Therán y Manuel José Mansilla) que fueron dotados de cuatro capellanías, siete beneficiarios (Aldao, Arraga, Caviedes, Madera, Peña, Warnes y Zapiola) que lo fueron de tres capellanías, y 58 beneficiarios que lo fueron de dos capellanías. Por lo general, la primer capellanía era proveída por los padres o ascendientes, y la segunda por otros parientes o benefactores. En el caso del Pbro. Domingo Caviedes, la primer capellanía le fué impuesta por su madre, María Catalina Pizarro, la segunda por su cuñado el gran comerciante Francisco Tellechea, y la tercera por una benefactora, María Josefa Echeverría, viuda de Miguel de Igarzábal.⁴⁴ En el caso del Pbro. Pedro García de Zúñiga, la primer capellanía le fué impuesta en 1760 por su padre Alonso García de Zúñiga, la segunda 34 años después por su hermana Juana Josefa, viuda de José María Calceite, y la tercera en 1803 por su hermano Juan Francisco García de Zúñiga.⁴⁵ Por lo general, los beneficiarios de capellanías las servían en los curatos del obispado donde se hallaban ordenados. Aspirar a servir una capellanía alejada del lugar de residencia, era por lo general improbable, por cuanto en las oposiciones de curatos se prefería a aquellos curas que pertenecían al vecindario. En algunos pocos casos los beneficiarios de capellanías podían servir las en curatos ajenos a la diócesis de origen, para lo cual se requerían cartas dimisorias. En 1756 el Dr. Pedro José Crespo se presentó al Obispo de Buenos Aires Marcellano y Agramont solicitando dimisorias para ser presentadas al Obispo de Córdoba Pedro Miguel Argandoña, y recibir desde la tonsura hasta el presbiterado.⁴⁶ Y el Pbro. Manuel Mariano Paz,⁴⁷ servía en Córdoba una capellanía fundada en Buenos Aires por su tía abuela Isabel Rosa González.⁴⁸ Aquellos curas que por falta de congrua vivían sirviendo capellanías interinas debían litigar permanentemente con los Patronos de las capellanías legas, para quienes la prioridad de los beneficios siempre se buscaba que recayese en los parientes de los fundadores. En Buenos Aires, en la instancia suscitada por el Pbro. Eugenio Cueli,⁴⁹ contra Matías de Echavarría,⁵⁰ apoderado de Pedro González y Pozo,⁵¹ patrono de la capellanía fundada por Beatriz Giménez Naharro,⁵² sobre el derecho del primero a la capellanía interina, el segundo alegó no haber habido nombramiento expreso alguno, y sí sólo una autorización para poder decir treinta (30) misas al año.⁵³ Echavarría argumentaba en su descargo que su intención fué sólo socorrer a Cueli con la limosna o gracia,

"...no de aquellas que producen obligación..., [y sí] sin ligarme a tiempo determinado, ni de por vida, sino hasta que el Patrono Pedro González y Pozo determinase en la materia, pues a éste correspondía deliberar y no a mí, que no tuve su poder para estos fines".⁵⁴

Si bien Echavarría reconocía haber usado el término de interino, aclaraba que la misma "...no puede entenderse a todos los proventos de la capellanía, sino a sola la dotación de las misas".⁵⁵ Asimismo,

José Alberto Cálcena de Echevarría, apoderado del Pbro. Gregorio Antonio de Aguiar, también pariente de la fundadora, alegaba en el expediente donde litigó con Matías de Echavarría, que la dotación que hicieron los albaceas a favor de los capellanes "...no fué perpetua, sino reducida al tiempo que el predilecto Don José Barón se ordenase y estuviese en el Colegio".⁵⁶ Habiendo Juan José Barón del Pozo,⁵⁷ abandonado los estudios, Echavarría alegaba que el Patrono "...pudo y debió disponer del superavit, a favor de quien quisiese".⁵⁸

En regiones como Buenos Aires, polo articulador de un comercio a larga distancia, los ingresos del clero se vieron afectados por los altibajos del tráfico ultramarino. El que fuera Cura interino de la Catedral de Buenos Aires Francisco Antonio de Esparza,⁵⁹ pese a haberse beneficiado con los frutos de dos capellanías, demandaba en 1769 el desalojo de los ocupantes de las tierras de chacra heredadas de su padre José de Esparza, ubicadas en el pago de las Conchas.⁶⁰ El Cura y Vicario Interino de Areco Fr. Juan Pablo Fretes,⁶¹ luego de haberse beneficiado en 1783 con un par de capellanías, fué acusado en 1785 de solicitarle a María Díaz un legado, cuando aún ella vivía, motivo por el cual fué acusado del delito de captación de herencia,⁶² por el Comisario del Santo Oficio de la Inquisición, de cuyas resultas el Cabildo Eclesiástico lo separó del interinato.⁶³ El Pbro. Juan Antonio Suero,⁶⁴ luego de haberle ganado un pleito a la sucesión del Canónigo Juan Baltasar Maciel, inició otro litigio contra la sucesión de María Josefa Bazurco, que lo perdió, pues el papel firmado por ésta, en la que disponía que la casa solar pasara a poder de Suero, después de la muerte de Maziél, se demostró que era apócrifo.⁶⁵ El Teniente Cura de la Colonia del Sacramento Manuel Guerrero, pese a haber sido beneficiado en 1787 con una capellanía, solicitó ese mismo año se le asignara gratificación por la enseñanza de primeras letras que daba a los niños.⁶⁶ Cuando en 1805 la Corona impuso la Real Cédula de Consolidación de Vales Reales, numerosos curas, usufructuarios de capellanías, solicitaron de la Real Hacienda se los eximiera de la contribución del 15% correspondiente a las mismas.⁶⁷ Y cuando en 1809, el Provisor del Obispado y Juez Hacedor de la Junta Superior de Diezmos Dr. Mariano Zavaleta reclamaba del Cabildo Eclesiástico le regulase o liquidase el sueldo de \$400 anuales que le era debido, los Doctores Francisco X. Zamudio, Melchor Fernández y Domingo Estanislao Belgrano, miembros del Cabildo Eclesiástico, adujeron en protesta a dicho reclamo que

"...no debía esperarse que para un eclesiástico que posee por otra parte cuantiosos bienes de fortuna, pudiese mas en su estimación el sueldo despreciable de 400 pesos anuales que la satisfacción y honra de servir a la Iglesia de Dios, al Rey, y a su mismo Prelado, que le ha puesto a la cabeza del clero, y conferido cuantas dignidades ha podido, con preferencia a otros muchos eclesiásticos de la Diócesis idóneos y beneméritos".⁶⁸

Dicha protesta no fué óbice para que el propio Chantre de la Catedral Melchor Fernández, uno de los tres críticos del Juez Zavaleta, terminara por imitar a este último, pues en 1811 promovió el desalojo del Lic. Salvio Gaffarot,⁶⁹ de la casa que ocupaba, por necesitarla "...para su mejor asistencia y servicio".⁷⁰ Por último, en vísperas de la revolución de Mayo, y debido al "...ínfimo grado de decadencia a que han llegado en este tiempo los Diezmos", dichos miembros del Cabildo Eclesiástico declaraban que ellos mismos se hallaban incongruos, al extremo de haberle propuesto al Virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros suspendiera la anualidad y los Reales Novenos íntegros, con los cuales podía dotar en cambio las Dignidades, Canongías y Prebendas.⁷¹

Del interior desconocemos las proporciones entre beneficiarios de capellanías y miembros de la jerarquía eclesiástica por cuanto, salvo los excelentes trabajos de Pozzi y Ferrazzano (1973) y Caretta de Gauffin (1993), no existen hasta el momento estudios realizados sobre la base de las fuentes notariales. Pero no siempre las capellanías y los diezmos proveían de los réditos e ingresos suficientes

como para sustentar las necesidades vitales de los curas párrocos. La diversa constitución económica de las distintas regiones que conformaron el antiguo Virreinato del Río de la Plata, en cuanto al número y calidad de sus moradores, condicionaba los ingresos a que eran acreedores los clérigos.⁷² En regiones donde no abundaban el comercio y las rentas fiscales (sisa y alcabala) derivadas del mismo, por lo general los curatos rurales o indígenas, el peso de los recursos recaía en las rentas fiscales (sínodos provenientes de los tributos en los curatos indígenas o de los diezmos en los curatos de españoles) o en los llamados aranceles (estipendios de misas, primicias, oblações y limosnas), o en el reparto forzoso de bulas e indultos,⁷³ para cuyo cobro compulsivo, los curas muchas veces recurrieron a las Milicias provinciales, al extremo que el Gobernador-Intendente Rafael de Sobremonte debió prohibir dichas prácticas.⁷⁴ Hemos visto en otro trabajo como en el Alto Perú el Deán de la Catedral de La Paz Don Pedro de las Cuentas y Valverde fundó en el siglo XVII numerosas memorias pías por valor de \$26.000,⁷⁵ y la dueña de un inmenso obraje de paños, Doña Juana de Oquendo y Enríquez, fundó once capellanías por valor de \$46.000, beneficiando con sus rentas a numerosos capellanes.⁷⁶ Por el contrario, en regiones como el Paraguay, carentes de circulante metálico, donde las capellanías brillaban por su ausencia, el salario de los curas debía ser cubierto sólo por los Reales Novenos.⁷⁷ A propósito de ello, en 1784 se suscitó un prolongado litigio cuando el Cura Rector interino de la Catedral de Asunción José Gregorio de Ocampos reclamó todos los salarios correspondientes al tiempo en que había servido el curato.⁷⁸ Pero justamente por haber sido su cargo interino, el Fiscal de Real Hacienda adujo que pasados los cuatro meses de haber sido nombrado cura interino y de no ser provisto en propiedad, los salarios pertenecían al Rey y dejaban de ser frutos del beneficio. A lo que Ocampos replicaba que

"...si los salarios de los curatos se consignan frutos del beneficio en rentas decimales, y son tales cuando el cura propio sirve el beneficio; siempre deben ser frutos del beneficio, y deben pertenecer al que le sirve".⁷⁹

En cuanto al plazo de los cuatro meses, Ocampos alegaba

"...que es voluntariedad decir que son frutos del beneficio, en cuanto a la cuota correspondiente a los cuatro meses, y no en cuanto a lo demas: una vez que son frutos del beneficio, han de seguir al beneficio por todo el tiempo que este se sirva".⁸⁰

La lucha clientelística por el reparto de curatos y doctrinas.

La lucha clientelística por el reparto de los curatos y doctrinas se manifestaba en los capítulos religiosos, donde se elegía a los Provinciales de las ordenes religiosas, los cuales amenazaban desatar serios conflictos.⁸¹ En estos capítulos, a juzgar por la opinión de Lavallé (1993), solo votaban los frailes sacerdotes, lo que excluía a los novicios y a los legos.⁸² Un caso relevante se dió en Córdoba, en el atrio de la Iglesia de la Merced, en 1766, consistente en un conflicto de superposición de competencias entre Córdoba y Santiago de Chile por el reparto de los curatos y doctrinas.⁸³ Con motivo de este incidente, violatorio del fuero eclesiástico --donde intervinieron cabildantes, milicianos y religiosos-- las autoridades de la Orden Mercedaria iniciaron contra el Vicario Fr. Pedro Pablo de Allende,⁸⁴ ante el Obispo que residía en la Real Audiencia de Chile, la correspondiente causa criminal.⁸⁵ Fué entonces, a partir de dicho proceso judicial, que la Casa de los Allende guardó para con la Orden Mercedaria una "...notoria enemistad, antipatía y odio entrañable".⁸⁶ Relevado de su función Fr. Pablo Allende, que había defendido los intereses de su familia así como los de los clérigos de la facción ligada a los intereses anti-Chilenos, y fallecido un año más tarde, en 1766, un nuevo Vicario

General impuesto desde Chile se hizo cargo del Convento, no sin provocar discordias entre los clérigos.⁸⁷ En efecto, el R.P. Provincial Absoluto Fr. Juan Esteban de Herrera y seis clérigos más fueron expulsados, entre los cuales se destacaban los frailes porteños Antonio Rodríguez Flores,⁸⁸ Simón Rodríguez Flores,⁸⁹ Lorenzo López de Osornio,⁹⁰ Vicente Chaparro,⁹¹ y José Esquivel,⁹² aparentemente por haberse solidarizado en el pasado con el Fraile Allende, al extremo de verse obligados a vivir prófugos en las inmediaciones del convento.⁹³ Habiendo llegado el escándalo a tal gravedad, las partes involucradas en el conflicto, acordaron firmar una transacción y convenio que devolviera la paz a la provincia.

Como consecuencia directa de esta crisis, los cabildantes cordobeses ligados a los intereses anti-Chilenos recurrieron al Virrey del Perú Manuel Amat y Junient, contra la autoridad del Teniente de Rey Manuel de Estéban y León,⁹⁴ encargado de la recepción del Ramo de Sisa.⁹⁵ El Virrey Amat dió su apoyo a la facción de frailes ligados a los intereses anti-Chilenos y depuso de su Tenientazgo a Estéban y León.⁹⁶ Cabe recordar que Amat llegó a escandalizarse porque los delincuentes usufructuaban el asilo eclesiástico para sus andanzas.⁹⁷ Es sabido que en el Río de la Plata, fueron los que practicaban el contrabando, principal acción colectiva destinada a combatir el monopolio comercial de las casas matrices de Cádiz, quienes más usufructuaron de dicha prerrogativa, al extremo que el Provisor del Obispado declaró en 1774 cuales eran las iglesias que gozaban del privilegio del asilo.⁹⁸ Asimismo, los religiosos ligados a los intereses pro-Chilenos recurrieron al Metropolitano residente en Santiago de Chile contra la autoridad del Provincial Absoluto del Convento. En respuesta, los religiosos ligados a los intereses anti-Chilenos recurrieron al Papa contra la autoridad del nuevo Vicario General del Convento. Es entonces que en virtud de tan insoluble conflicto de competencias el Maestro General de la Orden Mercedaria Fr. Basilio Gil de Bernabé obtuvo del Papa Clemente XIII en mayo de 1767 un Breve Pontificio por el cual se dividía la provincia Mercedaria del Tucumán en tres partes.⁹⁹ Un año después, en mayo de 1768, cuando se aclara el escándalo ocurrido, se comprueba por dos testigos que deponen ante la justicia, que las fatales discordias acontecidas fueron originadas por "el mal formado dictámen", violatorio de los fueros eclesiásticos, que el Procurador Juan Tiburcio de Ordóñez,¹⁰⁰ había dado al Teniente de Rey Estéban y León, sobre el auxilio policial que los Mercedarios pidieron,¹⁰¹ a los Alcaldes Cayetano Terán Quevedo,¹⁰² y José Martínez y González.¹⁰³ Finalmente, el 1 de Octubre de 1770, el Virrey Amat, en la causa iniciada en 1768 por el Alcalde Terán Quevedo, en representación del Cabildo de Córdoba,¹⁰⁴ condonó la pena a la que habían sido acreedores Manuel de Estéban y León, Prudencio Palacios,¹⁰⁵ y Santiago de Allende y Losa.¹⁰⁶

Pero como el conflicto no alcanzó a resolverse, los indultados por el Virrey Amat volvieron en un par de años a sus andadas. La crisis iniciada en el atrio de la Merced en 1766, consistente en un conflicto de superposición de competencias entre Córdoba y Santiago de Chile por el reparto de los curatos y doctrinas y por una violación de los fueros eclesiásticos, vino a resolverse en 1772 mediante una acción colectiva violenta, por cuanto se convocaron en el mismo atrio a las Milicias urbanas y rurales. Las causas pendientes del Juzgado de Segundo Voto, por el cobro de la limosna de Redención de Cautivos, administrada por la Orden Mercedaria, y por el reparto de los curatos y doctrinas y de los bienes secuestrados a los Jesuitas, recayeron en un peninsular identificado con el clan de los Echenique, el Alcalde de Segundo Voto Terán Quevedo, lo cual agravó el conflicto. A juzgar por un documento de la Audiencia de Buenos Aires, hallado en el Archivo General de Indias,¹⁰⁷ y publicado primero por Toledo (1919) y luego por Bruno (1967), las Milicias de Córdoba entraron nuevamente en acción en 1772 a pedido de las autoridades religiosas. En efecto, el Alcalde Provincial José Martínez y González, y el Alcalde de Segundo Voto Terán Quevedo, partidarios de los Jesuitas y de la Casa de los Echenique,¹⁰⁸ habían concurrido al Convento Mercedario de San Lorenzo con quince o veinte hombres

armados, a pedido del R.P. Vicario General para "...fortalecer con gente armada estos claustros", a fin de reducir al R.P. Provincial Absoluto Herrera y los seis frailes expulsados, que prófugos habían vuelto en rebeldía.¹⁰⁹ En respuesta a dicha acción policial el Alcalde de primer voto Don Santiago de Allende y Losa, conjuntamente con el Teniente de Rey Estéban y León, y su yerno el Justicia Mayor Don Prudencio Palacios, y con otro copioso número de milicianos armados de a pié y a caballo, irrumpieron en el pretil del Convento, con el fin de apoyar a los clérigos de la facción ligada a los intereses anti-Chilenos, llegando en su vehemencia hasta "acometer" violentamente al Alcalde Provincial Martínez y al Alcalde de Segundo Voto Terán Quevedo. El Teniente de Rey llegó a darle de empujones y hasta dispararle un tiro de pistola al Alcalde Provincial, el "gallego" Martínez, "...y no aquietando su osadía echó mano a la espada para invadirle".¹¹⁰ De la circunstancia de haber violado el sagrado resultó

"...que no sólo embarazaron el auxilio, desterrando con golpes y conminaciones a la gente que sufragaba a los auxiliantes, sino para más despeñarse arrestaron en el mismo sitio la persona del Alcalde Provincial llevándole preso a la Sala del Cabildo junto con la de Gonzalo Terán y Quevedo, primo hermano del Alcalde de segundo voto a quien pusieron a buen recaudo en un calabozo de la cárcel baxa entre reos facinerosos".¹¹¹

Para mayor escándalo Allende, León, y Palacios

"...mandaron publicar y de hecho publicaron vando a toque de caja por las cuadras y cantones públicos de la ciudad,..., que ningún estante ni habitante auxiliase ni favoreciese de modo alguno al Prelado y Presidente de esta Provincia ni a ningún juez que lo mandase".¹¹²

Como trágica secuela de estas acciones el Comisionado de la Real Audiencia de Charcas General José Francisco de Galarza,¹¹³ fué ultrajado, de resultas de lo cual enfermó de muerte, falleciendo a los tres días, y

"...haciendo que su muerte fuere el más claro testimonio de la lealtad con que se sacrificó en obsequio de la autoridad del Regio Tribunal que lo comisionó, y el más fuerte convencimiento de la temeridad de estos individuos [los Allende] que se la ocasionaron".¹¹⁴

El abuso en el cobro de primicias, oblaciones y limosnas.

El abuso con que en el Alto Perú eran cobradas las primicias, oblaciones y limosnas dió lugar a que las autoridades civiles los motejaran de repartimientos forzosos. A tal extremo llegaron dichos abusos que en 1796 el Gobernador-Intendente de Potosí Francisco de Paula Sanz, indignado por la oposición del clero a la Mita Nueva de Chayanta, propuso diversos medios para abolirlos.¹¹⁵ Estos fueron, a saber:

- a) la reunión de Beneficios;
- b) la aplicación de diezmos;
- c) el establecimiento de colectas;
- d) la aplicación de los sobrantes del noveno y medio de la fábrica de la Catedral, proveniente del Ramo de Diezmos;
- y e) la cuota impuesta sobre las rentas de los Curatos vacantes.

En su negativa respuesta al Gobernador, el Arzobispo Juan Antonio de San Alberto manifestaba que en un curato de los que se llamaban pingües, con Sínodo entero de fiestas, que no

todos lo tienen, de numerosa feligresía, si el total de su ingreso llegaba por ejemplo a \$4.000, no quedan los dos tercios libres para la congrua sustentación del Cura.¹¹⁶ Será esta, se preguntaba San Alberto,

"...una dotación excesiva para un Eclesiástico, que después de haber consumido tal vez los fondos de su casa en seguir muchos años la carrera de las escuelas, tan costosas en estos países, después de haber servido de Cura o de Teniente en otros Beneficios infelices en que no ha tenido otra dotación, que la miseria, ha logrado por fin en virtud de sus servicios la promoción a uno de renta regular?".¹¹⁷

También se preguntaba San Alberto si sería esta dotación excesiva "¿...para unos vasallos, que en todos tiempos y en todas circunstancias se han distinguido por su amor, fidelidad, y respeto al soberano?".¹¹⁸ Las provincias de Porco, Pilaya, Tomina, Yamparaez y Cochabamba se mantuvieron en paz durante las pasadas revoluciones; y las de Paria, Sicasica, Chichas y Chayanta fueron apaciguadas, según San Alberto, gracias a la labor de los Curas

"...¿Quienes mejor que ellos, sacrificaron sus intereses, expusieron su salud, perdieron su propia vida, por la paz de las Provincias, y servicio del Soberano, quedando unos despojados de todos sus bienes, otros heridos, y otros muertos?".¹¹⁹

En sólo la provincia de Chayanta, por no abandonar su feligresía, habían perdido la vida el Párroco de Aymaya Dr. Dionicio Cortés, y el de San Pedro de Buena Vista Dr. Isidro Herrera, con otros cinco Eclesiásticos más "...¿Quienes en aquellas críticas circunstancias, abandonadas las provincias por sus Corregidores, recaudaron y entregaron con aumento de muchos miles el Real Ramo de Tributos, sino los Curas?".¹²⁰ Y en la provincia de Porco, la gruesa puesta por los Curas en las Reales Cajas había excedido en treinta mil pesos a la suma que enteraba su Corregidor. "...¿Quienes en la guerra presente contra la Francia se han distinguido tanto, como los Curas, haciendo en medio de sus cortas rentas considerables y anuales donativos para ayuda de los indispensables gastos del Soberano?".¹²¹ "¿Será dotación excesiva para unos Lugares, que distando, 40, 80, o 100 leguas de los Poblados, hacen más costosa la conducción de los víveres de que carecen".¹²² Por el mismo caso de no haber otros recursos, la casa del Cura,

"...debía ser simultáneamente el hospedaje, la botica, la despensa y la ropería de todos. El hospedaje general para todos los pasajeros y peregrinos? La Botica para administrar los medicamentos a todos los feligreses enfermos? La despensa universal para el socorro de los hambrientos y miserables, y la ropería para cubrir sus desnudeces?".¹²³

En medio de esta pretendida abundancia de los Curas, exclamaba el Arzobispo San Alberto,

"...los que obtienen los mejores Curatos suspiran y anhelan por una Prebenda aún de Media Ración, cuya renta es notoriamente corta. Prueba auténtica de que, o la dotación del Curato no es excedente en mucho a la de la Prebenda, o que si lo es, no recompensa en exceso las indecibles fatigas del Ministerio".¹²⁴

Las quejas y declamaciones del Arzobispo contra los empeños que oprimían a los Prelados en los Concursos a Curatos "...no prueban las pingües rentas de los Beneficios, si no que aún cuando fueran mucho más pobres de lo que son, la miseria y necesidad los haría apetecibles".¹²⁵

La batería de métodos recomendados por el Gobernador, el Obispo San Alberto no los creía "...adaptables ni verificables en estos Payses".¹²⁶ La reunión de Beneficios era impracticable, porque si en virtud de la vasta extensión de cada Doctrina "...ha mandado S.M. repetidamente la división de Curatos, ¿como pensaremos ahora en reunirlos?".¹²⁷ La aplicación de los Diezmos y Primicias también era impracticable por cuanto de la Masa Decimal se distribuían los Reales Novenos, la Renta de la Dignidad Episcopal, la dotación de las Dignidades, Canongías y Prebendas, los Alimentos del Hospital Real, y parte de los del Seminario, fondo de fábrica para la Iglesia Catedral, salarios de sus Ministros subalternos, Música y Sirvientes. Si se adjudicaban a los Curas los Diezmos, de donde saldrán, se preguntaba San Alberto, "...los caudales necesarios para estos diversos destinos?".¹²⁸ Sobre el tercer arbitrio de las Colectas podría decir a V.S. "...que por equivalente a ellas [las Colectas] aprobó el Arancel las oblaciones de las fiestas [de tabla]".¹²⁹ El Prelado que formó los Aranceles y el Tribunal que los aprobó "...debieron sin duda tener presente que menos inconvenientes traía autorizar las fiestas establecidas ya de tiempo inmemorial, que instituir las Derramas [colectas] en cuya cobranza eran inevitables las extorsiones y abusos".¹³⁰ Por ello, el Prelado había prohibido las contribuciones de uno o dos reales, que con el nombre de Rama "...había en algunos curatos para la Cera del Monumento y gastos de Semana Santa".¹³¹ En efecto, se preguntaba San Alberto ¿a cargo de quien correría la cobranza de las Colectas? En caso de ser elegidos los Caciques

"...¿ignora acaso las extorsiones, violencias, picardías, y exacciones iníquas, de que estos por la mayor parte usan con los miserables indios aún en aquellos ramos, que por necesidad indispensable corren a su cargo?".¹³²

Finalmente, San Alberto argüía, en la hipótesis que las Colectas ya hubieren sido establecidas,

"...No se podría decir de ellas lo que V.S. dice ahora de las fiestas, que no pudiendo los Indios como verdaderos neófitos conocer las diferencias que los Cánones establecen entre el precio de las cosas sagradas y el estipendio de los Ministros que las actúan, podrían sospecharlas simoníacas?".¹³³

Al verse pensionados los Indios con las Colectas "...¿no se escandalizarían como ignorantes y pequeñuelos, o creerían erróneamente que habían comprado su conversión al precio del oro y la plata?".¹³⁴

Los fondos con que contaban los frailes.

Los fondos con que contaban los frailes, provenientes de principales formados por bienes inmuebles rurales, obtenidos por donación o adquisición, estaban expuestos a la arbitrariedad de las autoridades religiosas impuestas por la jurisdicciones cabeceras, que en muchos casos llevaron a las Comunidades religiosas instaladas en regiones periféricas a un total vaciamiento o ruina. Estando de viaje el Prior del Convento de Predicadores de San Juan Fr. Cayetano Bastidas, de San Juan camino a Chile, con licencia del Juzgado de primer voto del Cabildo de San Juan, sus Religiosos se decidieron a representar ante el Cabildo Eclesiástico para que oficiase al R.P. Superior de la Orden Dominica y su Consejo Conventual a fin de que se oyese sus clamores. Lamentablemente para los Religiosos el pedido fué denegado "...al pretexto de que no estaba facultado para ello".¹³⁵ Citada la Comunidad por el P. Superior Fr. Francisco Albarracín,¹³⁶ para "...hacer saber y leer una Patente de Vicario Prior" que había librado el Prior Bastidas en favor del P. Procurador Fr. Isidro González, los Religiosos suplicaron (protestaron) de dicho nombramiento y solicitaron que no se leyese la patente,¹³⁷ bajo apercibimiento de introducir un recurso de fuerza por ante el Cabildo de San Juan,

"...porque el citado Fr. Isidro tenía que contestar como Procurador a los cargos que se citan y que últimamente era reo, y estaba incurso en la pena de propietario,¹³⁸ por haber gastado dineros que no habían entrado al depósito".¹³⁹

Ante tan graves cargos, Fr. Albarracín hizo lugar a la solicitud arguyendo que la patente no había venido acompañada con el pase del Cabildo Eclesiástico. Respecto de los principales que se habían redimido, de las tierras y fincas que se habían enajenado, y de los arrendamientos a Temporalidades que se habían tomado "...sin que el Concejo haya tenido parte, ni los Depositarios hayan tomado conocimiento en la materia", se preguntaban los Religiosos "...¿A quien ha entregado [el P. Procurador Fr. Isidro González] esos principales para su custodia, ni en que depósito y depositarios deberán hallarse, si no hay depósito ni depositarios?".¹⁴⁰ Más aún, a todos los Religiosos les constaba que en tiempos en que Fr. Isidro regenteaba la Procuraduría "...se ha perdido al todo la viña del Molino del Pueblo Viejo, la viña que llaman del Padre Sánchez, y la viña de Espinosa".¹⁴¹ Por el descuido, omisión y tolerancia del P. Procurador los Religiosos denunciaban tener "...perdido el servicio de los esclavos", unos en manos de comerciantes, otros de tunantes, y los demás de vagamundos, por las calles y pulperías, "...viéndose obligado a conchabar algunos peones para lo poco o nada que se cultivan las haciendas".¹⁴² De entregarse el gobierno del Convento al P. Procurador, los Religiosos se preguntaban "...¿que arreglo deberá esperarse en el gobierno de un hombre que por tantos años ha estado sujeto a las penas de propietario, sin temer que al cabo de tanta continuación se las apliquen?".¹⁴³ En el caso de ser designado Prior, Fr. Isidro

"...perseguiría a sangre y fuego a cuantos pudieran serle estorbo en su despótico gobierno para entrar y salir por los intereses del Convento a plena satisfacción".¹⁴⁴

Procuraría también Fr. Isidro

"...el extrañamiento como está de costumbre [sin duda refiriéndose a lo acontecido en 1766 en el convento Mercedario de San Lorenzo, en Córdoba], de aquellos Religiosos, que contemple no han de venir en sus perjudiciales antojos; y que llevados de su religioso espíritu no han de contribuir con su voto a colocarle en el candelero de oro del Priorato".¹⁴⁵

Como despedido

"...ha prometido hacer hasta el último esfuerzo a fin de comprar con el vil precio de la iniquidad la preciosa margarita del gobierno [priorato],...que es el alma y el móvil de los desarreglos que ha causado y va causando con escándalo del Pueblo".¹⁴⁶

Para obtener dicho priorato "...recorre las campañas con sus ambiciosas diligencias al gobierno, hasta pillar a laso un voto ciego, que tiene a su pésima devoción".¹⁴⁷ En el afán de suceder al P. Superior, Fr. Isidro González

"...anticipa esfuerzos, busca sufragios, se vale de los medios más inícuos, para lograr sus designios depravados, y viendo que el lugar que desea ocupar, no ha llegado con dolor suyo al estado de vacuo, ha pretendido hacer creer a Vuesa Paternidad, que otros con anticipación solicitan la futura sucesión".¹⁴⁸

La provisión de obispados, vicariatos, provincialías, canongías, curatos, beneficios y diputaciones eclesiásticas.

En cuanto a la provisión de obispados, vicariatos, provincialías, canongías, curatos, beneficios y diputaciones eclesiásticas en Juntas Municipales de Propios y Temporalidades, así como de Contadurías Reales en las Mesas Decimales de los Obispados, de Sindicaturas en los Monasterios, y de Contadurías y Tesorerías en el Santo Oficio de la Inquisición, la Santa Cruzada y la Redención de Cautivos, variaba según que se tratase del clero regular o del secular. La provisión de un curato o el pase o traslado de un curato infeliz o de renta irregular a uno pingüe o de renta regular, requería de las correspondientes gratificaciones, o en su defecto de muy buenas influencias o parentescos. Carbia (1929) y Avellá Cháfer (1983) detectaron la existencia de casos de patrimonialismo clerical, a los cuales caracterizaron como típicos casos de simonía.¹⁴⁹ Francisco Gutiérrez de Cevallos en carta a Domingo Sánchez Barrero, residente en Madrid, le decía en 1778 que

"...el sujeto que haga de Presidente en el Capítulo [Franciscano] no puede ser electo Provincial en aquella elección según su Constitución y como mi deseo es poner la capa de Provincial [de la Orden en Tucumán] a mi tío el P. M. G. por eso pedí viniese la Presidencia en primer lugar a favor del P. M. Fr. J. de S.; en 2o. a D. P. M. G.; en 3o. al P. M. Fr. J. J. E. y en 4o. a favor del P. P. Fr. J. A. B. porque biniendo nombrado el 1o. lograba mi deseo y con los demás se aseguraba el partido para la siguiente elección; en cuías circunstancias me ha parecido prevenirlo a V.M. para que tenga presente se observe el orn. prevenido, reservándolo y también el logro del P. M. S. porque es nombramiento que solo se manifiesta al tpo. de entrar a la elección, y saviendose antes pudiera sernos perjudicial".¹⁵⁰

Asimismo, Gutiérrez de Cevallos le manifestaba a Sánchez Barrero que

"...en esta Prova. [Tucumán] spre. ha auido un religioso nombrado por el gral. con la facultad de graduar a los que lograban sus Patentes y como murió el que obtenía este encargo, estimaré a V. M. lo solicite a favor del P. M. G. como igualmente el nombramiento de Juez General de Expolios de esta Pcia. del Tucumán, porque uno y otro encargo solo sirve para honor y representación, cuías satisfacciones y distinciones deseo a mi tío, y de su mérito y circunstancias está vien impuesto su amigo de V. M. el Rdo. Secretario General".¹⁵¹

El Pbro. Juan Manuel Fernández de Agüero había aceptado en 1790 de manos del Párroco Antonio Pío de Aguiar la suma de \$400, con tal que el anhelado cargo de capellán de la segunda partida de Demarcación de Límites con Portugal recayera en su persona, motivo por el cual ambos fueron acusados de practicar simonía.¹⁵² Y en oportunidad de la admisión de la renuncia del Obispo de Arequipa, y la solicitud de la vacante por parte del Obispo de Tucumán Angel Mariano Moscoso, el Deán del Cabildo Eclesiástico de Córdoba Gregorio Funes,¹⁵³ escribía en 1804 a su agente de negocios en Madrid, Joaquín Juan de Flores, para que llegado el caso de la vacante de Tucumán "...Vd. apure todos los recursos de su favor a fin de que se me dé a mí", previniéndole que la misma vacante estaba siendo solicitada "con desmedido empeño...por mi más fiero enemigo", el Obispo del Paraguay Nicolás Videla del Pino.¹⁵⁴ Envuelto en su polémica con el Dr. José Ignacio Olmedo, un sobrino nieto del Deán Funes, Carbia creyó ver en las gestiones del Deán un claro caso de simonía, al gestionar con dinero el obispado de Córdoba.¹⁵⁵ En efecto, Funes escribía a su agente que "...contemplando que acaso no tendría Vd. el dinero necesario para vencer las dificultades que ocurran, y no pudiendo en el día hacerle una remesa con la celeridad que exige el asunto, solicité quien me lo facilitase en esa corte...".¹⁵⁶ Adrián (1991) nos relata también como la titularidad de los beneficios de San Pedro de

Macha y Chairapata unidos, estaba siendo gestionada tanto por el Cura de Chairapata Miguel de Arzadúm como por el Cura de Chayanta Gregorio de Merlos.¹⁵⁷ El oficio de Tesorero General de la Santa Cruzada, a cargo de la venta de las Bulas y las licencias para capillas, se subastaba en Lima.¹⁵⁸ En la década del 40, el Tribunal de la Santa Cruzada, remató el cargo de Tesorero en el Río de la Plata en Antonio Rivadeneyra.¹⁵⁹

En conclusión, pese a las limitaciones provocadas por las élites señoriales locales, podemos afirmar que el Clero habría participado fuertemente en la constitución del estado burocrático-patrimonial. La negativa de las Curias Eclesiásticas a reducir la tasa de interés de los censos y capellanías operó en desmedro de la circulación de capitales y de la constitución y fluidez de un mercado de capitales, y en beneficio de los curatos urbanos y en perjuicio de los rurales. Como los curatos rurales dependían casi enteramente de las transacciones comerciales que sus curas podían concertar, la obligación de pagar sisas y alcabalas que las Reformas Borbónicas impusieron, alimentó en los mismos el espíritu de rebelión contra el gobierno español.¹⁶⁰

NOTAS

¹ Hunefeldt, 1983, 4.

² Levaggi, 1986.

³ Levaggi, 1971, 46; y 1986, 7-89; y Fisher, 1990, 641. Las fiestas de tabla eran obligatorias y las de devoción voluntarias (Buechler, 1989, 280). Asimismo, para TePaske (1970) y Mora Mérida (1983), la corona, mediante las Reformas Borbónicas, al desplazar los curas criollos hacía los curatos de campaña, y quitarles la Administración de los Pueblos de Indios, se enajenó la simpatía del clero (TePaske, 1970, 269-270; y Mora Mérida, 1983, 305).

⁴ Avellá Cháfer, 1981, 303.

⁵ Congrua era la porción de renta o frutos que se consideraba necesaria para la decorosa sustentación de un ordenado in sacris. Para ser ordenado era necesario acreditar que se poseía la congrua pertinente. Ver Ganster, 1993, 152.

⁶ Socolow, 1978, 103; y Levaggi, 1990, 43, nota 6.

⁷ Ver Saguier, 1992a, 1992b, y 1992c.

⁸ Córdova-Bello, 1975, 304, 307 y 308.

⁹ Levaggi, 1986, 86.

¹⁰ El estado de este Archivo es lamentable, no tanto por las deficiencias físicas como por la incuria e ignorancia de sus actuales autoridades.

¹¹ De ahora en más identificado con las siglas AAC, cuyas copias en microfilm se hallan en el Centro de Historia Familiar perteneciente a la Genealogical Society of Salt Lake City, Utah, de la Granite Mountain Record, y en su filial de Buenos Aires ubicada en la sede-Archivo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, de ahora en más también conocida con las siglas CHF).

¹² entre ellos los trabajos de Calvo, Cornejo, Luque Colombres, Crespo Naón, Jáuregui Rueda y Avellá-Cháfer, este último identificado de ahora en más con las siglas A-CH.

¹³ El fichaje de los testamentos porteños de los siglos XVII y XVIII fueron facilitados por mí al Sr. Hugo Fernández de Burzaco, --por intermedio del investigador y colega Jorge Zenarruza-- quien los aprovechara con mi autorización para su valiosa obra denominada "Aportes Biogenealógicos para un Padrón de habitantes del Río de la Plata", la cual identificaremos de ahora en más con las siglas FB.

¹⁴ Runciman (1983) concluye que en Francia "...ni la abolición de la venalidad de los oficios ni la introducción del sufragio adulto cortó los lazos entre el dinero y la función pública, o democratizó el proceso de selección en el Ejército y la Iglesia" (Runciman, 1983, 315).

¹⁵ Barnadas, 1984, 539.

¹⁶ Olaechea, 1992, 208-210.

¹⁷ Besio Moreno, 1939, 394.

¹⁸ Azara, 1850, 1982, 24; y Carbia, 1945, 27.

¹⁹ Congrua era la porción de renta o frutos que se consideraba necesaria para la decorosa sustentación de un ordenado in sacris. Para ser ordenado era necesario acreditar que se poseía la congrua pertinente.

²⁰ Dicha investigación sería factible relevando el nombre de los curas registrados en los padrones de época publicados por la Facultad de Filosofía y Letras.

²¹ Corbellini, 1950, II, 213; y Ruiz Guiñazú, 1952, 170-172.

²² Carbia, 1945, 214. Los otros nueve clérigos (Ferragut, Viola, Reyna Cáceres, Gainza Sánchez de Loria, Colina Oro, Rivarola Villa, Pereda Saravia, y Somellera Gutiérrez), si bien probablemente contaron en algún momento de su carrera eclesiástica con alguna congrua, por ser criollos descendientes de fundadores de capellanías, lo cierto era que con motivo de las guerras de Independencia sus ingresos provenientes de capellanías fundadas en bienes inmuebles urbanos habían decaído notoriamente.

²³ El listado publicado por Levaggi (1986) en su Cuadro IV, nos provee la nómina de 39 beneficiarios; y los asientos de 63 partidas de la Caja de Amortizaciones de Buenos Aires, también publicados por Levaggi en sus Cuadros IX y X, nos provee los orígenes de las capellanías o patrimonios registradas a comienzos del siglo XIX.

²⁴ A-CH, 1980, 313; y 1981, 290.

²⁵ Peña, 1910, V, 193.

²⁶ Acuerdos, III Serie, t.IX, 652-669. Debo esta referencia a la gentileza de nuestro dilecto amigo y colega Enrique Wedovoy.

²⁷ hijo de Francisco de Villegas, natural de la Villa de Cofreses, Santander, y de María Fernández Machado (FB, VI, 283).

²⁸ conocida también por evangelio.

²⁹ conocida también por epístola.

³⁰ AGN, Protocolos, Registro 6, año 1792, fs.40v.

³¹ AGN, Protocolos, Registro 6, 1793, fs.269v.

³² Para los que estudiaron en España, ver Martínez, 1985; para los que estudiaron en Charcas, ver Cutolo, 1963; y para los que estudiaron en Chile, ver Fuenzalida Grandón, 1972; y Lira Montt, 1979.

³³ AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.75, Exp.1999.

³⁴ *Ibídem.*

³⁵ El sínodo era un ingreso correspondiente a un porcentaje de los tributos cobrados a los indios.

³⁶ Hijo de Andrés Nicolás Ortiz de Ocampo y Bazán y de María Aurelia de Villafañe y Dávila; y hermano de Francisco Antonio, de Domingo y del Pbro. José Gabriel Ortiz de Ocampo, poeta.

³⁷ AGN, División Colonia, Criminales, Leg.44, Exp.2, fs.37v.

³⁸ cuñado de Dn. Vicente Antonio Bustos, el que fuera padre del Gobernador de La Rioja en 1841 y 1849 Manuel Vicente Bustos, y abuelo del que fuera, a partir del 80, tres veces Gobernador de La Rioja, Francisco Vicente Bustos.

³⁹ Casado en 1769 con Ana María de Herrera y Dávila, sobrina segunda del Alcalde de primer voto Juan José de Villafañe y Dávila, hija de su prima hermana carnal, y padre de Manuel de Noroña y Herrera, marido de Carmen Magarzo. Aparentemente estaba separado de su mujer (AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.88, Exp.1; y Serrano Redonnet, 1979, 213).

⁴⁰ AGN, División Colonia, Criminales, Leg.44, Exp.2, fs.37v. Amenazado Noroña por el Pbro. Ocampo con muchos capítulos "...de su infiel manejo desistieron del empeño y entraron en el de los informes al Reverendo Obispo, en procesar criminalmente a Dn. Juan Amaranto [Ocampo], y en incomodarme a mi [Francisco Antonio Ortiz de Ocampo] con la intempestiva exhibición de la parte correspondiente a las penas de Cámara en las multas que tenía exigidas como Alcalde del Partido" (AGN, División Colonia, Criminales, Leg.44, Exp.2, fs.37v). Manuel de Noroña, hijo de Dn. Jose de Noroña y Losada, era tercenista en el Partido de Guandacol, donde "...la parte misma que producía la tercena se empleaba en queros de vicuña" (AGN, División Colonia, Criminales, Leg.44, Exp.2, fs.38).

⁴¹ AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.I, fs.46v. (Microfilm 2680, del CHF).

⁴² *Ibídem.*

⁴³ *Ibídem.* El Tridentino consiente la simultaneidad de beneficios únicamente tratándose de

beneficios simples, no residenciales e incongruos.

⁴⁴ AGN, Protocolos, Registro 5, 1794, fs.345v.; Reg.3, 1817 fs. 140v.; y Reg. 3, 1820, fs. 81v.

⁴⁵ AGN, Protocolos, Registro 3, año 1760, fs.118v.; Registro 1, año 1794, fs.196; y Registro 3, año 1803, fs.449v.

⁴⁶ Fasolino, 1963-65, 9. Para una descripción de la tonsura ver Ganster, 1993, 154.

⁴⁷ hijo de Andrés Paz de Codecido, natural de Santiago de Galicia, y de Manuela Durán y González Marín, y primo hermano del General José María Paz (FB, V, 148).

⁴⁸ hija del Alférez Real de Buenos Aires José González Marín y de María de Toledo y Ojeda, viuda de Miguel Antonio de Azuaga, y cuñada de Claudio Durán de Santa Cruz (FB, III, 265, y AGN, Protocolos, Registro 2, año 1762, fs.124v.).

⁴⁹ hijo del Capitán Pedro de Cueli y Lozano y de María Antonia de Garfias y Giles (FB, II, 181).

⁵⁰ marido de María del Carmen González del Pozo, hija de Simón González y de Teresa del Pozo (FB, II, 266).

⁵¹ hijo de Simón González y San Martín y de Teresa Pozo y Garro, y cuñado de Mateo Chavarría (FB, III, 252; y V, 239).

⁵² hija de Gabriel Giménez Naharro y de María Delgadillo, y viuda de Nicolás del Pozo y de Francisco Cors (FB, I, 223; y III, 186).

⁵³ AGN, Tribunal Civil, Leg.T-1.

⁵⁴ *Ibídem*, fs.41v.

⁵⁵ *Ibídem*, fs.42v.

⁵⁶ *Ibídem*, fs.64.

⁵⁷ hijo de Juan Bautista Barón y de Antonia Paula del Pozo (FB, I, 223). Acerca de las aventuras de Pozo en Europa, ver Furlong, 1952, 470-476.

⁵⁸ AGN, Tribunal Civil, Leg.T-1, fs.151.

⁵⁹ hijo del Capitán y Depositario General José de Esparza y de María Verdún y Villaysán (A-Ch, I, 105; y FB, VI, 258).

⁶⁰ A-Ch, 1983, I, 105.

⁶¹ hijo del Capitán Eugenio Fretes Abalos de Mendoza y de María Esquivel y Palacios (A-Ch, I, 228).

⁶² este delito se había generalizado en la España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII (Sarrailh, 1957, 630-631); y en el México colonial (González Marmolejo, 1982, 258-266).

⁶³ AGN, División Colonia, Justicia, Leg.19, Exp.522.

⁶⁴ hijo del Capitán Pedro de Suero y de Ana de Giles y Saavedra, y cuñado de Francisco de Herrera, Juan de la Cruz, José Larrisgoitía y Manuel Pérez de Bustamante (FB, VI, 159).

⁶⁵ Probst, 1946, 190, n.9.

⁶⁶ AGN, División Colonia, Justicia, Leg.21, Exp. 584.

⁶⁷ Este fué el caso de los curas Cayetano José Cires, Julián Joaquín Gainza, Luis José Madera, Antonio Gil Obligado, Marcos Salcedo y Félix José Pérez (AGN, División Colonia, Hacienda, Leg. 123, Exp.3106; Leg.124, Expedientes 3163 y 3164; y Leg.127, Exp.3210; Tribunales Administrativos, Leg.15, Exp.453; y Leg.16, Exp.498; e Interior, Leg.58, Exp.1.).

⁶⁸ AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.137, Exp.3445.

⁶⁹ consuegro de Juan Facundo Quiroga (FB, III, 102).

⁷⁰ AGN, División Colonia, Justicia, Leg.54, Exp.1575.

⁷¹ *Ibídem*.

⁷² A-Ch, 1981, 296.

⁷³ Sobre la Bula de Composición, ver Martínez de Sánchez (1995).

⁷⁴ AGN, División Colonia, Tribunales, Sala IX, Leg.210, Exp.19, fs.1-2.

⁷⁵ AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.54, Exp.7, fs.3.

⁷⁶ AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.36, Exp.4, fs. 18v.

⁷⁷ Sólo pude hallar dos capellanías, una a nombre de Juan Fernández de Agüero en 1792 y la otra a nombre de Manuel Luzuriaga en 1802 (La Plata, Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires: Catálogo del Archivo de la Real Audiencia, 7.5.11.24; y 7.5.1.25).

⁷⁸ AGN, División Colonia, Hacienda, Leg.20, Exp.462.

⁷⁹ *Ibídem*.

⁸⁰ *Ibídem*.

⁸¹ Lavallé (1982) relata casos ocurridos en el Virreinato Peruano.

⁸² Lavallé, 1993, 162.

⁸³ Los curatos de Tulumba, Punilla, Pocho, Río Segundo, Río Tercero, Río Cuarto, Río Seco, Soconcho e Ischilín, sumaban en 1776, 3.000 indios y más del doble de mulatos, zambos y negros libres (8.000); los Pueblos de Indios de Toma, Cosquín, San Jacinto, San Antonio Nonsacate, Nono, Quilino, Soto y Pichanas vieron a fines de siglo sus poblaciones gradualmente diezgadas (ver Beltramini, 1978). Para la formación de los padrones concernientes a los indios que residían en los ocho Pueblos de Indios de Córdoba, el Gobernador-Intendente Rafael de Sobremonte no se detuvo, a juicio de Ambrosio Funes, en escrúpulos de legitimidad racial, pues en ellos "...están incorporados blancos, mulatos, mestizos, zambos, y aún los negros mismos" (AGN, División Colonia, Tribunales Administrativos, Leg.3, Exp.94, fs.106v. Una de las indias de estos Pueblos fué la madre del poeta revolucionario y prócer de la independencia Cubana José Antonio Miralla).

⁸⁴ hijo de Lucas de Allende y Larrea, y de Agueda de Losa Bravo y Gutiérrez de Nis, hermano del Teniente Gobernador de Córdoba General Tomás de Allende y Losa, y de los Alcaldes José y Santiago Allende y Losa, y sucesivamente cuñado de Francisco Armesto, Bernardo Roldán y Gregorio Arrascaeta (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 1, Sala IX, 5-9-3).

⁸⁵ Lamentablemente no he tenido aún acceso a dicho expediente.

⁸⁶ AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 1, Sala IX, 5-9-3).

⁸⁷ El espíritu de discordia que reinaba en la provincia Tucumana de la Orden Mercedaria no era el único. En la provincia Altooperuana de la Orden Mercedaria, Potosí "...siempre ha sido insolente y escandaloso como se ha visto con los bullicios recientes acaecidos con los religiosos de la Merced, sin que faltasen homicidios hasta de clérigos, y otras fuerzas públicas" (El Fiscal Protector de la Real Audiencia de La Plata y Gobernador Interino de la Villa de Potosí Manuel Martínez de Escobar y Coronado al Virrey del Perú Manuel de Amat, Potosí, 26-II-1771 [AGN, División Colonia, Potosí, Leg.4, Sala IX, 6-3-1]). También en la provincia chilena de la Orden Franciscana, fomentado por "el parentesco y las conexiones del siglo", reinaba en noviembre de 1765 un odio implacable (Gonsález Echenique, 1962, 186).

⁸⁸ Provincial de la Orden Mercedaria en 1766 (Brunet, 1973, 81). Hijo de Marcos Rodríguez Flores, dueño de una estancia de criar mulas en Luján, Provincia de Buenos Aires, y de Catalina Martínez de Saravia (Fernández Burzaco, 1990, V, 379).

⁸⁹ Fué Capellán de la expedición a las Salinas Grandes al mando de Manuel Pinazo en 1770 (Brunet, 1973, 73). Hijo de Marcos Rodríguez Flores, dueño de una estancia de criar mulas en Luján, Provincia de Buenos Aires, y de Catalina Martínez de Saravia (Fernández Burzaco, 1990, V, 379).

⁹⁰ Maestro en Sagrada Teología y Presidente in cápite del Convento de San Lorenzo entre 1755 y 1757 (Brunet, 1973, 74). Hijo del Capitán Francisco López de Osornio, dueño de una estancia de criar mulas en Luján, Provincia de Buenos Aires, y de María de Gámez (Fernández Burzaco, 1990, IV, 178).

⁹¹ Hijo de José de Chaparro, nacido en Asunción y vecino de Buenos Aires, y de Juana de Sosa, y cuñado de Juan Antonio González y de Francisco Antonio Ferreyra (Fernández de Burzaco, II, 195).

⁹² Hijo de José Esquivel y de Angela Ramírez Pedernera (Fernández de Burzaco, II, 304).

⁹³ Fr. Gregorio Leguizamón, Fr. Joseph López de Salazar, Fr. Lorenzo López de Osornio, Fr. Antonio Rodríguez Flores, Fr. Simón Rodríguez Flores, Fr. Pedro Aparicio, Fr. Vicente Chaparro, Fr. Joseph Esquivel, Fr. Ignacio Lescano, Fr. Joseph Herrera, Fr. Pedro Nolasco Melgarejo, y Fr. Juan Brenes (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 1, Sala IX, 5-9-3)

⁹⁴ Obtuvo en 1743 el cargo de Teniente de Rey por 4.000 pesos, permaneciendo en el puesto hasta de 1775 (Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires, Leg.50, copia existente en el Instituto de Investigaciones Históricas "Dr. Emilio Ravignani", carpeta 155, n.3, citado en Zorraquín Becú, 1959, 176; y Acevedo, 1972, 253-267). Fué también encargado de la recepción del ramo de Sisa. Era casado con Eugenia de Ledesma y Olmedo, hija del Regidor y Fiel Ejecutor General Ignacio de Ledesma y Ceballos, dueño de la estancia Santa Cruz, y de la hija del encomendero de Cabinda y Macarrire y Teniente Gobernador de La Rioja Bartolomé de Olmedo y Serrano; y suegro del General Prudencio Palacios (Lazcano, 1969, III, 293). Fué padre del Chantre de la Catedral Dr. José Lino de León, de Pasqual Baylón de León, ausente en las Provincias del Perú, de María Teresa de León, mujer del General Prudencio Palacios, y del Dr. Domingo Ignacio de León, Teniente de Rey de Córdoba, Subdelegado de la Renta de Correos, Juez de la Universidad, y Presidente de la Junta Municipal de Temporalidades de Córdoba en 1775, marido de María Josefa Zavala. Era dueño de la estancia nombrada La Chacarilla (AHC, Escribanía N.2, Leg.64, Exp.21).

⁹⁵ plaza creada para los casos de ausencia del gobernador. Según Zinny poseía atribuciones sólo en el ramo militar (Zinny, 1920-21, I, 202). Pero según Ornaghi y Franciosi (s/f), el Teniente de Rey tenía a su cargo la recepción del ramo de Sisa, debido a que su tarea específica estaba relacionada con la defensa de las fronteras de los ataques de los indígenas (Ornaghi y Franciosi, s/f, 99).

⁹⁶ El cargo de Teniente de Rey fué abolido por Real Orden el 4 de Junio de 1778 (Ornaghi y Franciosi, s/f, 99).

⁹⁷ Haslip-Viera, 1993, 351.

⁹⁸ Acuerdos, III Serie, V, 85 y 89.

⁹⁹ La primer parte la constituían los conventos de Córdoba, Santiago del Estero, Jujuy, Tucumán, La Rioja, Salta y el Hospicio de Catamarca; la segunda los conventos de Buenos Aires y el Hospicio de San Ramón de las Conchas; y la tercera los conventos del Paraguay, Santa Fé y Corrientes (Toledo, 1919, 40).

¹⁰⁰ Hijo de Juan de Ordóñez y Herrera, y de Luisa Ledesma y Garaian, casado en primeras nupcias con su prima Isabel Bustos y Ledesma, y en segundas nupcias con María Caldevilla (Lazcano Colodrero, 1936, 140). Pretendió en 1785 adquirir de los Dominicos la estancia denominada de Diego Celis en \$2.000, y fracasó en el intento (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.242, Exp.12).

¹⁰¹ Córdoba, 13-V-1768 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg.1, Sala IX, 5-9-3).

¹⁰² Familiar del Santo Oficio de la Inquisición, y Presidente de la Junta Municipal de Temporalidades. Primo hermano de Gonzalo Terán Quevedo. Cayetano estaba casado en primeras nupcias con Bartolina Fernández, y en segundas nupcias con María Mercedes Amarante, hija del

comerciante y frustrado minero José Amarante y de Catalina de Quevedo y Soria (datos proporcionados por Carlos Jáuregui). Amarante había contraído con comerciantes de Buenos Aires entre 1749 y 1751 cinco operaciones de fiado por valor de \$23.489 (AGN, Protocolos, Reg.4, 1749, fs.225; R.1, 1751, fs. 463; R.4, 1751, fs.145; y R.2, 1751, fs. 485 y 489). También había sido Amarante dueño de un trapiche para moler metal en La Punilla (Gould, 1983, 32). Según nuestro colega Diego Outes, este Amarante es el mismo casado con Catalina Arrascaeta, y suegro de Juan de Hormaeche. Terán Quevedo fué el Alcalde que en 1766 dió cuenta a la Audiencia de Charcas y al Virrey de Lima que el Gobernador Campero se había juntado con Palacios, su suegro Estéban y León y el Alcalde Santiago Allende para impedir que él [Terán] pudiera dar ayuda a los Frailes Mercedarios. Las Reales Audiencias mandaron en comisión al General don José de Galarza "...para que lo pusiera [a Terán] en posesión de la vara". A fin de no dar cumplimiento al despacho del Comisionado Galarza, el Gobernador Campero salió de Salta para Córdoba, para deponer "...a los Regidores antiguos, y como seis de dos solas familias, que fueron un hijo de dicho Teniente de Rey [Domingo Ignacio de León], a dicho Alcalde Allende, a su concuñado, y ya citado Uriarte, a un Santibáñez, sobrino de éste, y a otro Allende, hijo natural; que en dos días le hizo Capitán Sargento Mayor y Regidor...Terán, por no verse preso, ganó sagrado, y no sé si está todavía, y han pasado más de dos años" (Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires, 49, América Meridional, 12 de Julio de 1768, 0-3-7; cuya copia reside en la Colección Documental donada por Enrique Barba, existente en el Centro de Historia Colonial, de la Universidad Nacional de La Plata).

¹⁰³ Natural de Galicia, casado con Clara Echenique y Urtubey, y padres de Julián Martínez, casado con Juana Luisa Pérez, y de José Raimundo Martínez, propietarios de la estancia de Ambargasta, en Santiago del Estero (Lazcano, 1968, II, 223). Fué denunciado en 1761 por el Tesorero Oficial Real Manuel Arredondo y Puerta, primer marido de María Allende y Losa, y procesado por protector de comercios ilícitos y defraudador de los reales derechos (AHC, Crímen, 1761, Leg.16, Exp.5; y Escribanía N.2, Leg.36, Exp.13). En 1761 litiga con Estanislao de las Casas por incumplimiento de contrato (AHC, Escribanía N.1, Leg.345, Exp.1). En 1762 litiga con Julián Cabrera (AHC, Escribanía N1, Leg.347, Exp12). En 1764 le inicia a Francisco José de Uriarte, marido de María Mercedes Mendiola, un juicio por injurias (AHC, Crímen, 1764, Leg.19, Exp.13). Con motivo de la expulsión de los Jesuitas, en 1767, estuvo preso conjuntamente con Juan Antonio de la Bárcena, José Bejarano y Manuel Isidoro Gutiérrez (Learte, 1926, 216). Cuando su hijo Julián Martínez se casó en 1794 con Juana Pérez, su madre Clara Echenique le inició un juicio de disenso "...respecto a que el padre de la contrayente Joaquín Pérez, es de extraño vecindario [vecino de Potosí], y en tan larga distancia como la de Potosí, se me hace preciso se me dé a conocer su calidad y esclarecimiento" (AHC, Escribanía N.2, Leg.83, Exp.9).

¹⁰⁴ AGN, División Colonia, Temporalidades de Córdoba, Leg.5, 1772, Sala IX, 21-9-6.

¹⁰⁵ Sobrino del Oidor de la Real Audiencia de Charcas Francisco Xavier de Palacios. Marido de María Teresa de León, hija del Teniente de Rey Manuel de Estéban y León. A Prudencio Palacios se le abre sucesión en 1797 (AHC, Escribanía N.2, Leg.91, Exp.5). Padre de Francisco Xavier de Palacios, marido de María Ignacia de la Fuente, y de Petrona Palacios, mujer de Andrés Gigena y Santelices, padres a su vez de Martín Gigena y Palacios, dueño de la estancia del Tío (AHC, Escribanía N.1, Leg.409, Exp.1). Al enviudar María Ignacia de la Fuente contrae segundas nupcias con Francisco García Arenas (AHC, Escribanía N.2, Leg.91, Exp.5). El Gobernador Campero quiso quitar del Cabildo de Córdoba "...sus individuos, y crear otros, para lo que hizo su lugarteniente al yerno del Teniente de Rey [Estéban y León] (depuesto del empleo político) don Prudencio Palacios que anhelaba

mucho por la tenencia y por ella le dió al Gobernador \$4.000; y éste, así por esta dádiva como por adherir así, no reparó en que era mozo caviloso e inquieto; y no obstante obtuvo la confirmación de la Real Audiencia por respeto de su tío Oidor; éste para la elección de Alcaldes, y que salieran de su facción, privó varios votos de que se siguió grande escándalo, pero siempre salió uno que no pudo ganarlo, y ofreciéndose en este tiempo el capitánazgo de los Mercedarios, su Vicario General por temor de alguna revuelta, consiguió un despacho del Superior Gobierno para que las Justicias diesen auxilio a los Frailes si le pedían, y después de haber obedecido el Cabildo cuando pidieron favor los frailes, no solo no le dió dicho Teniente sino que se juntó con su suegro y el Alcalde de primer voto don Santiago Allende, y fueron a impedir, le diese el otro Alcalde don Cayetano Terán Quevedo, con los demás Regidores a quienes quisieron matar, y ya que erraron los tiros, anduvieron por prenderlos y por obviar mayores daños los Regidores se ausentaron y el Alcalde repuso de la vara al Gobernador" (Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires, 49, América Meridional, 12 de Julio de 1768, 0-3-7; cuya copia reside en la Colección Documental donada por Enrique Barba, existente en el Centro de Historia Colonial, de la Universidad Nacional de La Plata).

¹⁰⁶ Hijo de Lucas de Allende y Larrea y de Agueda de Losa Bravo. Casóse en primeras nupcias con Engracia Arze, y en segundas nupcias con María de la Cruz Mendiolaza, hija del Comisario de Caballería José Joaquín Mendiolaza y de Teresa de las Casas y Ponce de León, prima hermana de la mujer de su hermano José. María de la Cruz era nieta de Gaspar de Mendiolaza, asentista del azogue de Huancavelica, quien proveía asimismo los ingenios de la ribera de Potosí.

¹⁰⁷ Bruno, 1967, V, 470-474. También existen otros testimonios en el Archivo Histórico de Córdoba (AHC), Escribanía N.2, Leg.35, Exp.6, y Leg.34, Exp.8 y 11.

¹⁰⁸ Enfrentada a la Casa de los Allende.

¹⁰⁹ AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 1, Sala IX, 5-9-3).

¹¹⁰ AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 1, Sala IX, 5-9-3).

¹¹¹ *Ibídem*.

¹¹² *Ibídem*.

¹¹³ Peninsular, casado con la cordobesa Ana Petronila Hurtado de Saracho (Dato proporcionado por Carlos Jáuregui), probablemente hermana de Catalina Hurtado de Saracho y Ordóñez, hija de Lorenzo Hurtado de Saracho y de Teresa Ordóñez. Catalina Hurtado era casada con José de los Reyes, natural de Huelva, Andalucía (Lazcano Colodrero, 1936, I, 122). Este último era tío del fundador de la Hermandad de la Caridad Juan José Vélez y de los Reyes.

¹¹⁴ Antonio de Arriaga al Exmo Sr. Pedro de Ceballos, Córdoba, 31-X-1777 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 2, Sala IX, 5-9-4).

¹¹⁵ Buechler, 1989, 231-247.

¹¹⁶ AGN, Expedientes Administrativos, Tribunal de Cuentas, 1792-1806, Sala IX, 10-1-3.

¹¹⁷ *Idem*.

¹¹⁸ Idem.

¹¹⁹ Idem.

¹²⁰ Idem.

¹²¹ Idem.

¹²² Idem.

¹²³ Idem.

¹²⁴ Idem.

¹²⁵ Idem.

¹²⁶ Idem.

¹²⁷ Idem.

¹²⁸ Idem.

¹²⁹ Idem.

¹³⁰ Idem.

¹³¹ Idem.

¹³² Idem.

¹³³ Idem.

¹³⁴ Idem.

¹³⁵ AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.209, Exp.11.

¹³⁶ nacido en San Juan en 1751, hijo de Remigio Albarracín y Balmaceda y de Josefa Irrazábal, hermano del R.P. Anselmo Remigio Albarracín, sobrino de Miguel Albarracín y Balmaceda y de José Justo Albarracín y Domínguez (Verdaguer, 1931, I, 585).

¹³⁷ cédula o despacho que dan los religiosos cuando los mudan de un convento a otro, o se les dá licencia de ir a alguna parte, para que conste de ella.

¹³⁸ religioso que incurre en el vicio de propiedad, teniendo apego a los bienes temporales, o usando de ellos sin la debida facultad o licencia de su prelado.

¹³⁹ AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.209, Exp.11.

¹⁴⁰ *Ibídem.*

¹⁴¹ *Ibídem.*

¹⁴² *Ibídem.*

¹⁴³ *Ibídem.*

¹⁴⁴ *Ibidem.*

¹⁴⁵ AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.209, Exp.11.

¹⁴⁶ *Ibídem.*

¹⁴⁷ *Ibídem.*

¹⁴⁸ *Ibídem.*

¹⁴⁹ La simonía segun derecho "...es reprobada y condenada por la universal Iglesia, de modo que siempre que se convence, contra cualesquiera persona eclesiástica el que vende cualesquiera cosa sagrada para usos profanos es castigado con las penas canónicas establecidas para la compurgación de este delito, y publico escarmiento. Para salvar pues los Teólogos católicos contra los herejes, que no hay simonía en la percepción de la limosna señalada por la Santa Bula, afirman, que el dar una cosa sagrada, por precio, para aplicarlo en otra cosa sagrada de que tiene necesidad la Iglesia, no es Simonía" (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg. B-5, Exp.6, fs.53). Ver Walzer, 1993, 108.

¹⁵⁰ Francisco Gutiérrez de Cevallos a Domingo Sánchez Barrero, Madrid, 7-IX-1778 (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.6, Exp. 71, fs.99).

¹⁵¹ Francisco Gutiérrez de Cevallos a Domingo Sánchez Barrero, Madrid, 7-IX-1778 (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.6, Exp. 71, fs.99v.).

¹⁵² A-Ch, 1983, I, 82 y 110.

¹⁵³ hermano carnal y correligionario político del gran comerciante Ambrosio Funes.

¹⁵⁴ Gregorio Funes al agente de negocios en Madrid Joaquín Juan de Flores, Buenos Aires, 15-IV-1804 (AGN, Biblioteca Nacional, n.581, citado por Carbia, 1929, n.60, 529). Para la biografía de Videla del Pino, ver Piaggio, 1912.

¹⁵⁵ Carbia, 1929, 58, 467-68; 60, 527-530; 63, 85-89; y Olmedo, 1929, 59, 501-503; y 61, 19-23.

¹⁵⁶ Gregorio Funes al agente de negocios en Madrid Joaquín Juan de Flores, Buenos Aires, 15-X-1804 (AGN, Biblioteca Nacional, n.592, citado por Carbia, 1929, n.60, 529).

¹⁵⁷ Adrián, 1991, 70, nota 16.

¹⁵⁸ para la Bula de la Santa Cruzada del Paraguay, ver Pusineri Scala, 1992, 59-78.

¹⁵⁹ AGN, Protocolos, Registro 4, 1748/49, fs.141. A propósito de este cargo, en 1750 Antonio Candioti, vecino de Santa Fé, se obligó con Rivadeneyra, por la cuantía que importó la partida de 800 bulas de vivos y 600 bulas de difuntos de a 2 tomines, 125 bulas de vivos y 80 bulas de difuntos de a peso ensayado, 6 bulas de vivos de a \$2, 6 bulas de composición de a 12 reales, y 2 licencias de capilla de a \$20 y dos de a \$11 pesos (AGN, Protocolos, Registro 5, 1748-50, fs.282).

¹⁶⁰ Hunefeldt, 1983, 4.

TOMO VIII

Capítulo 8

La Crisis Eclesiástica. La lucha interna del clero en el régimen capellánico Rioplatense.*

* (publicado en 1995 en la Revista de Historia del Derecho "Ricardo Levene" [Buenos Aires: Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales "Ambrosio L. Gioja"], n.30, pp.183-212);

La composición de la elite colonial, y en especial del clero secular, fué en nuestra historiografía, desde mediados del siglo XVIII, motivo de denodadas discusiones. Entre las crisis políticas, la que más habría incidido en la ruptura de los privilegios del fuero eclesiástico y del nepotismo eclesiástico, habría sido la crisis eclesiástica propiamente dicha. En efecto, la intensidad de la crisis eclesiástica vigente en las colonias españolas se alteró profundamente a partir de la circulación, en 1749, del Informe Secreto de Jorge Juan y Antonio Ulloa, pues de una situación jurídica donde prácticamente el poder eclesiástico prevalecía sobre el poder civil, se pasó a una situación inversa donde, merced a las Reformas Borbónicas, el poder civil entró a regir los destinos del poder eclesial.¹

Asimismo, dicha crisis se incrementó en tierras de América con la difusión de las obras de los Abates Raynal (1770), Mably (1786) y De Pradt (1802). Para Lavallé (1978), sin embargo, la crisis del clero se nutrió del antagonismo hispano-criollo vigente en el seno de las Ordenes Religiosas. La integración criollo-mestiza de las Ordenes Religiosas y de la jerarquía eclesiástica, iniciada en tiempos de la dinastía de los Austrias, tendría su explicación --al igual que en el resto de América, con sus diferentes variantes-- en la restricción que existía para los criollos, de acceder a puestos vacantes en la administración civil del aparato estatal; y al impacto del extremo dinamismo de la vida mercantil porteña y de las cíclicas crisis comerciales, que hacían caer repetidamente la voluntad de sostener el clero mediante la fundación de capellanías.²

También encontraría esta inmoderada vocación sacerdotal su explicación, según Mayo (1991), en la frustración que habrían experimentado ciertos miembros de las elites criollas en la carrera mercantil.³ Esta escasez, restricción o fracaso revirtió en una desmedida demanda para ingresar al clero secular y regular,⁴ compuesta asimismo por aspirantes que padecían de una "calidad" cada vez más disminuía,⁵ interesados sólo "...por salir de la oscuridad de su nacimiento, ilustrar su familia y hacer fortuna".⁶ Sin embargo, pese a las Reformas Borbónicas, para la mayor parte de los historiadores liberales, el clero adoptó con motivo de la Revolución de Independencia una clara posición contra-

revolucionaria. Más luego, una corriente crítica hegemonizada por Ingenieros (1918), señaló la existencia de un conflicto entre un alto clero de origen peninsular, partidario de la corona, "...detentador de los empleos mejor rentados del gobierno eclesiástico distribuidos en España o rudamente disputados aquí", y un bajo clero de origen criollo, partidario de la independencia, que padecía de bajísimos recursos y "...que no se resignaban a ocupar misérrimos curatos en lejanas rancherías".⁷ Por el contrario, para la escuela "revisionista" --que se inició a fines del siglo pasado con Quesada (1869), y que alcanzó su cenit a mediados de este siglo-- la mayoría del clero se solidarizó con la revolución. Para Monseñor Piaggio (1912), el clero era en tiempos de la Revolución "...como un faro al que convergían las miradas de los pueblos";⁸ y según Carbia (1945), gestó su actitud rebelde en un largo proceso mental, "...iniciado primariamente en la consideración egoísta pero humana del achatamiento en que lo colocaba su dificultoso ascenso".⁹ Amén de autores como Reyna Almandos (1942), Corbellini (1950), Ruiz Guiñazú (1952) y González (1960), que observaron la división entre un clero enemigo de la revolución, y otro solidario con la misma, hubo autores como Zorraquín Becú (1961), que hallaron entre estos últimos un ala moderada y otra radicalizada. Para hacer estos hallazgos Zorraquín, fundado en Corbellini, se remontó a la naturaleza de los votos emitidos por los mismos en el Cabildo de Mayo.¹⁰

Indagando más profundamente en el proceso revolucionario mismo, Halperín Donghi (1979) halla en el clero secular, la existencia de un conflicto interno, entre el Obispo y su Cabildo Eclesiástico;¹¹ y Avellá Cháfer (1980-81), comprueba que no es exagerado afirmar que el clero "...sintió de cerca las angustias de una deficiente economía, de tal manera que fué pobre por antonomasia".¹² Pero no sólo los votos emitidos por el clero y los conflictos internos al mismo definían una posición política. Las duras condiciones sociales y económicas por medio de las cuales los clérigos --en especial aquellos de oscuros orígenes-- accedían a las ordenes sagradas, tal como lo sugirieron Carbia y Avellá Cháfer, deben haber incidido en forma mucho más determinante en su apoyo a la revolución.¹³

Sin embargo, es difícil estimar cuán generalizable fueron los enfrentamientos internos del clero. Aparte de la profunda animadversión contra el alto clero provocada por las desigualdades inherentes a la concesión de Patronatos y Capellanías, estudiado en otros trabajos de este autor,¹⁴ la animosidad de los hijos no clérigos, de los clérigos de ordenes menores, y de los descendientes clérigos de menor "calidad", antigüedad y proximidad con los fundadores de las capellanías, y contra el alto clero de origen peninsular, habría obedecido a la conducta observada por la corona en el ejercicio que hacía del Patronato Real, en especial la designación de los Obispos; y la conducta de los Examinadores Sinodales,¹⁵ y los Comisarios del Santo Oficio en los juicios capellánicos.¹⁶

Continuando estas líneas de reflexión, nos preguntamos en este trabajo si en aquellas ciudades con un alto grado de penetración mercantil, las estrictas cláusulas acerca de la sucesión de los beneficiarios de las capellanías legas, que privilegiaban a los hijos clérigos en perjuicio de los hijos letrados no clérigos, a los clérigos de ordenes mayores en detrimento de los clérigos de ordenes menores, y a los descendientes clérigos de mayor "calidad", antigüedad y proximidad con el fundador, en perjuicio de los descendientes clérigos de menor "calidad", antigüedad y proximidad, contribuyeron o no a generar un profundo resentimiento, y a engendrar una creciente lucha interna. Para ello hemos debido estudiar un centenar de litigios de dichos siglos, correspondientes a las series judiciales civiles y eclesiásticas de los períodos colonial y nacional, depositados en el Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires;¹⁷ en el Centro de Historia Familiar (CHF), perteneciente a la Genealogical Society of Salt Lake City, Utah, de la Granite Mountain Record, en su filial de Buenos Aires ubicada en la sede-Archivo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y en el

Archivo del Arzobispado de Córdoba,¹⁸ así como perseguir las obras de diversos canonistas hoy casi inhallables.¹⁹ También nos hemos servido de la información genealógica que nos proveen diversos tratados,²⁰ y los testamentos protocolizados en Buenos Aires.²¹

La intensidad de la crisis eclesiástica.

La intensidad de la crisis eclesiástica estaba en parte directamente vinculada a la escasez de cargos vacantes en el aparato civil del estado colonial y a los métodos de reclutamiento y promoción implementados por la Iglesia. En tiempos en que la soberanía no pertenecía al pueblo sino al monarca; y por derivación del mismo a los estamentos que componían el Antiguo Régimen, incluido el clero; por lucha interna del clero debe entenderse la lucha que se libraba en sus mismas filas por la incorporación y promoción en las canonjías y sinecuras propias del estamento clerical.²² La ordenación de los miembros del clero secular y su promoción en la carrera eclesiástica, hasta integrar el cabildo catedralicio primero, y el cabildo secular después, dependía por lo general de la frecuencia con que eran celebrados los sorteos, las presentaciones de ternas y las elecciones y oposiciones para cubrir las sedes vacantes, del monto y cantidad de becas de gracia y de fundaciones capellánicas existentes, del rigor con que eran aplicadas las restricciones emanadas del régimen de Limpieza de Sangre, y de la voluntad política de Examinadores Sinodales, Comisarios del Santo Oficio, Vicarios y Vice-Patronos Reales (Virreyes, Gobernadores y Reales Audiencias).²³

Las capellanías que proveían de congrua,²⁴ eran una forma española de vinculación de bienes.²⁵ Ellas consistían en una suerte de fundaciones perpetuas (con rentas fijas anuales auto-impuestas por comerciantes o hacendados) con la obligación de decir misas o prestar servicios religiosos (festividades, procesiones y ejercicios espirituales) en una iglesia o convento determinado, afectando para ello parte de sus propios bienes raíces, que se volvían indivisibles e inalienables en caso de herencia, a menos que el gravámen o principal se redimiere en su totalidad.²⁶ Ningún miembro de la sociedad colonial que se preciara a sí mismo y fuera de posibles se privaba de fundar obras pías con pensión de decir misas a favor del alma o ánima de algún difunto, o capellanías legas con pensiones a favor de algún pariente ansioso por ordenarse de sacerdote, con toda clase de cláusulas condicionantes. Los padres pudientes y solventes de hijos que contaban con vocación religiosa preferían que estos se incorporaran al clero secular y no al regular, porque de esa forma garantizaban que su familia pudiera controlar el patronato de las capellanías con que dotaban a aquellos. Las capellanías laicales, mercenarias o de sangre, al igual que las asistencias en la Milicia, no eran un acto de liberalidad sino una imperiosa necesidad si se deseaba que sus hijos mayores o sus descendientes estudiaran.

Privilegios a favor de hijos clérigos en la línea sucesoria de los beneficios capellánicos.

Amén de la animadversión contra la Corona y la Iglesia, provocada por el creciente endeudamiento generado por los censos y las capellanías, y la amenaza que se cernió sobre el clero criollo mismo por la aplicación de la Real Cédula de Consolidación de Vales Reales, motivo estudiado en otros trabajos de este autor,²⁷ la animosidad de los criollos segundones no clérigos, o de los clérigos sin "calidad" ni congrua, contra el alto clero y el Antiguo Régimen, habría obedecido también a los innumerables conflictos generados a causa de los privilegios implícitos a favor de ciertos hijos clérigos en la línea sucesoria de los beneficios capellánicos. Si bien la posición dominante prefería como criterio para la presentación,²⁸ y/o colación de un candidato,²⁹ el parentesco o derecho de familia, existieron juristas que alegaron la necesidad de anteponer otros puntos de vista, tales como el derecho del culto o vocación religiosa, la "calidad" del candidato, su idoneidad, la proximidad cronológica a las ordenes

menores o mayores, y el principio de la equidad.

Cuando se establecía la primacía del derecho del culto o vocación religiosa, por lo general se otorgaba la prioridad en el beneficio de la capellanía a los que fueren clérigos seculares idóneos, y en algunos casos a los que fueren frailes o clérigos regulares, aunque no fueren parientes.³⁰ Hemos visto entonces que por calidad se entendía la legitimidad y la llamada Limpieza de Sangre. Pero como en la América hispana de mediados del siglo XVIII --debido a la escasez de clérigos-- los exámenes de Limpieza de Sangre habían perdido rigor, la corona debió idear dispensas o excusas legales para obviar los casos de ilegitimidad, arguyendo por información de testigos la nobleza y limpieza de padres o abuelos.³¹ Más aún, el papado mismo había autorizado ya en el siglo XVI la dispensa o eximición de la legitimidad a los curas mestizos.³² Por el proceso de Limpieza de Sangre cualquier aspirante a cura podía, 'aclararse' legalmente, es decir, cambiar una línea de sangre o status racial por otra. Mientras hubiere testigos dispuestos a sostener dicho cambio ninguna autoridad eclesiástica se podía atrever a desafiar la voluntad del aspirante a un mejor status.³³

La idoneidad en la elección de los capellanes.

Por idoneidad se entendía en ese entonces el número de cursos tomados o dictados en el colegio o la universidad, el número de discípulos con que contaban en el clero o la judicatura, y el resultado de los exámenes y concursos a curatos y oposiciones.³⁴ La Sagrada Congregación del Concilio de Trento determinaba la edad necesaria e indispensable para poder obtener capellanías y otros beneficios simples.³⁵ Conforme a este Decreto, según sostenía el canonista Fagnano (1764), ningún beneficio "...quocunque nomine opelletur", se puede obtener antes del cuarto décimo año, para que los beneficiados sean capaces de desempeñar debidamente las funciones anexas a ellos. Aún cuando los beneficios fueren simples, los canonistas García (1658) y Van Espen (1778), quienes citan a Barbosa (1636,1663),³⁶ y Corradi (1656,1676), sostenían que en cuanto a la edad "...solo el Papa puede dispensar,...y que la [dispensa] que hiciese el Obispo será nula y de ningún efecto".³⁷ En el otorgamiento de las capellanías, no había nada más obvio, según las disposiciones canónicas,

"...que preferir siempre al sacerdote respecto a el que no lo es aunque el beneficio no sea sacerdotal...al Doctor respecto del que no está decorado con tal distinción, y concurriendo dos sacerdotes al más antiguo de ordenes a menos que el otro sea más benemérito al propio sacerdote".³⁸

En Mendoza, en la capellanía fundada en 1738 por el General Manuel Zapata de Mayorga,³⁹ se ordenaba atender para su colación "...a la mayor idoneidad [del candidato]".⁴⁰ En ese sentido, el Pbro. José Lorenzo Güiráldez y Zapata,⁴¹ preguntaba en 1738

"...¿qué idoneidad podrán disputarme los hijos de [Juan Manuel] Paiba, que apenas han entrado en el uso de la razón? ¿podrán compararse unos jóvenes de escuela con quien cursó las clases del Colegio de Buenos Aires, ha dictado en esta dos cursos de Filosofía, cuenta discípulos en el Clero, en los Profesores de la Judicatura y en las primeras Magistraturas que forman el lustre de muchas familias de esta de Mendoza?".⁴²

En el caso de la capellanía de Sinsacate, mandada fundar en Córdoba, en 1699, por el Maestro Bernardo de Vera y Reyna, el Dr. Bernardino Celestino Millán, apoderado del Mro. Gaspar de Trucios y Ordóñez,⁴³ alegaba a fines del siglo XVIII que ella no era "...puramente de sangre como pretende [su primo Juan José de Goyechea y Ordóñez], sino que a más del derecho de Familia exige un complejo de ciertas calidades y requisitos que haya de llenar el Provisto".⁴⁴ De este principio, Millán colegía que

"...en igualdad de grados debe conferirse [la colación] al pariente más expédito para servirla y satisfacer las obligaciones impuestas".⁴⁵ En la capellanía fundada en La Rioja en 1746 por Gerónima Tineo de Peñaloza, viuda de Diego Gutiérrez Gallegos, el Dr. Juan López Cobo argüía que el Maestro Luis Dávila y Gutiérrez poseía mayor preferencia que el Pbro. Juan Ignacio Rodríguez por estar

"...condecorado con el grado de Maestro del que carece su opositor y habiendo probado su instrucción y suficiencia en las materias morales con el exámen que practicó para el curato que obtuvo de Anguinán tiene por mi parte la presunción de que es más literato".⁴⁶

En la capellanía fundada en Córdoba en 1797 por Juan Bautista del Campo y Paz,⁴⁷ fincada sobre la estancia de la Reducción, en jurisdicción del Tucumán, el Promotor Fiscal Eclesiástico creía que el motivo de la prelación del Maestro Francisco Texerina, sobrino del fundador, al patronato de la misma, "...es haber estado más próximo a recibir los sacros ordenes o haberlos recibido".⁴⁸ Por el contrario, el Dr. Pedro Ignacio Acuña,⁴⁹ letrado de los herederos de Micaela del Campo, llamados por la escritura de fundación a ser los patronos de la misma, rebatía las razones del Promotor Fiscal aduciendo que esta prelación se habría dado "...cuando la capellanía que se disputa fuese sacerdotal, o el fundador exigiese en el llamado el presbiterado".⁵⁰ Pero no pudo haberse dado dicha prelación cuando en el llamado sólo se exigía ordenes. Por ordenes, ciertos autores entendían las ordenes menores,⁵¹ y otros autores sólo las ordenes mayores.⁵² Para el canonista español Mostazo o Amostato (1680),⁵³ hablando sobre este punto, "...en esta palabra ordenes se contienen los de menores".⁵⁴ También, en Córdoba, según el Lic. Fernando Pérez de Bulnes,⁵⁵ para recibir la colación bastaba que los aspirantes a capellanes tuvieran "...las ordenes menores y en tiempo oportuno recibir las mayores".⁵⁶ Y, en Buenos Aires, en la capellanía fundada en 1754 por el General Antonio de Larrazábal,⁵⁷ José de San Pedro Lorente, apoderado de sus nietos de apellido Echauri, quien venía litigando en 1775 con el Coronel Manuel Warnes,⁵⁸ acusaba a este último de

"...agitar no solo la efectiva fundación de la capellanía si no el modo y elección de capellanes, estando aún en aptitud de serlo los que por su menor edad dispuso el dueño fuesen con antelación a todos".⁵⁹

Más aún, Warnes, logró del albacea "...el mandar decir las misas, espiritualizando el Patronato que el fundador [Larrazábal] secularizó y quiso fuese siempre laical".⁶⁰ Y en una capellanía fundada en 1803 por el Alférez Tomás Alonso,⁶¹ éste estableció la prioridad de los clérigos seculares con ordenes menores, pues

"...siempre que se presente capellán de la familia para ordenarse, deberá entregársele la enunciada capellanía seis meses antes de ordenarse de subdiácono y es advertencia que siendo como es, esta capellanía lega, y sirviendo como patrimonio para ordenes, cuando fallezca el Sacerdote que la tenga volverá otra vez a entrar en la familia".⁶²

En la capellanía fundada en Buenos Aires en 1780 por Juan Benito y González,⁶³ habiéndose desprendido de la misma en 1809 su sobrino-nieto Manuel José de Elía,⁶⁴ por no haber seguido el estado eclesiástico; su hermana, la viuda de Luis Antonio de Lahitte, María Toribia de Elía, a nombre de uno de sus hijos, Eduardo de Lahitte, reinicia en 1817 un litigio contra su cuñada Genara Warnes,⁶⁵ apoderada de su hijo menor de edad Ramón Constancio de Elía.⁶⁶ El Dr. José Antonino Medina,⁶⁷ letrado de Genara Warnes, había alegado que "...aunque el fundador puede hacer y establecer los llamamientos que quiera y tenga a bien, no puede disponer el orden de sucesión, por que este debe ser el de la ley [mayorazgo]".⁶⁸ A ello replicó el Dr. José Ignacio de Seide, letrado de María Toribia, que este discurso "...contiene el vicio que llaman los lógicos petición de principio, porque supone sin probar

la misma conclusión".⁶⁹ Los llamamientos al goce de una capellanía no eran otra cosa que el orden que debía observarse para suceder en las capellanías. Según González Ruiz, podía darse el caso que en los llamamientos se ordenara alternar en el goce de una capellanía a diferentes líneas de una misma familia.⁷⁰ Lo más original del dictámen del Asesor, resultaba a juicio de Seide, que después de haber supuesto que la capellanía era para los que se preparan o siguen el estado eclesiástico, a fin de que se ordenen a título de ella, "...la declare a favor de un niño de tierna edad [Ramón Elía] que ni se prepara ni sigue el estado eclesiástico, no obstante que esta es la cualidad expresamente privilegiada y preferida por los fundadores".⁷¹

La índole de los beneficiados por capellanías.

No todos los beneficiados por capellanías seguían la carrera eclesiástica, pues muchos la abandonaban durante el ejercicio de las ordenes menores, otros al alcanzar las terceras ordenes o diaconado, y otros más antes de lograr las segundas ordenes o presbiterado.⁷² Entre un orden y otro existía un lapso de tiempo conocido con el nombre de intersticios.⁷³ El Concilio de Trento había dejado librada la duración de dicho espacio de tiempo al arbitrio de los preladados, aunque estableció el período de un año desde las ordenes menores al subdiaconado y desde éste último al presbiterado.⁷⁴ Pero en América, debido a la escasez de clérigos españoles,⁷⁵ los intersticios alcanzaron la mínima expresión. Para el Pbro. Dr. José R. Núñez de Bravo, en la capellanía mandada fundar en Córdoba en 1763 por Estanislao Quinteros, para que una capellanía fuere tenida por sacerdotal debía requerirse al tiempo de la presentación que el capellán fuera in actu sacerdote.⁷⁶

Por el contrario, para Casimiro González, apoderado de Francisco Ignacio Cabrera,⁷⁷ un aspirante a la capellanía de Quinteros, si ella hubiere sido sólo para eclesiásticos hechos,⁷⁸ habría echado por tierra todas las determinaciones canónicas,⁷⁹ y para el Lic. Fernando Pérez de Bulnes, representando también los derechos de Cabrera, por ser la capellanía de naturaleza eclesiástica debía servir de título para ordenes,⁸⁰ y dado que los opositores o concursantes estaban en vías al sacerdocio "...todos pueden optar este derecho y no precisamente el que es actualmente sacerdote".⁸¹ Querer que el beneficiado fuere actualmente sacerdote era para Bulnes eludir no sólo la Ley del Tridentino sino también exigir que en las ordenes no hubiere intersticios, "...que es otra ley como la primera, y que el más próximo en el grado de parentesco sea excluido del derecho que le dá la fundación, por no ser sacerdote".⁸² Sería de desear, expresaba Casimiro González, que Núñez

"...nos presentase un exemplar de eclesiástico que haya recibido los ordenes sacros sin título y con sola la esperanza de que alguno puede venirlos después por ser ya lo que son; y por este motivo, sin mirar las razones de las leyes, para conceder el goce de estas capellanías".⁸³

Y en el caso litigado en Córdoba, por Tadeo Salguero,⁸⁴ el Fiscal Eclesiástico Dr. José Gregorio Baygorri,⁸⁵ de inclinaciones Funesistas y unitarias,⁸⁶ dictaminó en 1790 "...que siendo el beneficio accesorio al oficio, no puede renunciarse este sin renunciarse aquel, ni puede retenerse aquel, sin que este se retenga".⁸⁷ Una de las primeras calidades que debía tener el beneficiado era que fuere clérigo. Ninguno que no llevare la tonsura y el hábito "...puede obtener capellanía o beneficio eclesiástico, porque sólo el clérigo es capaz de un beneficio de esta naturaleza".⁸⁸ Pero no bastará, dicen los canonistas, "...que el beneficiado traiga hábito clerical, sino que es necesario que tenga también a lo menos la primera tonsura".⁸⁹ La tonsura era una disposición para las ordenes, por la cual quedaba uno incorporado al estado clerical. La Constitución 38 del Papa Sixto V mandaba que al tiempo de la colación de los beneficios "...sean actualmente clérigos los que hubieron de obtenerlos, trayendo el ábito clerical y la tonsura y que no siendo así la colación era nula".⁹⁰ Sobre esta misma Constitución, García (1618) añadía que para privar a alguien de los beneficios o pensiones

"...no es necesario el elapso de algún cierto tiempo, si no que se incurre en ella por el mismo echo de que alguno se traiga en el público sin el hábito clerical sobredicho, esto es sin la tonsura, y vestidos talarés".⁹¹

En opinión de los canonistas García (1618) y Van Espen (1778), las capellanías pedían residencia personal "...cuando a más de las misas tienen también por su institución el de ayudar al Párroco en el canto o en otros semejantes ejercicios".⁹² Para el Dr. Baygorrí, si el capellán debía ayudar al Párroco en los días festivos y solemnes, estaba obligado a la residencia; y si lo debía ayudar en el Altar no sólo estaba obligado a residir sino también a procurarse las Ordenes Mayores.⁹³ Más precisamente, en una ciudad como Córdoba, donde la vida universitaria permeaba casi toda la vida social, Baygorrí llegó a establecer cláusulas más exigentes. El beneficiado que recibía el beneficio

"...solo con el ánimo de sustentarse con los frutos de él hasta haber cumplido el Curso o cursos de estudio o de hacerse más opulento peca mortalmente, y no puede en buena conciencia retener el beneficio con este fin".⁹⁴

En opinión de los canonistas Lessius (1613), Navarro (1722), y Concina (1764), citados por Baygorrí, quien retuviere un beneficio con dicho mezquino fin estaba "...obligado a restituir los frutos que percibió todo el tiempo que tubo el beneficio con este fin".⁹⁵ En el caso protagonizado en Buenos Aires por María Eusebia García de Zúñiga,⁹⁶ viuda de Juan Angel Lascano, el primer capellán nombrado en 1797 fué su hijo Prudencio Lascano,⁹⁷ que en aquel entonces aspiraba al sacerdocio.⁹⁸ Pero habiendo contraído matrimonio en 1807, en Santiago de Chile, dejó de poseerla y por lo tanto desde esa fecha debía considerarse a la capellanía vacante. Siguiendo el orden de llamamiento debió entrar al goce de la capellanía Juan Eustaquio Lascano, pero como éste siguió la carrera de las armas en los reinos de España, donde en 1806 falleció en la batalla de Baylén, sólo podían disfrutarla sus nietos, hijos de su hija Josefa Gabriela Lascano, mujer del Contador y Administrador de la Aduana Juan José Núñez Vaamonde.⁹⁹ Pero de los tres nietos, sólo Enrique José Núñez fué posesionado de la misma por cuanto al hallarse cursando Filosofía en el Real Colegio de San Carlos era el único que podía aspirar a recibir las ordenes sagradas.¹⁰⁰ Quince años más tarde, en 1813, Rita Smerlin,¹⁰¹ fundó una capellanía a favor del joven José Francisco Vélez, dejando bien entendido "...que no podrá disfrutar de su renta hasta que no se halla ordenado de tonsura y cuatro grados".¹⁰² Al año siguiente, en 1814, el Pbro. Manuel Antonio de Castro y Careaga,¹⁰³ fundó una capellanía a favor de la ordenación de Juan Pablo Canicoba,¹⁰⁴ con la pensión de decir tres misas anualmente los 25 de diciembre, día de Nuestra Señora de las Mercedes, y los 24 de septiembre, día del Patrocinio de San José, estableciendo como condición que

"...si este no se ordenare entraran al goze mis parientes barones, primero los consanguíneos y después los afines...y si no hubiere parientes consanguíneos llamo al goze de la capellanía en primer lugar a los naturales de Santo Domingo Soriano y en segundo lugar a los de la Piedad".¹⁰⁵

Criterios adoptados para elegir al patrono y/o al capellán.

Entre los criterios a adoptar para elegir al patrono y/o al capellán también se esgrimió el principio de la equidad. En el pleito suscitado en Córdoba por la capellanía de Sinsacate fundada en 1699 por Bernardo de Vera y Reyna, entre sus sobrinos-nietos Gaspar de Trucios y Ordóñez y Juan José de Goyechea y Ordóñez, el Dr. Bernardino Celestino Millán, apoderado de Trucios, alegaba que

mientras su poderdante --a más de "...mayoría de edad, antigüedad de ordenes, igualdad en parentesco, y residencia en esta Capital"-- padecía de "estado de inopia", su opositor Goyechea estaba "...facultado con abundancia y premiado por la Iglesia".¹⁰⁶ Por el contrario, el Dr. Gaspar Lozano, apoderado de Juan José de Goyechea y Ordóñez, alegaba en 1797 que la justicia disponía

"...que no se ha de quitar al rico para darle al Pobre, ni a este para engrosar a aquel, que entonces [la justicia] no sería distributiva, y sí impartida por afección de personas y aparentes figurados motivos de conveniencia".¹⁰⁷

Y en el litigio entablado a comienzos del siglo XIX entre los concursantes José Gabriel Echenique,¹⁰⁸ Juan Gerónimo Moyano,¹⁰⁹ Tadeo Salguero de Cabrera, y el Rector del Colegio Real de Loreto Leopoldo de Allende y Moyano,¹¹⁰ a la capellanía fundada en 1645 por Antonia de Cabrera,¹¹¹ viuda de Miguel de Ardiles,¹¹² no se le ocultaba al Fiscal Eclesiástico Dr. José Gregorio Baygorri el mérito de la pobreza como causa prelativa, pues tenía a la vista la obra del anteriormente citado canonista Mostazo, para quien "...en concurso de un rico con un pobre igualmente idóneo, debe el segundo preferirse al primero",¹¹³ no así en los beneficios curados o que tengan cura de almas.

Las condiciones impuestas en las capellanías podían ser incumplidas tanto por los fundadores y patronos como por los beneficiados. Cuando no eran cumplidas por los beneficiados, los fundadores mismos y/o sus patronos solían gestionar la anulación o pérdida de la misma o la extracción de los fondos. Los beneficios eclesiásticos se perdían ipso iure en caso de incurrir los beneficiados en los delitos de apostasía, herejía, simonía, homicidio, pluralidad de beneficios, incompatibilidad, y abandono; y por sentencia judicial en los casos de abandono, embriaguez, juego o usura. En 1783, Juan de Lezica y Torrezuri le otorgó un poder a Antonio Bilbao y la Vieja, un vecino de La Paz, para solicitar

"...se extraigan de donde quiera que se hallen aplicados \$3.000 que en aquella ciudad impuse a cargo de los ex-jesuitas para el piadoso fin de dar ejercicios espirituales, mediante a que tengo entendido que el Ilustrísimo Obispo de aquella ciudad aplicó dicha imposición para otras obras pías sin mi consentimieto y lexos de mi intención, que soy el fundador".¹¹⁴

Más aún, cuando los albaceas o patronos, descendientes de un fundador de capellanías, alteraban las cláusulas condicionantes de una fundación solían dar lugar a demandas y anulaciones judiciales. En 1770, Josefa Bustamante, hija y heredera de Gaspar de Bustamante,¹¹⁵ y viuda del Coronel José Martínez Fontes, demandó al albacea de su padre, el Dr. Facundo Prieto y Pulido, por haber alterado la escritura de fundación al nombrar por capellán de la fundación al Convento de Santo Domingo.¹¹⁶ En casos de incumplimiento más grave, las fundaciones de capellanías llegaron a revocarse. José Díaz revocó en 1813 la capellanía fundada a favor de las Monjas Capuchinas de Santa Clara y otorgó una nueva.¹¹⁷ El Pbro. Ignacio Noble Canelas,¹¹⁸ solicitó en 1762 al Deán Provisor de la Catedral de Córdoba que su primo hermano el capellán Antonio González Vidal Noble Cortés pierda la capellanía fundada por Manuel Noble Canelas,¹¹⁹ y fuera debidamente multado.¹²⁰ Desde el momento que había conseguido las ordenes sagradas, el capellán Vidal a más de no hacer otra cosa "...que abandonarlo todo y aún ausentarse a la de Buenos Aires por tiempo de dos años más o menos...tampoco ha cumplido con la otra carga y obligación de decir las misas".¹²¹ Si bien Vidal le había dado algunos recibos de misas, el Pbro. Ignacio Noble dudaba de la autenticidad de los mismos.

Cuando por el contrario, el que no cumplía con los compromisos asumidos era el fundador de la capellanía o su patrono, los eventuales beneficiarios debían demandar la colación e institución de la capellanía, o en su defecto trabar embargo en los bienes del fundador y/o patrono. En 1752, Félix de

Esquivel,¹²² otorgó en Buenos Aires un poder a Martín Cumplido para que demandara para el hijo de su primer matrimonio, Antonio Esquivel, las capellanías que le pertenecían, existentes en España, por fallecimiento de su tío Juan.¹²³ Diez años más tarde, en 1761, el Capellán del Santuario de Nuestra Señora de Luján Dr. Carlos José Bejarano,¹²⁴ demandó a Francisco Flores los réditos de una capellanía de \$1.400 de principal, fundada sesenta años atrás, en 1701.¹²⁵ Otros diez años después, en 1770, el Dr. Miguel Antonio Escudero y Cossio,¹²⁶ otorgó un poder al comerciante y estanciero Felipe Arguibel para que se presentase ante el Tribunal Eclesiástico de Buenos Aires "...pidiendo que a mi nombre se les dé colación y canónica institución de la capellanía que fundó Antonio Barragán".¹²⁷

Este último había fundado la capellanía sobre una estancia ubicada en Luján, que había sido de Juan Bautista Herrera de los Ríos y Lóyzaga.¹²⁸ Tres años más tarde, en 1773, el Provisor y Vicario General Juan Baltasar Maciel, a pedimento del Capellán de la Iglesia de San Isidro, trabó embargo a la fundadora de la correspondiente capellanía, Tomasa Acasuso, por los \$2.000 que estaban afincados sobre su casa.¹²⁹ Quince años después, en 1787, el Mro. Narciso Cabral puso demanda en Buenos Aires al Cap. Francisco Piera,¹³⁰ propietario de una casa gravada con una capellanía por valor de \$2.020, por adeudarle los réditos caídos "...correspondientes a 17 años en que no se dignó avisarme de mi derecho".¹³¹ En 1797, el Pbro. José León Planchón,¹³² demandó a Gaspar de Santa Coloma los intereses de una capellanía fundada por su tía materna María Antonia Illarradi y del Barranco.¹³³ A fines de siglo, en 1799, el Cura colado y Vicario de la Doctrina de Carasa Pbro. Juan José Rodríguez Pestaña reclamó en Buenos Aires de su tío materno el Capitán de Dragones Juan Amaro Pestaña,¹³⁴ los intereses recaudados pertenecientes a una capellanía de \$2.000, fundada en 1784 por el Teniente Francisco Sánchez, sobre las casas de su tía Josefa Gabriela Rodríguez,¹³⁵ existentes en Montevideo.¹³⁶ A comienzos del siglo XIX, en 1802, el Pbro. Juan Tomás Rodríguez,¹³⁷ solicitó judicialmente a su tío Julián Clemente Rodríguez,¹³⁸ patrono de las pías memorias que mandara fundar en Buenos Aires su bisabuelo Domingo González Cabezas,¹³⁹ los réditos correspondientes a cuatro capellanías en las que había sido nombrado capellán.¹⁴⁰ Prescindiendo de la legitimidad del nombramiento de capellán a su favor, Julián Rodríguez alegaba por intermedio del Dr. Seide, que su sobrino debió acudir al Juez Eclesiástico "...haciendo constar hallarse ordenado para recibir la colación y canónica institución de esas capellanías, desde cuio acto y el de su posesión era que podría tener acción a sus frutos y rentas".¹⁴¹ En esta clase de capellanías, sostenía Seide,

"...que no son hereditarias, ni tienen llamamientos fijos, sino electivas ad libitum de los Patronos, en sujetos aptos en la actualidad de su nombramiento para cumplir las cargas de ellas, desde cuio tiempo es que pueden perceber no todos los frutos, sino las quotas que les correspondan con arreglo a la fundación dejada a arbitrio del Patrono".¹⁴²

Aunque el capellán hubiere cumplido con todas las providencias, Seide agregaba que sólo tendría acción

"...a la cantidad [de pesos] correspondiente al número de misas que hubiese celebrado haciendo constar éstas al Patrono, y otorgando de sus estipendios el correspondiente recibo, y no a todas las rentas o réditos de las capellanías".¹⁴³

En esta clase de memorias de misas o legados píos, concluía Seide, "...en que los capellanes son amovibles *ad nutum* del Patrono, no tiene más obligación este que contribuir a aquellos [capellanes] los respectivos estipendios de las misas que celebrasen, quedando a su favor el superavit, para subvenir a las cargas anexas al Patronato".¹⁴⁴

En vísperas de la revolución de independencia, en 1809, el Dr. Pedro José Denis,¹⁴⁵ demandó

en Buenos Aires a Miguel Planes,¹⁴⁶ dueño de una casa-panadería, por el cobro de los réditos de una capellanía fundada por su tío abuelo el Dr. Francisco de Cossio y Terán,¹⁴⁷ situada o fundada en la casa de Planes.¹⁴⁸ Una década más tarde, en 1819, el hijo de Miguel Planes, el Pbro. Dr. Saturnino Planes,¹⁴⁹ le inició a su propio padre una acción ejecutiva por los réditos vencidos de una capellanía impuesta a su favor sobre la casa-panadería de su propiedad.¹⁵⁰ En represalia, su padre alegaba, con el patrocinio letrado del Dr. Miguel García de la Huerta, que estando "...en una edad avanzada, cerca de ochenta años, sin entretenimiento ni ejercicio lucrativo alguno ni en aptitud de poderlo practicar, debiendo el referido mi hijo por tan dobles obligaciones, respetarme, atenderme, y alimentarme, cumpliendo con el 4o. precepto del Decálogo",¹⁵¹

no sólo como hijo legítimo "...sino también como eclesiástico y de conocimientos en la moral",¹⁵² tan lejos de llenar estos deberes, "...es el que más se interesa en mi destrucción, en mi ruina, en mi oprobio, y en las continuas afrentas, con que sin intermisión me dilacera".¹⁵³ En 1812, como el Pbro. José Reyna,¹⁵⁴ reclamaba los réditos de su capellanía, el Gobierno se la suprimió otorgándosela en su lugar al Dr. José Luis Planchón.¹⁵⁵ En 1815, como el Pbro. Lucas Ruiz Cuenca,¹⁵⁶ reclamó por las obligaciones que se le impusieron en la capellanía fundada por Tomás de Balanzátegui a beneficio de los presos de la cárcel porteña, el Gobierno nombró en su lugar a Fr. Francisco Castañeda.¹⁵⁷ Al año siguiente, este último cedió a favor de la Escuela de Dibujo sus honorarios como capellán de la Cárcel.¹⁵⁸ En 1831, Ignacio Delgado, el hijo mayor de Martiniano Delgado,¹⁵⁹ demandó a su hermano menor Leandro por los réditos de una capellanía fundada por su tío carnal el Pbro. Juan Antonio Delgado.¹⁶⁰ A mediados del siglo XIX, en 1857, Máximo Espinosa solicitó vista de los autos entre Francisco Saraza y Buenaventura Gallegos para ejercer su derecho a percibir intereses de tres capellanías.¹⁶¹ E incluso a fines del siglo pasado, en 1889, Juana Aráoz de Lamadrid solicitó la entrega de los réditos de una capellanía fundada en 1846 por su abuelo materno Julián González Salomón.¹⁶²

Condiciones en que debían celebrarse las misas.

El lugar, los días, las horas y el rito o etiqueta en que debían celebrarse las misas contempladas en la obligaciones capellánicas revistieron también una importancia determinante en el origen de muchos conflictos, que en varios casos compitió con otros objetivos como los de proveer los medios para que sus beneficiados alcanzasen las ordenes sagradas. En el caso de la capellanía fundada en 1773 por el Provisor y Vicario General del Obispado de Buenos Aires Dr. Juan Baltasar Maciel, albacea de María Josefa Bazurco,¹⁶³ a favor del alma del Lic. Francisco Díaz Olivera, el capellán habría de servirla bajo la condición de

"...ponerse capa en las festividades que hubiere caperos, y acompañar a los Predicadores hasta el púlpito, y antes al coro todos los días a rezar el oficio divino por la tarde y la mañana con cuya pensión le releva de la carga de misas".¹⁶⁴

Las cláusulas condicionantes o pensiones para entrar al goce de las capellanías eran de una gran variedad, por lo general consistían en el dictado de misas que podían ser rezadas o cantadas, y que oscilaban en número entre 3 y 24 misas anuales, al estipendio promedio de \$3 cada misa, \$5 si se trataba de una misa en una capilla rural, o \$6 1/2 si se trataba de una misa cantada, o \$13 1/2 si se trataba de un novenario. En el caso de la capellanía fundada en Buenos Aires, en 1817, por Fr. Salvador Sosa,¹⁶⁵ \$2 iban a la comunidad de Santo Domingo y \$1 al que dijere la misa.¹⁶⁶ En 1752, el Deán Gabriel Ponce de León,¹⁶⁷ dejó una capellanía --fundada en Córdoba en 1700 por Sebastián González-- al Mro. Gabriel de Bracamonte,¹⁶⁸ con la condición que la Novena del Corazón de Jesús

"...sea consecutiva a la misa para que logren del beneficio de oír la todas las personas que por su

pobreza y menos decencia no pueden concurrir a visitar al Santísimo y a la Novena, que se practica hacer a la tarde después de las Vísperas solemnes".¹⁶⁹

El Dr. Diego Estanislao de Zavaleta,¹⁷⁰ fundó en Buenos Aires en 1793 una capellanía con la pensión de decir una docena de misas rezadas en el altar de San Pedro, que se veneraba en la Iglesia Catedral.¹⁷¹ El Tesorero Juan de Lagrave fundó el mismo año de 1793, como albacea del Pbro. Lucas Rodríguez, una capellanía con la pensión de decir una misa rezada en la Iglesia del Convento Betlemítico todos los días festivos del año, a favor del "...sacerdote europeo más necesitado que se hallase en esta capital y en particular del reino de Galicia".¹⁷² En San Juan, Clemente Jofré mandó cesar el pago de los réditos de la Capellanía que fundara para sufragio de las almas del Purgatorio y que servía el Pbro. Francisco Antonio Cano, por no celebrarse las misas en la cárcel de la ciudad. Pese a haber cesado en el cobro de los correspondientes réditos, el Pbro. Cano alegaba que sus superiores lo obligaban a seguir oficiando las misas. Sin embargo, el expediente concluye por afirmar que la queja carecía de fundamento por cuanto "...los moralistas y canonistas dicen que el Capellán que no percibe frutos no está obligado a decir las Misas por ser esta carga adherente a aquellas".¹⁷³

Otros motivos en el origen de los conflictos.

Entre otros motivos conocidos como origen de conflictos estaban también las aspiraciones jerárquicas insatisfechas, los albaceazgos y actos de última voluntad, y el reparto entre el clero de las oblacones que los fieles hacían a las parroquias. En el caso del Canónigo Gregorio Funes, en su afán por ascender en la jerarquía eclesiástica, este escribía en 1804 a su agente de negocios en Madrid, Joaquín Juan de Flores, para que llegado el caso de la vacante de Tucumán "...Vd. apure todos los recursos de su favor a fin de que se me dé a mí", previniéndole que la misma vacante estaba siendo solicitada "con desmedido empeño...por mi más fiero enemigo", el Obispo del Paraguay Nicolás Videla del Pino.¹⁷⁴ En el caso del fallecimiento del Comandante del primer regimiento de Milicias del Tucumán Don Diego Ignacio Aráoz y del Campo,¹⁷⁵ ocurrido en Tucumán, su hijo el Cura Vicario de Monteros Diego Miguel Aráoz,¹⁷⁶ entorpeció el cumplimiento de sus dos testamentos sobornando al Subdelegado de Real Hacienda y al abogado fiscal, "...de manera que ocultando bienes y abultando costos y gastos, bino a quedarse...con 6 o 7 mil pesos que importan los bienes".¹⁷⁷ De éste ocultamiento dimanaban, según su otro hijo Pedro Antonio Aráoz, "...todas las iniquidades que a cometido dicho mi hermano, como tengo suficientemente alegado en autos".¹⁷⁸ Habiendo justificado Pedro Antonio la cría de yeguas que dejó su padre cuando falleció, declaró que de dichas yeguas dimanaban

"...las mulas que este Subdelegado tiene embargadas, como la cría de Bacas bastante número, una y otra especie se hizo dueño el prefijado mi hermano sin llamarnos a los herederos, ni contar, ni saber las cantidades con todo el derecho de las marcas, las que ocultó en los inventarios que hizo".¹⁷⁹

De forma similar, en Buenos Aires, algunos de los herederos de Joaquín Cabot y Montaner,¹⁸⁰ fallecido en 1801, se quejaban al Gobierno en 1817, que el Pbro. Cayetano Escolá,¹⁸¹ sobrino del finado, y elegido por sus herederos como Administrador de la testamentaría,

"...desde que recibió los bienes en administración, ya no trató sino de conservar en ella, hacerse de propios, y aumentarlos con aquellos, entorpecer y dilatar la conclusión de la Testamentaría, y disfrutar de todo sin regla ni medida, y a costa del sacrificio de los herederos".¹⁸²

Según los herederos, Escolá "...no ha dado paso en que no haya acreditado los deseos que le animan de vivir, gastar, y triunfar a costa nuestra".¹⁸³ Los incesantes y repetidos clamores fueron vanos, pues

"...ha tenido arte para seducir y sorprender; y a fuerzas de ardides y de intrigas ha frustrado las repetidas instancias que hemos hecho para que se le quite la administración, como medio único de poner término a esta envejecida Testamentaría".¹⁸⁴

También se originaron conflictos con motivo de la distribución de las oblacones que los fieles hacían a las parroquias. La cuarta canónica o episcopal consistía en la cuarta parte de todas las oblacones, principalmente de aquellas que se hacían con motivo de excequias o funerales.¹⁸⁵ En Catamarca, el Pbro. Pedro Ignacio de Arze, pariente afínico de Francisco Acuña, se había echado encima en 1804 a sus propios parientes, los miembros de la casa de los Acuñas, por cuanto como prelado había iniciado ante la Curia Eclesiástica de Salta un expediente contra Gregorio Ruza,¹⁸⁶ quien "...no quiere entregar un testamento en que se interesa la cuarta canónica, que corre a mi cargo exigir".¹⁸⁷

En conclusión, del estudio de las capellanías vigentes en Buenos Aires y el interior, surge a las claras a lo largo de los siglos XVIII y XIX una inestabilidad muy pronunciada en la composición de su elite, y en la consistencia de status de sus miembros, que hacía de los estigmas del clérigo mestizo, del letrado no clérigo y del clérigo sin congrua instrumentos envidiables de lucha política. Es indudable que dichos estigmas, manipulados por los estamentos colonialistas, deben haber alimentado profundos resentimientos, no siempre expresos, que al acumularse no hicieron mas que madurar la conciencia social de aquellos miembros marginados de la elite y a su vez presionar la inevitable crisis revolucionaria de comienzos y mediados del siglo XIX.

NOTAS

¹ Justo, 1945, 145-227; Bagú, 1949, 80 y 89; y Choy, 1985, 247.

² Pedro Peralta y Barnuevo: "Relación del Virrey Castelfuerte", citada por Choy, 1985, 263. Si bien con la fundación del Virreinato del Río de la Plata aumentaron enormemente la oferta de puestos públicos, también es cierto que la mayor parte de los cargos mejor rentados era cubierto por peninsulares y no por graduados en las Universidades americanas. Si esto último fué cierto, ello explicaría porqué el número de graduados en Universidades americanas habría superado el número de posiciones de élite vacantes en el aparato burocrático del estado colonial.

³ Mayo, 1991, 53.

⁴ en 1794 Buenos Aires contaba con 136 clérigos, la mayoría de los cuales "...vivía anhelando prebendas", sobre un total de 40.000 habitantes, es decir, un promedio de tres (3) clérigos cada mil habitantes (Azara, 1850, 1982, 24; Besio Moreno, 1939, 394; y Carbia, 1945, 27).

⁵ Por "calidad" se entendía en ese entonces la combinación del status racial, la legitimidad del nacimiento, los servicios prestados por sus padres y antepasados a la corona; y su condición de "beneméritos" (Gutiérrez, 1980, 100, citado por McCaa, 1984, 478, nota 3).

⁶ Terrero, 1926, 69-70, citado por García, 1961, 118.

⁷ Ingenieros, 1918, I, 122 y 284.

⁸ Piaggio, 1912, 42.

⁹ Carbia, 1945, 23. Debo esta valiosa referencia bibliográfica a la generosidad del distinguido colega Néstor Tomás Auza.

¹⁰ Zorraquín, 1961, 53.

¹¹ Halperín Donghi, 1979, 192.

¹² Avellá Cháfer, 1981, 303.

¹³ Sabemos que en 1810, de los 10 clérigos que apoyaron en el Cabildo Abierto del 22 de mayo al "partido del pueblo", seis de ellos (Sáenz, Aparicio, Fonseca, Silva, Grela, y Vieytes) provenían por vía materna de antiguas familias criollas con probable mestizaje con indios o mulatos y dos carecían de sólidos datos familiares (Torres y Ramírez); de los siete que apoyaron al Virrey, cuatro de ellos (Alvarez, San Nicolás, Santibáñez, y Cortinas) no contaban con antecedentes familiares; y de los seis clérigos que votaron con la tendencia conciliadora tres (Solá, Alberti y Ferragut) contaban con probable mestizaje; así como dos clérigos (Agüero y Montes Carvallo) de los tres que se retiraron sin votar. Y de los 17 clérigos cuyas licencias para confesar fueron suspendidas en 1816 por su filiación realista, ocho de ellos (Conde, López, Fuentes, Acosta, Martínez, Blanco, Rodríguez, y Urizar) contaban con un probable mestizaje. Los otros nueve clérigos (Ferragut Maciel, Viola Ibáñez, Reyna Cáceres, Gainza Sánchez de Loria, Colina Oro, Rivarola Villa, Pereda Saravia, y Somellera Gutiérrez), eran criollos que provenían por vía materna de antiguas familias criollas con probable mestizaje con indios o mulatos (Corbellini, 1950, II, 213).

¹⁴ Ver Saguier, 1992a, 1992b, y 1992c.

¹⁵ eclesiásticos nombrados en los sínodos diocesanos, a propuesta de los obispos, para calificar la ciencia y demás cualidades de los concurrentes a curatos e intervenir en la remoción de párrocos. No podían ser menos de 4 ni más de 12 y debían tener grado de maestro, doctor o licenciado en Teología o Derecho Canónico (Enciclopedia Espasa, t.56, p.650).

¹⁶ tenían facultad para dispensar irregularidades en materia de Limpieza de Sangre y revalidar beneficios mal adquiridos.

¹⁷ El estado de este Archivo es lamentable, no tanto por las deficiencias físicas como por la incuria e ignorancia de sus actuales autoridades.

¹⁸ de ahora en más identificado con las siglas AAC, cuyas copias en microfilm se hallan en el Centro de Historia Familiar (CHF), perteneciente a la Genealogical Society of Salt Lake City, Utah, de la Granite Mountain Record, y en su filial de Buenos Aires ubicada en la sede-Archivo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, también de ahora en más identificado con las siglas CHF.

¹⁹ Para aquellos interesados en incursionar en el derecho canónico las obras de los canonistas Cabassutius (1725), García (1735), Gibert (1735), Luca (1758), Gohard (1765), Dupin (1768), Van Espen (1778), Reiffenstuel (1755), Berardi (1791), Blanco (1798), Devoti (1830), Schmalzgrueber (1843), Golmayo (1866), Gómez Salazar (1883), Tardif (1887), Liberatore (1888) y Ojetti (1904-05), existen en nuestra Biblioteca Nacional; las de Cavalario (1848), Maschat (1865), Selvaggio (1846), Morales y Alonso (1903), Paso y Delgado (1874) y Friedberg (1893), en la Biblioteca de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires; y las de Schulte (1875-80), De

Angelis (1877-91), Icart (1867), Soglia (1843, 1859-60), Tarquini (1852,1868,1873,1890), Donoso (1909), Cavagnis (1888), Craisson (1865-80), Giraldi (1769), Wernz-Vidal (1938), Lega (1896), Gasparri (1893), Mothon (1924) y Rivet (1914), existen en la Biblioteca Popular San José, del Colegio Máximo de la Compañía de Jesús, en San Miguel, Provincia de Buenos Aires.

²⁰ entre ellos los trabajos de Calvo, Cornejo, Luque Colombres, Crespo Naón, Lazcano Colodrero, Jáuregui Rueda, Vásquez Mansilla y Avellá-Cháfer, estos cuatro últimos identificados de ahora en más con las siglas LC, JR, VM y A-CH.

²¹ El fichaje de los testamentos porteños de los siglos XVII y XVIII fueron facilitados por mí al Sr. Hugo Fernández de Burzaco --por intermedio del investigador y colega Jorge Zenarruza-- quien los aprovechara con mi autorización para su valiosa obra denominada "Aportes Biogenealógicos para un Padrón de habitantes del Río de la Plata", la cual identificaremos de ahora en más con las siglas FB.

²² acerca de la exclusión de los frailes de los cuerpos electivos o de la voz pasiva durante la Reforma Eclesiástica de Rivadavia, ver Gallardo, 1962, 105-133.

²³ Avellá Cháfer logró detectar un caso de elecciones y tres de oposiciones para cubrir vacantes de curatos (Avellá Cháfer, 1983, 89, 99, 186 y 289).

²⁴ Congrua era la porción de renta o frutos que se consideraba necesaria para la decorosa sustentación de un ordenado in sacris. Para ser ordenado era necesario acreditar que se poseía la congrua pertinente.

²⁵ Enciclopedia Universal Ilustrada (Madrid: Espasa-Calpe), t.68, p.1669.

²⁶ González Ruiz, 1950, 477.

²⁷ Saguier, 1992a, 1992b y 1992c.

²⁸ acto de elegir un beneficiario de una capellanía lega con anterioridad a su colación.

²⁹ acto de conferir canónicamente un beneficio eclesiástico.

³⁰ Una Bula del Papa Urbano IV, de 1268, motivada por el deseo de reforzar los núcleos de familias pudientes italianas contra la preponderancia del Imperio Alemán autorizó a los clérigos regulares participar de las capellanías.

³¹ Córdova-Bello, 1975, 304, 307 y 308.

³² Olaechea Labayén, 1975.

³³ Robinson, 1979, 284, nota 13.

³⁴ En los concursos de curatos se debía expresar con individualidad y especificación "...todos los méritos, idoneidad y circunstancias de los propuestos, cuales son: la edad, su oriundez, con expresión de provincia y reino, ser nacido de legítimo matrimonio, los años de estudios, los beneficios y demás destinos en que habían servido a la Iglesia, con declaración del tiempo en que cada uno se hubieren ocupado, y de la conducta y celo, como de la vida y ejemplo, con que se habían acreditado las ordenes

de epístola o evangelio; los grados, que obtengan y la facultad o facultades que profesan; las oposiciones y demás actos literarios que hayan tenido con aprobación; la naturaleza, clase o distinción de sus Padres, honores que hayan obtenido y servicios que hayan hecho a S.M., o a beneficio de la tierra" (AAC, Concursos a Curatos y Oposiciones, Leg.25, t.I [Microfilm 5630, del CHF]). Según Auza (1979), luego de la independencia, los concursos de curatos se hicieron cada vez más esporádicos (Auza, 1979, 70).

³⁵ "...nullus prima tonsura instiatur, aut etiam minoribus ordinibus constituitur, ante decimum quantum annum benefituum obtinere pocit (Concilio de Trento, Sec.23, cap.6 de reform.)" (AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.I [Microfilm 2680, del CHF]).

³⁶ ver Molina, 1991, 72.

³⁷ AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.I (Microfilm 2680, del CHF).

³⁸ AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.I, fs.45v. (Microfilm 2680, del CHF).

³⁹ Corregidor de Mendoza entre 1730 y 1731, hijo del Capitán Manuel Zapata de Mayorga y de Damiana de Molina Basconcelos; marido de Cecilia Pintos y Almada; cuñado de Juan de Oro Lizarraburu; y suegro de Sebastián Pérez de Asiain, Francisco de Espinoza y Ventura Ladrón de Gueara (AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.III, fs.5 [Microfilm 2664, del CHF]; y Morales Guinazú, 1939, 351).

⁴⁰ AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.III, fs.5 (Microfilm 2664, del CHF).

⁴¹ hijo de Fernando Güiráldez y de Isabel Zapata, y nieto del Capitán José Ignacio Zapata y de Josefa Yepes Castellanos (AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.III, fs.5 [Microfilm 2664, del CHF]; y Morales Guinazú, 1939, 354).

⁴² AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.III, fs.5 (Microfilm 2664, del CHF).

⁴³ nieto de Gerónima Herrera, sobrino del R.P. Fernando Ordóñez, y sobrino-nieto del Mro. Matías Ordóñez (AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.II, fs.30 [Microfilm 2679, del CHF]).

⁴⁴ AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.II, fs.30 (Microfilm 2679, del CHF).

⁴⁵ *Ibíd.*

⁴⁶ AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.IV, fs.86 (Microfilm 2668, del CHF).

⁴⁷ hijo de Bernardo del Campo y de Andrea de Paz y Figueroa; marido de Juana Medina, hija de Juan de Medina y de Catalina de Artaza; y tío de Micaela del Campo y Orna, viuda de Francisco Neyroto (AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.XI [Microfilm 5621, del CHF]).

⁴⁸ AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.XI (Microfilm 5621, del CHF).

⁴⁹ alumno de Victorino Rodríguez (Luque Colombres, 1945, 27, nota 51).

⁵⁰ AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.XI (Microfilm 5621, del CHF).

⁵¹ Ostiariado, acolitado y lectorado.

⁵² subdiaconado o epístola, diaconado o evangelio y presbiterado. Llevaban anexo el voto de perpetua castidad, y para alcanzar dichas ordenes se requería de una Información de Limpieza de Sangre (Escriche, 1863, 1359).

⁵³ funcionario eclesiástico en las Villas de Colmenar Viejo y Vallecas, cercanas a Madrid, autor de la obra *De Causis piis.*, editada por Antonii Gundisalvi en 1680, y reeditada con correcciones en Venecia en 1698, 1715 y 1735; en Lyon en 1686, 1710, 1717 y 1733; y en Roma en 1725 y 1739 (Palau, 1957, X, 282; y Lobies, 1975, IV, n.3790). El título *De Causis Piis* está tomado de un capítulo del Código de Derecho Canónico. Las ediciones Venecianas se encuentran citadas en el Catálogo de la Biblioteca del Museo Británico y en la de la Bayerische Staatsbibliothek, correspondiente al Estado de Baviera, y la de Lyon de 1733 en el Catálogo de la Biblioteca Nacional de París y en el de la Biblioteca del Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis, de Ciudad del Vaticano. El Catálogo de la Biblioteca del Congreso de Washington no registra edición alguna de este autor. Mostazo o Amostato sufrió en su apellido sucesivas modificaciones. Primero se lo conoció en América (Córdoba y Buenos Aires), durante el siglo XVIII, con el nombre de Amostato o Amostaso (Levene, 1950, 35). Al conocerse en Alemania sólo las ediciones romanas y venecianas, Hurter (1926) creyó que este autor era itálico, motivo por el cual le agregó al apellido Mostazo una zeta más (Hurter, 1910-26, IV, 1293). Por último, en el Vaticano, se lo catalogó como Francisci Amostazo, a partir de la edición de Lyon de 1733. Debo parte de esta información al Profesor Gerardo Losada, bibliotecario del Colegio Máximo San José, en San Miguel, Provincia de Buenos Aires, al R.P. Herranz, bibliotecario del Pontificium Consilium de Legum Textibus Interpretandis, y al Dr. Domingo Ramos-Lissón, Director del Instituto de Historia de la Iglesia, de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, quienes desinteresadamente se ocuparon de ayudarme en esta búsqueda. Herranz me informa que del original no es posible sacar fotocopia "...dato che il sistema di stampa di allora renderebbe praticamente illegibile le fotocopie". Es probable que Mostazo o Amostato haya sido de inclinación pro-Jesuítica y que por ende su obra haya caído en desuso en España a partir de la Paz de Utrecht (1713). Si bien las Enciclopedias Espasa, Británica, Hispano-Americana, Bompiani y Nuevo Digesto Italiano no lo mencionan ni a Mostazo ni a Amostato, lo que llama la atención es que no lo citen los canonistas de los siglos XVIII y XIX como Cabassutius (1725), Gibert (1735), Luca (1758), Gohard (1765), Dupin (1768), Reiffenstuel (1755), Berardi (1791), Blanco (1798), Devoti (1830), Schmalzgrueber (1843), Golmayo (1866), Gómez Salazar (1883), Tardif (1887), Liberatore (1888), Ojetti (1904-05), Cavalario (1848), Maschat (1865), Selvaggio (1846), Morales y Alonso (1903), Paso y Delgado (1874) y Friedberg (1893). Es probable que la edición veneciana de este libro, existente en Córdoba (Virreinato del Perú) a fines del siglo XVIII, haya sido propiedad de los Jesuitas, y que con motivo de su Expulsión hubiere ido a parar a poder del Cabildo Eclesiástico de Córdoba. Sabemos que este libro apareció luego en el inventario que el notario eclesiástico y abogado de la Real Audiencia de Buenos Aires Dr. Facundo Prieto y Pulido confeccionara en lo que denominó "Cuaderno de los libros que me han llevado prestados", y que donara en 1794 a la Biblioteca Pública de Buenos Aires, que perteneciera al Convento de la Orden de la Merced (Levene, 1950, 35). Respecto a esta última biblioteca, Zuretti (1960), quien estudió la fundación de la misma, no pudo obtener noticias de como terminó la misma.

⁵⁴ Oposición del Maestro Francisco Texerina a la capellanía fundada por Juan Bautista del Campo y Paz y su mujer Juana Medina (AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.XI [Microfilm 5621, del CHF), correspondiente al carrete No. 0746826 perteneciente a la Genealogical Society of Salt Lake City, Utah, de la Granite Mountain Record]).

⁵⁵ Cura Rector de la Catedral de Córdoba.

⁵⁶ AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.VI, fs.23 (Microfilm 2677, del CHF).

⁵⁷ nacido en Portugalete, Vizcaya; marido de Agustina Avellaneda, hija de Gaspar de Avellaneda y de Juana de Labayén; y padre de Ana Larrazábal, mujer de Martín José de Echauri; de Juana María Larrazábal, mujer de Juan de Otárola y de José Antonio Iturriaga; de Manuela Ursula Larrazábal, mujer de José Fernández y de Gregorio de Matorras; y de Tomasa Larrazábal, mujer de Martín de Arráez y de Pablo de Aoíz (FB, IV, 113).

⁵⁸ marido de María Josefa Arráez, hija de Martín de Arráez y de Tomasa de Larrazábal, y nieta del General Antonio Larrazábal; y padre del Pbro. Matías José Warnes (FB, VI, 295).

⁵⁹ AGN, Sala IX, Tribunales, Leg.V-5, Exp.9, fs.15v.

⁶⁰ *Ibídem*.

⁶¹ marido de Francisca Marín, hija de Joaquín Marín y de Isabel Calleros (AGN, Tribunal Civil, Leg. C, N.101, fs.4).

⁶² AGN, Tribunal Civil, Leg. C, N.101, "Caviedes, Dámaso s/redimir en fondos públicos una capellanía", fs.4.

⁶³ marido de Josefa de Lízola y Escobar, hija de Juan Martín de Lizola y de Ana Escobar Gutiérrez de Paz, vecinos de Santa Fé; y hermana de Juana de Lízola y Escobar, mujer de Alonso García de Zúñiga (FB, II, 291; y III, 152).

⁶⁴ hijo del Coronel Juan Ignacio de Elía y de Bárbara García de Zúñiga, y sobrino-nieto de Josefa de Lizola y Escobar (FB, II, 275).

⁶⁵ viuda del Dr. Agustín Pío de Elía, y mujer de José María de Elía (JR, 1989, items 6.237 y 7.403).

⁶⁶ AGN, Tribunal Civil, Leg.G-8, fs.23.

⁶⁷ ver Beck, 1960, 26-41.

⁶⁸ AGN, Tribunal Civil, Leg.G-8, fs.58v.

⁶⁹ *Ibídem*.

⁷⁰ González Ruiz, 1950, 480.

⁷¹ *Ibídem*, fs.60.

⁷² El Presbítero es el clérigo, sacerdote de segundo orden, que sigue en jerarquía al Obispo. Mediante la ordenación correspondiente, el presbítero tiene, bajo la dependencia del obispo, la facultad de ejercer en la Iglesia todo el poder sagrado, excepto el de confirmar y ordenar.

⁷³ Espacio de tiempo que según las leyes eclesiásticas debe mediar entre la recepción de dos ordenes

sagrados (Escriche, 1863, 960; y Cavalario, 1848, 185-187).

⁷⁴ De Reform., sesión 23, capítulos XI y XII.

⁷⁵ por españoles se entendía los de raza blanca, ya fueren criollos o peninsulares.

⁷⁶ "...Quod si nomen presbiter refeturad initium electionis, seu presentationes, beneficium est sacerdotale acta" (AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.VI, fs.61 [Microfilm 26777, del CHF]).

⁷⁷ hijo de Nicolás Cabrera.

⁷⁸ consagrados.

⁷⁹ AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.VI, fs.66 (Microfilm 2677, del CHF).

⁸⁰ testimonio o instrumento dado para ejercer un empleo, dignidad o profesión.

⁸¹ AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.VI, fs.23 (Microfilm 2677, del CHF).

⁸² *Ibídem.*

⁸³ *Ibídem.*

⁸⁴ hijo de José Manuel Salguero de Cabrera y de Josefa de Moinos y Ledesma; y hermano del Congresal de Tucumán Gerónimo Salguero de Cabrera (Díaz de Molina, 1966, 163-166).

⁸⁵ nació en Córdoba en 1778, hijo de José Antonio Baigorri y de Juana Rosa Puch, de inclinaciones Funesistas (debo este dato al joven colega Oscar Chamosa), y unitarias. Falleció en 1858 (Cabrera, 1930, 69; y Martínez Paz, 1983, 85).

⁸⁶ debo estos datos al joven colega Oscar Chamosa y a las Memorias del General José María Paz, t.II, 474, nota 1, cit. por Martínez Paz, 1983, 85.

⁸⁷ AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.I, fs.22v. (Microfilm 2680, del CHF).

⁸⁸ *Ibídem.*

⁸⁹ *Ibídem.*

⁹⁰ "...nulla infuturum antem non nisi actu clerici in habitu clericali, et Tonsura, et militibus infra discendis in militari infra incidentibus fur militia propria, aut alia que cumque ecclesiastica etiam simplicia beneficia respectibe conferantur aut commendentur, aut penctiones, frutas vé, aut bona ecclesiastica reservatur" (AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.I, fs.22v; Microfilm 2680, del CHF).

⁹¹ García, 1618, parte siete, capítulo primero, n.18, citado en AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.I, fs.22v. (Microfilm 2680, del CHF).

⁹² AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.I, fs.22v. (Microfilm 2680, del CHF).

⁹³ *Ibídem.*

⁹⁴ *Ibíd.*

⁹⁵ *Ibíd.*

⁹⁶ hija de Alonso García de Zúñiga y de Juana de Lizola y Escobar, y cuñada del Coronel Juan Ignacio de Elía (FB, III, 152).

⁹⁷ asesinado en 1816 en Chile por la Logia Lautaro (Lazcano, 1927, 10).

⁹⁸ AGN, Tribunal Civil, Leg. G-5, "María Esuebia García de Zúñiga, viuda de Juan Angel Lascano, en su nieto Enrique José Núñez", fs.5.

⁹⁹ FB, V, 41.

¹⁰⁰ AGN, Tribunal Civil, Leg. G-5, "María Esuebia García de Zúñiga, viuda de Juan Angel Lascano, en su nieto Enrique José Núñez", fs.5. Por ordenes sagradas se entendían las ordenes mayores, con excepción del subdiaconado, que no era de institución divina sino humana.

¹⁰¹ hija de Carlos Smerlin y Josefa Alvarez, y viuda de Miguel Serrano, natural de Cartagena de Levante (JR, 1989, ítem 4653)..

¹⁰² AGN, Protocolos, Registro 3, 1813, fs.235v.

¹⁰³ hermano del Obispo de Buenos Aires Juan Francisco de Castro y Careaga. Según Astigarraga (1978), Castro y Careaga promovió la construcción de la Iglesia de Santo Domingo Soriano a pesar de los agravios recibidos (Astigarraga, 1978, 33).

¹⁰⁴ hijo de Juan de Canicoba, natural de la Feligresía de San Julián de Sales, Galicia, y de Paula Melo y Hornos (FB, II, 55).

¹⁰⁵ AGN, Protocolos, Registro 3, 1814, fs.97.

¹⁰⁶ AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.II, fs.15 (Microfilm 2679, del CHF).

¹⁰⁷ *Ibíd.*, fs.26v.

¹⁰⁸ hijo de Gregorio Echenique y de María Rosa Cabrera

¹⁰⁹ primo hermano carnal de Leopoldo de Allende.

¹¹⁰ hijo del Regidor José Antonio de Allende y Argüello y de Catalina Moyano y Cabrera (CC, 1936, I, 19 y 59; y LC, III, 195).

¹¹¹ hermana de Félix de Cabrera, hija de Pedro Luis de Cabrera, y nieta del fundador de Córdoba Gerónimo Luis de Cabrera.

¹¹² AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.I (Microfilm 2680, del CHF).

¹¹³ "...qua propter quoties pauper concurrit cum divite paritrideo en preferendus, qua in egeno non

solum concurrat gratia verum pietas et misericordia [Causius piis., Libro III, Capítulo noveno, n.30]" (Oposición del Pbro. Dr. Leopoldo Allende en los autos sobre capellanía eclesiástica fundada por Juana de la Quintana y Cabrera, mujer del Maestre de Campo Diego Fernández de Salguero [AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.I, fs.56, Microfilm 2680, del CHF, correspondiente al carrete No. 0746835 perteneciente a la Genealogical Society of Salt Lake City, Utah, de la Granite Mountain Record]).

¹¹⁴ AGN, Protocolos, Registro 6, 1783, fs. 304 y 306v.

¹¹⁵ FB, I, 325.

¹¹⁶ AGN, Protocolos, Registro 6, año 1770, fs.109.

¹¹⁷ AGN, Protocolos, Registro 4, 1813, fs.209; y Registro 4, 1800, fs. 57v.

¹¹⁸ hijo del Alcalde Ordinario y encomendero de los indios de Piscoguasi, Sargento Mayor Manuel Noble Canelas, y de Catalina de Echenique y Cabrera; y hermano de Rosa Noble Canelas, mujer del Sargento Mayor y Protector de Indios Juan Calvo de Arana (LC, I, 447).

¹¹⁹ fundada sobre la estancia de San Pedro a 30 leguas de la ciudad de Córdoba.

¹²⁰ AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.III (Microfilm 2664, del CHF).

¹²¹ Ibidem.

¹²² nacido en Cádiz, viudo contrajo segundas nupcias con Rosa Salvadora de Aldao y Rendón (FB, II, 303).

¹²³ AGN, Protocolos, Registro 4, 1752, fs.78.

¹²⁴ hijo del Cap.Luis Tomás Bejarano y Petronila González Bautista (FB, I, 256).

¹²⁵ AGN, Protocolos, Registro 6, 1759/1761, fs.589v.

¹²⁶ hijo del Teniente Francisco Escudero y de Ana Margarita de Cossio y Terán (FB, II, 293).

¹²⁷ AGN, Protocolos, Registro 5, 1770, fs.102.

¹²⁸ marido de Inés Jijano, seguramente hija de Juan Antonio Jijano y de Ana Fernández de Castro.

¹²⁹ AGN, Protocolos, Registro 1, 1773/74, fs.63v.

¹³⁰ nacido en Valencia, marido de Angela Pestaña, hija del Capitán Manuel Pestaña y de Josefa Gregoria Rodríguez; y padre de los dos Tenientes de Dragones muertos por los indios en la Costa Patagónica (FB, V, 202).

¹³¹ AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.116, Exp.16, fs.1.

¹³² Capellán de la Primera Junta de Mayo; hijo del Teniente de Infantería Nicolás Planchón y de Paula Petrona de Illarradi y del Barranco (A-Ch, I, 287).

¹³³ AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.253, Exp.6.

¹³⁴ hijo de Manuel de Pestaña, natural de Portugal, bautizado en 1734, y de Gregoria Rodríguez, natural de Santa Fé; hermano de Angela y María Ana Pestaña; marido de Josefa Rodríguez Cardoso; padre de 11 hijos y suegro de Policarpo Rodríguez Campomanes (Apolant, 1966, ítem 513).

¹³⁵ mujer del Capitán Manuel Pestaña (Apolant, 1966, ítem 513).

¹³⁶ AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.20, Exp.8, fs.4.

¹³⁷ hijo de Pedro Alcántara Rodríguez.

¹³⁸ hijo de Pedro Antonio Clemente Rodríguez y de María Martínez Pantoja y González Cabezas (FB, V, 364).

¹³⁹ hijo natural del Capitan Simón González de Acosta y de Catalina Cabezas; marido de María Espinosa; y padre natural de Mariana, Marcos, Constanza y José González Cabezas (FB, III, 260).

¹⁴⁰ AGN, Tribunal Civil, Leg.R-1, "Rodríguez, Juan Tomás c/Rodríguez, Julián s/predios capellánicos", fs.12; y AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. G-18, Exp.14, fs.25.

¹⁴¹ *Ibidem*.

¹⁴² *Ibidem*.

¹⁴³ *Ibidem*.

¹⁴⁴ *Ibidem*.

¹⁴⁵ hijo del Regidor Bernabé Denis y de Juana Paula de Giles y Cossio Terán (FB, II, 214; y A-Ch, I, 101).

¹⁴⁶ viudo de Ciriaca Aguilera, Don Miguel había contraído segundas nupcias, y engendrado nuevos hijos (AGN, Tribunal Civil, Leg.P-8, "Planes, Saturnino y otro s/capellanía"). Era tío materno carnal del autor de la letra del Himno Nacional Argentino Vicente López y Planes.

¹⁴⁷ hijo del Capitán Mateo de Cossio y Terán y de María Rodríguez de Figueroa, marido de María Rodríguez de Figueroa (A-Ch, I, 98).

¹⁴⁸ AGN, Tribunal Civil, Leg.D, N.2, "Denis, Pedro J. c/Planes, Miguel p/cobro de réditos de una capellanía situada en casa de Planes".

¹⁴⁹ hijo de Miguel Planes y Ciriaca Aguilera (A-Ch, I, 288; y FB, I, 46).

¹⁵⁰ AGN, Tribunal Civil, Leg.P-8, "Planes, Saturnino y otro s/capellanía".

¹⁵¹ *Idem*, fs.159v.

¹⁵² *Idem*, fs.158.

¹⁵³ Idem. fs.159v.

¹⁵⁴ hijo del Teniente Coronel de Artillería Vicente Antonio Reyna Vázquez y de María Josefa Teresa de Cáceres (FB, VI, 345).

¹⁵⁵ Acuerdos, IV Serie, t. IV, 503; y t. V, p.68.

¹⁵⁶ hijo de Benito Ruiz, natural de Jerez de la Frontera, y de Victoria Cuenca y Burgos, hermano de Fr. Domingo Ruiz; y cuñado del subteniente Marcos Ibarra (FB, V, 428; A-Ch, I, 306; y Fandiño, 1992, 178).

¹⁵⁷ Acuerdos, IV Serie, t.VI, pp. 424, 569, 581, 593, 606, 656 y 681. Para mas detalles ver AGN, Tribunal Civil, Leg. R-11, "Pbro. Lucas José Ruiz c/Cabildo de Buenos Aires, s/Restitución de réditos vencidos".

¹⁵⁸ Acuerdos, IV Serie, t.VII, p.74, 497, 509, 571 y 599.

¹⁵⁹ hijo del Capitán Sebastián Delgado y de Catalina Sánchez y Casco de Mendoza (FB, II, 213).

¹⁶⁰ AGN, Tribunal Civil, Leg.D, N.8, "Delgado, Ignacio c/su hermano Leandro p/réditos capellánicos"; y Archivo Histórico de la Provincia, Catálogo de la Real Audiencia, Recursos de Fuerza, Leg.11, 7.5.11.10.

¹⁶¹ AGN, Tribunal Civil, Leg.E, N.21, "Espinosa, Máximo solicita vista de autos".

¹⁶² AGN, Tribunal Civil, Leg.A, N.292, "Aráoz de Lamadrid, Juana s/entrega de los réditos de una capellanía".

¹⁶³ hija del Capitán Francisco Bazurco y de Juana María de Herrera Labayén; y hermana del Obispo de Buenos Aires Dr. José Antonio Bazurco (FB, I, 252).

¹⁶⁴ AGN, Protocolos, Registro 3, 1773/74, fs.186.

¹⁶⁵ hijo de Matías Sosa y de Ana María de Aramburo (FB, VI, 138).

¹⁶⁶ AGN, Protocolos, Registro 3, año 1817, fs.81v.

¹⁶⁷ primo hermano de Juan Gregorio Bazán y Tejeda. Autor de un Tratado de la Usura (Furlong, 1969, 283; y Bruno, 1967, IV, 390-398).

¹⁶⁸ hijo expósito. Juan y Luis Bracamonte, hijos del Capitán Cristóbal Bracamonte y Cervantes y de Leonor González, dueños de una chacra en el pago del Monte Grande, en Buenos Aires, y cuñados de los Alféreces Francisco de San Martín y Francisco de Pedraza, y del Alguacil Mayor José Manuel Rubín de Celis, se matrimoniaron a comienzos del siglo XVIII en Córdoba (FB, I, 308).

¹⁶⁹ AAC, Libro de Capellanías, Leg.31, t.II (Microfilm 2679, del CHF). En la Visita o indagación pastoral que practican los Obispos los párrocos se revisten de sobrepelliz y pluvial blanco, y los demás clérigos de sobrepelliz". Las Vísperas de la Visita es la parte del culto "...que mayor pompa reviste, así

por la magnificencia de las ceremonias y aparato de la indumentaria de los que las ofician, como por lo adornado y armonioso de los cantos que suelen ejecutarse" (Diccionario Enciclopédico Espasa, t.69, pp. 452 y 479).

¹⁷⁰ hijo de Prudencio de Zavaleta, nacido en Guipúzcoa, y de María Agustina de Indá y Martínez Tirado; cuñado de Atanasio Gutiérrez Vega; y tío del Dr. Benjamín Zavaleta (Ruiz Guiñazú, 1952; FB, VI, 315; y JR, 1989, ítem 5048).

¹⁷¹ AGN, Protocolos, Registro 6, año 1793, fs.291v.

¹⁷² AGN, Protocolos, Registro 6, 1793, fs.334.

¹⁷³ AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.66, Exp.1, fs.29v.

¹⁷⁴ Gregorio Funes al agente de negocios en Madrid Joaquín Juan de Flores, Buenos Aires, 15-IV-1804 (AGN, Biblioteca Nacional, n.581, citado por Carbia, 1929, n.60, 529). Para la biografía de Videla del Pino, ver Piaggio, 1912.

¹⁷⁵ Hijo de Juan Nicolás de Aráoz y Bazán y de Claudia del Campo Avila; y marido de Josefa Paz de Figueroa, hija del encomendero de Silipica Maestre de Campo Juan Paz de Figueroa, y de Gregoria Ibáñez del Castrillo (Calvo, 1924, 286ss.; 1939, 177ss.). Según el Cura apóstata Francisco José Marcano y Arizmendi, Diego Ignacio Aráoz extrajo del Colegio Jesuítico del Tucumán "...barias alajas, y toda la librería, fingiendo se la han robado, hasta han extraído varios cuadros y entre ellos dos grandes el uno de nuestro Patriarca San Ignacio de Loyola, para su Casa y estancia" (AGN, Tribunales, Leg.121, Exp.20).

¹⁷⁶ famoso por su actuación en el secuestro de los bienes del Colegio Jesuítico de Tucumán.

¹⁷⁷ Pedro Antonio Aráoz al Visitador General Diego de la Vega, Tucumán, 10-VIII-1803, AGN, Temporalidades de Tucumán, Sala IX, 22-2-6.

¹⁷⁸ *Ibídem*.

¹⁷⁹ *Ibídem*.

¹⁸⁰ contrajo primeras nupcias con Petrona de la Cruz, hija del Capitán Juan Nicolás de la Cruz y de Rosa Vallejos, vecinos de Luján; y segundas nupcias con Ursula Burgueño, vecina de Areco (FB, II, 17; y JR, 1989, ítems 4629 y 5363).

¹⁸¹ Se recibió de abogado en Santiago de Chile (Fuenzalida Grandón, 1972, 626).

¹⁸² AGN, Sucesión 4835, Testamentaría de Joaquín Cabot, fs.32v.

¹⁸³ *Ibídem*.

¹⁸⁴ *Ibídem*.

¹⁸⁵ Espasa Calpe: Enciclopedia Universal Ilustrada, t.16, p.758.

¹⁸⁶ marido de Clara Acuña Vera, hija de Francisco Acuña y de María de Trinidad de Vera y Avila.

¹⁸⁷ Pedro Ignacio Arze al Deán Funes, Catamarca, 5-II-1804, en Biblioteca Nacional: Archivo del Dr. Gregorio Funes. Deán de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba (Buenos Aires), 1944, 197.

TOMO VIII

Capítulo 9

La religión como fractura pre-moderna en la Argentina del siglo XIX.

En la república moderna estuvieron presentes entre otros conflictos políticos los nacidos de una fractura religiosa.¹ Pero en esta lucha, la fractura iglesia-estado acentuó el desequilibrio político en el interior Argentino.² Esta fractura se hallaba aún abierta por cuanto los efectos de las políticas secularizadoras o desacralizadoras iniciadas por la recolonización Borbónica (expulsión Jesuítica), prolongada y acentuada por las reformas eclesiásticas Rivadavianas, se encontraban aún presentes en los ánimos políticos de las elites correspondientes. Los partidarios de un acelerado proceso de **secularización** jurídico-política (del Valle, Wilde, y Cané) --a diferencia de lo ocurrido en Alemania que se inició con una reforma puramente religiosa o **reforma** ocurrida en el siglo XVI-- incorporaron a la búsqueda del origen del estado nacional, la fractura religiosa, enfrentándose para ello con los católicos Frías, Estrada, Goyena y Pizarro; y Lisandro de la Torre enfrentándose a comienzos del siglo XX con el Pbro. Franceschi.³

A juicio de la filosofía política, el impacto de la religión en el pasado político de las repúblicas occidentales estaría ligado con líneas de fractura no propiamente pre-modernas sino de origen moderno (crisis o agotamientos de los modelos de relación entre la Iglesia y el Estado o entre el Laicismo o **Laicización** vs. Clericalismo).⁴ El estudio de este impacto también mereció en la denominada nueva ciencia política un debate enriquecedor. Fueron Jensen (1971) y Kleppner (1970) y recientemente Santos (2002) quienes insistieron en enfatizar la importancia que jugaron en el comportamiento político de los electorados los factores etno-culturales (tradiciones raciales, familiares y religiosas) por sobre los económicos (el impacto de la Revolución Industrial y de las crisis de los ciclos económicos), y los jurídico-institucionales (sistemas electorales y regímenes parlamentarios).⁵ Más luego, Burnham (1970) --influído por las teorías epistemológicas de Thomas Kuhn y las investigaciones de Kleppner (1970)-- sostuvo que los realineamientos políticos ocurrían debido a una tensión fundamental entre los avanzados sistemas económicos y los atrasados sistemas políticos, que por motivos locales (raciales y religiosos) se resistían al cambio y a la adaptación.⁶

En ese sentido, en este trabajo nos formulamos una serie de interrogantes:

1) ¿es posible que en la base de los conflictos políticos de la segunda mitad del siglo XIX existieran una combinación, superposición e intersección de fracturas pre-modernas (genéticas: étnicas, lingüísticas, geográficas, demográficas, religiosas, estamentales y corporativas) con otras fracturas de tipo moderno (ideológicas, políticas, económicas y sociales)?;

2) ¿admite la noción de nación los conceptos de cuerpos o corporaciones, feudos, estamentos y castas?, ¿acepta otras religiones que no sean la católica?;

3) ¿es posible que una fractura pre-moderna fuere subsumida por otra moderna o post-moderna para la gestación del eje central de un conflicto político determinado?;

y 4) ¿es posible que la institucionalización de las funciones centrales de un estado moderno atenúen la politización de las fracturas religiosas heredadas del Antiguo Régimen?.

Las fracturas religiosas.

El divorcio creciente entre la política y la religión, la división entre la sociedad civil y la sociedad política, y la consiguiente separación de la Iglesia del aparato del estado, ocupaban un rol relevante en el esquema de racionalización del estado moderno.⁷ En la república moderna la presencia de la Iglesia hizo necesario contemplar sus relaciones con las burocracias civil y militar. En dichas relaciones, el sostenimiento del culto, las incompatibilidades eclesiásticas y la redención o amortización de los fondos capellánicos ocuparon un lugar crucial.⁸ El que los sacerdotes, ocuparen cargos políticos como el de gobernadores o legisladores, fué puesto en tela de juicio por diferentes periodistas, políticos y juristas. En la Constitución de Corrientes, en su art.28, se establecía que "...no pueden ser electos Diputados los eclesiásticos seculares y los regulares".⁹

En la América Latina, y en la Argentina en particular, el impacto de la religión en la política estuvo mediatizado siempre por la colusión de intereses entre el estado y la iglesia. El mecanismo inicial de reclutamiento del clero secular, legado histórico de la contra-reforma Habsburga, y que las Reformas Borbónicas no alcanzaron a disolver, reducían el número de los reclutados a un ínfimo núcleo de parientes y vecinos, lo cual tornaba al clero en estructuras puramente nepóticas u oligárquicas.¹⁰ La colonización de la iglesia por el estado monárquico e imperial, se manifestó en la institución del Patronato Real, que la Revolución de Independencia y el estado nacional adoptó bajo el nombre de Patronato Nacional.¹¹ En este tipo de iglesias estatizadas, reformadas o controladas por el estado el clero secular, despojado en gran parte de sus prebendas familiares (capellánicas), siempre se halló envuelto en crudas luchas de facción o bien intervino abiertamente en las lides políticas.¹²

El que los sacerdotes, ocuparen cargos políticos como el de gobernadores o legisladores, fué puesto en tela de juicio por diferentes periodistas, políticos y juristas. En el seno de la Convención Constituyente reunida en Paraná, a instancias del Acuerdo de San Nicolás celebrado en 1852,¹³ el clero se dividió entre aquellos que juraron la Constitución y aquellos otros que no lo hicieron por estar disconformes con la escasa relevancia otorgada al clero.¹⁴ En San Juan, en 1849, el Cura Interino de Concepción, Manuel Videla Lima, denunciaba al Obispo que varios curas secularizados después del 25 de Mayo de 1810 estaban incurriendo en las penas que impone el art.4 del Decreto del 27 de Febrero de 1837 por estar "...desempeñando destinos eclesiásticos sin haber prestado sus boletos de secularización al executur del Superior Gobierno Nacional".¹⁵ En la misma provincia, en 1857, el Gobernador Francisco Domingo Díaz y su Ministro José Antonio Durán habían detenido y procesado criminalmente al Provisor de la Diócesis de Cuyo Timoteo Maradona.¹⁶

Pero frente a las protestas desatadas, un decreto del Vice-Presidente Salvador María del Carril y del Ministro Campillo mandó reponer al funcionario eclesiástico.¹⁷ En Catamarca, la sanción de una ley que desamortizaba las fincas capellánicas fué objetada por el Presidente de la Legislatura Fray Mamerto Esquiú.¹⁸ Siete años después, en 1864, en Salta, el Obispo Buenaventura Rizo Patrón se vió enfrentado con el Gobernador Cleto Aguirre a raíz de la conducta del Pbro. Sixto Sáenz, de Rosario de Lerma.¹⁹ Dos años más tarde, en la Revolución de los Colorados, acontecida en Mendoza, estuvieron

presentes elementos del clero cuyano.²⁰ Y otro año después, en 1867, el Vicario Capitular Rizzerio Molina fué encarcelado y el Gobernador Nicolás Villanueva excomulgado.²¹ Y en Santa Fé, el mismo año, el Gobernador Nicasio Oroño se vió precisado a prohibir la circulación de una protesta firmada por el Obispo.²² Con ese motivo el Sargento Mayor del Ejército de Línea de la Frontera Norte Nicolás Deniz, apoyado por antiguos federales como Patricio Rodríguez,²³ y Pascual Rosas,²⁴ aprovechó la fractura o choque que la Iglesia tuvo con el partido liberal para imponer sus proyectos políticos. En efecto, con la excusa de la secularización de determinadas funciones sociales (matrimonios y entierros [cementeros]) y la transformación del Convento de San Lorenzo en una Escuela Agronómica,²⁵ Deniz se alzó en armas poniendo sitio a la capital, y exigiendo infructuosamente la renuncia de Nicasio Oroño.²⁶ Otros tres años más tarde, en San Juan, la corruptela política del Gobernador José M. del Carril es acompañada con una campaña antirreligiosa de supresión de conventos que culmina con el proceso y prisión de Monseñor Braulio Laspiur.²⁷ Ello a su vez provoca en 1870 una frustrada revolución encabezada por el ex-Gobernador Manuel J. Zavalla aliado al bandolero Santos Guayama.²⁸ Otros cuatro años más tarde, Agustín Gómez le transmitía a Roca que en Jáchal, San Juan, había confiado demasiado en el Padre Burela, pues "...lo habían puesto en relaciones con todos mis amigos y recomendándolo para que se pusieran de acuerdo con él desde mucho tiempo antes".²⁹ Sin embargo, por un disgusto que Burela ha tenido con el Subdelegado de Jáchal Eusebio Dajorti, cuñado de Agustín Gómez,

"...este fraile infame nos vendió entregando al contrario nuestros propios elementos [cuadros políticos], sin nosotros sospecharlo hasta última hora, y de allí resulta perdida la elección por muchos votos que sufragaron de ambos partidos".³⁰

Seis años después, en 1883, el Obispo Wenceslao Achával y el R. P. Salvador Giles se hallaban desorientados acerca de la política Sanjuanina. Giles le pedía a Roca que le indicara "...la conducta que el Sr. Obispo y yo debemos seguir...para estar cerca de Vd. pues Vd. sabe que lo amo muy de corazón lo mismo que lo ama el Sr. Obispo".³¹ Aparentemente Achával no sabía que Giles le escribía a Roca, pues confesaba "...que yo dirijo al Obispo y deseo éste del lado de la buena causa".³² Y desde Salta, el Diputado Nacional David Zambrano le pedía a Juárez Celman que

"...influya eficazmente con el [Ministro de Instrucción] Dr. Wilde para que en caso de morir el Arcediano Don Pascual Arce, y de haber el consiguiente ascenso de Canónigos, coloque en la silla de Merced al Canónigo Don Manuel Antonio Fernández quien ha sufrido ya dos desaires contra prescripciones canónicas".³³

También en Córdoba se daban intrincados conflictos eclesiásticos aunados a un fuerte clima anti-clerical. En el seno de la Convención Constituyente reunida en Paraná el clero se dividió entre aquellos que juraron la Constitución y aquellos que no lo hicieron disconformes con la escasa relevancia otorgada a la Iglesia Católica.³⁴ En Febrero de 1869, el Deanato de la Catedral le fué conferido a "...un Prebendado, hoy prelado de la Arquidiócesis argentina, que solo contaba 5 o 6 años de elevación".³⁵ Esta elevación fué hecha en perjuicio del Arcediano Martín Avelino Piñero,³⁶ quien en ese entonces tenía 17 años de antigüedad, pues "...fué designado Canónigo capitular a la caída de Rosas".³⁷ Para Piñero, por haber sido su honor

"...rudamente herido con tan arbitraria postergación en oposición completa a la escala de ascensos eclesiásticos, reconocida y practicada hasta su infracción por el favor...renunciaba el puesto que ocupaba en esa Catedral".³⁸

Mientras la hegemonía política se la disputaban un Autonomismo Juarista, de fuerte contenido anti-clerical de origen masónico, y un Autonomismo anti-liberal, ambas facciones se hallaban movilizadas por la característica compartida de una fractura pre-moderna: la religión. Entre los instrumentos movilizadores implementados por el clericalismo se hallaban las Pastorales. Las pastorales del Vicario de Córdoba Jerónimo Clara hallaron eco y se reprodujeron incluso en la conducta de los vicarios de provincias correspondientes al subsistema político del Norte (Salta y Santiago del Estero).³⁹ El Pbro. Uladislao Castellanos, en su Pastoral de 1880 se quejaba de los desbordes del periódico La Carcajada (Córdoba), dirigido por Armengol Tecera; y el Vicario Dr. Jerónimo Clara en otra Pastoral fechada cuatro años después, el 25-IV-1884, advertía al pueblo que la Iglesia prohibía leer el referido semanario.⁴⁰ A comienzos del 80, el clero Cordobés se hallaba, a juicio del Pbro. Mariano Armaza,⁴¹ completamente dividido en dos bandos

"...los unos amigos de la situación y por consiguiente amigos del Gobierno Nacional y Provincial y los otros formaban y pertenecían a la cámara oscura y como tales enemigos de la situación y del orden".⁴²

En 1881, con motivo de la vacante del Deanato de la Catedral, el Ministro de Instrucción Pública Manuel D. Pizarro logró "...levantar sobre nuestras cabezas a sus cófrades, a los de la famosa Cámara Oscura, a los enemigos eternos del gobierno y nuestro partido".⁴³ Según el R.P. Pascual Soprano,⁴⁴ su persona "...no merecía castigo tan humillante y tan amargo".⁴⁵ Excluyéndolo a él y no ensalzando a sus enemigos, le habrían dado un placer, porque según Soprano "...no tenía simpatía para esas Dignidades".⁴⁶ Pero excluir a los amigos de Soprano, y ensalzar a sus enemigos, eso era para Soprano inexplicable y sus consecuencias fatales, al extremo que el Obispo Esquiú estaba a su entender "hundido".⁴⁷ Ese mismo año se corría el rumor que el Canónigo Martín Piñero renunciaba al Rectorado de Santiago del Estero y aceptaba un puesto en Córdoba. A juicio de Soprano, Piñero "...estaría muy bien de Provisor y Vicario con la Canonjía Magistral que queda vacante, o con el Rectorado del Seminario".⁴⁸ Con la incorporación de Piñero "...no entraría de Vicario D. Aquilino Ferreira, que es una nulidad, y es todo de la Cámara oscura, y saldría del Seminario el Dr. Uladislao Castellanos que es tan funesto".⁴⁹ Con respecto a la promoción del clero en la carrera eclesiástica, Fr. Mamerto Esquiú le manifestaba a Roca que

"...para la paz de los Cabildos Eclesiásticos...en la provisión de Canonjías y Dignidades se tuviera por regla general el promover a los existentes en la misma gradación en que se hallan, salvo casos extraordinarios de mérito o demérito".⁵⁰

Esquiú sostenía que en el Decreto de Febrero de 1881 en que se ascendió a los SS. Jerónimo Clara, Uladislao Castellano, Vásquez, y Juárez, auspiciado por el Ministro Manuel D. Pizarro, adversario de Juárez Celman en la interna del Autonomismo Cordobés, se tuvo en cuenta una regla general y no el favor de esta o aquella persona, pues era

"...una regla convenientísima la de que en las libres colaciones de Canonjías se haga la provisión haciendo subir a los que ya pertenecen al Cabildo y en la misma gradación que tienen en él".⁵¹

Pero estas designaciones causaron un gran estupor y sorpresa en Córdoba, pues al decir del Pbro. Mariano Armaza y del periodista Ramón Gil Navarro,⁵² "...nadie ha esperado de Vd. este nombramiento".⁵³ Efectivamente, para el Pbro. Armaza

"...tal distinción hecha precisamente en la parte hostil y anárquica del clero ha causado una verdadera sensación en esta sociedad...[pues] significa la exaltación de los mismos que, en el Seminario situado al frente de la Policía produjeron la pueblada del 1 de Noviembre de 1879 a los gritos de Viva la Religión, Viva la Pastoral y la excomunión a los periódicos masones, que precisamente era nuestra prensa partidaria".⁵⁴

Por esta designación, a juicio de Armaza, el Obispo de Esquíú "...queda reducido a cero, será impotente y no podrá nada contra la consabida Cámara Oscura".⁵⁵

Por el contrario, en un tiempo, los Edictos de oposición, en orden a la Canongía Magistral, recomendados por el Derecho Canónico, eran dictados por el Gobierno Nacional, tal como se estilaba en tiempos coloniales.⁵⁶ Más luego, el Obispo de Córdoba Pbro. Manuel Eduardo Alvarez expidió un decreto "...ordenando que en cuanto fuera posible las dos Canongías Lectoral y Magistral se proveyesen por medio de oposición".⁵⁷ Más recientemente, el Edicto de oposición del 8 de marzo de 1881, "...es aún más impersonal, pues sin exclusión de nadie abre la puerta a todos los que puedan y quieran concurrir al acto de exámenes previos para las dos Canongías vacantes".⁵⁸ Esquíú era en todo sentido para el Gobernador Antonio del Viso "...mejor que nuestros santos sacerdotes de aquí; pero ¿será más tratable, más liberal? ¿se afiliará o no se afiliará en los círculos políticos?".⁵⁹ Para Del Viso, el mejor candidato

"...habría sido el Padre [Juan Capistrano] Tissera de esta ciudad, sacerdote ilustrado y liberal, que mantendría mejor sus relaciones con los gobiernos, y no serviría de instrumento ni de cabeza a los políticos clericales".⁶⁰

Pero para darle al Padre Juan Capistrano Tissera,⁶¹ un Cabildo Eclesiástico compuesto de sacerdotes amigos, Juan de la Serna le manifestaba a Juárez Celman que

"...para la silla o canongía que dejó vacante el Dr. Juárez que es la de Tesorero el Sr. D. Domingo Castellano; pero tal vez sea difícil esto, porque se requiere el grado de Licenciado en Derecho Canónico, y este no lo tiene, entonces podía reemplazarse con el Canónigo Cuestas o Galceron que tiene el grado".⁶²

También se podía, a juicio de De la Serna, si se consigue echar al R. P. Yanis, "...triunfar de este mal elemento, y prepararle al Sr. Tissera elementos que le servirán para su gobierno".⁶³ En cuanto al Colegio de Loreto, para el entonces Rector del Colegio Nacional de Córdoba Filemón Posse, en él

"...está viva la resistencia a toda idea de progreso; y lo que es peor, allí se está formando el futuro clero de Córdoba en el más repugnante fanatismo, en su fondo y en su forma".⁶⁴

El Rector del Seminario era

"...el prototipo del fanatismo brutal, intransigente y agresivo, y naturalmente está formando clérigos a su imagen y semejanza, ayudado por profesores dóciles [Luis Fernando Falorni y Jacinto R. Ríos] a su voluntad".⁶⁵

En el Convento Franciscano de Río Cuarto, según Guillermo Molina "...no tenemos sino un solo fraile adicto a nosotros [Fr. Carlos Leonardo] y este no lo puede demostrar porque los demás lo harían arder".⁶⁶ Para que entraran sacerdotes liberales a este Convento, Molina le recomendaba a Juárez

Celman que

"...el Presidente escriba al padre Pío Bentivaggio a Bolonia y le pida que venga con dos o tres frailes ilustrados como este y al mismo tiempo escriba al Gral. de la Orden pidiendo el retiro del Convento del Río IV de los Frailes Guerrico, Ludovico y Antonino que estos son los enemigos encarnizados".⁶⁷

En el caso de Catamarca, siendo el Rector del Colegio Nacional Dr. Fidel Castro, de filiación Católica, blanco de los ataques del diario El Progreso,⁶⁸ de Córdoba, ampliamente conocido por su laicismo, el entonces ex-Diputado Nacional Roquista por Tucumán Miguel M. Nougués le comunicaba al Presidente Julio A. Roca que se había dirigido en 1879 al Gobernador de Córdoba Miguel Juárez Celman sugiriéndole "...si cree conveniente haga que ese periódico se modere".⁶⁹

Nougués le confiaba a Roca que los enemigos del Dr. Fidel Castro

"...trabajan cuanto pueden por la separación de él [Castro] del Rectorado del Colegio Nacional lo que no han podido conseguir del Presidente Avellaneda, que es amigo particular de éste".⁷⁰

Durante su gestión como Rector, Castro separó a Profesores como el Dr. Francisco Latzina, catedrático de matemáticas superiores y encargado de observaciones meteorológicas en la Escuela de Minas,

"...distinguido Profesor hoy de la Academia de Ciencias de Córdoba, y ahora pocos días el más distinguido y antiguo Profesor el Dr. Marcos A. Figueroa, para reemplazarlo por el crapuloso !!!Simón Avellaneda!!! Secretario del Interventor de La Rioja Dr. Quiroga".⁷¹

Pero dos años más tarde, en 1881, Castro fué destituido por haber tomado parte en "...la última crisis política que afligió a la República, en la que él y sus profesores tomaron parte activa contra los gobiernos nacionales y provinciales".⁷²

En los actos eleccionarios el poder del clero se desplegaba con toda intensidad. En ninguna parte como en Catamarca se había desplegado, a juicio del Interventor Onésimo Leguizamón, "...un clero politiquero con influencia en las masas ignorantes y en los sufragantes de los comicios".⁷³ Lo que explicaba su actitud, según Leguizamón, es que

"...todo ese clero es Catamarqueño; no extranjero, i por consiguiente ajeno a las bajezas de los papistas de ultramar. No sabe de Roma ni del Nuncio, sino algo que ha oído, i probablemente no reconoce en su conciencia mas autoridad eclesiástica que la Virgen del Valle, semejante a la Isis o Osiris de Egipto, ídolos que los sacerdotes hacían obrar en el sentido que mejor les convenía".⁷⁴

El Vicario José Facundo Segura era en Catamarca "...el gran Sacerdote de la Isis catamarqueña ¿Y quien es Segura? Hay está el secreto. Un viejo sagaz, vivo, conciliador, caritativo, reservado, y sobre todo, hombre de mundo".⁷⁵ Cuando Leguizamón llegó a Catamarca,

"...con mi fama de masón-hereje, la primera persona que estuvo a visitarme después de los que me recibieron, fué el Vicario, quien me dijo con aire de la mayor franqueza, que no ha contradicho hasta hoy que: 'como ciudadano y como Vicario puede Vd. como representante del Sr. Presidente ordenar sin reserva'.⁷⁶

El Decreto anti-clerical, del Ministro Salvador de la Colina,

"...era un pobre recurso electoral del gobierno para reavivar el calor de la lucha, y no ha producido más efecto que azuzar a algunos curas para que debajo de cuerda (porque públicamente no lo han hecho), contribuyesen a ayudar a la derrota del gobierno".⁷⁷

La cuestión entre liberales y radicales no tenía en Catamarca, a juicio de Leguizamón, "...un significado en relación con las opiniones".⁷⁸ Mientras el Gobernador, ministro, Juez Federal y altos empleados del partido liberal eran

"...los únicos que no faltan a misa los domingos, y que espresan su devoción con grandes genuflexiones y golpes de pecho,...los clericales, con excepción de la chuzma de las orillas, no vá nunca ni a misa".⁷⁹

Y en cuanto a Fidel Castro, Lúndor B. Sotomayor, Federico Espeche (a) "Patás Blancas", Adolfo Castellanos, López y aún el mismo Francisco Caracciolo Figueroa, a Leguizamón le parecía "...que apenas creen en Dios. Todo es pura politiquería, pues lo del fondo es farsa no mas".⁸⁰ En cuanto al Vicario Segura, "...haciéndose el desentendido de los ataques i etiquetas liberales, los bendice, confiesa y visita".⁸¹ El Vicario era

"...compadre de [Joaquín] Acuña el Gobernador y padrino de su mujer y de sus hijos. Lo es de Don Niceo [Acuña], a quien a pesar de la lucha, lo conserva aún como mayordomo y tesorero de la Virgen. Se abrazaron en mi presencia y lloraron juntos en un banquete ¿harían esto Wilde y Aneiros, tu y Estrada, yo y Goyena? Me parece por lo menos difícilillo".⁸²

El Vicario tenía a juicio de Leguizamón "...otro negocio, y ese es el secreto mayor de su prudencia, juicio i discreción".⁸³ A diferencia de los Vicarios Jerónimo Clara,⁸⁴ Demetrio Cau,⁸⁵ o Raynerio J. Lugones,⁸⁶ vicarios de diócesis peladas, era el Pbro. Segura,

"...administrador sin control de las ofrendas de la Virgen del Valle, cuya entrada anual ha alcanzado en años buenos a 40.000 m/c y nunca baja de 20.000 m/c por más pobre que sea el año. Con esto vive el cura, sus protegidos, y levanta un hermosos templo como la Matriz que ha costado 500.000 chirolas, y levanta actualmente un gran edificio para Seminario en el cual lleva gastados cerca de \$200.000".⁸⁷

Este Vicario, pese a los ingresos que manejaba,

"...no tiene grandes propiedades, sino con la denominación 'de la Virgen' vive modestamente y anda constantemente a caballo con sol y lluvia, revisando sus obras o ejerciendo su ministerio, a cuyos deberes nunca se escusa".⁸⁸

El Vicario Segura era para Leguizamón

"...una fuerza social, que la modificará el tiempo, jamás será un peligro político, y menos en los días de liberalismo nacional que atravesamos, en que la menor imprudencia podría costarle una posición que nadie podría dársela mejor".⁸⁹

Finalmente, en 1883, desde Catamarca, el Gobernador Joaquín Acuña le exclamaba a Roca que "...no ha de creer de los medios que se vale el Clero aquí para sus trabajos políticos".⁹⁰ Según Acuña, a los

Curas no les

"...basta dirigir sus insultos groseros desde la cátedra de sus templos a toda la situación, incitando a las masas a concurrir a depositar sus votos en las próximas elecciones por los candidatos de ellos, sino que los curas de la campaña se handan de casa en casa amenazando que no les han de absolver en la hora de la muerte a los que no dan sus votos por ellos".⁹¹

Dos años más tarde, en 1885, el Clero Catamarqueño se empeñaba públicamente contra la candidatura de Juárez Celman

"...predica, dice pláticas en contra de la política nacional en todos los curatos y capillas, después salen a visitar casa por casa hasta convencer a la gente ignorante fanática que serán condenados en vida si dan su voto por el Dr. Juárez Celman, y de esto está naciendo una actitud decididamente hostil en contra de las autoridades porque dicen que sostenemos un candidato irreligioso".⁹²

El Gobernador José S. Daza pensaba que sería una medida muy moralizadora que desde el Cabildo Eclesiástico de Salta viniera la orden para que

"...salgan inmediatamente los clérigos Jacome Cardozo y Francisco Brizuela, el último ayudante del Cura Segura y el primero secretario privado, ambos incansables obreros en el terreno político".⁹³

Para Julio de 1885, los Castristas (anti-clericales y enemigos de los Figueroístas) defraudaron a sus seguidores. Los antiguos Castristas, tanto en la Capital como en la campaña, "...han adoptado públicamente una candidatura nacional: la del Dr. Juárez".⁹⁴ Había en 1885, a juicio de una carta del Juez Federal Modesto Molina, dirigida a Juárez Celman, tres círculos juaristas

"...con sus aspiraciones y sus propósitos bien determinados, los cuales, más egoístas que amigos, converjen en usted no como un objetivo sino como un medio seguro de alcanzar lo que pretenden respectivamente".⁹⁵

Por el contrario, la candidatura del Autonomismo Irigoyenista o Bernardismo, por Bernardo de Irigoyen, cayó en el descrédito por errores tácticos. Para el Diputado Nacional Antonio del Pino, el Dr. Irigoyen

"...apadrinado por los hombres más desconceptuados no debió venir aquí encabezando a esa gente, cuando son de ayer los recuerdos de su funesta influencia en la política de esta Provincia, así como lo son los de la mazhorca de funesta memoria en este pueblo, donde no se encuentran tres familias que no lleven aún el degüello y la matanza de Maza y Oribe, con el concurso moral del hoy candidato a la Presidencia".⁹⁶

Y para el Gobernador Sargento Mayor José Silvano Daza, el Dr. Irigoyen

"...padecía de una gran equivocación al creer y contar como herencia oligárquica la Provincia de Catamarca, error imperdonable en un hombre serio y avezado en los juegos políticos de nuestro país, pues ha sido engañado por tres o cuatro ambiciosos y explotadores de una manera grosera y sin consideración".⁹⁷

La mayoría absoluta en el Colegio Electoral era imprescindible para elegir Gobernador. En enero de 1885, en el escrutinio que se hizo para conformar el Colegio Electoral, la oposición --prevalida de la mayoría que disponía en la Legislatura-- suprimió un Elector, "...acordando diploma a un individuo de la oposición, que no ha sido electo".⁹⁸ De resultados de ello, la oposición alcanzó el número de diecinueve (19) Electores y el oficialismo o situacionismo el número de diez (10) Electores. De esta forma, la oposición quedaba a juicio de Salvador de la Colina, "...con las 2/3 que la Constitución exige para que pueda funcionar pudiendo por consiguiente elegir al candidato que mejor le parezca".⁹⁹ Para alcanzar los 20 Electores (5 de los Figueroas, 6 del Vicario Segura, 6 de Fidel Castro, y 2 que podían seguir a Manuel F. Rodríguez [D. Gregorio Moreno y su hijo]), la oposición

"...ha llegado hasta diplomar a un procesado [Robledo] por homicidio alevoso, que se encuentra en la cárcel pública y que fué uno de los candidatos introducidos a última hora en la elección de Electores".¹⁰⁰

Para Salvador de la Colina y Joaquín Acuña, el Diputado a la Legislatura Don Javier Castro,¹⁰¹ y los amigos de los Figueroas, miembros del Comité Directivo de la oposición, no obstante sus protestas públicas,

"...han concurrido tanto a la resolución de arrebatarlos un Elector mas, cuanto a la expedición de diplomas a los candidatos de contrabando en la dicha elección de Electores".¹⁰²

Era de temerse entonces, según Colina y Acuña, que para garantizar la candidatura del Mayor Daza haya que ir a "...un doble Colegio Electoral",¹⁰³ y que la oposición, sin dejar de protestar amistad a Roca, "...pretenda elegir a otro que el Mayor Daza".¹⁰⁴ En efecto, el líder de la oposición Francisco Caracciolo Figueroa, le refería a Acuña --no sin algo de susto por haber recibido un telegrama recriminatorio de Roca-- que

"...acababa de echar una pelea con algunos clérigos a causa de que [Manuel] Rodríguez y un médico [Flavio] Castellanos han ido a verlo al Cura personalmente para cambiar la candidatura del Mayor Daza por ser este masón".¹⁰⁵

La intervención federal del Dr. Onésimo Leguizamón más que a arbitrar entre facciones en pugna vino a impulsar la candidatura del Mayor Daza.¹⁰⁶ Esta candidatura se la miró desde un principio, en 1885, como impuesta militarmente, pues a decir del Senador Nacional Manuel F. Rodríguez, en carta reservada dirigida al Gobernador de Córdoba Miguel Juárez Celman, "...los gobiernos militares no son simpáticos a los pueblos".¹⁰⁷ Con el nombramiento de Daza,¹⁰⁸ gran parte del clero estaba alarmadísimo, porqué al parecer los Figueroas y el Dr. Castellanos le habían dicho al Vicario Segura y al Prior del Convento de los Franciscanos "...que yo venía con instrucciones de perseguirlos y aún de prenderles fuego a los monasterios e iglesias".¹⁰⁹ Para alivio de Figueroa, el Vicario Segura se negó rotundamente a boicotear a Daza.

Desde Santa Fé, el líder del Club 25 de Mayo Deolindo Muñoz le confiaba a Roca que "...la gente de sotana aliada a los Rochistas se ha puesto en campaña contra la candidatura de [Eusebio] Gómez y [Estanislao] Zevallos".¹¹⁰ A juicio de Félix Pujato, Pompeyo Pizarro, "...tiene dominados a los Iriondo, a Gálvez y demás; siendo este último especialmente su encarnación en el gobierno. Gálvez no es más que Pizarro".¹¹¹ De todo ello resultaba que el poder oficial estaba

"...del lado de los clericales, demostrándolo así las listas de las comisiones directivas de lo que

por sarcasmo se llama Club del Pueblo, pues figuran en ellas, desde los Ministros, Camaristas, legisladores y Jueces hasta las últimas jerarquías civiles y militares".¹¹²

Y desde Santiago del Estero, el entonces Senador Nacional Absalón Rojas le confiaba a su amigo Roca que

"...desde hace algunos días se agitan mucho aquí los clérigos y se ocupan en organizar asociaciones para sus fines que indudablemente son políticos mas que religiosos a juzgar por los que llevan la iniciativa y los que los ayudan".¹¹³

Rojas manifestaba no saber hasta donde eran los curas capaces de llegar pero "...si no los dejamos hacer su propaganda como en Catamarca, no avanzarán mucho".¹¹⁴ El pretexto invocado por los curas para hostilizar al gobierno era "...de que queremos reformar la Constitución para establecer en ella cláusulas contrarias a la religión porque somos herejes, lo cual es fácil que hagan creer de Matienzo porque son conocidas sus ideas liberales".¹¹⁵

En cuanto a los orígenes eclesiásticos de los conflictos políticos es difícil estimar cuán generalizable fueron los enfrentamientos internos del clero.¹¹⁶ Por lucha interna del clero debe entenderse la lucha que se libraba en sus mismas filas por la incorporación y promoción en las canonjías y sinecuras propias del estamento clerical.¹¹⁷ La ordenación de los miembros del clero secular y su promoción en la carrera eclesiástica, hasta integrar el cabildo catedralicio primero, y el cabildo secular después, dependía por lo general de la frecuencia con que eran celebrados los sorteos, las presentaciones de ternas y las elecciones y oposiciones para cubrir las sedes vacantes, del monto y cantidad de becas de gracia y de fundaciones capellánicas existentes, y de la voluntad política de Examinadores Sinodales, Comisarios del Santo Oficio, Vicarios y Vice-Patronos Reales (Virreyes, Gobernadores y Reales Audiencias).¹¹⁸ Los padres pudientes y solventes de hijos que contaban con vocación religiosa preferían que estos se incorporaran al clero secular y no al regular, porque de esa forma garantizaban que su familia pudiera controlar el patronato de las capellanías con que dotaban a aquellos. Las capellanías laicales, mercenarias o de sangre, al igual que las asistencias en la Milicia, no eran un acto de liberalidad sino una imperiosa necesidad si se deseaba que sus hijos mayores o sus descendientes estudiaran. Si bien la posición dominante prefería como criterio para la presentación,¹¹⁹ y/o colación de un candidato a un beneficio eclesiástico,¹²⁰ el parentesco o derecho de familia, existieron juristas que alegaron la necesidad de anteponer otros puntos de vista, tales como el derecho del culto o vocación religiosa, la "calidad" del candidato, su idoneidad, la proximidad cronológica a las ordenes menores o mayores, y el principio de la equidad.

Cuando se establecía la primacía del derecho del culto o vocación religiosa, por lo general se otorgaba la prioridad en el beneficio de la capellanía a los que fueren clérigos seculares idóneos, y en algunos casos a los que fueren frailes o clérigos regulares, aunque no fueren parientes.¹²¹ No todos los beneficiados por capellanías seguían la carrera eclesiástica, pues muchos la abandonaban durante el ejercicio de las ordenes menores, otros al alcanzar las terceras ordenes o diaconado, y otros más antes de lograr las segundas ordenes o presbiterado.¹²² Entre un orden y otro existía un lapso de tiempo conocido con el nombre de intersticios.¹²³ El Concilio de Trento había dejado librada la duración de dicho espacio de tiempo al arbitrio de los prelados, aunque estableció el período de un año desde las ordenes menores al subdiaconado y desde éste último al presbiterado.¹²⁴ Pero en América, debido a la escasez de clérigos españoles,¹²⁵ los intersticios alcanzaron la mínima expresión. Una de las primeras calidades que debía tener el beneficiado era que fuere clérigo. Entre los criterios ha adoptar para elegir al patrono y/o al capellán también se esgrimió el principio de la equidad. En Buenos Aires, en el pleito

suscitado en 1869, por la capellanía fundada por Juan Agustín Cueli,¹²⁶ entre sus bisnietos Dr. Fabián y José Hermenegildo Cueli, luego que el Juez laudara en favor del primero, por ser el mayor de los varones; el Dr. Aurelio Palacios,¹²⁷ defensor del hermano menor, José Hermenegildo Cueli, alegaba, sin conocer el precedente sentado por la obra de Mostazo o Amostato (1680),¹²⁸ que la equidad

"...aconseja que tratándose de intereses pecuniarios, en igualdad de condiciones jurídicas, relativamente al derecho estricto, se prefiera el desválido al poderoso, el pobre al rico, el enfermo al que goza de salud, el que no tiene medios de proveerse de las subsistencias, al que tiene una profesión honrada y lucrativa".¹²⁹

Según Palacios debía tomarse en cuenta la necesidad y no la edad, pues mientras la parte contraria

"...tiene una posición, goza de consideraciones sociales, cuenta con una fortuna que asegurando su bienestar le hace independiente y además ejerce o puede ejercer una profesión honrada y lucrativa",¹³⁰

la parte que él defendía carecía

"...hasta de lo más indispensable para la vida; ni aún siquiera disfruta de salud, al extremo de estar en estos momentos deshauciado por los médicos a causa de sus dolencias crónicas y teniendo que atenderse con los recursos que le proporcionan algunos parientes menos despiadados que el Dr. Cueli".¹³¹

Si bien el Juez reconocía que la pobreza de José Hermenegildo Cueli era una consideración moral admisible para ser preferido en el goce de la capellanía; agregaba que esta consideración debía "...ceder en presencia del derecho positivo que llama a suceder por el orden de la edad".¹³² La edad era para el Juez la única consideración que debía tenerse presente para decidir sobre el mejor derecho de los dos pretendientes y era esa consideración el exclusivo fundamento de la sentencia recurrida. Pero ¿a qué derecho se refería el Juez?, exclamaba en 1869 el abogado Dr. Aurelio Palacios, "...¿al derecho feudal de la antigua Monarquía Española, o al derecho patrio Americano?".¹³³ Si ese fundamento era incompatible con el espíritu de nuestro derecho político y contrario al texto expreso de las leyes patrias, quedaban en pie las graves consideraciones expuestas en favor de Don José Hermenegildo Cueli.

NOTAS

¹ Este trabajo es continuación de otros publicados por el autor, ver Saguier, 1984, 1994, 1995a y 1995b.

² Para Gibson (1996), la naturaleza confederada del Roquismo es lo que constituyó el llamado "defecto genético" del conservadorismo argentino (Gibson, 1996, 40 y 52-53).

³ ver Zuviría, 1860; Wilde, 1883; Martínez, 1939; Sánchez Viamonte, 1957a, 121-127; Auza, 1975; Glazier (1995); y el discurso del Senador Aristóbulo del Valle en defensa de la libertad religiosa (Congreso Nacional, Cámara de Senadores, Junio de 1884, 23a. Reunión, 21a. Sesión ordinaria, pp.201-207).

⁴ Sobre la crisis de la teología secular, ver Marramao, 1998, 45-54.

⁵ Rusk, 1974, 1036.

⁶ Rusk, 1974, 1029.

⁷ Sobre la omisión que gran parte de la historiografía Chilena hizo del debate parlamentario acerca de la separación de la Iglesia y el Estado practicado en Chile en 1884, ver Tagle Domínguez, 1997, 391-400. Sobre Anticlericalismo y religiosidad en Argentina (1870-1916), ver Ruibal, 1987.

⁸ Acerca del sostenimiento del culto católico, ver el debate en Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 1919, IV, 774-811.

⁹ Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 14-VI-1878, p.223.

¹⁰ ver Saguier, 1994.

¹¹ ver Legón, 1920.

¹² para México, ver Schmitt (1962) y Coerver (1990); para el Perú, ver García Jordán (1984); para la República Dominicana, ver Martínez-Fernández (1995); para Ecuador, ver Holguín Larrea (1954); y para Colombia, ver Rausch (1992).

¹³ Este acuerdo alentó la llamada política de fusión, que en la República Oriental del Uruguay se concretó en el llamado Pacto de la Unión o de los Generales, celebrado en 1855 entre los Generales Manuel Oribe y Fructuoso Rivera, al que se opuso el Partido Conservador, liderado por el célebre polemista Juan Carlos Gómez (Gómez, 1921, I, 42, 44, 479; y II, 21, 26, 32, 39, 46, 52, 61, 66-67, 95, 98, 111, 132, 196, 286, y 309). Acerca de la polémica suscitada sobre el Acuerdo de San Nicolás, entre Dalmacio Vélez Sársfield y Valentín Alsina por un lado, y Francisco Pico y Vicente Fidel López por el otro, ver de Juan Carlos Gómez, "El mal es la mentira", Los Debates (Buenos Aires), 16-V-1858, 2a. época, n.292, p.2, col.1-4; citado en Vidaurreta, 1962-67, 171.

¹⁴ Pavoni, 1993, 68.

¹⁵ al Exmo. Sr. Ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Santiago del Estero, Santiago del Estero, 7-IX-1849 (AGN, Sala X, 5-9-7).

¹⁶ Las diferencias fueron al parecer con motivo de la renta decimal (Videla, 1962-90, IV, Cap.VII, Secc.IV, pp.496-506; y Bruno, X, 513-530).

¹⁷ Bosch, 1964, 13.

¹⁸ Levaggi, 1992, 267.

¹⁹ Cutolo, VI, 220-222; y Bruno, 1967, XI, Sección II, Cap.I-IV.

²⁰ Lacoste, 1995, 93.

²¹ Lacoste, 1995, 94.

²² Sommariva, 1929-1931, 303.

²³ "...hizo primero una revolución contra López, luego contra Cullen, después contra Oroño, y ahora contra Cabal" (José Hernández, "Los Trastornos del Rosario", 23-III-1870, El Río de la Plata, reprod. en Halperín Donghi, 1985b, 99).

²⁴ hijo de Francisco Juez de Rosas y de Luisa Escalada; y padre de quien fuera Ministro en Corrientes Desiderio Rosas Rodríguez (Crespo Naón, 1983, 83).

²⁵ ver Cecarelli (1990).

²⁶ Sommariva, 1929-31, 304. En nota al Ministro Guillermo Rawson el Comisionado Francisco Pico decía no creer en la palabra de paz de los revolucionarios santafesinos (de origen federal) encabezados por el Sargento Mayor de las fuerzas de línea de la Frontera Norte Nicolás Denis, sino, que por el contrario,

"...este partido, compuesto por todo lo que es hostil al Gobierno Nacional, y [compuesto] de los antiguos federales, tenía una decidida tendencia, como el de Carlos Rodríguez en Mendoza, a una reacción contra los intereses nacionales, que si se le deja tomar cuerpo, no sólo falseará las elecciones de Presidente, sino que puede extenderse hasta Córdoba en rebelión abierta" (Comisión de Estudios Constitucionales, 1957, 97).

²⁷ Videla, 1962-90, V, Cap.IX, Secc.IV, pp.660-661.

²⁸ Videla, 1962-90, V, Cap.IX, Secc.I, pp.631-633.

²⁹ Agustín Gómez a J. Roca, San Juan, 19-I-1877 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.4).

³⁰ Agustín Gómez a J. Roca, San Juan, 19-I-1877 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.4).

³¹ Salvador Giles a J. Roca, San Juan, 22-III-1883 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.30).

³² Salvador Giles a J. Roca, San Juan, 22-III-1883 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.30).

³³ David Zambrano a J. Celman, Salta, 19-I-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.24).

³⁴ Pavoni, 1993, 68.

³⁵ Martín Piñero a J. Roca, Córdoba, 15-XII-1883 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.35).

³⁶ nacido en Córdoba en 1820, perteneciente a la familia de Jacinto Piñero, propietario de tierras y fundador de Cruz Alta. Dejó inéditas sus Memorias en 18 volúmenes (Cutolo, V, 517).

³⁷ Martín Piñero a J. Roca, Córdoba, 15-XII-1883 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.35).

³⁸ Martín Piñero a J. Roca, Córdoba, 15-XII-1883 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.35).

³⁹ Tedesco, 1982, 126-127. Sobre la masonería y la Logia Voltaire en Córdoba, ver Larregle (1989).

⁴⁰ Bischoff, 1971, 50-51; y Grenón, 1968, 311-313; citados en Cutolo, II, 286; y VII, 283.

⁴¹ Lamentablemente ni Bruno ni Cutolo nos brindan información acerca de este singular clérigo. Las Provincias del 14 de Febrero de 1883, nos informa que el Lic. Armaza "...ha entrado a formar parte de la redacción de El Eco de Córdoba, el licenciado en letras y otras yerbas, Dr. Armaza, el cordobés más buen mozo, galante y enamorado que haya nacido en aquella seráfica provincia. Armaza, bachiller, es un libre pensador ultra, y su ingreso a la prensa de Córdoba, significa la caída del elemento ultramontano que se agita en la ciudad doctoral" (Las Provincias, Miércoles, 14-II-1883, n.627). Es de recordar que en el siglo XVIII hubieron un par de célebres clérigos porteños apellidados Armaza y Arregui, sobrinos del Gobernador de Tucumán José de Arregui, y sus herederos en la propiedad de una extensa chacra en la localidad de Tapiales, Provincia de Buenos Aires.

⁴² Mariano Armaza a J. Roca, Córdoba, 18-II-1881 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.14).

⁴³ P. Soprano a J. Roca, Córdoba, 16-II-1881 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.14).

⁴⁴ partidario acérrimo del Gobernador Antonio del Viso.

⁴⁵ P. Soprano a J. Roca, Córdoba, 16-II-1881 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.14).

⁴⁶ P. Soprano a J. Roca, Córdoba, 16-II-1881 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.14).

⁴⁷ P. Soprano a J. Roca, Córdoba, 16-II-1881 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.14).

⁴⁸ Pascual P. Soprano a J. Roca, Córdoba, 5-IV-1881 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.15).

⁴⁹ Pascual P. Soprano a J. Roca, Córdoba, 5-IV-1881 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.15). Tres años después, el Canónigo Piñero "...que todo lo habla detestablemente, llamó ateo y endemoniado al Ministro Wilde, atacando después a la Facultad de Derecho por haber aceptado la tesis de Cárcano, en donde hallaba principios de ateísmo" (El Demócrata, viernes 11, sábado 12 y Domingo 13-IV-1884, n.2616).

⁵⁰ Fr. Mamerto Esquiú a J. Roca, Córdoba, 17-IV-1881 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch.

Roca, Leg.15).

⁵¹ Fr. Mamerto Esquiú a J. Roca, Córdoba, 17-IV-1881 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.15).

⁵² Director de la imprenta de El Progreso de Córdoba.

⁵³ Mariano Armaza a J. Roca, Córdoba, 18-II-1881 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.14).

⁵⁴ Mariano Armaza a J. Roca, Córdoba, 18-II-1881 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.14).

⁵⁵ Mariano Armaza a J. Roca, Córdoba, 18-II-1881 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.14).

⁵⁶ Ver Saguier, 1995, 188, nota 37. Según Auza (1979), luego de la independencia, los concursos de curatos se hicieron cada vez más esporádicos (Auza, 1979, 70).

⁵⁷ Fr. Mamerto Esquiú a J. Roca, Córdoba, 17-IV-1881 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.15).

⁵⁸ Fr. Mamerto Esquiú a J. Roca, Córdoba, 17-IV-1881 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.15).

⁵⁹ Antonio del Viso a J. Roca, Córdoba, 6-IX-1878 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.5).

⁶⁰ Antonio del Viso a J. Roca, Córdoba, 6-IX-1878 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.5).

⁶¹ primo hermano de los Senadores Provinciales David Argüello y Tissera (SP/San Javier, 1875-79); y Luis Argüello y Tissera (SP/Unión, 1884-92).

⁶² Juan de la Serna a Juárez Celman, Córdoba, 14-V-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. M. J. Celman, Leg.15).

⁶³ Juan de la Serna a Juárez Celman, Córdoba, 14-V-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. M. J. Celman, Leg.15).

⁶⁴ Filemón Posse a J. Roca, Córdoba, 22-V-1881 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.16), citado en Bruno, 1967, XII, cap.IV, p.55.

⁶⁵ Filemón Posse a J. Roca, Córdoba, 22-V-1881 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.16); citado en Bruno, 1967, XII, cap.III, p.51.

⁶⁶ Guillermo Molina a J. Celman, Río IV, 2-IX-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.15).

⁶⁷ Guillermo Molina a J. Celman, Río IV, 2-IX-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.15).

⁶⁸ fundado por el catamarqueño Ramón Gil Navarro (Bischoff, 1994, 112).

⁶⁹ Miguel M. Nougués a J. A. Roca, Manantial, 25-XII-1879, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.8.

⁷⁰ Miguel M. Nougués a J. Roca, Manantial, 25-XII-1879, AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.8.

⁷¹ Manuel J. Navarro a J. Roca, Catamarca, 2-III-1879 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.7).

⁷² V. García Aguilera a Juárez Celman, La Rioja, 9-I-1882 (AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.10).

⁷³ O. Leguizamón a J. Roca, Catamarca, 1-XII-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42).

⁷⁴ O. Leguizamón a J. Roca, Catamarca, 1-XII-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42).

⁷⁵ O. Leguizamón a J. Roca, Catamarca, 1-XII-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42).

⁷⁶ O. Leguizamón a J. Roca, Catamarca, 1-XII-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42).

⁷⁷ O. Leguizamón a J. Roca, Catamarca, 1-XII-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42).

⁷⁸ O. Leguizamón a J. Roca, Catamarca, 1-XII-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42).

⁷⁹ O. Leguizamón a J. Roca, Catamarca, 1-XII-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42).

⁸⁰ O. Leguizamón a J. Roca, Catamarca, 1-XII-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42).

⁸¹ O. Leguizamón a J. Roca, Catamarca, 1-XII-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42).

⁸² O. Leguizamón a J. Roca, Catamarca, 1-XII-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42).

⁸³ O. Leguizamón a J. Roca, Catamarca, 1-XII-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42).

⁸⁴ Vicario de Córdoba.

⁸⁵ hijo del Gobernador y Jefe de Policía de Jujuy Don Silvestre Cau.

⁸⁶ nacido en Loreto en 1841, hijo de Pedro Nolasco Lugones e Isabel López. Fué Secretario del Obispo de Cuyo Monseñor Achával, primer Rector del Seminario, Ministro de Santiago del Estero, y Diputado Nacional de 1880 a 1884 al mismo tiempo que era Vicario foráneo y Visitador Eclesiástico en Santiago del Estero. En la Catedral de Salta desempeñó la Canongía rectoral y obtuvo por oposición la canongía teologal de la iglesia metropolitana. En 1874 fué enviado por el Obispo en comisión a Mendoza para reclamar al gobierno de esa provincia la devolución de las capellanías que habían sido incautadas, con ese motivo hizo un alegato sobre el rol de las capellanías. Predicaba en quichua (Cutolo, IV, 295).

⁸⁷ O. Leguizamón a J. Roca, Catamarca, 1-XII-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42).

⁸⁸ O. Leguizamón a J. Roca, Catamarca, 1-XII-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42).

⁸⁹ O. Leguizamón a J. Roca, Catamarca, 1-XII-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.42).

⁹⁰ Joaquín Acuña a J. Roca, Catamarca, 24-XII-1883 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.35).

⁹¹ Joaquín Acuña a J. Roca, Catamarca, 24-XII-1883 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.35).

⁹² José Daza a J. Roca, Catamarca, 13-XI-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.48).

⁹³ José Daza a J. Roca, Catamarca, 13-XI-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.48).

⁹⁴ L. B. Sotomayor a J. Roca, Catamarca, 20-VI-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.45).

⁹⁵ Modesto Molina a Juárez Celman, Catamarca, 25-XI-1885 (AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.18).

⁹⁶ Antonio del Pino a Juárez Celman, Catamarca, 25-IX-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.18).

⁹⁷ José Daza a J. Roca, Catamarca, 16-X-1885 (AGN, Sala VII, Arch. Roca, Leg.47).

⁹⁸ Salvador de la Colina a J. Roca, Catamarca, 26-I-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.43).

⁹⁹ Salvador de la Colina a J. Roca, Catamarca, 26-I-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.43).

¹⁰⁰ Salvador de la Colina a J. Roca, Catamarca, 26-I-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.43).

¹⁰¹ hijo del Gobernador Javier Castro Salado (GP.1858).

¹⁰² Salvador de la Colina a J. Roca, Catamarca, 26-I-1885; y Joaquín Acuña a J. Roca, Catamarca, 20-II-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.43).

¹⁰³ Joaquín Acuña a J. Roca, Catamarca, 20-II-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.43).

¹⁰⁴ Salvador de la Colina a J. Roca, Catamarca, 26-I-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.43).

¹⁰⁵ Joaquín Acuña a J. Roca, Catamarca, 20-II-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.43).

¹⁰⁶ El origen humilde de Daza, al igual que Absalón Rojas en Santiago del Estero, y Rufino Ortega en Mendoza, produjeron encono en la oligarquía provinciana (Rato de Sambucetti, 1980, 433).

¹⁰⁷ Manuel Rodríguez a Juárez Celman, Catamarca, 3-II-1885, AGN, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.19.

¹⁰⁸ En Junio de 1885, Daza escribía a Roca informándole que: "...en este momento sé que en el Departamento de Pachín no se ha proclamado la candidatura Juárez por oposición del clero y Figueroa, en el Oeste y otros Departamentos por mas que hayan querido impedirlo no han conseguido, esplendorosamente he sido aclamado. Del Alto y Ancasti no tengo noticias, no es difícil que hayan habido algunos trabajos de oposición, porque hay muchos elementos clericales y Rochistas. En Pomán anticipadamente habían proclamado a Irigoyen pero he mandado un espreso con cartas a varios amigos. Los Católicos se preparan para proclamar a Gorostiaga. Los Irigoyenistas han fracasado, para hoy se preparaban, se ha juntado en minoría y desmoralizados han resuelto tocar dispersión. Sé que Colina y otros situacionistas Irigoyenistas [Guillermo] Leguizamón, Mercado, Acuña, se andan por arrimar a este Gobierno. Estos Señores han estado muy descontentos conmigo porque les deshice la combinación electoral que tenían bien preparada la cual debía responder a Irigoyen" (José Daza a J. Roca, Catamarca, 29-VI-1885, AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.45).

¹⁰⁹ José V. Daza a J. Roca, Villa Prima, 12-IV-1885 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.44).

¹¹⁰ Deolindo Muñoz a J. Roca, Santa Fé, 22-I-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.36).

¹¹¹ Félix Pujato a J. Celman, Santa Fé, 30-VIII-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.23).

¹¹² Félix Pujato a J. Celman, Santa Fé, 30-VIII-1886 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. J. Celman, Leg.23).

¹¹³ Absalón Rojas a J. Roca, Santiago del Estero, 10-II-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.36).

¹¹⁴ Absalón Rojas a J. Roca, Santiago del Estero, 10-II-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.36).

¹¹⁵ Absalón Rojas a J. Roca, Santiago del Estero, 10-II-1884 (AGN, Doc. Donada, Sala VII, Arch. Roca, Leg.36).

¹¹⁶ ver Saguier, 1995b.

¹¹⁷ acerca de la exclusión de los frailes de los cuerpos electivos o de la voz pasiva durante la Reforma Eclesiástica de Rivadavia, ver Gallardo, 1962, 105-133.

¹¹⁸ Avellá Cháfer logró detectar un caso de elecciones y tres de oposiciones para cubrir vacantes de curatos (Avellá Cháfer, 1983, 89, 99, 186 y 289).

¹¹⁹ acto de elegir un beneficiario de una capellanía lega con anterioridad a su colación.

¹²⁰ acto de conferir canónicamente un beneficio eclesiástico.

¹²¹ Una Bula del Papa Urbano IV, de 1268, motivada por el deseo de reforzar los núcleos de familias pudientes italianas contra la preponderancia del Imperio Alemán autorizó a los clérigos regulares participar de las capellanías.

¹²² El Presbítero es el clérigo, sacerdote de segundo orden, que sigue en jerarquía al Obispo. Mediante la ordenación correspondiente, el presbítero tiene, bajo la dependencia del obispo, la facultad de ejercer en la Iglesia todo el poder sagrado, excepto el de confirmar y ordenar.

¹²³ Espacio de tiempo que según las leyes eclesiásticas debe mediar entre la recepción de dos ordenes sagrados (Escriche, 1863, 960; y Cavalario, 1848, 185-187).

¹²⁴ De Reform., sesión 23, capítulos XI y XII.

¹²⁵ por españoles se entendía los de raza blanca, ya fueren criollos o peninsulares.

¹²⁶ Hijo de Pedro Cueli y Ana Lozano; marido de Maria Jacinta de Escobar; y padre de Pedro Valentín Cueli, marido de Anastasia Rodriguez Estella; de Pedro Antonio, marido de Maria Anastacia de la Torre; de José de los Santos, marido de María Bernabela de Torres; y de Jose Miguel, marido de María Antonia Ochandategui y Urquizú. A su vez Pedro Valentín era padre de Manuel Cueli, marido de Gregoria Gasquez, y estos a su vez padres de Ramón Cueli (Fernández Burzaco, II, 180).

¹²⁷ Oriental, militante del partido Blanco, compañero de José Hernández, Miguel Navarro Viola y otros en la defensa de Paysandú, marido de Ana Ramón, padres del Primer Diputado Socialista de América Dr. Alfredo L. Palacios (Chávez, 1973, 105, nota 13; citado por Cutolo, V, 279).

¹²⁸ funcionario eclesiástico en las Villas de Colmenar Viejo y Vallecas, cercanas a Madrid, autor de la obra *De Causis piis.*, editada por Antonii Gundisalvi en 1680, y reeditada con correcciones en

Venecia en 1698, 1715 y 1735; en Lyon en 1686, 1710, 1717 y 1733; y en Roma en 1725 y 1739 (Palau, 1957, X, 282; y Lobies, 1975, IV, n.3790). El título *De Causis Piis* está tomado de un capítulo del Código de Derecho Canónico. Las ediciones Venecianas se encuentran citadas en el Catálogo de la Biblioteca del Museo Británico y en la de la Bayerische Staatsbibliothek, correspondiente al Estado de Baviera, y la de Lyon de 1733 en el Catálogo de la Biblioteca Nacional de París y en el de la Biblioteca del Pontificium Consilium de *Legum Textibus Interpretandis*, de Ciudad del Vaticano. El Catálogo de la Biblioteca del Congreso de Washington no registra edición alguna de este autor. Mostazo o Amostato sufrió en su apellido sucesivas modificaciones. Primero se lo conoció en América (Córdoba y Buenos Aires), durante el siglo XVIII, con el nombre de Amostato o Amostaso (Levene, 1950, 35). Al conocerse en Alemania sólo las ediciones romanas y venecianas, Hurter (1926) creyó que este autor era itálico, motivo por el cual le agregó al apellido Mostazo una zeta más (Hurter, 1910-26, IV, 1293). Por último, en el Vaticano, se lo catalogó como Francisci Amostazo, a partir de la edición de Lyon de 1733. Debo parte de esta información al Profesor Gerardo Losada, bibliotecario del Colegio Máximo San José, en San Miguel, Provincia de Buenos Aires, al R.P. Herranz, bibliotecario del Pontificium Consilium de *Legum Textibus Interpretandis*, y al Dr. Domingo Ramos-Lissón, Director del Instituto de Historia de la Iglesia, de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, quienes desinteresadamente se ocuparon de ayudarme en esta búsqueda. Herranz me informa que del original no es posible sacar fotocopia "...dato che il sistema di stampa di allora renderebbe praticamente illegibile le fotocopie". Es probable que Mostazo o Amostato haya sido de inclinación pro-Jesuita y que por ende su obra haya caído en desuso en España a partir de la Paz de Utrecht (1713). Si bien las Enciclopedias Espasa, Británica, Hispano-Americana, Bompiani y Nuevo Digesto Italiano no lo mencionan ni a Mostazo ni a Amostato, lo que llama la atención es que no lo citen los canonistas de los siglos XVIII y XIX (Cabassutius, 1725; Gibert, 1735; Luca, 1758; Gohard, 1765; Dupin, 1768; Reiffenstuel, 1755; Berardi, 1791; Blanco, 1798; Devoti, 1830; Schmalzgrueber, 1843; Golmayo, 1866; Gómez Salazar, 1883; Tardif, 1887; Liberatore, 1888; Ojetti, 1904-05; Cavalario, 1848; Maschat, 1865; Selvaggio, 1846; Morales y Alonso, 1903; Paso y Delgado, 1874; y Friedberg, 1893). Es probable que la edición veneciana de este libro, existente en Córdoba (Virreinato del Perú) a fines del siglo XVIII, haya sido propiedad de los Jesuitas, y que con motivo de su Expulsión hubiere ido a parar a poder del Cabildo Eclesiástico de Córdoba. Sabemos que este libro apareció luego en el inventario que el notario eclesiástico y abogado de la Real Audiencia de Buenos Aires Dr. Facundo Prieto y Pulido confeccionara en lo que denominó "Cuaderno de los libros que me han llevado prestados", y que donara en 1794 a la Biblioteca Pública de Buenos Aires, que perteneciera al Convento de la Orden de la Merced (Levene, 1950, 35). Respecto a esta última biblioteca, Zuretti (1960), quien estudió la fundación de la misma, no pudo obtener noticias de como terminó la misma.

¹²⁹ AGN, Tribunal Civil, Leg.C-72, fs.367.

¹³⁰ *Ibidem*.

¹³¹ *Idem*, fs. 367v.

¹³² *Idem*, fs.368.

¹³³ AGN, Tribunal Civil, Leg.C-72, fs.368.

Conclusion del Tomo-VIII

Podemos concluir entonces, sobre la base del intenso y variado nepotismo comprobado en el Clero de fines del siglo XVIII, aquí relatados, que las estructuras de parentesco fueron en esta institución, de extrema relevancia, aunque finalmente no pudieran sobrevivir la tempestad revolucionaria

Del estudio del patronato de las capellanías vigentes en Buenos Aires y el interior, surge a las claras a lo largo de los siglos XVIII y XIX una inestabilidad muy pronunciada en la composición de su elite, y en la consistencia de status de sus miembros, que hacía del estigma del segundón y de las herederas mujeres, o de los descendientes clérigos de menor "calidad", antigüedad, y proximidad con los fundadores de las capellanías, un instrumento apasionante de lucha política. Para ello las elites hicieron uso y abuso de un instrumento envidiable, el derecho de representación.

El derecho de representación, a diferencia del derecho de sucesión, revelaba no solo cargas o gravámenes sobre un derecho previo que, como el Patronato capellanico, se transmitía de generación en generación, materializando una concepción dinástica de la vida propia del Antiguo Régimen; sino también un fundador cuyos objetivos se perpetuaban en el tiempo y que por haber sido sus llamados o destinatarios exclusivos o particulares y no universales marcaban para siempre a sus descendientes, fueren o no sus beneficiarios. De la compulsa practicada con numerosos casos, pareciera ser que por encima de la primogenitura y el sexo primaban la proximidad o lejanía de los parentescos involucrados. Es indudable que los estigmas arriba mencionados, manipulados por los estamentos colonialistas, deben haber alimentado profundos resentimientos, no siempre expresos, que al acumularse no hicieron mas que madurar la conciencia social de aquellos miembros marginados del patriciado y a su vez presionar la inevitable crisis revolucionaria de comienzos y mediados del siglo XIX.

En fin, sobre la base de los innumerables conflictos suscitados entre las autoridades civiles y religiosas de fines del siglo XVIII, en este tomo relatados, que el fuero eclesiástico continuó interfiriendo en el ejercicio del Patronato Real; y los Virreyes, Gobernadores y Reales Audiencias continuaron interfiriendo en las decisiones eclesiásticas. Pero no solo interfirió el fuero eclesiástico en el devenir de los Cabildos, sino que también irrumpió en la vida de las demás corporaciones, como la Real Hacienda y la Milicia. El clero habría logrado entonces una sostenida preeminencia social que la Revolución apenas logró disipar.

Del estudio del patronato de las capellanías vigentes en Buenos Aires y el interior, surge a las claras a lo largo de los siglos XVIII y XIX una inestabilidad muy pronunciada en la consistencia de status de los miembros de la élite, que hacía de la longevidad de los patronatos, un instrumento envidiable de prestigio social. Es indudable que dichos prestigios, manipulados por los estamentos colonialistas, deben haber alimentado profundos resentimientos, no siempre expresos, que al acumularse no hicieron mas que madurar la conciencia social de aquellos miembros marginados de la élite y a su vez presionar la inevitable crisis revolucionaria de comienzos y mediados del siglo XIX. Podemos concluir también, que las deudas contraídas por los grandes comerciantes con las instituciones de la Iglesia Católica a través de los censos, y con las casas monopolistas de Cádiz a través del fiado de Castilla, fué entonces la responsable de que

en las colonias españolas de América se discutiera en ese entonces, al igual que también se hacía en Europa, las razones de la crisis del crédito eclesiástico y las oscilaciones de la tasa de interés.¹ Es evidente que estos conflictos no resueltos socavaron la unidad del sector mercantil, lo cual a su vez afectó el equilibrio de poder en el seno del Consulado de Comercio de Buenos Aires, perjudicando al grupo de comerciantes registreros o monopolistas ligado con la casas comerciales de Cádiz y beneficiando a aquel grupo de comerciantes porteños que por negociar con cueros y carnes saladas estaba interesado en el librecambio y en el comercio con las colonias extranjeras (Brasil, Angola, Mozambique, etc.). Sin duda, en esta fractura se encuentra una de las raíces de la fragmentación política acaecida al antiguo Virreinato del Río de la Plata y el origen de la llamada independencia argentina.

En conclusión, pese a las limitaciones provocadas por las élites señoriales locales, podemos afirmar que el clero habría participado fuertemente en la constitución del estado burocrático-patrimonial. La negativa de las Curias Eclesiásticas a reducir la tasa de interés de los censos y capellanías operó en desmedro de la circulación de capitales y de la constitución y fluidez de un mercado de capitales, y en beneficio de los curatos urbanos y en perjuicio de los rurales. Como los curatos rurales dependían casi enteramente de las transacciones comerciales que sus curas podían concertar, la obligación de pagar sisas y alcabalas que las Reformas Borbónicas impusieron, alimentó en los mismos el espíritu de rebelión contra el gobierno español.²

Notas

¹ Ver Schumpeter, 1984, I, 306-307; y Baeck, 1988.

² Hunefeldt, 1983, 4.